

ÍCONOS 29

Revista de Investigación • 2008 • Número extraordinario • 80 páginas • ISSN 1692-2265



El mundo rural en los Andes

- El trabajo en las industrias textiles de Ecuador y Colombia
- El Protopopulo y los límites del multiculturalismo neoliberal
- Nuevas migraciones rurales en Bolivia
- El caso gráfico de la feria campesina
- Plazos, memoria e identidad altopuneña

ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

No. 29, septiembre 2007
ISSN | 390-1249
CDD 300.5 / CDU 3 / LC H8 .S8 F53
Vol 11, Issue 3, September, 2007
Quito - Ecuador

Sumario

Dossier

El mundo rural en los Andes 13-14

Presentación del dossier

Lisa North y Luciano Martínez

Estándares de trabajo e iniciativas no estatales en las industrias florícolas de Colombia y Ecuador 15-30

Tanya Korovkin y Olga Sanmiguel

Resumen

Este artículo examina las relaciones de trabajo y las iniciativas no estatales en las industrias exportadoras de flores en Colombia y Ecuador. Se argumenta que la mano de obra barata y los bajos estándares de trabajo son factores importantes, aunque no los únicos, que causaron la reubicación de la producción florícola hacia algunos países andinos.

Palabras clave: Estándares de trabajo, sindicalización, industria florícola, mujeres trabajadoras, condiciones laborales, neoliberalismo, Colombia, Ecuador.

Algunas reflexiones de estudios rurales 31-50

Cristóbal Kay

Resumen

En este ensayo se analizan algunos de los principales temas de investigación en los estudios rurales sobre América Latina durante las últimas dos a tres décadas. Aborda las transformaciones en la economía y sociedad rural provocadas por el proceso de la globalización neoliberal y las protestas socio-políticas de campesinos, indígenas y mujeres contra la discriminación y las políticas neoliberales impregnan los estudios rurales.

Palabras clave: campesinado, indígenas, nueva ruralidad, cambio agrario, movimientos campesinos, sociología rural, neoliberalismo, América Latina.

¿Puede la pobreza rural ser abordada a partir de lo local? 51-61

Luciano Martínez

Resumen

Este artículo analiza el crecimiento de la pobreza rural en el contexto de un proceso de desestructuración de la sociedad rural. Una reflexión seria a partir de lo local podría ayudar a recuperar un nuevo rol de los productores para no continuar con políticas de "goteo" que no apuntan a una real valorización del trabajo en el medio rural.

Palabras clave: pobreza rural, pluriactividad, asalariados rurales, proyectos DRI, desarrollo local, Ecuador.



ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales
Número 29, septiembre 2007
Quito-Ecuador

ISSN: 1390-1249 / CDD: 300.5 / CDU: 3 / LC: H8 .S8 F53
(Vol. 11, Issue 3, September 2007)

Íconos, Revista de Ciencias Sociales es una publicación de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una reflexión crítica desde las ciencias sociales sobre temas de debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y el mundo en general. La revista está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, estos temas. *Íconos* se publica cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiembre.

Para la selección de artículos se utiliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego (*peer review*).

Indexación

Íconos está incluida en los siguientes índices científicos: Sociological Abstracts, Ulrich's, Hispanic American Periodical Index (HAPI), Thompson Gale (Informe Académico), EBSCO-Fuente Académica, Latindex-Catálogo, REDALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe) y CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales).

Íconos On Line

Los contenidos de *Íconos* son accesibles *on line* en texto completo a través de los portales de REDALyC (www.redalyc.org), CLACSO (www.clacso.org.ar/biblioteca/revistas), Tecnociencia (Consejo Superior de Investigación Científica de España), DOAJ (www.doaj.org), FLACSO-Ecuador (www.flacso.org.ec/html/iconos.html).

Los artículos que se publican en la revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesariamente el pensamiento de *Íconos*. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos siempre que se cite expresamente como fuente a *Íconos, Revista de Ciencias Sociales*.

Director de Flacso-Ecuador: Adrián Bnilla
Director de Íconos: Eduardo Kingman Garcés
Editor de Íconos: Edison Hurtado Arroba
Asistente editorial: Patricia Baeza

Comité editorial

Felipe Burbano, Mauro Cerbino, Edison Hurtado, Hugo Jácome, Eduardo Kingman, Carmen Martínez, Franklin Ramírez, Alicia Torres

Comité asesor internacional: Andrés Guerrero (España), Blanca Muratorio (U. Vancouver, Canadá), Bolívar Echeverría (UNAM, México), Bruce Bagley (U. Miami, EEUU), Carlos de Mattos (PUC, Chile), Flavia Freidenberg (U. Salamanca, España), Francisco Rojas (Flacso, Costa Rica), Javier Auyero (SUNY - Stony Brook, EEUU), Joan Martínez Alier (U. Barcelona, España), Joan Pujadas (U. Rovira i Virgili, España), Liisa North (U. York, Canadá), Magdalena León (U. Nacional, Colombia), Rob Vos (ISS, Holanda), Roberto Follari (U. Cuyo, Argentina), Víctor Bretón (U. Lleida, España), Lorraine Nencel (CEDLA, Holanda), Cecilia Méndez (U. California, Santa Bárbara, EEUU).

Coordinadores del dossier "El mundo rural en los Andes"

Luciano Martínez y Liisa North

Ensayo gráfico: Alonso Azocar (fotos) y Luciano Martínez (investigación)

Cuidado de textos en inglés: Sonya Kovacic

Diseño y diagramación: Antonio Mena
Impresión: Rispergraf

Envío de artículos, información, solicitud de canje: revistaiconos@flacso.org.ec
Suscripciones, pedidos y distribución: lalibreria@flacso.org.ec

©FLACSO-Ecuador

Casilla: 17-11-06362

Dirección: Calle La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro, Quito-Ecuador

www.flacso.org.ec/html/iconos.html

Teléfonos: +593-2 323-8888 Fax: +593-2 323-7960

CDD 300.5 / CDU 3 / LC: H8 .S8 F53

Íconos: revista de ciencias sociales.—Quito: Flacso-Ecuador, 1997-

v. : il. ; 28 cm.

Ene-Abr. 1997-

Cntrimestral- enero-mayo-septiembre

ISSN: 1390-1249

1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales-Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador)

El mundo rural en los Andes

Presentación del dossier

Luciano Martínez (Flacso-Ecuador) y
Liisa North (Cerlac, Universidad de York, Canada)

Los cambios en las economías y sociedades rurales andinas que se han generado en las dos últimas décadas han sido profundos y complejos. Resalta a la vista el abandono de las reformas agrarias (aunque las mismas están regresando a la agenda política en Bolivia y Venezuela), la flexibilización de los mercados de trabajo junto a la promoción agresiva de viejos y nuevos renglones de exportación agrícola, sin considerar las consecuencias ambientales (como es el caso de las flores en Colombia y Ecuador), los programas focalizados del Banco Mundial y otras agencias dirigidos hacia campesinos “viables”, poblaciones indígenas y mujeres, la diversificación económica del campo hasta tal punto que en el Ecuador se estima que “entre 30 y 40% de la población rural tiene empleos no agropecuarios” (Chiriboga 2005:300), nuevos movimientos migratorios, nacionales e internacionales, provocados por la liberalización comercial, aumentos de pobreza y desigualdad en muchas zonas de los Andes causados por la manera en que los agricultores de la región y de otras partes de América Latina han sido obligados a competir con la agricultura subsidiada de los Estados Unidos (Stiglitz 2003:12), y mucho más.

Queda claro que la investigación de los temas arriba mencionados ha producido una riqueza de análisis y publicaciones desde una variedad de perspectivas clásicas y nuevas (las últimas incluyen estudios sobre las relaciones étnicas y de género junto con atención a cuestiones de impactos ambientales).

Los artículos incluidos en este dossier de *Íconos* ofrecen una introducción a muchos de estos fenómenos. Aunque es imposible tratarlos todos, y menos aún en profundidad y con referencia al conjunto de países de la región andina: los contenidos del dossier se limitan a investigaciones sobre Bolivia, Colombia y Ecuador. Con una excepción, son trabajos que los autores presentaron en una sesión organizada por nosotros para la última reunión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) en Puerto Rico en 2006. La excepción es la visión general y comprehensiva sobre el estado de los estudios rurales en el contexto de la globalización neoliberal en América Latina, trabajo elaborado por Cristóbal Kay por pedido nuestro, conjuntamente con una bibliografía extensiva de los últimos diez años de producción académica.

En cuanto a los otros artículos, Tanya Korovkin y Olga Sanmiguel, comparan -en base a investigaciones de campo conducidas en el curso de varios años- aspectos del crecimiento de la producción y exportación de flores de Colombia y Ecuador. En ambos países estas industrias han generado muchos puestos de trabajo, pero son puestos de “baja calidad” donde las mujeres que representan la mayoría de la fuerza laboral, reciben sueldos bajos y trabajan en condiciones a menudo peligrosas para su salud. Los estados han abandonado su rol en la reglamen-

tación de las condiciones de trabajo, mientras las ONGs no tienen la capacidad de asegurar mejoramientos significativos.

Victor Bretón, por su parte, cuestiona los impactos de un programa muy ambicioso del Banco Mundial, administrado por las organizaciones indígenas y orientado a favorecer el desarrollo de las comunidades en la Sierra ecuatoriana. Bretón considera el programa como una distracción frente a los problemas de fondo, especialmente, la desigualdad en la distribución de los recursos productivos y fundamentalmente la tierra.

Luciano Martínez analiza la pobreza rural en el contexto de la desestructuración de la sociedad rural producida en los últimos años, la misma que conduce a que las generaciones jóvenes tengan que abandonar el campo, especialmente por las pocas posibilidades de encontrar empleo en el medio rural. Los pobres en el medio rural son los asalariados rurales y los campesinos minifundistas, marginados de las políticas públicas que sólo han beneficiado a la agricultura de exportación. Se impone, entonces, una reflexión de esta problemática a partir de lo local, donde se pueden visibilizar a los sectores sociales más pobres y diseñar políticas con una perspectiva de territorio.

Francisco García discute sobre el alcance del término “nueva ruralidad” a partir de un análisis demográfico de la población rural, y en base a los datos de los censos nacionales. Se pregunta si este concepto, tal como se viene utilizando en el contexto europeo, es pertinente para el análisis de una sociedad rural altamente heterogénea como la ecuatoriana.

Elizabeth Jiménez desarrolla un interesante análisis sobre el origen de los ingresos entre las familias campesinas de Bolivia. Encuentra que estos provienen de múltiples fuentes y no sólo de la agricultura como tradicionalmente se había concebido. De esta forma, las familias campesinas con ingresos más diversificados son aquellas que tienen más posibilidades de obtener un mayor volumen de ingresos y ser menos vulnerables desde el punto de vista económico.

Sin ignorar las relaciones étnicas y de género, ni el deterioro ambiental, lo que surge de los trabajos aquí presentados es la importancia de la reforma agraria, la creación de oportunidades laborales y el mejoramiento de las condiciones laborales -las cuestiones clásicas- para asegurar mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Los artículos abren una serie de interrogantes sobre la estructuración de la sociedad rural a principios del siglo XXI en un contexto de dinámicas de cambio que provienen tanto de dentro como de fuera de ella.

Bibliografía

- Chriboga, Manuel, 2005, “El sector agropecuario rural de Ecuador: situación y alternativas” en *Revista ALASRU, Análisis Latinoamericano de Medio Rural* No. 1, Universidad Autónoma de Chapingo, México, pp. 297-321.
- Stiglitz, Joseph, 2003, “El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina”, en *Revista de la CEPAL* No. 80, CEPAL, Chile, pp. 7-40.

Estándares de trabajo e iniciativas no estatales en las industrias florícolas de Colombia y Ecuador¹

Labour standards and non-state initiatives in Colombia's and Ecuador's flower industries

Tanya Korovkin (Universidad de Waterloo, Canadá) y
Olga Sanmiguel-Valderrama (Universidad de Cincinnati, Estados Unidos)

email: tkorovki@uwaterloo.co - olga.sanmiguel@gmail.com

Fecha de recepción: febrero 2007

Fecha aceptación y versión final: julio 2007

Resumen

La reciente ola de expansión económica global se desencadenó, en gran medida, por la reubicación de industrias de mano de obra intensiva hacia países con mano de obra barata. No hay duda de que esta reubicación creó fuentes de empleo, sin embargo, la mayor parte son trabajos de baja calidad. Los actores no estatales (empresas privadas y ONGs) han realizado grandes esfuerzos para mejorar los estándares de trabajo en industrias de mano de obra intensiva, pero hasta el momento, estos esfuerzos no han sido del todo exitosos. Este artículo examina las relaciones de trabajo y las iniciativas no estatales en las industrias exportadoras de flores en Colombia y Ecuador. Se argumenta que la mano de obra barata y los bajos estándares de trabajo son factores importantes, aunque no los únicos, que causaron la reubicación de la producción florícola hacia algunos países andinos. También se sugiere que la efectividad de las iniciativas no estatales se ve debilitada por las discrepancias entre las empresas empleadoras y las ONG: mientras las primeras adoptan una perspectiva técnica reducida sobre los estándares de trabajo apropiados, las ONG apoyan la participación de los empleados en los procesos de monitoreo y de verificación.

Palabras clave: Estándares de trabajo, sindicalización, industria florícola, mujeres trabajadoras, condiciones laborales, neoliberalismo, Colombia, Ecuador.

Abstract

The recent wave of global economic expansion was triggered to a large extent by the relocation of labour-intensive industries to developing countries with low labour costs. While there is no doubt that this relocation has created employment, most of it is in low quality jobs. Non-state actors (private companies and NGOs) have made efforts to improve labour standards in labour-intensive industries, but so far their efforts have met with limited success. This article examines labour relations and non-state initiatives in Colombia and Ecuador's flower export industries. It is argued that cheap labour and low labour standards are important, although not the only factors behind the relocation of flower production to Andean countries. It is also suggested that the effectiveness of non-state initiatives is undermined by disagreements between business organizations and NGOs: while the former adopt a narrow technical perspective on labour standards, the latter support worker participation in monitoring and verification.

Keywords: Labour Standards, Unionization, Flower Industry, Women-Workers, Labour Conditions, Neoliberalism, Colombia, Ecuador.

1 Traducción: Nati Green. Revisión: Edison Hurtado. Una versión anterior de este artículo fue publicada en inglés en el Vol. 29 del *Third World Quarterly* en 2007. Olga Sanmiguel-Valderrama realizó el trabajo de campo en Colombia en diferentes momentos entre 1999 y el 2003, y su trabajo fue financiado parcialmente por el Consejo Canadiense

La economía neoclásica relaciona el desarrollo con el crecimiento económico, mientras que el empleo es tratado como un factor de producción, al igual que la tierra y el capital. Sin embargo, si es que nos preocupan las implicaciones humanas y sociales del desarrollo económico, los éxitos y fracasos del desarrollo deben ser medidos no sólo en términos de la eficiencia productiva, sino que también debe considerarse la situación laboral. La reciente ola de expansión económica global se desencadenó, en gran medida, por la reubicación de industrias de mano de obra intensiva hacia países con mano de obra barata. No hay duda que esta reubicación crea fuentes de empleo, sin embargo, la mayoría de los trabajos están asociados con precarias relaciones de trabajo así como con la “feminización” y “discriminación racial” en el trabajo.²

Algunos analistas consideran que los trabajos de baja calidad son un costo inevitable a pagar en las primeras etapas del crecimiento económico y creen que la calidad de los trabajos mejora con el tiempo. Otros sugieren que esto podría llevar a tocar fondo en términos de salarios y estándares de trabajo. En América Latina, la desintegración de la alian-

za entre el estado y los sindicatos, que fue muy común durante el período populista, estuvo acompañada de iniciativas de empleo - que aumentaban progresivamente- propuestas por empresas y ONGs ¿Qué tan efectivas fueron estas iniciativas y cuáles fueron sus implicaciones en el movimiento laboral?

Este artículo examina las relaciones y las iniciativas laborales, no estatales, en la industria florícola. Ésta industria se ha visto gravemente afectada por la mencionada reubicación. Esta industria estuvo inicialmente concentrada en los Países Bajos y en Estados Unidos, pero durante las últimas décadas, se ha trasladado a América Latina, Asia y África. Colombia fue el primer país latinoamericano en sentir los efectos de este cambio global. Después se une Ecuador y, a un menor nivel, Perú. Argumentamos que la mano de obra barata y los bajos estándares de trabajo son factores importantes, aunque no los únicos, que se encuentran detrás de este proceso de reubicación. También examinamos las iniciativas no estatales diseñadas para tratar los asuntos relacionados al empleo en las empresas florícolas y explicamos lo que creemos son las mayores causas de desacuerdo entre empresas empleadoras y ONGs: mientras las primeras adoptan una perspectiva técnica reducida sobre los estándares de trabajo apropiados, las ONGs apoyan la participación de los empleados en los procesos de monitoreo y verificación.

Estándares internacionales de trabajo y globalización económica

La declaración de la OIT adoptada en 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo establece cuatro áreas fundamentales de estándares de trabajo o derechos laborales básicos: 1) libertad de asociación y libertad para formar sindicatos, así como el derecho de negociación colectiva, 2)

de Investigación en Ciencias Sociales y Humanitarias (SSHRC). Tanya Korovkin realizó el trabajo de campo en Ecuador entre el 2000 y el 2003. Tuvo financiamiento del SSHRC y el trabajo fue realizado en conjunto con el INSTRUCT (Inter-American Network for Studies and Training in [Natural] Resource Usage for Community Transformation), auspiciado por la Agencia Internacional de Desarrollo Canadiense.

2 Para una discusión general del concepto de feminización del trabajo ver a Standing (1989, 1999). Bakker (1996), Armstrong (1996) y Vosco (2000) lo discuten haciendo referencia a las relaciones laborales en Canadá. La naturaleza y las consecuencias de la feminización del trabajo en la industria florícola latinoamericana en general, y de Ecuador en particular, se discuten respectivamente por Lara (1995) y Korovkin (2002, 2005). Sanmiguel-Valderrama (2004 y 2007) aplica este concepto junto con la noción de la discriminación racial en el trabajo en un análisis de la industria florícola colombiana.

la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, 3) la abolición del trabajo infantil y 4) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Además de los derechos laborales básicos, las convenciones de la OIT establecieron una serie de estándares técnicos de trabajo que se ocupan de temas como las horas de trabajo y los riesgos de salud laborales. A pesar de que la mayoría de los actores internacionales apoyan los derechos laborales básicos, no hay un acuerdo similar ante la necesidad de estándares técnicos de trabajo ya que, como usualmente argumentan los representantes de países en desarrollo, estos pueden ser usados por Europa y Norteamérica con objetivos proteccionistas. El miedo a su mal uso explica por qué las tasas de salarios no se han considerado en las discusiones de los estándares internacionales de trabajo (Servais 2004).

El apoyo internacional a los estándares de trabajo ha sido resquebrajado y contradictorio debido, en gran medida, a las crecientes presiones por la competencia implícitas en la globalización económica. Sin embargo, no hay consenso si es que estas presiones aceleran o no una caída hasta llegar a tocar fondo en el área de salarios y estándares de trabajo. Por lo tanto, frecuentemente se argumenta que el capital extranjero, crucial para el crecimiento de las exportaciones, es atraído no tanto por los bajos costos de la mano de obra, sino por el dinamismo de los mercados, los altos niveles de estabilidad política y, generalmente, buenas probabilidades de obtener ganancias.

Se ha argumentado que en un contexto de pobreza generalizada, los trabajos de baja calidad son mejores que la inexistencia de trabajo y, por lo tanto, la creación de fuentes de empleo puede ser vista como un primer paso en el camino hacia el crecimiento económico, mejores salarios y estándares de trabajo más altos (Gunter y Van der Hoven 2004). No obstante, no está claro si este optimismo puede ser garantizado. Weeks (1999) sugiere

que los efectos distributivos del crecimiento económico dependen del balance de poder entre el capital y el empleo, y que -en el contexto de globalización- el poder del trabajo ha sido debilitado como resultado de una creciente movilidad de capital. Los estudios comparativos y regionales enfocados en países de Latinoamérica parecen apoyar esta línea de análisis. Chan y Ross (2003) apuntan hacia una erosión general de los salarios y de las condiciones laborales en la región que se vería aún más pronunciada en el caso de trabajadores mal remunerados. En 2000, los promedios reales de salarios mínimos en Latinoamérica estaban un 26% más bajo que los niveles de 1980 según Vega Ruiz (2001:41).

Frecuentemente se explica el deterioro del lugar de trabajo en la era de la globalización en Latinoamérica (y en el mundo en desarrollo en general) como resultado de la flexibilidad del *mercado* de trabajo (Amadeo y Horton 1997). Asociados o no con subcontratos y contratos a corto plazo, estas condiciones permiten que la administración corte los costos laborales a través de despidos, recortes salariales y la supresión de sindicatos. Estas prácticas han sido, de hecho, muy típicas de los sectores informales tanto rurales como urbanos. Sin embargo, en las décadas de 1980 y 1990, éstas fueron transformadas en un grupo de principios legales expresados en una nueva legislación laboral. La reforma laboral estuvo acompañada por recortes en el gasto público y una racionalización de las agencias de gobierno (Bronstein 1997). Estos cambios crean dilemas a los promotores internacionales de los estándares de trabajo. Históricamente, estos estándares estaban sostenidos a través de la interacción entre sindicatos y estados. ¿Pero ahora, con la decadencia de ambas instituciones, quién va a retomar el camino?

Debido a la asimétrica y generalmente débil experiencia internacional, algunos de

los desarrollos más interesantes concernientes a los estándares de trabajo han tenido lugar en torno al área de acción no estatal, con un protagonismo de las ONGs y las empresas internacionales. Las ONGs internacionales han implementado una cantidad de campañas internacionales basadas en asuntos laborales y comercio ético, lo que ha contribuido a que crezca el activismo de consumo en los países industriales más avanzados. También han creado una amplia gama de esquemas de etiquetas para certificar los productos realizados de manera socialmente (y ambientalmente) responsable. El protagonismo de las ONGs se ve reflejado en las actividades del sector privado. Muchas empresas han adoptado la noción de la responsabilidad social corporativa. De hecho, muchas empresas colaboran con las iniciativas de ONGs para la producción de etiquetas o desarrollan sus propios códigos de conducta. Algunos autores consideran que estos desarrollos son altamente esperanzadores ya que promueven una forma ética de globalización (Clark 2001). No obstante, otros se mantienen escépticos. Cada iniciativa usa sus propios estándares. Los códigos de conducta de las empresas tienden a ser ambiguos y son frecuentemente más publicitados entre los consumidores del Norte que entre los trabajadores locales. También deben considerarse los temas del monitoreo y de verificación: se ha señalado que las empresas usan sus propios códigos de conducta o que utilizan etiquetas de ONGs sin que las prácticas laborales cambien significativamente (Blowfield 1999).

Una manera de aumentar la efectividad de las iniciativas no estatales es estandarizarlas y ajustar los procesos de verificación en colaboración con prestigiosas organizaciones gubernamentales internacionales. Sin embargo, los estándares sociales tratan con seres humanos, los sujetos de los procesos laborales, quienes merecen el derecho de participar en el diseño de reglas y regulaciones que van a afectar sus vidas directamente. Además, puede esperarse

que los procedimientos de verificación sean más efectivos si incorporan a representantes laborales locales e internacionales. Como será demostrado a continuación, la participación de los trabajadores en iniciativas laborales no estatales continúa siendo un asunto que crea divergencias.

Empleo flexible y “flores verdes” en Colombia

Colombia es el mayor exportador latinoamericano de flores frescas. El valor de sus exportaciones de flores aumentó de menos de un millón de dólares americanos en 1968 a más de un billón en el 2006. La industria florícola colombiana depende de las relaciones capitalistas de producción: tiene relativamente pocos dueños (aproximadamente 200 empresas nacionales y extranjeras) y 111.000 empleados asalariados (Asocolflores 2007). Los costos laborales de la industria florícola colombiana representan aproximadamente 50% de los costos de producción, con una paga del salario mínimo a la mayoría de los trabajadores (Aflonordes y Sena 1996:5). Las mujeres, que son exclusivamente jefes de familia, o que complementan el ingreso de otros miembros de la familia, representan al menos 65% de la fuerza de trabajo de la industria florícola colombiana (Corporación Cactus 1996). La mayoría de los trabajadores provienen de comunidades de campesinos locales de origen indígena o mestizo, mientras que otros son emigrantes de varias regiones de alrededor del país, donde la pobreza y el estancamiento de la agricultura tradicional han erosionado la capacidad de ganarse la vida, o han escapado de la violencia social y política asociada con la guerra civil en Colombia. La disponibilidad de una fuerza laboral vulnerable social y económicamente fue uno de los factores más importantes para el establecimiento de las primeras plantacio-

nes de flores en Colombia en la década de 1960. En 1966, el salario mínimo en Colombia era de 0.82 centavos de dólar americano al día, mientras que el salario diario en materia de horticultura en California era de USD \$16.03 dólares (Méndez 1991:7). La relación entre los salarios mínimos en Colombia y en EE. UU ha disminuido con los años, pero continúa siendo alta: era 1 a 19 para finales de 1960, y 1 a 15 para inicios del 2000 (Banco de la República 2005, Sanmiguel-Valderrama 2004: 166). Los primeros propietarios de las plantaciones de flores adoptaron estándares no estatales de relaciones laborales ya presentes en áreas rurales y asociadas con prácticas informales y discriminantes en término de clase, raza y género. A pesar de esto, desde finales de 1960 y mediados de 1980 algunas empresas florícolas colombianas ofrecieron trabajos a tiempo completo para posiciones permanentes, contratos individuales abiertos y pagaron horas extras a una tasa de 1.5 veces el salario regular, como lo manda la ley. Además, algunas empresas afiliaron a sus trabajadores a los servicios de salud pública y a sistemas de pensión, servicios que son reconocidos por su falta de recursos pero que al menos ofrecían algunos servicios a quienes los necesitaban.

Las reformas neoliberales de mediados de 1980, 1990 y del 2002 eliminaron algunos de estos derechos y legalizaron las precarias relaciones laborales experimentados por la mayoría de los trabajadores de la industria florícola. El gobierno promulgó una serie de nuevas leyes laborales en un intento de retener y aumentar los niveles de inversión extranjera y doméstica ante el nuevo contexto global. Lo más importante era que esta nueva legislación laboral reducía los relativamente seguros y estables contratos indefinidos. Inclusive, legalizaba la contratación de empleados permanentes a través de industrias de asistencia temporales e introducía contratos de corto plazo y períodos fijos que iban desde pocos días hasta

tres años. También facilitaba la contratación de gente joven con contratos de aprendizaje con compensaciones que alcanzaban tan sólo la mitad del salario mínimo. Adicionalmente, las nuevas leyes desregulaban la duración de los turnos de trabajo y el día reglamentario de descanso, hacían que las horas extras se paguen como si fueran horas regulares de trabajo, y reducían drásticamente las compensaciones por el injusto despido de trabajadores que hayan permanecido en la empresa por más de diez años (Régimen laboral colombiano 2003).

La nueva legislación laboral estuvo acompañada por iniciativas de empresas privadas. Muchas empresas implementaron programas de reingeniería, diseñados, entre otras cosas, para incrementar la productividad laboral mediante el aumento del esfuerzo de trabajo. De acuerdo con la Corporación Cactus (1999a) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia (1998), en 1970 un trabajador en un invernadero de flores estaba encargado, en promedio, de ocho arriates de planta.³ Para la década de 1980, este número incrementó a 24 y para 1990 llegó a 42. Los programas de reingeniería incluyen el uso de cuotas laborales frecuentemente arbitrarias, y sistemas de rendimientos individuales, usados para determinar la renovación del contrato y las bonificaciones por trabajador. Estos arreglos promueven niveles excesivos de exigencia y esfuerzo laboral, que muchas veces exceden el máximo de 48 horas semanales que manda la ley, así como también fomentan la competencia entre empleados y debilitan la solidaridad entre compañeros de trabajo. Simultáneamente, el uso de contratos con términos fijos da al contratista el poder de permitir o impedir, a su voluntad,

3 El término "arriate de plantas" se refiere a una división de tierra en los invernaderos. El tamaño de un arriate de plantas tiene un promedio de un metro por 30 metros (30m²) (Corporación Cactus 1999a: 50).

la renovación de los contratos de trabajo. Este poder es frecuentemente usado en casos de trabajadores que intentan organizar sindicatos, que no cumplen las cuotas laborales, que han presentado demandas para que se realicen inspecciones de trabajo o para recortes de personal, contra aquellos trabajadores cuyos exámenes médicos muestran niveles inadecuados de colinesterasa debido a su exposición a pesticidas y, finalmente, contra quienes requieran frecuentes permisos por enfermedad o, en el caso de mujeres, un permiso de maternidad pagado. La prerrogativa de un empleado permanente para no renovar un contrato fijo, con pocas o casi nulas posibilidades de presentar quejas, crea un sentido de miedo e inseguridad que les impide reclamar sus derechos laborales, tales como la libertad de asociación y el derecho a la no discriminación en los lugares de trabajo. De hecho, se han identificado altos niveles de inestabilidad laboral en este estudio como un grave impedimento para la organización laboral.

El gobierno colombiano ha pasado una legislación diseñada para proteger a los trabajadores de riesgos laborales, pero en muchos casos esta legislación es ignorada o pasada por alto. Existen varios estudios que reportan casos de trabajadores de florícolas con envenenamiento grave y crónico debido a los pesticidas. El último incidente publicado ocurrió en noviembre del 2003 en la Hacienda Apo-sentos, donde más de 300 trabajadores resultaron envenenados el mismo día (Untraflors 2004). Los estudios médicos realizados entre trabajadores de florícolas presentan aumentos en las tasa de infertilidad, abortos y deformaciones congénitas debido al uso de órgano-fosfatos y otros pesticidas tóxicos (Guarín Muñoz 1999, Fuortes 1997, Restrepo 1990a y 1990b).

Las mujeres empleadas en florícolas afrontan riesgos adicionales durante el embarazo y el período de lactancia. Ya que no hay programas especiales de seguridad social para mujeres, las trabajadoras continúan laborando en

ambientes peligrosos para la salud durante su embarazo exponiendo tanto su salud como la del feto a los adversos efectos de los pesticidas. Además, las mujeres también tienen que afrontar abusos verbales y a veces hasta acosos sexuales. Otras actividades reproductivas y sociales no remuneradas de la esfera privada (como el cuidado de los niños, los enfermos y los ancianos) así como otras actividades políticas realizadas por mujeres, también padecen malas condiciones, particularmente durante la temporada alta de las estaciones de producción, cuando los turnos de trabajo pueden ser hasta de 15 horas al día. Este problema se agrava debido a la distribución, en gran medida sexista, de las responsabilidades en la esfera privada y la falta de servicios sociales razonables, en términos económicos, como los servicios de guardería, educación y salud. Bajo estas circunstancias, las mujeres dependen de sus hijos mayores (especialmente hijas mujeres), otras parientes o vecinas mujeres y, cuando es posible, de centros de guardería establecidos por programas comunitarios y empresas florícolas (Sanmiguel-Valderrama 2004).

Después del inicio del auge florícola, se empezaron a notar que las precarias relaciones de trabajo en la industria podrían convertirse en sujeto de negociación de administración laboral. Por lo tanto, durante los primeros años de expansión de la exportación de flores, muchas plantaciones de flores presenciaron la aparición de sindicatos. Sin embargo, las empresas lograron dismantelar las organizaciones independientes de trabajadores a través del uso de cierres patronales, declaratorias de quiebra, el despido de trabajadores independientes sindicalizados, contrataciones de rompuehuelas y la organización de sindicatos controlados por las empresas, tales como la Federación Ultracun. Además, en vez de negociar acuerdos colectivos con los sindicatos independientes, muchas empresas ofrecieron mejores contratos para sus trabajadores. Finalmente, algunos utilizaron los medios de

comunicación para promulgar acusaciones sin fundamentos de la relación entre sindicatos y la guerrilla, o para argumentar que el objetivo principal de los sindicatos era causar la quiebra de las empresas (Rueda-Cifuentes 2003).

Después de varios intentos de sindicalización a finales de 1980 y en la década de 1990, el único sindicato que sobrevivió fue Sintrafloramérica con menos de 25 trabajadores, quienes estaban sujetos a la discriminación de la administración (por ejemplo, sus beneficios laborales eran menores que aquellos concedidos a miembros de un sindicato paralelo pero controlado por la empresa). Dos fuertes sindicatos independientes lograron consolidarse en el 2001 (Untraflores) y en el 2004 (Sintrasplendor). Sin embargo, estos nuevos sindicatos corren peligro ya que el dueño de la más grande hacienda sindicalizada (Dole) ha pedido la autorización del Ministerio de Trabajo para clausurar estos sindicatos, alegando su falta de rentabilidad, mientras que continúa sus operaciones en haciendas florícolas sin sindicatos.

El movimiento de sindicatos independientes ha encontrado un aliado en el sector de las ONGs. Desde la década de 1990 en adelante, ONGs locales e internacionales trataron los problemas ambientales y laborales en el sector florícola de manera complementaria a la lógica de los sindicatos independientes. En el contexto de la industria florícola colombiana, surgieron dos tipos de iniciativas no gubernamentales: 1) la Campaña Internacional para el Comercio Justo de Flores y el Código de Conducta Internacional promocionado por ONGs nacionales e internacionales, y 2) el Código Verde, creado por la asociación nacional de floricultores colombianos, Asocolflores. A principios de la década de 1990, los sindicatos colombianos y las ONGs se unieron a los grupos ambientalistas y de derechos humanos de la UE en una coalición estructurada muy libremente, la cual - con el apoyo de las asociaciones de importa-

dores florícolas de la UE (en especial con la BGI Alemana)- trató el tema de las condiciones ambientales y laborales en los países exportadores de flores buscando evitar los controvertidos boicots del consumidor. Estos esfuerzos dieron como resultado la creación de un Código Internacional de Conducta (CIC). El CIC enfatizaba el respeto a los derechos laborales de parte de los contratistas, así como la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. También insistía en la importancia de usar estándares técnicos, no sólo en el área de seguridad industrial, salud laboral, horas de trabajo y relaciones contractuales sino también con respecto a las tasas salariales (Brassel y Rangel 2001: 26). Finalmente, el Código destacaba la necesidad de una significativa participación de los trabajadores en los procesos de monitoreo y certificación, así como el desarrollo de solidaridades entre trabajadores internacionales y compartir información para facilitar el monitoreo internacional. En Colombia, el mayor apoyo al CIC vino de las ONGs locales que realizaron investigaciones sobre las condiciones laborales y ambientales en la industria florícola, apoyaron iniciativas de sindicalización, prestaron asesoramiento legal y promovieron la cooperación internacional.

Inicialmente, la coalición intentó negociar con Asocolflores, sin embargo, este sindicato respondió a esta iniciativa lanzando su propio código de conducta, "Flor Verde". Este código de conducta privado se parece más a un programa de reingeniería diseñado para controlar el rendimiento de los trabajadores y aumentar las ganancias de las empresas, en vez de ser un genuino compromiso para mejorar la situación laboral. Como lo expresa en el preámbulo,

"[el Código] Flor Verde es una estrategia integral orientada a la optimización del uso de recursos con proyección a largo plazo y una dinámica permanen-

te, diseñada para *mejorar el rendimiento* del sector florícola colombiano dentro del concepto de desarrollo sustentable (Asocolflores 1998: 10, énfasis agregado)".

El programa Flor Verde es partidario, entre otras cosas, de la reducción del uso de pesticidas químicos, de la implementación de formas más eficientes para el manejo del agua y los desechos, de la estandarización de las prácticas de contratación y de medidas disciplinarias, del entrenamiento a nuevos trabajadores, y de programas sociales concentrados en las relaciones de familia, recreación y cuidado de niños. También apoya algunos derechos laborales básicos regidos por el Código Laboral Colombiano, así como el pago a tiempo de salarios, beneficios y acceso a seguros de enfermedad y seguridad social. Sin embargo, no exige la participación de los trabajadores en el monitoreo y la certificación. Esto está dirigido, gracias a la petición de los floricultores, por la Société Générale de Surveillance, una empresa consultora privada europea que se especializa principalmente en monitorear la calidad del producto y los estándares ambientales. De hecho, lo que cabe recalcar respecto al programa Flor Verde es que asegura el control de las empresas sobre los procesos de producción, dejando sin espacio a la organización laboral o la participación de ONGs internacionales. En términos generales, es poco probable que estas iniciativas del sector privado puedan contribuir al mejoramiento de los estándares de trabajo, a menos que la administración respete la existencia de organizaciones independientes de trabajadores y acepte su derecho a participar en el diseño de políticas que rijan su lugar de trabajo y la certificación de prácticas laborales, así como el ejercicio de los derechos laborales básicos, incluyendo la libertad de asociación y el derecho a negociar en las mesas de discusión, sin miedo a represalias.

Auge de la exportación de flores en Ecuador: ¿tocando fondo?

Los esfuerzos de reingeniería en la industria florícola colombiana estuvieron motivados, entre otras cosas, por la creciente competencia con Ecuador. Entre 1990 y 1998, el valor de las exportaciones de flores ecuatorianas aumentó en más de 10 veces (de 13 a 161 millones), mientras que las exportaciones de flores colombianos sólo se duplicaron (de US \$ 229 a US \$556 millones) (Corporación Financiera Nacional 1997: apéndice 7, Expoflores 2003: 44). Parte de la inversión inicial en la industria florícola ecuatoriana provino de fuentes domésticas, aunque el capital extranjero, especialmente el colombiano, jugó un papel muy importante.⁴

El desarrollo relativamente tardío de la industria florícola en Ecuador puede explicarse por varios factores (algunos de los cuales no tienen relación alguna con las condiciones laborales). En la década de 1970, la economía ecuatoriana mostraba síntomas de la enfermedad holandesa, causada por el auge de la industria petrolera. Este también fue un período de dictadura militar populista donde el crecimiento de las exportaciones no petroleras se vio limitado por los controles gubernamentales (Sawers 2005). Adicionalmente, Ecuador presentaba varias desventajas en el área de transporte, especialmente su arcaico y estropeado sistema vial. Pero también tenía ventajas: en comparación con Colombia, Ecuador tenía (y todavía tiene) niveles más bajos de violencia social y política. Esta ventaja fue evidente después de la transición hacia la democracia política y el cambio gradual hacia el liberalismo económico en las dé-

4 De acuerdo a algunos cálculos estimados, aproximadamente la mitad de las empresas florícolas del Ecuador están completamente controladas o tienen alguna participación de inversionistas extranjeros, generalmente de origen colombiano, americano, alemán y francés (Waters 1992: 10-11).

cadadas de 1980 y 1990. Siguiendo el ejemplo colombiano, el gobierno ecuatoriano redujo las tarifas y devaluó la moneda nacional, mientras continuaba dependiendo de créditos estatales de bajo costo como manera de estimular el crecimiento. En las primeras etapas del auge de exportaciones florícolas, los créditos estatales hacia los floricultores aumentaron en más de 16 veces (de US \$1.6 millones en 1990 a US \$26.2 millones en 1996), mientras que la superficie de florícolas aumentó, en el mismo período de tiempo, sólo en 5 veces (de 286 a 1485 hectáreas) (Corporación Financiera Nacional 1997: apéndice 6).

La combinación entre las iniciativas estatales y de mercado, acompañadas de la estabilidad política, fueron factores importantes para impulsar el tardío auge florícola en Ecuador. Sin embargo, los factores relacionados al trabajo también jugaron un papel importante. El salario mínimo en dólares americanos tendía a ser más bajo. Entre 1990 y 1994, durante las primeras etapas de la expansión de las exportaciones florícolas en el Ecuador, el salario mínimo en Ecuador era entre 20 y 25% menor al de su vecino del norte (Banco Central de Ecuador 2002, Banco de la República de Colombia 2005). Los niveles de flexibilidad laboral son probablemente mayores en Ecuador. Luego del cambio hacia el neoliberalismo, la legislación laboral ecuatoriana fue modificada, de manera similar a lo que ocurrió en Colombia (Legislación Codificada 2001a, 2001b). Sin embargo, el cumplimiento de las leyes laborales en Ecuador, en general, es notablemente débil, tanto que la reforma de trabajo neoliberal (muy importante en las agendas políticas de varios otros países, incluyendo Colombia) no era una preocupación mayor para la comunidad empresarial ecuatoriana (Vos 2000).

La laxa implementación de las leyes laborales está altamente relacionada con la debili-

dad del sindicalismo rural. Los sindicatos rurales se han desarrollado en la región Costa del Ecuador, pero son virtualmente ausentes en la Sierra rural. Los sindicatos rurales empezaron a aparecer en la Sierra en la década de 1960 y 1970, junto con la movilización política en contra de los problemas laborales. Sin embargo, después de que el gobierno militar realizó la reforma agraria, la política rural en los andes ecuatorianos fue dominada por las organizaciones comunitarias de indígenas y campesinos cuyas demandas políticas se centraban en el acceso a la tierra y a los derechos culturales, en vez de concentrarse en asuntos laborales (Korovkin 2006). El asunto de los estándares de trabajo fue sacado a la luz repetidamente por ONGs ecuatorianas, pero estos estándares no fueron nunca sujeto de escrutinio internacional como ocurrió en Colombia. Por lo tanto, para los ojos de los floricultores, el Ecuador no sólo era un país con bajas tasas salariales y leyes laborales laxas, sino era un país libre de conflictos sindicales y con una “limpia” imagen internacional.

La industria florícola ecuatoriana creció especialmente rápido en la primera mitad de la década de 1990. En la segunda mitad de la década, las tasas de crecimiento cayeron y luego volvieron a crecer, aunque a un menor ritmo (Banco Central de Ecuador 2002: tabla 4.2.4 y 2005: tabla 3.1.1). Parte de esta década tuvo que ver con cambios en la política doméstica. Los baratos créditos estatales fueron eliminados progresivamente, mientras que las tasas de los bancos comerciales continuaban creciendo, alcanzando tasas anuales prohibitivas del 18% en el 2002. Además, cualquier devaluación se volvió imposible a partir del 2000, ya que el Ecuador adopta el dólar americano como moneda oficial. Las tasas de salarios mínimos mensuales, relativamente bajos al inicio del auge florícola, también empezaron a crecer: de USD \$67 en 1990 a USD \$166 en 2004, llegando a niveles comparables a Colombia (Banco Central

de Ecuador 2002: tablas 7.2.2 y 9.1.3.8 y 2005: tabla 4.1.3). Este cambio trajo algunas mejoras para los trabajadores en términos de poder adquisitivo, pero afectó los costos laborales de las empresas. Es más importante aún recalcar que estos cambios domésticos no favorables ocurrieron durante el tiempo en el que los mercados globales estaban siendo inundados por exportaciones de flores baratas de países africanos y asiáticos, cuyos costos laborales eran inclusive más bajos que en la región andina.

Una manera para enfrentar estas dificultades es concentrarse en la producción de flores de alta calidad generadas en óptimas condiciones ambientales y sociales. Esta estrategia es promovida por Expoflores, la asociación ecuatoriana de floricultores. Expoflores señala la importancia de eliminar la dependencia en agentes intermediarios que envían las flores a mercados anónimos y masivos, así como la necesidad de construir una imagen internacional de la exótica y estéticamente perfecta “rosa ecuatoriana”. Expoflores también ha intentado optimizar los procesos de producción y mejorar los estándares ambientales y laborales en las plantaciones florícolas. Para alcanzar este objetivo, ha creado un programa de reingeniería, “La Flor de Ecuador”. Como en el caso de Colombia, el programa motiva a los floricultores a mejorar sus prácticas de producción, mejorar las destrezas de sus trabajadores, reducir el uso de pesticidas químicos y atenerse a cumplir la legislación laboral nacional. Pero también, como en Colombia, este programa no contempla mecanismos para la participación de los empleados en el monitoreo y la certificación (Expoflores 1999, 2002 y 2003). El programa de etiquetas de flores (FLP) utiliza un enfoque similar, una iniciativa no estatal auspiciada por Expoflores y por la asociación importadora alemana (BGI). Este programa compromete a los floricultores ecuatorianos a respetar los estándares ambientales y laborales a cambio del

acceso a los mercados “verdes” de la UE. Sin embargo, el monitoreo sobre la conformidad proceso laboral es realizado por expertos técnicos con una contribución muy poco significativa de parte de los trabajadores.

La resistencia de las empresas a aceptar la idea de la participación de los trabajadores está acompañada por la poca entusiasta, por decir lo mínimo, actitud hacia los sindicatos. Tanto la legislación nacional como la lista de los prerrequisitos para la certificación del FLP hacen referencia a la libertad para formar sindicatos. Sin embargo, en el 2005, sólo 4 de las más de 400 haciendas florícolas del Ecuador tenían sindicatos. Los representantes empresariales frecuentemente explicaban la virtual ausencia de sindicatos en el sector florícola a la falta de interés de los mismos trabajadores en formarlos. No obstante, en la mayoría de casos, como lo demuestra un estudio auspiciado por la OIT con respecto a las haciendas florícolas, hay una “resistencia absoluta” entre los administradores de las empresas florícolas a la idea de aceptar sindicatos, por lo que “bloquean cualquier intento de sindicalización mediante el despido de los trabajadores involucrados” (Organización Internacional del Trabajo 2000:17). La resistencia de las empresas florícolas a aceptar la participación organizada de los trabajadores está también relacionada a la apremiante situación experimentada en el cada vez más concurrido mercado de flores internacional. En el presente, sólo existe un pequeño segmento de consumidores (la mayoría en Europa) que está interesado en comprar flores de alta calidad y/o flores producidas bajo condiciones ambiental y socialmente sustentables. Esto da como resultado una relativa falta de interés de parte de los florícolas ecuatorianos a aceptar las iniciativas empresariales diseñadas para mejorar los procesos laborales y de producción: sólo una décima parte de las plantaciones florícolas ecuatorianas participan en el Programa de la Flor Ecuatoriana o

en el FLP (Expoflores 2002, Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversión 2001). Los florícolas que se adhieren a estos programas tienen, generalmente, un estatus financiero sólido y acceso directo a sus clientes en Europa y Norteamérica. Mientras tanto, sus pares menos afortunados se ven forzados a continuar produciendo flores en masa a bajo precio para los grandes mercados, logrando ser competitivos al reducir los costos laborales. Esta segunda estrategia que es casi contraria a la recomendada por Expoflores, pero continúa siendo muy popular entre los floricultores ecuatorianos, e incluye varias medidas que afectan los estándares de trabajo, especialmente en lo relacionado a las horas de trabajo.

Técnicamente, los trabajadores de empresas florícolas en Ecuador reciben un salario mínimo por trabajar 40 horas por semana. Por lo menos este fue el caso al comienzo del auge de flores. Sin embargo, más tarde, las empresas se cambiaron a sistemas de productividad individual, una situación similar a lo ocurrido en Colombia. Esto significaba que los trabajadores que no podían cumplir sus cuotas diarias (basados en el rendimiento de los trabajadores más eficientes), tenían que permanecer trabajando incluso luego de cumplida la jornada laboral diaria con el fin de completar sus tareas, pero sin recibir paga por estas horas extras de trabajo. La introducción al sistema de productividad individual estuvo acompañada de requisitos de la empresa para aumentar el esfuerzo de trabajo. A inicios de la década de 1990, un trabajador en un invernadero de rosas tenía asignado un promedio de 20 arriates de plantas; a inicios del 2000, este trabajador tenía que ocuparse de 40 o hasta 50 arriates. Como consecuencia, el no pagar a los trabajadores que no hayan completado sus tareas a tiempo se volvió una práctica habitual. Además, lo normal es que las horas de trabajo se incrementen durante las temporadas altas de producción. A pesar de

que este trabajo adicional era reconocido por la administración como horas extras, este se pagaba al mismo precio que el trabajo regular o, inclusive, contra toda lógica, se pagaba menos que lo normal (Korovkin 2004).

Las largas horas de trabajo significan una gran presión para los trabajadores de las florícolas, pero es especialmente pesado para las mujeres, quienes tanto en Colombia como en Ecuador, representan la mayoría de los trabajadores en florícolas. Algunos consideran que el acceso a trabajos en la agroindustria constituye un paso hacia la equidad de género (Barrientos *et.al.* 1999). Sin embargo, en el contexto andino, este trabajo está asociado con la prolongación de los ya largos días de trabajo de la mujer, el abandono involuntario de los hijos y, por último, pero no menos importante, el debilitamiento de los todavía precarios nuevos roles de la mujer en la sociedad civil local (Korovkin 2002 y 2005). Otra categoría de trabajadores afectados desproporcionalmente por las largas horas de trabajo son los jóvenes de entre 15 y 18 años, quienes por derecho deben trabajar menos horas al día y tener horarios de trabajo más flexibles para que puedan asistir a la escuela y secundaria. No obstante, las empresas casi nunca hacen excepciones para estos jóvenes trabajadores. Un problema adicional es el choque entre los valores culturales de indígenas campesinos que ponen especial énfasis en la cooperación, y la cultura corporativa industrial, interesada en la disciplina y la eficiencia individual. En otras palabras, lo que ha sido exaltado como flexibilidad laboral por las administraciones de las empresas, aparece como un insoportablemente y rígido horario de trabajo para los trabajadores, mujeres, jóvenes y campesinos indígenas, cuyas vidas se encuentran completamente subordinadas a la constante búsqueda por competitividad de parte de las empresas.

La extensión del tiempo de trabajo está acompañada de altos niveles de rotación labo-

ral, lo que explica la poca disposición y/o inhabilidad para organizar sindicatos. Normalmente, los trabajadores son contratados directamente por las empresas florícolas. Se le da, a cada trabajador, un contrato individual de corto plazo (tres meses de prueba o un año “permanente”), el cual debe ser renovado, pero generalmente esto no sucede ya que depende de la habilidad del trabajador para cumplir con las determinadas metas individuales de productividad (Korovkin 2004).

Los altos índices de rotación laboral están también relacionados a los riesgos asociados con el trabajo en invernaderos. De acuerdo con los especialistas de salud laboral, la incidencia de casos graves de envenenamiento con pesticidas en Ecuador en la industria florícola ha disminuido. Lo que no ha cambiado es la exposición crónica a pequeñas dosis de pesticidas tóxicos debido al incumplimiento de las normas de seguridad laborales (Harare 2004). Los trabajadores expuestos a estos pesticidas tienen el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas a largo plazo, pero también es probable que sufran de problemas de salud menos graves pero inmediatos (Harari, Cole y Micheli 2004).

La cercanía a Colombia dio un giro adicional a esta interacción de inseguridad laboral y ausencia de organizaciones de trabajadores. Por un lado, los sindicatos florícolas en Colombia y Ecuador intentaron crear una organización transfronteriza, con el objetivo de convertirse en un movimiento internacional de trabajadores florícolas. Por otra parte, la entrada de colombianos desplazados, la mayoría con incierta situación legal (Gottwald 2004), aumentaron la rotación laboral y frustraron los planes para desarrollar organizaciones de trabajadores en las industrias florícolas ecuatorianas; si los trabajadores ecuatorianos se resisten a desafiar a sus empleadores por miedo a perder sus trabajos, sus homólogos colombianos temen perder su trabajo y también ser deportados.

En resumidas cuentas, las diferencias en los costos laborales jugaron un rol relativamente pequeño en la expansión de la industria florícola de Colombia y Ecuador. Sin embargo, cuando los créditos baratos y la devaluación empezaron a perder importancia como mecanismos para asegurar la competitividad ecuatoriana en el mercado de flores internacional, los costos laborales se convirtieron en un tema importante. Algunas empresas escaparon de las presiones de los drásticos cortes al aprovechar las nuevas oportunidades ofrecidas por nichos de mercado. No obstante, la mayoría de florícolas parecería estar a punto de tocar fondo, al extender los tiempos de trabajo y maximizar la flexibilidad del mercado laboral como estrategia para mantener las ganancias del mercado.

Conclusión

La industria florícola en la región andina se desarrolló como parte de un proceso global de reubicación de las industrias de mano de obra intensiva hacia países con mano de obra barata. De hecho, comparado con la producción de flores en países como Israel o los Países Bajos, las industrias florícolas de Colombia y Ecuador tienen mucho en común. Ambas dependen del cultivo corporativo y de los salarios laborales de mujeres rurales, campesinos indígenas, emigrantes económicos y gente desplazada por la guerra. Ambos ofrecen bajos costos laborales, en gran parte gracias a las bajas tasas salariales y a los escasos estándares de trabajo. Sin embargo, la dinámica regional es compleja. En relación a Colombia, Ecuador es nuevo en el mercado internacional de flores. En la década de 1970, cuando despegó la producción de flores colombiana, el crecimiento de la industria florícola en Ecuador estuvo limitado por las políticas económicas de estilo populista. Después del cambio hacia el neoliberalismo economi-

co, el Ecuador empezó a igualarse con su vecino nórdico. Al menos en los primeros años, los bajos salarios ecuatorianos y la debilidad del movimiento de sindicatos eran una ventaja, desde el punto de vista de los inversionistas, que hizo que los florícolas colombianos se vuelvan más sensibles con respecto a los temas laborales en su país. Pero otros factores, como los niveles de violencia y la disponibilidad de baratos créditos estatales, también jugaron un rol importante. Por lo tanto, a pesar de que la reubicación de la industria florícola en la región andina parezca tocar fondo en términos de costos laborales, esta reubicación también fue guiada por otros factores, como por ejemplo, en el caso ecuatoriano, los relativamente altos niveles de estabilidad socio-política y los incentivos económicos estatales.

Los países donantes en Colombia y Ecuador promovieron la industria florícola andina como mecanismo para aliviar la pobreza, reducir las posibilidades de malestar social y luchar contra la expansión del tráfico de droga. La evidencia presentada en este artículo sugiere, sin embargo, que el crecimiento de las exportaciones de flores implica un significativo elemento de compensación a considerar entre la creación de empleo y la calidad de los trabajos. Los bajos salarios y los inadecuados estándares de trabajo, así como la verdadera prohibición para formar sindicatos, las largas horas de trabajo y los riesgos de salud relacionados a los pesticidas, son muy comunes en las industrias florícolas de Colombia y Ecuador. Los altos niveles de inseguridad laboral constituyen otro gran problema relacionado al trabajo. Por lo tanto, es cuestionable la idea de que este tipo de empleo conduce a la erradicación de la pobreza y la promoción de paz social.

¿Mejorará con el tiempo la calidad de los trabajos en las florícolas de los Andes? Pareciera que los mercados globales están mandando señales confusas al respecto. La entrada de floricultores africanos y asiáticos al

comercio internacional de flores obligó a algunas de las empresas florícolas bien posicionadas que operaban en la región andina, a tratar de conquistar nichos de mercado para flores de alta calidad, incluyendo aquellas que exigen etiquetas ambientales y sociales. Los líderes florícolas y las ONGs del mismo estilo recomiendan este camino basado en ideas de flexibilidad de aportes laborales y activismo de consumo. Sin embargo, los nichos de mercados son limitados, mientras que las mejoras en los estándares ambientales y laborales requieren gastos adicionales de capital. Esta razón hace que esta estrategia sea menos atractiva. El camino alternativo, basado esencialmente en los principios de flexibilidad del mercado laboral, consta en seguir apuntando hacia los mercados masivos, tratando de volverse más competitivos mediante el recorte de costos laborales. En una atmósfera de incertidumbre económica a niveles nacionales e internacionales, los floricultores tienden a optar por la segunda opción. De hecho, las empresas florícolas tanto en Colombia como en Ecuador han aumentado los objetivos de productividad de los trabajadores sin un aumento paralelo en los salarios, y usan un sistema de contratos a corto plazo para reemplazar a los trabajadores que fueron incapaces de cumplir los objetivos planteados. La presión por optar por esta estrategia viene de los mercados de flores internacionales, pero la facultad para hacerlo está relacionada a los procesos domésticos. Después del cambio hacia el neoliberalismo económico, ambos países desregularizaron sus mercados de trabajo, mientras la persistencia de la pobreza rural y la escalada de los conflictos militares generaron una abundante oferta de una fuerza de trabajo vulnerable en términos sociales y económicos que, en el caso de Colombia, empezó a traspasar las fronteras nacionales.

En una situación como esta, el tan anunciado compromiso internacional con los derechos laborales básicos parece bastante falso.

Nacido en la ola de democratización política, este compromiso es exaltado como un paso importante hacia adelante en el área de derechos humanos. Sin embargo, este parece perder su esencia cuando es considerado con el telón de fondo de la globalización económica. En el caso de industrias exportadoras de mano de obra intensiva, los sindicatos son considerados como una carga económica tanto para los gobiernos nacionales como para el sector privado. De hecho, las empresas florícolas tienden a tratar más los temas de estándares técnicos de trabajo como son los riesgos de salud laborales, que manejar el espinoso tema de los sindicatos. Por supuesto, la cuestión está en si los estándares técnicos de trabajo pueden ser cumplidos adecuadamente en la ausencia de sindicatos. Los representantes de empresas florícolas parecen responder esta pregunta de manera positiva. El resultado es que las iniciativas empresariales burlan el tema de la organización laboral y se concentran en temas menos controversiales como los estándares de trabajo, delegando el monitoreo y la certificación a consultores contratados. Por otro lado, las ONGs ven la existencia de sindicatos independientes como una manifestación del principio de libertad de asociación y, también, como un prerrequisito para asegurar el cumplimiento de las normas laborales. Ambos grupos de actores no estatales admiten la necesidad de mejorar los procedimientos de monitoreo y verificación, alineados con sus propias preferencias, y ven este proceso a través de lentes tecnocráticos o participativos respectivamente.

Bibliografía

- Aflonordes y Sena, 1996, *Programa empresarial de aprendices para el sector floricultor*, Aflonordes, Bogotá.
- Amadeo, E.J. y S. Horton, 1997, "Labour flexibility and productivity: an overview", en E. Amadeo y S. Horton, editores, *Labour Productivity and Flexibility*, Macmillan, London, pp. 1-35.
- Asocolflores, 1998, *Flor verde, código de conducta: auto-regulación ambiental y social, manual de mejoras prácticas*, versión 2.0, Asocolflores, Santafé de Bogotá.
- Asocolflores, 2007, "Últimas cifras de la floricultura colombiana", disponible en: <http://www.asocolflores.org/noticias>. Consulta: 22 septiembre 2006.
- Banco de la República, 2005, *Salario mínimo legal diario desde 1984*, disponible en: http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/srea_020.xls. Consulta: 22 Septiembre 2006.
- Banco Central de Ecuador, 2002, *Boletín anuario No 24*, Banco Central, Quito.
- , 2005, *Información estadística mensual 1841*, Banco Central, Quito.
- Barrientos, S., editor, 1999, *Women and agribusiness*, Macmillan, London.
- Blowfield, M., 1999, "Ethical trade: a review of developments and issues", en *Third World Quarterly*, Vol. 20, No. 4, pp. 753-770.
- Boiral, O., 2003, "The certification of corporate conduct: issues and prospects", en *International Labour Review* Vol. 142, No. 3, pp. 317-340.
- Brassel, F. y C.E. Rangel, 2001, *International Social Standards for the International Flower Industry*, Food First Information and Action Network/FIAN, Bonn.
- Bronstein, A., 1997, "Labour Law Reform in Latin America: Between State Protection and Hexibility", en *International Labour Review*, Vol.136, No. 1, pp. 5-26.
- Chan, A. y R.J.S. Ross, 2003, "Racing to the bottom: international trade without a social clause", en *Third World Quarterly*, Vol. 24, No 6, pp. 1011-1028.
- Corporación Financiera Nacional, 1997, *Estudio del Sector florícola en el Ecuador*, CFN, Quito.
- Clark, J.D., 2001, "Ethical globalization: the dilemmas and challenges of internationalizing civil so-

- ciety”, en M. Edwards y J. Gaventa, editors, *Global Citizen Action*, Lynne Rienner, Boulder, pp. 17-28.
- Corporación Cactus, 1996, “Sello de calidad: una posibilidad de bienestar”, *Cactus: Boletín informativo sobre la floricultura*, Vol. 2, pp. 4-5.
- , 1999, *Mujeres y flores: flexibilización en marcha*, Cactus, Bogotá.
- Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversión, 2001, *Flower Label Program*, disponible en: <http://www.corpei.org/ingles/oferta/flores/FloresLabel.htm>. Consulta: 15 Junio 2003.
- Expoflores, 1999, *Código de conducta de los socios de expoflores*, Expoflores, Quito.
- , 2002, *La flor de Ecuador: informe de labores del presidente de expoflores*, Expoflores, Quito.
- , 2003, “La flor de Ecuador”, en *Key Data*, Vol. 34, pp. 44-47.
- Ghose, A.K., 2000, “Trade liberalization, employment and global inequality”, en *International Labour Review*, Vol. 139, No 3, pp. 281-305.
- Gottwald, M., 2004, “Protecting Colombian refugees in the Andean region: the fight against invisibility”, en *International Journal of Refugee Law*, Vol. 16, No. 4, pp. 517-546.
- Guarín Muñoz, J.V., 1999, *Diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud en empresas que comercializan y utilizan plaguicidas en el área de competencia del hospital de engativa*, Fondo Financiero Distrital de Salud, Santafé de Bogotá.
- Gunter, B.G. y R. Van der Hoven, 2004, “The social dimension of globalization: a review of literature”, en *International Labour Review*, Vol. 143, No 1-2, pp. 7-43.
- Harari, R., 2004, “La evolución de la seguridad, higiene y salud en el trabajo en la floricultura: 1985-2004”, en R. Harari, compilador, *Seguridad, salud y ambiente en la floricultura*, Corporación IFA – PROMSA-BIRF-MAG-BID, Quito, pp. 12-28.
- Harari, R., D. Cole y M. Miceli, 2004, “Exposición a plaguicidas en la floricultura y efectos neuropsicológicos y neurológicos”, en R. Harari compilador, *Seguridad, salud y ambiente en la floricultura*, Corporación IFA – PROMSA-BIRF-MAG-BID, Quito, pp. 72-87.
- Haworth, N., 2002, “International labour and its emerging role in global governance”, en R. Wilkinson y S. Hughes, editores, *Global Governance: Critical Perspectives*, Routledge, London, pp. 172-190.
- Hernández Delgado, E. y T. Laegreid, 2001, “Colombia: creating peace amid the violence”, en M. Vincent y B.R. Sorensen, editores, *Caught Between Borders: Response Strategies to the Internally Displaced*, Pluto Press, London, pp. 66-85.
- International Labour Organization, 2000, “Employment and working conditions in the Ecuadorian flower industry”, Sectoral Activities Programme (working paper), disponible en <http://www.ilo.org/public/dialogue/sector/papers/ecuadflo/index.htm>. Consulta: 11 de Octubre 2000.
- Iranzo, C. y T. Patruyo, 2002, “Trade unionism and globalization: thoughts from Latin America”, en *Current Sociology*, Vol.50, No1, pp. 57-74.
- Kay, T., 2005, “Labor transnationalism and global governance: the impact of NAFTA on transnational labor relations in North America”, en *American Journal of Sociology*, Vol.111, No3, pp. 715-756.
- Korovkin, T., 1997, “Taming capitalism: the evolution of peasant economy in northern Ecuador”, en *Latin American Research Review*, Vol. 32, No. 3, pp. 89-110.
- , 2002, “Cut flower exports, female labour and community participation in highland Ecuador”, en *Latin American Perspectives*, Vol. 30, No. 4, pp.18-42.
- , 2004, “Globalización y pobreza: los efectos sociales del desarrollo de la floricultura de exportación”, en T. Korovkin compilador, *Efectos sociales de la globalización: petróleo, banana y flores en Ecuador*, Abya Yala, Quito, pp. 79-128.
- , 2005, “Creating a social wasteland? Nontraditional agricultural exports and rural poverty in Ecuador”, en *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, Vol. 79, pp. 47-68.
- , 2006, “The indigenous movement in the Central Andes: community, class, and ethnic politics”, en *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, Vol.1, No 2.
- Lara, S.M., 1995, “La feminización de trabajo asalariado en los cultivos de exportación no tradicio-

- nales”, en S.M. Lara, editor, *Jornaleras, temporeras y boías frías: rostro femenino del mercado de trabajo rural en América Latina*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, pp. 15-47.
- Legislación codificada, 2001a, *Código de trabajo*, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito.
- , 2001b, *Ley para la transformación económica del Ecuador*, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito.
- Mendez, J.A., 1991, *The Development of the Colombian Flower Industry*, World Bank, Policy, Research and External Affairs, Washington.
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, República de Colombia, 1998, *Desde las siembra: voces de mujeres*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Bogotá.
- , 2003, *Régimen Laboral Colombiano*, Editorial Legis, Bogotá.
- Restrepo, M., 1990a, “Birth defects among children born to a population occupationally exposed to pesticides in Colombia”, en *Scandinavian Journal of Work, Environment and Health*, Vol. 16, pp. 239-246.
- , 1990b, “Prevalence of adverse reproductive outcomes in a population occupationally exposed to pesticides in Colombia”, en *Scandinavian Journal of Work, Environment and Health*, Vol. 16, pp. 232-238.
- Rueda-Cifuentes, R., 2003, *Experiencias de organización sindical y conflictos colectivos en el sector floricultor*, Corporación Cactus, Bogotá.
- Sanmiguel-Valderrama, O., 2004, “Neoliberalism, International Trade and the Role of Law in Regulating Precarious Labour Relations in the Colombian Flower Industry”, PhD Dissertation, Osgoode Hall Law School, York University.
- , 2007, “The feminization and racialization of labour relations in the Colombian fresh-cut flower industry”, en *Journal of Developing Societies*, Vol. 23, No. 1 y 2.
- Sawers L., 2005, “Nontraditional or new traditional exports: Ecuador’s flower boom”, en *Latin American Research Review*, Vol. 40, No. 3, pp.40-66.
- Servais, J.M., 2004, *Globalization and decent work policy: reflections upon a new legal approach*, *International Labour Review*, Vol. 143, No. 1 y 2, pp. 185-207.
- Standing, G., 1989, “Global feminization through flexible labour”, en *World Development*, Vol. 17, No. 7, pp. 1077-1095.
- Standing G., 1999, “Global feminization through flexible labour: a theme revisited”, en *World Development*, Vol. 27, No. 3, pp. 583-602.
- Untraflores, 2004, “Untraflores se puso al frente de denuncia sobre intoxicación de trabajadores de flores de Aposentos”, disponible en: http://www.untraflores.org/pdfs/F_4.pdf. Consulta: 22 Septiembre 2006.
- Vega Ruíz, M.L., 2001, *La Reforma Laboral en América Latina*, Oficina Internacional de Trabajo, Lima.
- Vos, R., 2000, *Economic Liberalization, Adjustment, Distribution and Poverty in Ecuador, 1988-99*, Institute of Social Studies, The Hague.
- Waters, W.F., 1992, “Restructuring of Ecuadorian agriculture and the development of non-traditional exports: evidence from the fresh flower industry”, documento presentado a la 55 Annual meeting of the Rural Sociological Society, University Park, agosto.
- Weeks, John, 1999, “Wages, Employment and Workers’ Rights in Latin America, 1970-1998”, en *International Labour Review*, Vol. 138 No. 2, pp. 151-169.

Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina

Some Reflections on Rural Studies in Latin America

Cristóbal Kay

Institute of Social Studies, La Haya

Email: kay@iss.nl

Fecha de recepción: febrero de 2007

Fecha de aceptación final: julio de 2007

Resumen

En este ensayo se analizan algunos de los principales temas de investigación en los estudios rurales sobre América Latina durante las últimas dos a tres décadas. Las transformaciones en la economía y sociedad rural provocadas por el proceso de la globalización neoliberal y las protestas socio-políticas de campesinos, indígenas y mujeres contra la discriminación y las políticas neoliberales impregnan los estudios rurales. La perspectiva de análisis de la “nueva ruralidad” es vista por muchos investigadores como la mejor forma de captar los cambios y para diseñar políticas públicas pro-campesinas. También se examina la diferenciación campesina, la brecha entre la economía campesina y la empresarial, la feminización y precarización del trabajo rural, las relaciones rural-urbanas, el movimiento campesino e indígena, la reforma agraria y la pobreza rural.

Palabras clave: Campesinado, indígenas, nueva ruralidad, cambio agrario, movimientos campesinos, sociología rural, neoliberalismo, América Latina.

Abstract

This essay analyses some of the principal research themes of rural studies on Latin America during the last two to three decades. The transformations in the rural economy and society engendered by the process of neoliberal globalization and the sociopolitical protests of peasants, indigenous peoples and women against discrimination and neoliberal policies infuse rural studies. The analytical perspective of the “new rurality” is seen by many researchers as the best approach for capturing these changes and designing pro-peasant public policies. Other themes examined here are peasant differentiation, the gap between peasant and capitalist farming, the feminization and flexibilization of rural labour, urban-rural relations, peasant and indigenous movements, agrarian reform and rural poverty.

Keywords: Peasantry, Indigenous Peoples, New Rurality, Agrarian Change, Peasant Movements, Rural Sociology, Neoliberalism, Latin America.

El propósito de este artículo es presentar una reflexión sobre los estudios rurales en América Latina desde el giro neoliberal y a partir de la década de los ochenta del siglo pasado. No se pretende hacer un balance ya que ello requeriría un artículo de mayor envergadura y profundidad. Para tal efecto se puede consultar las excelentes compilaciones editadas por Piñeiro (2000), Bendini *et al.* (2003) y Ramírez y Rubio (2006) así como también los trabajos de Gómez (1992), Murmis (1994a, 1994b), Plaza (1998), Kay (2001), Bengoa (2003), Brass (2003) y Brumer y Piñeiro (2005). El objetivo de este ensayo es más bien analizar algunos de los temas principales de investigación y enfoques que se han desarrollado en las últimas décadas sobre la cuestión agraria en la región. Sin duda, mi visión es parcial y otros autores tendrán diferentes énfasis e interpretaciones sobre los estudios rurales. Pero también se pretende estimular el debate para así reforzar las reflexiones sobre la temática.

Con la creciente aplicación de políticas neoliberales y el fin de la guerra fría, las grandes teorías y abstracciones pierden influencia. Los polémicos e interminables debates sobre los modos de producción y las formaciones sociales se desvanecen y surgen estudios más específicos sobre una gran diversidad de temas. Por cierto que dichos cambios a nivel teórico y de las temáticas de investigación de alguna manera reflejan ciertas transformaciones de la realidad tanto a nivel nacional como global. La creciente presencia del movimiento de las mujeres y de las movilizaciones de los pueblos indígenas se refleja en la explosión de los estudios sobre género e indígenas. La crisis del socialismo real con el colapso de los sistemas de planificación centralizada y la extensión de las relaciones capitalistas por todos los rincones del mundo y su profundización a raíz de la globalización neoliberal dificultan cualquier alternativa al sistema capitalista. Así, la influencia de la teoría marxista en los

estudios rurales disminuye y surgen diversas interpretaciones nuevas entre las cuales figura el postmodernismo con su visión relativista, culturalista e individualista. Los análisis estructuralistas y totalizadores son criticados como dogmáticos o tautológicos y son desplazados por los nuevos estudios que enfatizan la agencia y las capacidades de los sujetos para crear sus propias estrategias de vida y a través de sus múltiples intervenciones transformar su entorno y quizás el más allá.

Neoliberalismo y nueva ruralidad

Las políticas económicas neoliberales aceleraron procesos de transformación ya en marcha y a su vez produjeron nuevos cambios. Un aspecto central del giro neoliberal y de la globalización es la liberalización de los mercados que significa tanto extender como profundizar las relaciones mercantiles en todos los ámbitos posibles. Para captar dichos fenómenos surgen una serie de estudios desde los 1990s que se pueden englobar bajo el término de la “nueva ruralidad” y que ha adquirido cierta popularidad en los estudios rurales (Llambí 1994, Arias 2006). El énfasis principal en dichas investigaciones está en ampliar la visión del campo de lo agrario a lo rural, en enfatizar la multifuncionalidad de los espacios rurales debido a la creciente importancia de las actividades no agrarias y de la más fluida e intensa interrelación entre lo rural y lo urbano y lo local con lo global, y en remarcar los significativos cambios en los patrones culturales y de vida rurales (Llambí 2004). Aunque no se podría decir que estos estudios representan un cambio paradigmático, ya que en general no pretenden generar una nueva teoría, pero sí indican un cambio de visión que se sintetiza en el concepto de la “nueva ruralidad” (Giarracca 2001, Pérez *et al.* 2001, Clemens y Ruben 2001, Pérez y Farah 2004).

Los nuevos ruralistas llaman la atención a la pluriactividad de los hogares campesinos que están involucrándose cada vez más en una variedad de actividades no agrícolas productivas y de servicios en el ámbito rural, tales como artesanías, pequeños talleres y microempresas manufactureras, comercio y turismo. Algunos miembros de los hogares familiares trabajan también como jornaleros en empresas agroindustriales, obras de construcción de caminos y viviendas, granjas capitalistas y otras actividades. Cada vez más mujeres participan en el mercado de trabajo asalariado, especialmente en las nuevas exportaciones de productos agrícolas no tradicionales frutihortícolas y florícolas, aunque muy a menudo en forma precaria y con salarios mínimos (ver artículo de Korovkin y Sanmiguel en este número).

Sin embargo, algunos autores cuestionan la trascendencia de la nueva ruralidad, argumentando que los fenómenos descritos son más bien una expresión de viejos rasgos en el contexto de la globalización y no representan necesariamente nuevos elementos (Riella y Romero 2003, Bendini 2006). Según Sergio Gómez (2002), la mayoría de los aspectos de la así denominada “nueva ruralidad” estaban ya presentes con anterioridad al neoliberalismo.

A mi juicio, existe cierta ambigüedad entre los nuevos ruralistas en cuanto al diseño de las políticas públicas. Algunos autores critican a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) por seguir priorizando las actividades productivas agropecuarias en sus proyectos de desarrollo rural (en la medida que todavía existen en el contexto neoliberal), en vez de fomentar las nuevas actividades no agropecuarias que ofrecen mayores perspectivas de empleo y de generación de ingresos. Dicha posición me parece paradójica en el sentido que para la mayoría de los campesinos su creciente participación en actividades no-agropecuarias obedece a su crisis

de reproducción y tales actividades sólo les permiten la sobrevivencia y por tanto no es una política de desarrollo. Sólo una minoría de campesinos, aquellos con suficiente acceso a recursos productivos, pueden a través de dichas actividades no agropecuarias lograr mejorar sus niveles y calidad de vida (Martínez 2000). En cierto modo, la nueva ruralidad es el resultado del neoliberalismo y promover la pluriactividad sin cambiar el contexto es reproducir el neoliberalismo y con ello la explotación y el despojo campesino.

Hay otra vertiente en los estudios sobre la nueva ruralidad que elaboran alternativas con un cuestionamiento más explícito de las políticas neoliberales y con el afán de alentar un proceso de desarrollo centrado en la agricultura campesina. O sea plantean una visión “campesinista” que, sin desconocer el mérito de las actividades no agropecuarias, enfatiza la producción de alimentos de mejor calidad, la agricultura orgánica, la promoción de los conocimientos y habilidades productivas, la creación de nuevos mercados nicho, entre otras propuestas (Barkin 2001). El propósito es fortalecer la economía campesina dentro de un modelo alternativo en el cual se apoyan las iniciativas locales y se propugna el desarrollo endógeno para lograr una mayor participación social, control local y autogestión sobre el territorio por parte de la comunidad campesina (North y Cameron 2003).

Se puede observar cierta influencia en esta visión de la literatura sobre descentralización y desarrollo territorial rural y en especial de las propuestas del movimiento zapatista en Chiapas. Pero para que tal visión campesinista de la nueva ruralidad se logre materializar y para que beneficie a todos los campesinos es necesario una nueva reforma agraria que transfiera no sólo tierra a los sin o con insuficiente tierra sino también recursos financieros y tecnológicos. También es necesaria una inserción más equitativa de los campesinos en los mercados tanto de productos como de los

factores productivos que sólo se puede lograr desarrollando sus organizaciones. Sólo con el empoderamiento de los campesinos, en alianza con otros sectores sociales progresistas, es posible que ellos negocien mejores condiciones en sus relaciones tanto con el mercado como con el Estado.

La diferenciación campesina

Las políticas neoliberales han dado un nuevo impulso a la diferenciación campesina. La creciente pauperización de los campesinos debido a su cada vez menor acceso a los recursos productivos, especialmente la tierra, los obliga a buscar otras oportunidades de empleo e ingresos. Generalmente sólo logran asalariarse en condiciones muy precarias, es decir en empleos temporales mal remunerados. Por tanto la pluriactividad es sólo un mecanismo de sobrevivencia para los campesinos pobres. En cambio aquellos hogares campesinos con mayores recursos productivos y con mejores niveles de educación logran insertarse en otras actividades productivas más rentables que la agropecuaria a través de sus actividades microempresariales y comerciales (Dirven 2004a). En caso de asalariarse logran acceso a empleo de mayor calidad y productividad, que requiere mayores niveles de calificación y, por tanto, redundan en mayores salarios que los obtenidos por los campesinos más pobres (Reardon *et al.* 2001).

Por lo tanto, para los campesinos ricos la pluriactividad es una oportunidad para la acumulación de capital y para su ascenso económico y social. Debido a que son una minoría y a la luz de la gran desigualdad en la distribución de la tierra, esta oportunidad de acumular capital es insuficiente para generar un proceso de desarrollo capitalista en el agro desde abajo. O sea, la vía campesina al capitalismo agrario sigue subordinada, incluso cada vez más, a la vía capitalista desde arriba

de los grandes granjeros, muchos de ellos de origen latifundista (Kay 1988).

En la búsqueda del sustento de vida, un número creciente de pobladores rurales emprenden migraciones temporales o a más largo plazo a otras áreas rurales o hacia áreas urbanas. También las migraciones a otros países, donde la mayoría trabaja como asalariados, son cada vez más frecuentes. Aquellos que emigran, envían remesas a los miembros de sus familias campesinas. De este modo, las actividades y fuentes de ingresos de los hogares campesinos se han diversificado significativamente. Para muchos hogares campesinos los ingresos no agropecuarios ya superan los ingresos provenientes de las actividades agropecuarias del predio. Entre los ingresos extra-parcelarios predominan cada vez más los ingresos provenientes de actividades asalariadas y las remesas de los emigrantes (Reardon *et al.* 2001). Los pocos estudios que existen sobre el uso de las remesas indican que generalmente son destinadas a la compra de bienes de consumo y al mejoramiento de las viviendas en vez de invertirse en actividades productivas. Se crea así una dependencia de los hogares campesinos de las remesas. Algo similar ocurre a nivel nacional. En varios países las remesas ya constituyen la segunda fuente de ingresos de divisas del país superando en algunos casos el valor de las exportaciones agropecuarias. Los gobiernos se han percatado tardíamente de esta situación y por lo general todavía no se han diseñado políticas públicas para proveer incentivos para el uso productivo de tales remesas.

La brecha entre la economía empresarial y la economía campesina

Las políticas neoliberales han profundizado las desigualdades entre las granjas capitalistas y las parcelas campesinas (Rubio 2003). La promesa de los neoliberales era que la libera-

lización de los mercados beneficiaría al sector agrícola, que según ellos sufrió discriminación durante el período de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), porque se reforzarían las ventajas comparativas del sector agropecuario. Con ello se dinamizaría la agricultura y en especial sus exportaciones que también beneficiaría a los campesinos tanto a través del crecimiento de sus exportaciones en su calidad de productores como por las mayores oportunidades de empleo y aumento en los salarios en su calidad de asalariados. Sin embargo, el desempeño del sector agropecuario en cuanto a crecimiento económico y creación de empleos ha sido inferior en el período neoliberal comparado con el período del desarrollo hacia adentro o de la ISI (David 2001).

Es cierto que las exportaciones agropecuarias no tradicionales, tales como las frutas, hortalizas, flores y la soya han prosperado en las últimas décadas y en algunos casos incluso han superado el valor de las exportaciones tradicionales tales como el azúcar, café y banana. Pero los beneficiarios fueron los productores capitalistas y los conglomerados agroindustriales transnacionales. Sólo en algunas instancias puntuales algunos productores campesinos lograron captar parte de los beneficios.

La soya ha tenido un crecimiento explosivo, siendo los productores principales Brazil y Argentina quienes dominan el mercado mundial, habiendo desplazado a los Estados Unidos (EEUU). Bolivia, Paraguay y Uruguay también son exportadores importantes del producto. El cultivo de la soya favorece la gran agricultura por la existencia de economías de escala y por ser un cultivo extensivo y por la mecanización, se crean muy pocos empleos por hectárea cultivada. Además, las consecuencias ecológicas son preocupantes, ya que su expansión ha ampliado la frontera agrícola destrozando bosques y por el dominio de la soya transgénica cuyos efectos am-

bientales aún son inciertos. La soya también ha desplazado otros cultivos, tales como el trigo que es el ingrediente básico para los productos alimenticios basados en la harina. La gran demanda por tierra de la soya también ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de productores campesinos, ya sea por la venta de sus tierras o por otros medios de presión, que no siempre son legítimos. Todo esto ha afectado la seguridad alimentaria en dichos países y ha creado inseguridad en las zonas rurales (Teubal *et al.* 2005).

En el caso de la fruticultura la situación también favorece a los productores con capital, pero a través de los contratos con la agroindustria frutícola existen ciertas posibilidades para la economía campesina. Sin embargo, en la mayoría de los casos dichos contratos favorecen a la agroindustria y los riesgos son generalmente asumidos por los campesinos. La evidencia indica que son pocos los campesinos capaces de insertarse en la fruticultura y aquellos que logran hacerlo a través de los años entran en quiebra por las deudas acumuladas o revierten a sus cultivos tradicionales (Murray y Silva 2004).

En los cultivos hortícolas la economía campesina tiene mejores posibilidades competitivas, pero éstas se manifiestan más en la producción para el mercado doméstico. El mercado de exportación es más exigente en términos de calidad, controles fitosanitarios, acceso a los compradores tales como las grandes cadenas de supermercados, etc. Todos estos requerimientos favorecen a la agroindustria que tiene los capitales y conocimientos, realiza el procesamiento y otras etapas de la cadena productiva donde captura la mayor parte del valor agregado y de las ganancias. Cuando contrata la producción prefiere hacerlo con los grandes productores. Aquellos pequeños productores que entran en una relación con la agroindustria están expuestos a sus abusos. Las relaciones de poder de negociación son muy desiguales y el Estado gene-

ralmente no se interesa en reglamentar los contratos o es incapaz de hacerlo.

La otra cara de la liberalización es que ha facilitado la importación de alimentos. Es reconocido que los altos subsidios recibidos por los productores en los países desarrollados crean una competencia desleal con los de los países subdesarrollados. La creciente importación de alimentos baratos, especialmente de los EEUU y la Unión Europea (UE), ha llevado a la ruina a muchísimos productores campesinos e incluso ha provocado dificultades para los productores capitalistas. Pero los granjeros capitalistas han tenido más posibilidades de responder frente al reto de las importaciones baratas ya que tienen los medios económicos para incrementar la eficiencia productiva o reconvertir su producción hacia productos más remunerativos como, por ejemplo, cambiar del cultivo de cereales al cultivo de los productos de agroexportación no tradicionales.

En breve, los productores campesinos son asediados en el mercado doméstico tanto por las importaciones de alimentos baratos como por los productores capitalistas internos que logran ser más competitivos que los campesinos a través de la biotecnología y otras innovaciones tecnológicas que requieren de una serie de recursos de difícil acceso para los campesinos. A su vez las nuevas oportunidades abiertas a las exportaciones agropecuarias no tradicionales son de difícil acceso directo para los campesinos. En caso de lograr su inserción en dicho mercado es a través de la agroindustria que capta la mayor parte de los posibles beneficios. La participación campesina en dichas exportaciones es principalmente como asalariados de las empresas productoras y procesadoras de dichos productos. Por todas estas razones la globalización neoliberal está generando una "agricultura a dos velocidades" aumentando así la brecha entre los productores capitalistas y los campesinos.

La feminización del trabajo asalariado rural

El surgimiento del movimiento feminista ha estimulado una serie de estudios sobre la mujer rural y ha presionado a los gobiernos a introducir legislación a favor de la equidad de género. Destacan los trabajos sobre las historias de vida, tanto de líderes campesinas e indígenas como de otras mujeres en sus varios quehaceres, los análisis sobre su creciente participación en el mercado laboral, las relaciones domésticas, la violencia contra la mujer, su discriminación en cuanto al acceso a los recursos productivos, su doble jornada de trabajo, entre otros aspectos de sus vidas. Las agencias internacionales de cooperación y las instituciones nacionales ofrecen más recursos para la investigación sobre las relaciones de género y también para proyectos de desarrollo enfocados a aumentar las capacidades de las mujeres en sus varios contextos tanto productivos como sociales y políticos. Muchos países introducen legislación para eliminar la discriminación contra la mujer y facilitar su empoderamiento. Así, por ejemplo, en los proyectos de registro, saneamiento y titulación de tierras que se han introducido en la mayoría de los países latinoamericanos en las últimas décadas, se ha estimulado la titulación conjunta o mancomunada del predio a nombre de la pareja y en caso de los hogares dirigidos por mujeres reforzar sus derechos sobre la propiedad (Deere 2001, Deere y León 2001, Lastarria *et al.* 2003).

La feminización de la agricultura se debe a la crisis de la economía campesina causada tanto por la creciente escasez de tierra a su disposición como por la política neoliberal que no la favorece. Ello ha forzado a los miembros del hogar a ampliar sus opciones de ingreso lo que ha tenido varios efectos sobre las mujeres. Con los ajustes estructurales de los 1980s, los gobiernos trataron de estimular las agroexportaciones para lograr ma-

yores ingresos en divisas para el pago de la deuda externa. Con el arranque de las agroexportaciones no tradicionales, que tienden a ser intensivas en el uso de mano de obra, se abrieron nuevas posibilidades de trabajo asalariado para la mujer, aunque muchas veces sólo temporalmente. Muchos hombres se desplazaron geográficamente emigrando a otras regiones o a otros países en busca de empleo con lo cual la jefatura del hogar campesino fue asumida por la mujer quien generalmente se hizo cargo de las actividades agropecuarias en la finca campesina.

Con el despegue de las agroexportaciones no tradicionales, la participación de la mujer en la horticultura, floricultura y fruticultura es especialmente evidente y particularmente en la agroindustria de empaque y procesadora. Se estima que las mujeres proporcionan alrededor de la mitad de la mano de obra en las actividades agrícolas y la gran mayoría de la mano de obra en las actividades agroindustriales de estos cultivos (Deere 2006). Los empleadores favorecen el empleo de las mujeres por su mayor disposición a trabajar temporalmente, su mejor rendimiento en el trabajo, manipulación más cuidadosa de los productos perecederos como las flores, su percibida mayor docilidad y menor presión por organizarse en sindicatos y porque sus salarios tienden a ser más bajos que los percibidos por los hombres. Las condiciones de empleo son muy precarias. Los contratos, si es que existen, favorecen al empleador y dan poca protección laboral. Los pocos empleos permanentes tienden a ser reservados para los hombres (Barrientos *et al.* 1999, Korovkin 2003, y Korovkin y Sanmiguel en este número de *Iconos*).

La legislación social en cuanto a salario mínimo, maternidad, accidentes de trabajo, jubilación, seguro social, derecho a sindicalización y a la huelga, etc. es muy deficiente. El Estado por lo general no asume una actitud activa en cuanto a la defensa de los derechos

laborales. Ello ha llevado a muchos abusos por parte de los empleadores que se han aprovechado de la mano obra barata para mejorar su competitividad en el mercado y aumentar sus ganancias. Sin embargo, muchas mujeres valoran su participación en el mercado laboral ya que les da una fuente de ingreso propia con la cual pueden negociar mejores relaciones con los hombres y les da un espacio de acción fuera de la dominación patriarcal en el hogar.

Es difícil saber en qué medida ha mejorado la situación de la mujer rural y si las relaciones de género se han vuelto más equitativas. Sin duda que la mujer tiene hoy en día una mayor presencia en los estudios y en la sociedad y es probable que algunos progresos en su condición se hayan materializados (Hamilton 1998). O sea, lo nuevo reside en que la participación de la mujer en el trabajo se ha hecho notoriamente más visible al ocupar una posición tan clave en el sector más dinámico de la agroexportación comparado con su invisibilidad o subvaloración de su trabajo no remunerado tanto en los quehaceres del hogar como en las actividades en el predio. Sin embargo, se ha observado que en muchos casos la mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral ha significado una mayor intensidad de su trabajo y una jornada más larga -“la doble jornada”- ya que el hombre generalmente no ha aumentado significativamente su participación en las actividades del hogar.

La precarización del trabajo rural

La precarización y flexibilización del mercado laboral es una característica notoria de la globalización neoliberal que afecta a todos los sectores productivos y a ambos géneros (Rubio *et al.* 2002). Con la transformación de la hacienda tradicional en empresa capitalista, que está expuesta a la competencia del mercado global y que ha perdido muchos de los privilegios económicos, sociales y políticos

de los antiguos latifundistas, se han modificado profundamente las relaciones de trabajo en la agricultura. La cesión de un pedazo de tierra a los campesinos de la hacienda (llámese inquilino, pongo, peón acasillado, colono, etc.) para su usufructo, como forma de pago por sus servicios de trabajo para el patrón, y la mediería casi han desaparecido. Las relaciones de servidumbre, a pesar de su carácter abusivo, proporcionaban a la familia campesina un medio de subsistencia y cierta estabilidad. La expulsión de los trabajadores con derechos de usufructo a la tierra y su transformación en asalariados los ha expuesto a los vaivenes y caprichos del mercado. Las políticas neoliberales incluso han modificado la legislación laboral quitando derechos ya adquiridos por los trabajadores para facilitar su explotación, aumentar las ganancias, estimular la inversión y con ello el crecimiento.

Algunos autores han caracterizado esta nueva agricultura como “posfordista”, que está integrada al mercado mundial, produciendo una variedad de nuevos productos para los mercados cada vez diversificados, cambiantes y sofisticados, especialmente en los países desarrollados (Lara 1999, Phillips 2006). Se trataría de una agricultura sometida a las cadenas productivas controladas por los conglomerados agroindustriales, en la cual diversos eslabones del proceso productivo están localizados en los lugares más competitivos del mundo. La revolución en el transporte, refrigeración y distribución (con el creciente control de los supermercados) junto a los cambios en los hábitos de consumo exigen una mayor flexibilización, coordinación e integración de los varios eslabones de la cadena productiva. Ello ha conducido a la modificación de las relaciones laborales haciéndolas más flexible, precarias y temporales (Lara 1998).

Con el desarrollo de las cadenas productivas, el trabajo en el predio asume menor importancia y se abren posibilidades de trabajo fuera del predio que parcialmente están loca-

lizadas en el sector rural. Ello ha atraído no solamente a las mujeres al mercado laboral, sino también a trabajadores urbanos, ya que muchas veces los pobladores de bajos ingresos viven en la periferia de los centros urbanos y en ciudades intermedias, y son a veces migrantes recientes del campo a la ciudad y -por la falta de oportunidad de empleo en la ciudad- trabajan temporalmente en el campo compitiendo con la mano de obra rural. Ello ha llevado a la proliferación de los contratistas que se especializan en buscar trabajadores para las empresas.

A veces el empleador o contratista tienden a desarrollar relaciones clientelares con el trabajador, para disciplinarlos e incentivarlos con el fin de asegurarse una oferta de mano de obra segura y de buena calidad. En tales situaciones es posible hablar de “trabajo temporal permanente” que, por cierto, es muy ventajosa para el empresario ya que no necesita cargar con los costos de mano de obra durante el tiempo muerto, evita o evade los costos de seguro social, maternidad, indemnización, jubilación, entre otros, y le facilita el control social sobre los trabajadores.

Debido al excedente de mano de obra, la situación de los trabajadores es muy vulnerable y por ello se ven obligados a someterse a las condiciones más precarias y flexibles del mercado neoliberal. Las empresas buscan la mayor flexibilidad ya que con la globalización la competencia internacional es más intensa, por la estacionalidad de la producción agrícola, por las fluctuaciones las cosechas y en la demanda y por el carácter más perecible de las agroexportaciones no tradicionales. Con ello las empresas buscan minimizar los riesgos y lograr una mayor capacidad de reacción frente a las situaciones cambiantes con el objetivo de siempre de maximizar sus ganancias. Los mercados laborales se han vuelto más segmentados con la segregación ocupacional por sexo que permite el empleo de mujeres en condiciones más desfavorables que el empleo

de hombres. También se ha vuelto más común la remuneración a destajo o por tarea, lo que tiende a intensificar el ritmo de trabajo y/o a alargar la jornada de trabajo con el consiguiente mayor desgaste físico de la persona. No sorprende por tanto que algunos autores denominen esta situación de “flexibilización primitiva o salvaje” ya que el costo de la globalización neoliberal lo asumen los trabajadores y las ganancias las empresas, reproduciéndose así la ya muy desigual distribución del ingreso (Lara 1995).

Las nuevas relaciones rurales-urbanas

La dualidad rural-urbano tan notoria en el pasado, aunque todavía no se desvanece, sí adquiere nuevas características por la mayor interrelación y fluidez rural-urbana, la formación de los nuevos espacios periurbanos y la creciente pluriactividad (Neimann y Craviotti 2005). Con las altas tasas de migración rural-urbanas durante el último medio siglo, ya hace tres décadas atrás Bryan Roberts (1978) hablaba de las ciudades de campesinos. Por cierto que los recientes inmigrantes a las ciudades vivían en condiciones miserables en la periferia de las ciudades.

Con el desarrollo de la infraestructura de transporte y las transformaciones del mercado laboral descritas anteriormente, se intensifica el movimiento de personas entre la ciudad y el campo y ya no sólo en una dirección sino en ambas. También el capital adquiere una nueva movilidad y origen ya que no sólo penetran nuevos capitales extranjeros sino que también fluyen nuevos capitales urbanos nacionales al sector rural, en especial relacionado con la agroindustria. Surgen nuevos empresarios en el campo que son de origen urbano y su capital proviene de actividades financieras, comerciales e industriales.

La mayor difusión de los tradicionales medios de comunicación como la radio y la tele-

visión y la explosión de los nuevos medios de comunicación tales como los teléfonos móviles o celulares y el internet intensifican la influencia de la cultura urbana y global en el medio rural. Pero, a su vez, el campo también logra una mayor difusión en las ciudades. Varios programas de gobierno también tratan de comunicar una nueva imagen del campo, por ejemplo, a través de los programas educativos e interculturales. El desarrollo del turismo rural y ecológico es otra fuente de comunicación rural-urbana. También crecen y surgen nuevas ciudades intermedias con el continuo crecimiento demográfico y con la transformación de la hacienda en empresa capitalista. Los trabajadores permanentes, los cuales eran parcialmente remunerados con acceso a una vivienda, a un pedazo de tierra y/o pastos de la hacienda y por tanto residían dentro de la hacienda, son expulsados. Algunos de ellos se trasladan a dichas ciudades intermedias o a pequeños centros urbanos porque quedan más cercanos a sus lugares de trabajo, incluso trabajando para el antiguo patrón, pero ahora en condición de asalariado temporal o en otras actividades rurales y urbanas.

La creciente cercanía de lo rural y urbano con la formación de espacios “rururbanos” también ha resultado en una serie de acciones colectivas entre los pobladores rurales y urbanos (Giarracca y Teubal 2005). Esta mayor interrelación rural-urbana lleva a algunos científicos sociales a pronosticar el fin de la sociología rural. Pero estas transformaciones pueden dar un nuevo impulso a los estudios rurales requiriendo quizás una redefinición del campo teórico y práctico de la sociología rural.

El surgimiento del movimiento campesino e indígena

Uno de los grandes temas que ha irrumpido en los estudios rurales es la emergencia del movimiento indígena desde los años ochenta

del siglo pasado. El resurgimiento de los movimientos sociales en el campo tales como el movimiento zapatista liderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el *Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra* (MST) en Brasil y el movimiento indígena en Ecuador, Bolivia y en otros países, ha inspirado a muchos investigadores sociales y vigorizado a los estudios rurales (Zamosc 1994, Veltmeyer 1997, Harvey 1998, Petras y Veltmeyer 2001, Bretón y García 2003, Giarracca y Levy 2004, ALASRU 2005). El interés por investigar a los pueblos indígenas ya no se limita a los antropólogos sino que abarca también a otras ciencias sociales y a los historiadores. Se revaloriza la cultura indígena, su tecnología y conocimientos ancestrales, su sentido comunitario y ecológico, entre otros aspectos de la vida indígena. Las acciones colectivas de los campesinos, indígenas y las mujeres rurales, junto con las nuevas experiencias migratorias, provocan una serie de estudios sobre la identidad y la cultura (León y otros 1999, Piñeiro 2004). Las corrientes de pensamiento postmodernistas que ponen el énfasis sobre lo étnico, cultural y la identidad logran mayor influencia en los estudios rurales y se establecen nuevas revistas especializadas sobre la temática. Algunos de estos escritos dentro de esta corriente postmodernista asumen posiciones demasiado idealizadas o utópicas (Burbach 1994, Brass 2000). Sin embargo, el vuelco sobre la temática indígena ha enriquecido los estudios rurales (Lee Van Cott 1995, Assies *et al.* 2000, Bengoa 2000, Yashar 2005, Assies *et al.* 2005).

Son varios los posibles factores que explican el reforzamiento de la identidad indígena por sobre la identidad campesina de la población indígena rural. Las políticas neoliberales con su política de privatizaciones y de liberalización de los mercados han sido percibidas por parte de la población indígena como un asalto a su modo de vida y a las bases de su

subsistencia. Dichas políticas junto con el ajuste estructural tuvieron repercusiones negativas sobre los niveles de vida de la población indígena y campesina. La pobreza rural aumenta notoriamente durante la década de los ochenta. En varios países también se introducen nuevas legislaciones que ponen fin a la reforma agraria e incluso revierten tierras del sector reformado a los antiguos dueños o las venden a nuevos capitalistas. Los jóvenes indígenas y campesinos ya no logran visualizar un futuro mejor en el campo.

La represión al movimiento campesino y de los partidos políticos que los representaban durante el periodo de las dictaduras en muchos países del continente, junto el paquete de las medidas neoliberales con sus leyes antisindicales y la transformación del mercado de trabajo, debilitan e incluso dismantelan a las organizaciones campesinas y a sus aliados del movimiento obrero. Ello ha debilitado enormemente al movimiento campesino tradicional. A su vez, la opción socialista pierde credibilidad con el derrumbe del socialismo real en los países de Europa Oriental. En general, los movimientos populares pierden el apoyo que recibían del Estado populista y desarrollista con su transformación en un Estado tecnocrático y neoliberal.

Frente a tal cercamiento, el campesino indígena rescata su identidad indígena con sus organizaciones comunitarias, lo que les permite una mayor protección y autonomía de acción para enfrentar los nuevos desafíos de la globalización neoliberal. El indígena, con la reforma agraria y la sindicalización campesina en la época del Estado desarrollista y los gobiernos populistas, se transformó en campesino, proceso que se podría denominar la “campesinización” del indígena, adquiriendo con ello ciertos derechos ciudadanos. Pero frente al vuelco neoliberal se transforma nuevamente en indígena. Pero esta vez su vuelta a lo indígena, o sea, su “descampesinización” o “re-indigenización”, no es por la acción pa-

ternalista del Estado, sino que proviene de sus propias bases, alimentado por su nueva conciencia, sus propias organizaciones y una nueva intelectualidad indígena que ha pasado generalmente por una experiencia urbana (Bengoa 2003). Sin embargo, tal énfasis en las demandas exclusivamente étnicas tiene sus limitaciones a la larga, tal como se ha visto en el caso ecuatoriano (Bretón 2005).

Se puede observar, en base de la contribución de Victor Bretón a este número de *Iconos*, que con el viraje de la demanda por tierra y de apoyo a la producción campesina hacia la demanda indígenas con énfasis principalmente en lo étnico como la plurinacionalidad y la autodeterminación, el movimiento indígena no logra mantener la alianza con los sectores campesinos mestizos y populares en las ciudades, perdiendo así su centralidad en los acontecimientos políticos recientes. Al triunfar el etnicismo, el movimiento perdió de vista el problema de la tierra y de la producción campesina que siguen siendo los principales problemas en el campo (Martínez 2006a).

Por cierto que las luchas de clase y de identidad indígena del movimiento campesino indígena no se pueden separar, pero a su vez el justo equilibrio entre ambos tampoco asegura el éxito de sus demandas ya que ello depende de varios otros factores. Esto se puede ejemplificar a través de las luchas del movimiento zapatista en Chiapas que, además de las demandas étnicas y de mayor autonomía, plantea demandas que van más allá de lo étnico con su programa de democratización de la sociedad mexicana y de apoyo a la economía popular tanto rural como urbana. El movimiento zapatista, que nació en 1994 en contra de la política económica neoliberal, logró al principio el apoyo de vastos sectores de la sociedad mexicana y una amplia solidaridad internacional, sin embargo, hoy día está lejos de conseguir sus objetivos principales (Bartra y Otero 2006).

El caso boliviano se presenta por el momento más optimista. El movimiento de los campesinos cocaleros formó la base de apoyo de su líder Evo Morales, quien logró formar un partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que aglutina tanto a indígenas como a mestizos y forja alianzas con otras organizaciones sociales. A través de movilizaciones lideradas principalmente por el MAS logró que renunciara el Presidente Carlos Mesa en 2005 y en las elecciones posteriores ganó por mayoría absoluta la presidencia, la cual asume a comienzos de 2006. Gran parte de su apoyo se debe a su programa de nacionalización del gas y petróleo, su promesa de refundar el país con una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que termine con la discriminación contra los pueblos indígenas y desarrolle su plena ciudadanía, y su intención de renovar y acelerar la reforma agraria en las tierras bajas del oriente del país. O sea, su programa es nacionalista y popular y no se limita exclusivamente a lo étnico (Urioste y Kay 2005).

El MST en Brasil es el movimiento campesino más grande de América Latina. Surgió a mediados de los 1980 en el sur del país pero rápidamente logró establecerse en casi todas las regiones. Tal como su nombre lo indica, su lucha principal es por la tierra a través de una reforma agraria (Aznárez y Arjona 2002). Su táctica principal ha sido la ocupación de tierra para movilizar a sus bases a la acción y así presionar al gobierno a que expropiara la tierra y la distribuyera a los campesinos necesitados (Branford y Rocha 2002). Es fundamentalmente un movimiento clasista, con una membresía variada; incorpora a trabajadores asalariados rurales, minifundistas empobrecidos con insuficiente tierra, aparceros o medieros, ocupantes individuales ilegales de tierra, residentes de las poblaciones periféricas urbanas, desempleados y personas en busca de un sustento de vida, entre otros sectores sociales. Actualmente tiene casi dos millones

de miembros y el movimiento organizó más de 1.500 invasiones de tierras no trabajadas o mal explotadas por los latifundistas. A través de sus acciones logró el establecimiento de más de 1.300 asentamientos, un logro muy notable (Meszaros 2000, Navarro 2000, Stédile 2002).

Un aspecto importante del éxito del MST se debe a su estrategia de establecer alianzas con organizaciones obreras, aunque estas a veces se han resquebrajado por diferencias políticas y tácticas. También ha logrado obtener y mantener el apoyo de vastos sectores urbanos a través de sus campañas. Incluso el MST apoyó la fundación en 1992 del movimiento internacional de campesinos y granjeros Vía Campesina, y ha sido un activo participante de este movimiento logrando así una proyección y soporte internacional. Aunque el MST apoyó la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, se crearon tensiones porque la esperanza era grande a la expectativa que su gobierno acelere la reforma agraria (al principio sucedió todo lo contrario, con la consiguiente frustración de aquellos que todavía están luchando por un pedazo de tierra). Tal situación llevó a nuevas movilizaciones, presionando al gobierno a aumentar el ritmo de la distribución de tierra. Ello se logró pero se está todavía lejos de satisfacer la demanda por tierra (Leite 2006, Deere y Madeiros 2007). El MST ha tenido bastante éxito en mediar entre sus asociados y el gobierno y en crear un sentido de comunidad entre sus miembros (Wolford 2003). Sin embargo, con el tiempo también se están creando algunas divisiones al interior del movimiento por la diversidad de intereses de sus miembros, especialmente entre aquellos que ya lograron el acceso a la tierra y aquellos que todavía luchan por obtenerla (Wright y Wolford 2003).

La vigencia de la reforma agraria

El gran auge de los estudios sobre la estructura y la reforma agraria ocurrió durante el período inmediatamente antes y especialmente durante el período de la implementación de las reformas agrarias en la mayoría de los países de América Latina, desde los 1960s a los 1970s. El legado de las reformas agrarias fue mixto. Aunque la promesa a los campesinos de acceso a la tierra sólo se cumplió muy parcialmente, las reformas agrarias señalaron el comienzo del fin del latifundio y tuvieron el efecto de acelerar la transformación capitalista en el agro (Baumeister 2001, Kay 2002a, Alegrett 2003 y Teubal 2003).

Con el ajuste estructural, las reformas agrarias desaparecieron de la agenda política en la década de los 1980s y parte de los 1990s. Al contrario, se puso fin a la reforma agraria en varios países e incluso hubo procesos parciales de contra reforma agraria.

A mediados de la década de los noventa, estudiosos y políticos pusieron nuevamente el tema de la reforma agraria en la agenda política, influenciados por la creciente preocupación pública sobre la pobreza y también por la renovada movilización de los campesinos sin tierra y los pueblos indígenas que, entre otros derechos, también reclamaban tierras. En la era actual de la globalización neoliberal, el clima político para una reforma agraria radical es desfavorable debido a que el papel y el poder del Estado están más limitados, mientras que es mayor el alcance y el poder de las fuerzas del mercado. Es por ello que en este nuevo contexto neoliberal se están proponiendo reformas más amigables con el mercado.

El Banco Mundial ha reconocido la importancia del acceso a la tierra y sus ventajas para reducir los conflictos sociales y la pobreza rural, de manera que ha propuesto políticas de reforma agraria “asistidas por el mercado” o “negociadas” (Deininger 2003). Ya an-

teriormente habían propuesto un conjunto de medidas de registro y titulación de tierras dentro de una perspectiva neoliberal de afianzar los derechos sobre la propiedad privada y para estimular al mercado de tierras. Dichas políticas crearían un “campo de juego más nivelado”, reducirían los costos de la transacción, evitarían sobrepuestos y facilitarían el acceso a la tierra, vía compra o arrendamiento, a un segmento más amplio de campesinos, a la vez que alentaría la inversión, productividad, producción y los ingresos de los pequeños productores (de Janvry *et al.* 2001, Carter 2006). La realidad ha resultado ser diferente. Numerosos estudios indican que la experiencia de las reformas agrarias asistidas por el mercado en Brasil, Colombia, Guatemala y otros países ha sido más bien limitada, si no es que decepcionante (Borras Jr., 2003, Rosset 2006, Sauer y Mendes 2006). Sin embargo, todas estas posibilidades alternativas para ampliar el acceso a la tierra deberían ser exploradas. Pero, debido al contexto de mercado de estas políticas, es absolutamente necesario para el Estado aplicar una variedad de innovaciones institucionales que protejan los derechos adquiridos de campesinos y comunidades indígenas, así como proporcionar los recursos y los estímulos económicos para asegurar que tal proceso de ensanchamiento del acceso a la tierra adquiera el ímpetu suficiente para llegar a ser posible, sostenible e irrevocable.

Debido a las limitaciones de las reformas agraria de mercado y la persistente demanda por tierra de los campesinos es necesario replantearse la reforma agraria conducida por el Estado, pero aprendiendo las lecciones del pasado y asegurando esta vez una mayor participación campesina en su diseño y ejecución (Chonchol 2006, Eguren 2006, Borras *et al.* 2007). A mi juicio, hay tres temas clave a ser considerados hoy con respecto a las reformas agrarias. Primero, hay que situarla en un contexto que vaya más allá de lo económico y

socio-político para abrazar las dimensiones étnicas, de género, ecológicas y culturales así como la multifuncionalidad del territorio. Segundo, la solución de la cuestión agraria, entendida en términos de lograr un nivel de vida digno para los pobres rurales, requiere una nueva estrategia de desarrollo que supere el patrón de desarrollo excluyente y desigual del modelo neoliberal actual. Finalmente, no se puede obtener una solución sostenible al problema de la tierra y de la desigualdad dentro de los confines del Estado-nación por la globalización y, por tanto, se necesita reformar el sistema mundial para establecer relaciones más justas y equitativas entre el Norte y el Sur.

Conclusiones

Como se puede apreciar del análisis realizado en este ensayo, los estudios rurales en América Latina están realizando un aporte importante al conocimiento de la realidad del mundo rural de la región. Aunque algunas revistas pioneras como *Estudios Rurales Latinoamericanos*, que en su primer número en 1976 publicó el artículo pionero de Eduardo Archetti “Una visión general de los estudios sobre el campesinado”, y los *Cuadernos Agrarios (Nueva Época)* han desaparecido, otras revistas sobre la temática rural, tales como la *Revista ALASRU Nueva Época: Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, han surgido. El VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural efectuado del 20 al 25 de noviembre de 2006 en Quito (en la sede de FLACSO Ecuador) recibió 920 propuestas y resúmenes, reunió a más de 600 investigadores y se presentaron más de 500 ponencias en 30 Grupos de Trabajo, Mesas Redondas y Conferencias Magistrales. Ello indica el gran interés que hay por los estudios rurales hoy en día a pesar de la creciente urbanización del continente.

Hay otras temáticas que han sido abordadas por los estudiosos de la realidad rural que no he analizado en absoluto o sólo parcialmente. Son temas también de importancia pero que por razones de espacio no he logrado abordarlos en el presente ensayo. La problemática de la pobreza rural con sus diferentes enfoques analíticos la he estudiado ampliamente en un ensayo reciente, ver Kay (2006). En cuanto a los estudios sobre la globalización y sus varios impactos sobre la economía y sociedad rural, ver, por ejemplo, Teubal (1995), Valdivia de Ortega (1998), Edelman (1999), Renard y Espinosa (1999), Sánchez y Niño (2002), Teubal y Rodríguez (2002), Barbosa y Neiman (2005) y Bonanno (2006). Un aspecto muy debatido son los tratados de libre comercio (TLCs), especialmente por su impacto negativo sobre los campesinos y la seguridad alimentaria (Rubio 1999, Pérez 2003, Llambí 2005 y Martínez 2006b).

Otra de las cuestiones que han sido analizadas por los estudiosos del mundo rural es la temática de los territorios y se relaciona también con el asunto de la globalización. Se examinan las relaciones entre lo local y lo global incluso creándose el término “glocalización” para indicar la estrecha relación que se establece en algunas regiones entre ambos. Se presentan propuestas de desarrollo local, muchas veces con énfasis en lo endógeno, y de desarrollo territorial rural dentro del ámbito nacional con el fin de buscar su complementación. La literatura sobre la temática del desarrollo territorial rural es muy amplia y se puede consultar a Llambí y Duarte (2006), Schejtman y Berdegué (2003), Bendini y Steimbrieger (2003), Sepúlveda *et al.* (2003), Giarracca (2003) y Manzanal *et al.* (2006), entre otras.

La problemática ecológica sigue presente en los estudios rurales y también en las otras disciplinas. Preocupa en especial la deforestación, el asunto del agua y la continua erosión de los suelos. Con la penetración de la biotecnología y las semillas transgénicas se está

erosionando aún más la biodiversidad. La industrialización de la agricultura empresarial, cuya punta de lanza son los conglomerados agroindustriales transnacionales, aumentan aún más la fragilidad de los ecosistemas de la región y son una amenaza para los campesinos y las comunidades rurales (Bartra 2006).

Otra temática que requiere a mi juicio mayor atención son las políticas públicas. Aunque existe un buen número de estudios es necesario seguir trabajando esta temática para seguir rescatando el rol del Estado en los procesos de desarrollo rural (Quintana *et al.* 2003 y Assies 2003). Se requieren nuevas formas de interacción entre los campesinos y el Estado y otros actores claves con el propósito de aumentar las capacidades campesinas, desarrollar sus potencialidades, democratizar las prácticas sociales y crear relaciones más provechosas con el sistema mundial para que se correspondan a los intereses de la mayoría de la población rural y del país.

Una de las grandes deficiencias para los estudios rurales es la falta de estadísticas. El aparato público todavía no genera suficientes y buenas estadísticas que permitan fortalecer el sustento empírico de las investigaciones. En varios países de América Latina no se realizan censos agropecuarios desde ya hace décadas y muchos de los que existen adolecen de ciertas deficiencias o no se ejecutan con la frecuencia necesaria como para poder captar los rápidos cambios que se están generando a raíz de la mundialización. A pesar de la importancia que ha adquirido la temática de género gracias al movimiento feminista, Carmen Diana Deere (2006) llama la atención sobre la persistente falta de datos sobre los múltiples aspectos de las relaciones de género en el mundo rural. Algo similar ocurre en otras áreas de la vida rural. Una base empírica sólida es una de las condiciones necesarias para seguir avanzando en los estudios rurales y para mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas.

Bibliografía

- ALASRU, editor, 2005, *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 2, Tema: "Movimientos Sociales en América Latina", ALASRU, Chapingo.
- Alegrett, Raúl, 2003, "Evolución y tendencias de las reformas agrarias en América Latina", *Land Reform, Land Settlements and Cooperatives*, No. 2, FAO, Roma, pp. 112-126.
- Arias, Eliézer, 2006, "Reflexión crítica de la nueva ruralidad en América Latina", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 3. Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 139-168.
- Assies, Willem, editor, 2003, *Gobiernos locales y reforma del Estado en América Latina*, El Colegio de Michoacán, Zamora.
- Assies, Willem, Marco A. Calderón y Ton Salman, editores, 2005, *Citizenship, Political Culture and State Transformation in Latin America*. Dutch University Press, Amsterdam.
- Assies, Willem, Gemma van der Haar y André Hoekema, editores, 2000, *The Challenge of Diversity: Indigenous Peoples and Reform of the State in Latin America*, Thela Thesis, Amsterdam.
- Aznárez, Carlos y Javier Arjona, 2002, *Rebeldes sin tierra. Historia del MST de Brasil*, Txalaparta, Tafalla, Nafarroa.
- Barbosa, Josefa S. y Guillermo Neiman, editores, 2005, *Acera de la Globalización en la Agricultura: territorios, empresas y desarrollo local en América Latina*, Ediciones CICCUS, Buenos Aires.
- Barkin, D., 2001, "La nueva ruralidad y la globalización", en Edelmira Pérez y María Adelaida Farah, editores, *La Nueva Ruralidad en América Latina*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Tomo 2.
- Barrientos, Stephanie, Anna Bee, Ann Matear e Isabel Vogel, 1999, *Women and Agribusiness: Working Miracles in the Chilean Export Sector*, Londres, Macmillan
- Bartra, Armando, 2006, "Del capitán Swing a José Buvé: los trabajadores del campo contra el hombre de hierro", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 137-156.
- Bartra, Armando y Gerardo Otero, 2006, "Indian peasant movements in Mexico: the struggle for land, autonomy and democracy", en Sam Moyo y Paris Yeros, editores, *Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America*, Zed Books, Londres.
- Baumeister, Eduardo, 2001, "Peasant initiatives in land reform in Central America", en Krishna B. Ghimire, editor, *Land Reform and Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty and Agrarian Reform in Developing Countries*, ITDG Publishing, Londres.
- Bendini, Mónica, 2006, "Modernización y persistencias en el campo latinoamericano", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 221-241.
- Bendini, Mónica y Norma Steimbregger, editores, 2003, *Territorios y organización social de la Agricultura*, Editorial La Colmena, Buenos Aires.
- Bendini, Mónica, Salet Cavalcanti, Miguel Murmis y Pedro Tsakoumagkos, editores, 2003, *El campo en la sociología actual. Una Perspectiva Latinoamericana*, Editorial La Colmena, Buenos Aires.
- Bengoa, José, 2003, "25 años de estudios rurales", en *Sociologías*, Vol. 5, No. 10, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pp. 36-98.
- Bengoa, José, 2000, *La Emergencia Indígena en América Latina*, Fondo de Cultura Económica, Santiago.
- Bonanno, Alessandro, 2006, "La globalización agroalimentaria: elementos empíricos y reflexiones teóricas", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 243-263.
- Borras Jr., Saturnino, 2003, "Questioning market-led agrarian reform: experiences from Brazil, Colombia and South Africa", en *Journal of Agrarian Change*, Vol. 3, No. 3, Blackwell Publishing, Oxford, pp. 367-394.
- Borras Jr., Saturnino, Cristóbal Kay y A. Haroon Akram-Lodhi, 2007, "Agrarian reform and rural development: historical overview and current issues", en A. Haroon Akram-Lodhi, Saturnino

- M. Borrás Jr. y Cristóbal Kay, editores, *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries*, Londres y Nueva York, Routledge.
- Branford, Sue y Jan Rocha, 2002, *Cutting the Wire: The Story of the Landless Movement in Brazil*, Latin America Bureau, Londres.
- Brass, Tom, 2003, "Latin American peasants – new paradigms for old?", en Tom Brass, editor, 2003, *Latin American Peasants*, Frank Cass, Londres.
- Brass, Tom, 2000, *Peasants, Populism and Postmodernism*, Frank Cass, Londres.
- Bretón, Víctor, 2005, "Los paradigmas de la 'nueva' ruralidad a debate: el proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador", en *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, No. 78, CEDLA, Ámsterdam, pp. 7-30.
- Bretón, Víctor, 2001, *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos*, FLAC-SO-Ecuador, Quito.
- Bretón, Víctor y Francisco García, editores, 2003, *Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina*, Icaria, Barcelona.
- Brumer, Anita y Diego Piñeiro, 2005, "Uma visão panorâmica da Sociologia rural na América Latina", en Anita Brumer y Diego Piñeiro, editores, *Agricultura Latino-Americana: Novos Arranjos e Velhas Questões*, Editora da UFRGS, Porto Alegre.
- Burbach, Roger, 1994, "Roots of the postmodern rebellion in Chiapas", en *New Left Review*, No. 205, Londres, pp. 113-124.
- Burchardt, Hans-Jürgen, 2004, "El nuevo combate internacional contra la pobreza: ¿perspectivas para América Latina?", *Nueva Sociedad*, No. 193, Caracas, pp. 119-132.
- Carter, Michael R., 2006, "Land markets and pro-poor growth: from neo-structuralist skepticism to policy innovation", Ensayo presentado a la conferencia internacional Land, Poverty, Social Justice and Development, 9-14 de enero, Institute of Social Studies, La Haya, disponible en www.iss.nl.
- Chonchol, Jacques, 2006, "Por una nueva concepción de la reforma agraria y del desarrollo rural: asegurar la multifuncionalidad de la tierra", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 15-28.
- CEPAL, 2005, *Panorama Social de América Latina 2005*, Naciones Unidas, CEPAL, Santiago.
- Clemens, Harry y Raúl Ruben, editores, 2001, *Nueva ruralidad y política agraria: una alternativa neoinstitucional para Centroamérica*, Nueva Sociedad, Caracas.
- David, María Beatriz de Albuquerque, editor, 2001, *Desarrollo rural en América Latina y el Caribe*, Alfaomega, Bogotá.
- de Janvry, Alain, Gustavo Gordillo, Jean-Philippe Platteau y Elizabeth Sadoulet, editores, 2001, *Access to Land, Rural Poverty, and Public Action*, Oxford University Press, Nueva York.
- Deere, Carmen Diana, 2006, "¿La feminización de la agricultura? Asalariadas, campesinas y reestructuración económica en la América Latina rural?", *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 77-136.
- Deere, Carmen Diana, 2001, "Who owns the land? Gender and land titling programmes in Latin America", *Journal of Agrarian Change*, Vol. 1, No. 3, pp. 440-467.
- Deere, Carmen Diana y Leonilde Servolo de Madeiros, 2007, "Agrarian reform and poverty reduction: lessons from Brazil", en A. Haroon Akram-Lodhi, Saturnino M. Borrás Jr. y Cristóbal Kay, editores, *Land, Poverty and Livelihoods in an Era of Globalization: Perspectives from Developing and Transition Countries*, Londres y Nueva York, Routledge.
- Deere, Carmen Diana y Magdalena León, 2001, *Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina*, Tercer Mundo, Bogotá.
- Deininger, Klaus, 2003, *Land Policies for Growth and Poverty Reduction: A World Bank Policy Research Report*, World Bank y Oxford University Press, Nueva York.
- Dirven, Martine, 2004a, "El empleo rural no agrícola y la diversidad rural", en *Revista de la CEPAL*, No. 83, Santiago, pp. 49-69.
- Dirven, Martine, 2004b, *Alcanzando las metas del milenio: una mirada hacia la pobreza rural y agrícola*, Comisión Económica para América Latina

- y el Caribe, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, Serie Desarrollo Productivo, No. 146, Santiago.
- Edelman, Marc, 1999, *Peasants against globalization: Rural Social Movements in Costa Rica*, Stanford University Press, Stanford, California.
- Eguren, Fernando, editor, 2006, *Reforma agraria y desarrollo rural en la región andina*, Centro Peruano de Estudios Sociales, Lima.
- Giarracca, Norma, editor, 2003, *Territorios y lugares. Entre las fincas y la ciudad lules en Tucumán*, Editorial La Colmena, Buenos Aires.
- Giarracca, Norma, editor, 2001, *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires.
- Giarracca, Norma y Miguel Teubal, editores, 2005, *El campo argentino en la encrucijada: estrategias y resistencias sociales, eco en la ciudad*, Alianza Editorial, Buenos Aires.
- Giarracca, Norma y Bettina Levy, editores, 2004, *Ruralidades Latinoamericanas: identidades y luchas sociales*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires.
- Gómez, Sergio, 2002, *La "Nueva ruralidad": ¿Qué tan nueva?*, LOM Ediciones, Santiago.
- Gómez, Sergio, 1992, "Dilemas de la sociología rural frente a la agricultura y el mundo rural en la América Latina de hoy", en *Revista Latinoamericana de Sociología Rural*, No. 1, Universidad Austral de Chile, Valdivia, pp. 75-87.
- Hamilton, Sarah, 1998, *The Two-Headed Household: Gender and Rural Development in the Ecuadorean Andes*, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
- Harvey, Neil, 1998, *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy*, Duke University Press, Durham, North Carolina.
- Hidalgo, Francisco, 2006, "Reprimarización exportadora y resistencia indígena-campesina frente al TLC", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 423-438.
- Kay, Cristóbal, 2006, "Una reflexión sobre los estudios de pobreza rural y estrategias de desarrollo en América Latina", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Chapingo, pp. 29-76.
- Kay, Cristóbal, 2002a, "Agrarian reform and the neoliberal counter-reform in Latin America", en Jacqueline Chase, editor, *The Space of Neoliberalism: Land, Place and Family in Latin America*, Kumarian Press, Bloomfield, Connecticut.
- Kay, Cristóbal, 2002b, "Reforma agraria, industrialización y desarrollo: ¿porqué Asia Oriental superó a América Latina?", en *Debate Agrario*, No. 34, CEPES, Lima, pp. 45-94.
- Kay, Cristóbal, 2001, "Los paradigmas de desarrollo rural en América Latina", en Francisco García Pascual, editor, *El mundo rural en la era de globalización: incertidumbres y potencialidades*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Universitat de Lleida, Madrid y Lleida.
- Kay, Cristóbal, 1988, "The landlord road and subordinate peasant road to capitalism in Latin America", *Etudes rurales*, No. 77, Paris, pp. 5-20.
- Korovkin, Tanya, 2003, "Cut-flower exports, female labor, and community participation in highland Ecuador", en *Latin American Perspectives*, Vol. 30, No. 4, Thousand Oaks, California, pp. 18-42.
- Lara, Sara María, 1999, "Criterios de calidad y empleo en la agricultura latinoamericana: un debate con el postfordismo", en Hubert C. de Grammont, editor, *Empresas, reestructuración productiva y empleo en la agricultura mexicana*, Plaza y Valdés Editores, Ciudad de México.
- Lara, Sara María, 1998, *Nuevas experiencias productivas y nuevas formas de organización flexible del trabajo en la agricultura mexicana*, Juan Pablos Editores, México, D.F.
- Lara, Sara María, 1995, "La feminización del trabajo asalariado en los cultivos de exportación no tradicionales en América Latina: efectos de una flexibilidad salvaje", en Sara María Lara Flores, editor, *Jornaleras, temporenas y Bóias-Frias: el rostro femenino del mercado de trabajo rural en América Latina*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas.
- Lastarria-Cornhiel, Susana, Sonia Agurto, Jennifer Brown y Sara Elisa Rosales, 2003, *Titulación mancomunada en Nicaragua, Indonesia y Honduras*, Land Tenure Center, University of Wisconsin, Madison.
- Lee van Cott, Donna, editora, 1995, *Indigenous Peoples and Democracy in Latin America*, St. Martin's Press, Nueva York.

- Leite, Sérgio, 2006, "Agrarian Reform, Social Justice and Sustainable Development", documento presentado al International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD), Issue Paper Four, FAO, Roma y Porto Alegre, disponible en www.iccard.org.
- León, Arturo, Carlos Cortez, Elisa Gómez y Roberto Diego Quintana, 1999, *Cultura e identidad en el campo Latinoamericano*, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.
- Llambí, Luis, 2005, "Tratados de libre comercio y pequeña agricultura en los países andinos", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 1, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 219-247.
- Llambí, Luis, 2004, "Nueva ruralidad, multifuncionalidad de los espacios rurales y desarrollo local endógeno", en Edelmira Pérez y María Adelaida Farah, editores, *Desarrollo rural y nueva ruralidad en América Latina y la Unión Europea*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
- Llambí, Luis, 1994, "Globalización y nueva ruralidad en América Latina: Una agenda teórica y de investigación", en *Revista Latinoamericana de Sociología Rural*, No. 2, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Universidad Austral de Chile, Valdivia, pp. 29-39.
- Llambí, Luis y Magda Duarte, 2006, "Procesos de crecimiento endógeno y desarrollo territorial rural en América Latina: enfoques teóricos y propuestas de política", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 3, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 223-250.
- López, Ramón y Alberto Valdés, editores, 2000, *Rural Poverty in Latin America*. Macmillan, Londres.
- Manzanal, Mabel, Guillermo Neiman y Mario Lattuada, editores, 2006, *Desarrollo rural: organizaciones, instituciones y territorios*, Ediciones CICCUS, Buenos Aires.
- Martínez, Luciano, 2006a, "Empleo y desigualdad social en el medio rural: reflexiones desde el caso ecuatoriano", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 205-220.
- Martínez, Luciano, 2006b, "Pequeños productores rurales frente a la globalización", ponencia presentada en el XXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), 15-18 de marzo, San Juan, Puerto Rico.
- Martínez, Luciano 2005, "El movimiento indígena ecuatoriano en la encrucijada", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 2, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 121-141.
- Martínez, Luciano, 2000, *Economías rurales: actividades rurales no agrícolas en Ecuador*, Centro Andino de Acción Popular (CAAP), Quito.
- Meszaros, George, 2000, "No ordinary revolution: Brazil's landless worker's movement", en *Race and Class*, Vol. 42, No. 2, Londres, pp. 1-18.
- Murmis, M., 1994a, 'Algunos temas para la discusión en la sociología rural latinoamericana: reestructuración, desestructuración y problemas de excluidos e incluidos', en *Revista Latinoamericana de Sociología Rural*, No. 2, ALASRU, Universidad Austral de Chile, Valdivia, pp. 5-28.
- Murmis, Miguel, 1994b, 'Incluidos y excluidos en la reestructuración del agro Latinoamericano', *Debate Agrario*, No. 18, CEPES, Lima, pp. 101-133.
- Murray, Warwick E. y Eduardo Silva, 2004, "The political economy of sustainable development", en Robert N. Gwynne y Cristóbal Kay, editores, *Latin America Transformed: Globalization and Modernity*, segunda edición, Hodder Arnold y Oxford University Press, Londres y Nueva York.
- Navarro, Zander, 2000, "Breaking new grounds: Brazil's MST", en *NACLA Report on the Americas*, Vol. 33, No. 5, North American Congress on Latin America (NACLA), Nueva York, pp. 36-39.
- Neimann, Guillermo y Clara Craviotti, 2005, *Entre el campo y la ciudad: desafíos y estrategias de la pluriactividad en el agro*, Ediciones CICCUS, Buenos Aires.
- North, Liisa y John D. Cameron, editors, 2003, *Rural Progress, Rural Decay: Neoliberal Adjustment Policies and Local Initiatives*, Kumarian Press, Bloomfield, Connecticut.
- Pérez, Edelmira y María Adelaida Farah, 2004, *Desarrollo rural y nueva ruralidad en América Latina y la Unión Europea*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

- Pérez, Edelmira, María Adelaida Farah, y otros, editores, 2001, *La nueva ruralidad en América Latina. Maestría en Desarrollo Rural 20 Años*, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
- Pérez, Mamerto, 2003, *Apertura comercial y sector agrícola campesino. La otra cara de la pobreza del campesino andino*, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz.
- Petras, James y Henry Veltmeyer, 2001, "Are Latin American peasant movements still a force for change? Some new paradigms revisited", en *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 28, No. 2, Londres, pp. 83-118.
- Phillips, Lynne, 2006, "Food and Globalization" en *Annual Review of Anthropology*, Vol. 35, No. 1, pp. 37-57.
- Picari, Nina, 1996, "Ecuador: taking on the neoliberal agenda", en *NACLA Report on the Americas*, Vol. 29, No. 5, North American Congress on Latin America, Nueva York, pp. 23-32.
- Piñeiro, Diego E., 2004, *En busca de la identidad. La acción colectiva en los conflictos agrarios*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires.
- Piñeiro, Diego, 2000, *30 Años de sociología rural en América Latina*, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Montevideo.
- Plaza, Orlando, 1998, *Desarrollo rural: enfoques y métodos alternativos*, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.
- Quintana, Roberto Diego y Luciano Concheiro y Patricia Couturier, editores, 2003, *Políticas públicas para el desarrollo rural*, Casa Juan Pablos, México, D.F.
- Ramírez, César Adrián y Blanca Rubio, editores, 2006, "El debate teórico rural contemporáneo", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo.
- Reardon, Thomas, Julio Berdegú y Germán Escobar, 2001, "Rural nonfarm employment and incomes in Latin America", en *World Development*, Vol. 29, No. 3, pp. 395-409.
- Renard, María Cristina y Gisela Espinosa, coordinadoras, 1999, "Globalización y sociedades rurales", *Cuadernos Agrarios Nueva Época*, No. 17-18, Tlalpan D.F.
- Riella, Alberto y Juan Romero, 2003, "Nueva ruralidad y empleo no-agrícola en Uruguay", en Mónica Bendini y Norma Steimbregger, editores, *Territorios y organización social de la agricultura*, Editorial La Colmena, Buenos Aires.
- Roberts, Bryan R., 1978, *Cities of Peasants: The Political Economy of Urbanization in the Third World*, Edward Arnold, Londres.
- Rosset, Peter, Raj Patel y Michael Courville, editores, 2006, *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*, Food First, Oakland, California.
- Rubio, Blanca, 2006, "Exclusión rural y resistencia social en América Latina", en *Revista ALASRU Nueva Época, Análisis Latinoamericano del Medio Rural*, No. 4, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, Chapingo, pp. 1-28.
- Rubio, Blanca, 2003, *Explotados y excluidos: los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal*, Plaza y Valdés Editores, México, D.F.
- Rubio, Blanca, 1999, "Las consecuencias de los tratados comerciales sobre los campesinos latinoamericanos: los casos del TLC y el MERCOSUR", en Raymond Buve y Míriam Wiesebron, editores, *Procesos de integración en América Latina: perspectivas y experiencias Latinoamericanas y Europeas*, CEDLA, Amsterdam y Universidad Iberoamericana, México, D.F.
- Rubio, Blanca, Cristina Martínez, Mercedes Jiménez y Eloísa Valdivia, editores, 2002, *Reestructuración productiva, comercialización y reorganización de la fuerza de trabajo agrícola en América Latina*, Plaza y Valdés Editores, México, D.F.
- Sánchez, Armando y Edilberto Niño, editores, 2002, *Globalización y cambio social en América Latina*, ALASRU y Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México, D.F.
- Sauer, Sérgio y João Márcio Mendes, editores, 2006, *Capturando a Terra: Banco Mundial, Políticas Fundiárias Neoliberais e Reforma Agrária de Mercado*, Editora Expressão Popular, São Paulo.
- Schejtman, Alexander y Julio A. Berdegú, 2003, *Desarrollo territorial rural*, RIMISP, Santiago, Chile.
- Sepúlveda, Sergio, Adrián Rodríguez, Rafael Echeverri y Melania Portilla, 2003, *El enfoque territorial del desarrollo rural*, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, San José, Costa Rica.

- Stédile, João Pedro, 2002, "Landless batallions: the *Sem Terra* movement", en *New Left Review*, No. 15, Londres, pp. 77-105.
- Teubal, Miguel, 2003, "La tierra y la reforma agraria en América Latina", en *Realidad Económica*, No. 200, IADE, Buenos Aires, pp. 130-162.
- Teubal, Miguel, 1995, *Globalización y expansión agrarioindustrial: ¿Superación de la pobreza en América Latina?*, Ediciones Corregidor, Buenos Aires.
- Teubal, Miguel, Diego Domínguez y Pablo Sabatino, 2005, "Transformaciones agrarias en la Argentina. Agricultura industrial y sistema agroalimentario", en Norma Giarracca y Miguel Teubal, editores, *El campo argentino en la encrucijada: estrategias y resistencias sociales, ecos en la ciudad*, Alianza Editorial, Buenos Aires.
- Teubal, Miguel y Javier Rodríguez, 2002, *Agro y alimentos en la globalización: una perspectiva crítica*, Editorial La Colmena, Buenos Aires.
- Urioste, Miguel y Cristóbal Kay, 2005, *Latifundios, avasallamientos y autonomías: la reforma agraria inconclusa en el oriente de Bolivia*, Fundación TIERRA, La Paz.
- Valdivia de Ortega, Martha Eloísa, coordinadora, 1998, *Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina: memorias de sesiones plenarias*, Comité Organizador del V Congreso de ALASRU y Universidad Autónoma Chapingo, México.
- Veltmeyer, Henry, 1997, "New social movements in Latin America: the dynamics of class and identity", en *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 25, No. 1, Londres, pp. 139-169.
- Wolford, Wendy, 2003, "Producing community: The MST and land reform settlements in Brazil", en *Journal of Agrarian Change*, Vol. 3, No. 4, Blackwell Publishing, Londres, pp. 500-520.
- Wright, Andy and Wendy Wolford, 2003, *To Inherit the Earth: The Landless Movement and the Struggle for a New Brazil*. Food First Publications, Oakland, California.
- Yashar, Deborah J., 2005, *Contesting Citizenship in Latin America: The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Zamosc, León, 1994, "Agrarian protest and the Indian movement in the Ecuadorean highlands", en *Latin American Research Review*, Vol. 29, No. 3, Austin, Texas, pp. 37-68.

¿Puede la pobreza rural ser abordada a partir de lo local?

Can the rural poverty be approached from the local?

Luciano Martínez Valle

Doctor en Sociología, Universidad de Paris III, Sorbonne, Nouvelle
Profesor-investigador de Flacso- Ecuador

Email: lmartinez@flacso.org.ec

Fecha de recepción: enero 2007

Fecha de aceptación y versión final: julio 2007

Resumen

Este artículo analiza el crecimiento de la pobreza rural en el contexto de un proceso de desestructuración de la sociedad rural. Identifica los sectores sociales más afectados: los campesinos minifundistas y los trabajadores sin tierra. Luego de más de 30 años de experiencias de políticas de desarrollo rural, todavía no se han diseñado políticas adecuadas para estos grupos sociales. Una reflexión seria a partir de lo local podría ayudar a recuperar un nuevo rol de estos productores para no continuar con políticas de “goteo” que no apuntan a una real valorización del trabajo en el medio rural.

Palabras clave: Pobreza rural, pluriactividad, asalariados rurales, proyectos DRI, desarrollo local, Ecuador.

Abstract

This article analyzes the creation of the rural poor in the context of the process of destruction of rural society. The article will identify the sectors of society most affected including small farmers, and landless workers. Even after thirty years of developmental projects dedicated to address rural development, there still has not been adequate change for these social groups. There must be some sort of reflexion in regards to polices that can be created, starting from the local, that can help form a new role for these rural poor so they don't have to rely on the sporadic politics, that does not help create real jobs in the rural society.

Keywords: Rural Poverty, Pluriactivity, Rural Employment, DRI Projects, Local Development, Ecuador.

Este trabajo aborda uno de los temas más evidentes de la crisis de la sociedad rural en el caso ecuatoriano: la presencia de la pobreza en forma masiva, pues de acuerdo a las cifras disponibles llegaría a afectar al 80.2 % de la población de la Sierra y al 91.8 % de la población de la Costa¹. Esta dimensión de la pobreza seguramente no tiene parangón salvo el caso de países africanos o la presencia de masas de pobres en la edad media o en la época moderna como consecuencia de catástrofes o guerras. No obstante, a principios del siglo XXI resurge en los países del tercer mundo en gran parte como resultado de la aplicación de políticas de ajuste y en general del proceso de globalización económico-financiera, lo que ha generado una profunda desestructuración de la sociedad rural.

En América Latina siempre predominó una visión dualista de la sociedad: lo rural y lo urbano, lo atrasado y lo moderno, lo agrícola y lo industrial, etc., que llevó a privilegiar una dimensión en perjuicio de la otra. Normalmente, fue la visión de lo urbano la que se impuso como símbolo de la modernidad, el desarrollo y en general de lo nuevo, frente a lo rural considerada como no-moderno, el subdesarrollo y lo arcaico. Esta visión de mundo, se basaba en el predominio de la industria con asiento urbano y la transformación de la sociedad rural al ritmo de los cambios tecnológicos que se adoptaban en la agricultura sometida también a un proceso de industrialización. Era la imagen kautskiana de la superioridad de la industria sobre la agricultura que predominó como modelo a seguirse tanto en Occidente como en los países del socialismo real.

Los cambios que se dieron en las sociedades rurales de los países avanzados tuvieron su contraparte en el ritmo de la industrialización concentrada en las urbes durante los dorados años del fordismo. Pero esto nunca se logró en América Latina, no sólo porque no hubo una reforma agraria de fondo sino porque tampoco se pasó de la fase de industrialización sustitutiva de importaciones. La sociedad rural, por lo mismo, no se desestructuró al ritmo de lo que ocurrió en Europa, sino que se erosionó lentamente, más por descuido de los gobiernos de turno, incapaces de diseñar políticas agrarias adecuadas, que por la dinámica interna del desarrollo capitalista. Nos conformamos con tener un agro del cual extraíamos mano de obra barata, productos para exportar, pero sobre todo alimentos baratos sin disponer de una masiva clase obrera, salvo algunos islotes de modernidad diseminados a lo largo del continente.

Los esfuerzos realizados desde la década de los 70 en el desarrollo rural, eran demasiado dispersos y débiles como para enrumbar a la sociedad agraria por la senda de la prosperidad. Varios análisis y evaluaciones demuestran que en 30 años de políticas Desarrollo Rural Integral (DRI), muy poco cambió la situación de los campesinos pobres y en general de la sociedad rural: no se hizo reforma agraria, no se creó empleo, no se detuvieron las migraciones, no se mejoró el ingreso de las familias, tampoco se produjo una revolución tecnológica en los principales productos en manos de los campesinos.

La pregunta que siempre queda flotando en el aire es ¿quién se benefició de las inversiones que se hicieron a través de tres generaciones de proyectos de Desarrollo Rural Integral (DRI)? Los campesinos pobres seguramente no. Pero ya en los años 80, algunos estudios (Bernard 1982) señalaban las tendencias o más bien los caminos por los cuales iban a transitar los campesinos, incluso aquellos que en esa época parecía que tenían futu-

¹ Los cálculos se han realizado de acuerdo al concepto de pobreza por necesidades básicas individuales (NBI) en base al Censo de Población del 2001. SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, versión 4.0. www.ssise.gov.ec

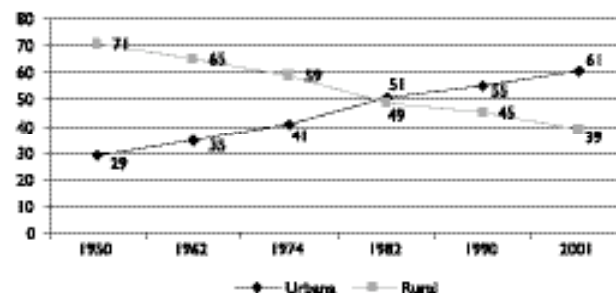
ro, como por ejemplo los pequeños productores de arroz de la Cuenca del Guayas². Cuando yo investigaba el empleo entre los arroceros (todavía) cooperados de Babahoyo a fines de los años 80, uno de los problemas que más me llamaba la atención es el poco interés que tenían los hijos de los campesinos en continuar con el duro trabajo agrícola. Si alguno todavía continuaba ayudando a su padre, era porque no había logrado ubicarse todavía en un trabajo en la ciudad de Guayaquil. Y si no hay quién de continuidad al trabajo agrícola, simplemente se acaba la transmisión de conocimientos, la herencia campesina, el apego a la tierra y termina por desaparecer de las manos de la familia la parcela por la cual lucharon en los años 70. Si a esto se sumaban los males endémicos que aprietan a los campesinos pobres (endeudamiento, precios bajos, baja productividad, nulo nivel tecnológico), continuar al frente de la parcela era una decisión más heroica que económica. La pobreza, entonces ya se avizoraba en estos estudios, era el horizonte que borrosamente se dibujaba para estos productores y que ahora ya es una realidad.

La pobreza y la desestructuración de la sociedad rural

La sociedad rural ha cambiado en los últimos cincuenta años. Basta mirar el peso de la población rural, que ha pasado desde un 60 o 70 % en los años cincuenta a un 30 % en el inicio del siglo XXI. El hecho real es que hay menor proporción de población rural hoy día que hace medio siglo atrás, y no sirve de mucho argumentar sobre el incremento bruto del número de rurales pues lo que hay que mirar es el peso relativo de la población

2 Véase por ejemplo el crecimiento de los productores con menos de una hectárea en la Provincia de los Ríos que pasó de 8.4 % en 1954 al 30.2 % en 1974 (Bernard 1982).

Gráfico No. 1
Evolución de la población urbana y rural



Fuente: INEC, VI Censo de población, 2001

rural en el total de la población nacional. Pero además hay un cambio que no se menciona en la sociedad rural, y es el peso que empieza a tomar la población de mayor edad. No estamos en presencia de un envejecimiento a la europea sino más bien de una fuga de la población joven que no puede o no quiere insertarse productivamente en el medio rural. Este fenómeno no ha sido estudiado en nuestro medio, pero es un indicador fuerte de la desestructuración rural, cuando la población joven de ambos sexos es fuertemente atraída por las luces de la ciudad. Bourdieu (2002) en su análisis sobre la sociedad campesina francesa ya señalaba este hecho, insistiendo incluso en que las mujeres eran el “caballo de Troya” de la fuga hacia el ámbito urbano y del inicio de un proceso estructural de desarraigo de la población rural, en el sentido etimológico de la palabra, es decir sacar las raíces rurales para sembrarlas en otro ámbito diferente.

Los argumentos que pueden explicar este hecho en el caso ecuatoriano son diferentes según las regiones: en la Sierra la escasez de tierra es el elemento explicativo, pues los herederos ya no tienen qué heredar y por lo mismo ya no tendría sentido quedarse en el medio rural; en la Costa, el asunto es más complejo, porque si bien muchas familias todavía poseen tierra, el trabajo campesino está completamente desvalorizado a los ojos de las

jóvenes generaciones. Striffler (2002), por ejemplo, muestra que en el caso de familias que tuvieron acceso a tierras por reforma agraria en ex haciendas bananeras de la United Fruit, al perderlas se han vuelto jornaleros, pero su mirada está puesta en alguna actividad no agraria como meta ocupacional, son obreros agrarios pero en forma transitoria, hasta que logren vincularse a algún trabajo en la ciudad. El hecho es que los jóvenes no quieren ser campesinos ni someterse al duro trabajo de la tierra. Además, la misma realidad los empuja fuera, al comprobar que a pesar de los esfuerzos y luchas de sus padres o de generaciones anteriores, no ha cambiado en nada su situación económica.

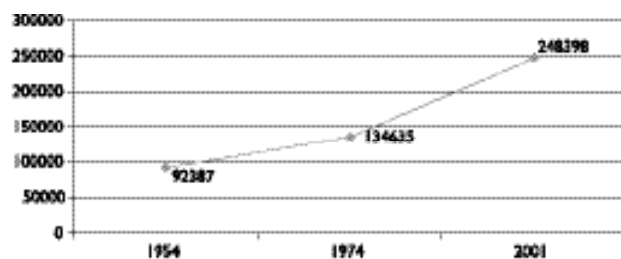
Cuadro N° 1 Población rural con menos de 1 ha y sin tierra por períodos	
Fuentes	% de familias
Censo 1954	27
JUNAPLA 1968	33
Censo 1974	37
Encuesta PRONAREG 1974	40
Encuesta INEM 1990	58.9
Fuente: Bernard (1982) y Martínez (1994)	

Lamentablemente, el Censo Agropecuario de 2001 no muestra los datos de los campesinos sin tierra, de modo que no se puede comparar con los datos expuestos en el cuadro No. 1 que recoge el acertado criterio de que un productor con menos de 1 hectárea es un trabajador “sin tierra” (Bernard 1982). De todas formas, si sólo se considerara a los productores menores de una hectárea en 1990 de acuerdo al INEM éstos eran el 20.3%, mientras que en el 2001 constituían el 29.5%, 10 puntos porcentuales más.

Otras alternativas que podrían detener a la población joven sólo existen en determinadas regiones en donde se desarrolló un mercado dinámico, y por lo mismo la multiocupación. A pesar de que pueden estar amenazados por los efectos de las políticas neoliberales y aperturistas, existen alternativas productivas que demandan mano de obra, incluso de los jóvenes en actividades todavía no desvalorizadas como la agricultura. La artesanía, el comercio y los servicios se encuentran en primera línea y para los migrantes internos existe además la construcción. La creación de un portafolio de actividades en áreas minifundistas logra de alguna forma detener el despoblamiento rural y recrear nuevas formas de ruralidad que ya no pasan necesariamente por las actividades agrícolas como eje de la reproducción de la unidad familiar.

Conjuntamente con la desvalorización del trabajo agrícola, se encuentra la pérdida del peso en la producción para el mercado interno por parte de los pequeños productores rurales³. Esta situación debería leerse más bien como un efecto antes que una causa. La lectura de los datos muestra que son los campe-

Gráfico No. 2
No. de UPAS) < 1 hectárea



Fuente: INEC, III Censo agropecuario, 2001.
UPA: Unidad de Producción Agrícola

3 De acuerdo a los datos del III Censo Nacional Agropecuario del 2001, los productores de menos de 1 hectárea disponían de la siguiente distribución de la superficie sembrada: 1% de arroz, 5.5% de maíz duro, 7.6 % de papa, 6.3% de arveja seca, 3.2 % de fréjol seco, 0.5 % de soya y 13.6 % de choclo.

sinos medios los que producen alimentos para el mercado interno, lo que es más lógico, dado que disponen de mayores recursos en tierra y pueden acceder a tecnología y a mercados con mayor facilidad. De hecho, los pobres producen menos y compran más, es decir, son más dependientes del mercado que los campesinos medios, con las secuelas negativas de esta situación, sobre todo si se considera la calidad de los alimentos y el precio de los mismos.

En estas condiciones, es sorprendente que la migración campo-ciudad o la migración internacional no hayan adquirido todavía dimensiones catastróficas, lo que requiere una explicación adicional. Y ahí es donde entra la variable concentración de la propiedad. Tampoco en este caso, los datos nos mienten. El Ecuador tiene un índice de Gini (0.81) de los más altos de América Latina, lo que significa una tremenda desigualdad en el acceso a la tierra o en otras palabras, que existen más campesinos sin o con poca tierra y menos empresarios con mucha tierra. Así de simple. En los últimos 30 años se produjo un lento pero sostenido proceso de concentración que explica esta desigualdad, pero al mismo tiempo el desarrollo de un archipiélago de modernidad que todavía demanda mano de obra y al cual pueden acudir los ex-campesinos (ahora proletarios agrícolas) sin abandonar necesariamente el campo. De esta forma muchas comunidades se han convertido en verdaderos dormitorios de trabajadores rurales y muchos pueblos albergan una masa de trabajadores precarios sometidos a las más duras condiciones del trabajo flexible (Martínez 2004). La etnicidad en este caso no es un obstáculo para la proletarianización, porque el capitalismo agrario aprovecha para su beneficio de toda ventaja o desventaja que tengan quienes se ven obligados a vender su fuerza de trabajo.

Pero la amenaza más temible viene de fuera no sólo de la sociedad rural sino del mismo contexto nacional. La globalización y

dentro de ella los tratados de libre comercio constituyen una amenaza que acentuará sin duda el nivel de pobreza de la población rural. No sólo que muchos cultivos que actualmente demandan una importante mano de obra quedarán al margen del mercado, sino que los mismos productores deberán asumir un patrón de producción-consumo ajeno a sus prácticas culturales. Es el golpe de gracia de la desestructuración rural liderada por las grandes empresas transnacionales de alimentos y productoras de insumos agrícolas. Cualquiera sea el resultado de las negociaciones del TLC, los campesinos sufrirán las consecuencias más negativas: dejar de ser productores para pasar a ser un ejército de desempleados que abandonarán el campo en dirección a las ciudades más grandes. No se si estamos preparados para asumir este reto.⁴

Si estas tendencias se cumplen, los pobres rurales se transformaran por la fuerza de los hechos en pobres urbanos, generándose una segunda gran oleada de flujo campo-ciudad mucho más masiva que aquella que se dio en los años 70 en el país. Para entonces, los problemas urbanos adquirirán otras dimensiones, pues es difícil pensar que se crearán empleos en condiciones en que el aparato productivo sufre una severa contracción al carecer de políticas de fomento para la producción y no disponer de capacidades internas que planteen alternativas de desarrollo al modelo neoliberal. El camino de los rurales ya no será la protesta agraria sino la urbana, con todo lo explosiva que esto significa.

Desde el punto de vista social sólo quiero señalar un elemento que afecta profunda-

4 La CEPAL (2005) denomina unidades productivas de subsistencia a aquellas en donde los productores viven en el predio, no contratan trabajadores y no poseen maquinaria. Las unidades productivas amenazadas en total son 288.414, es decir el 46 % del total de Unidades de Producción Agrícola (UPAs) según el Censo Agropecuario del 2001. Del total de UPAs amenazadas el 57.5 % corresponden a las de subsistencia.

mente a estabilidad de la sociedad rural: la desestructuración de las familias rurales. Los cimientos mismos de una sociedad basada en la herencia bilateral, en el apoyo de los hijos, en la recreación de valores vinculados a la naturaleza, en la práctica de relaciones recíprocas y de solidaridad, se están cuarteando vertiginosamente. Al desaparecer las condiciones estructurales sobre las que se levantaba el edificio campesino, este empieza a cuartearse como por efecto de un terremoto. La alternativa migratoria nacional o internacional sólo es un escape en búsqueda de sobrevivencia y no de capitalización. Al final, ¿para qué invertir en el campo en las condiciones actuales? Los emigrantes que salen del medio rural fuera del país difícilmente regresaran, tal como lo muestra los casos estudiados en el austro, donde ya existen varios pueblos fantasma, sin habitantes (Jokisch y Kyle 2005).

¿Quiénes son los pobres en el medio rural?

Para efectos de este trabajo vamos a referirnos al grupo de productores menores de 1 ha que, a pesar de que no incluyen a los trabajadores sin tierra, constituyen un 30% de las UPA. En números absolutos estos trabajadores llegaban a 248.398 que disponían de una superficie de 0.03 has por familia. En realidad se trata de productores sin tierra, porque con

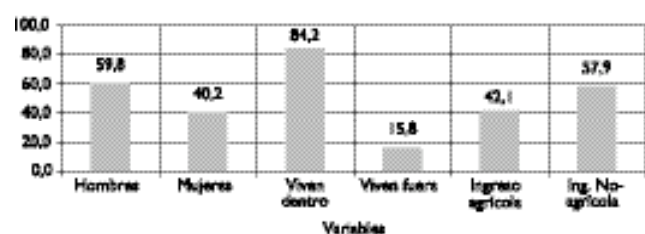
tan exigua cantidad es impensable emprender alguna actividad agropecuaria, ni siquiera de subsistencia. No pretendemos con estos datos dimensionar fácilmente la pobreza rural, que tiene otras dimensiones además de la escasez de tierra, sino visualizara a los pobres “estructurales”, es decir que dadas las actuales condiciones no van a poder salir de su situación en un plazo corto, si no se diseñan políticas profundas que cambien su actual marginación respecto al acceso a los recursos básicos.

Las variables del gráfico No. 3 muestran el perfil de los pobres rurales como personas que prácticamente no viven del trabajo agropecuario, aunque no han abandonado totalmente el medio rural. En realidad no hay mucha relación entre el origen del ingreso y la residencia. Esta información mostraría una faceta nueva de lo que sucede en el medio rural: que las parcelas menores de 1 has sólo sirven de dormitorios de los trabajadores pobres quienes tiene que ganarse la vida realizando otras actividades diferentes de las agropecuarias. Así, si revisamos el ingreso no-agrícola, la mayor parte de este está conformado por servicios y comercio que no necesariamente son actividades predominantes del medio rural⁵. A pesar de la limitación de esta información, las personas del estrato de pobres rurales claramente no viven de la actividad agropecuaria y el medio rural se ha convertido en un lugar de residencia (espacios de refugio) antes que en un lugar productivo.

El otro grupo de trabajadores pobres lo conforman los asalariados rurales que efectivamente carecen de tierra y que lamentablemente no están considerados en los datos del último censo agropecuario. Se trata de un grupo también muy heterogéneo desde el punto de vista social y étnico. En los islotes

5 Ya en 1982, los ingresos no agrícolas eran los más altos entre los productores menores de 1 has: 66 % en la Sierra, 33% en la Costa y 28 % en la Amazonía (Bernard 1982, cuadro N° 102).

Gráfico No. 3
Productores de < 1 hectárea



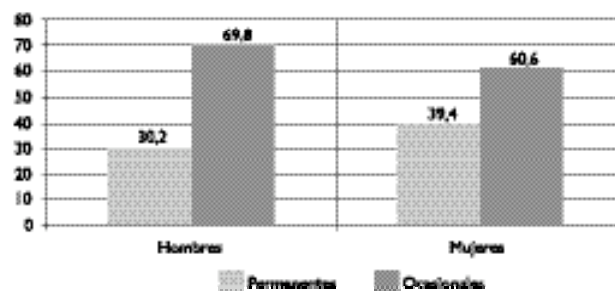
Fuente: INEC, III Censo agropecuario, 2001

de modernidad de la Sierra se ha formado un proletariado indígena vinculado a las empresas floricultoras. Y en la Costa hay nuevos contingentes de trabajadores jóvenes vinculados a los productos de exportación tradicionales y no tradicionales. Lo interesante de este nuevo proletariado es que se trata de trabajadores jóvenes de ambos sexos, vinculados a un mercado de trabajo flexible y enmarcado en relaciones de trabajo muy precarias. El caso más dramático es el de los trabajadores asalariados de la Costa, calificados como “temporales permanentes” (es decir que todo el tiempo son trabajadores temporales), una figura curiosa que muestra el nivel de precariedad de sus relaciones de trabajo y que incide en la falta de seguridad en el empleo agrario (Martínez 2004).

El predominio de los asalariados ocasionales (peones o jornaleros) es evidente, independientemente de la variable sexo. La característica señalada anteriormente del predominio del trabajador rural de carácter temporal significa no sólo las dificultades que encuentran los asalariados rurales para encontrar trabajo sino para conservarlo. Frente a una abundante oferta de mano de obra proveniente de las unidades de menos de 1 hectárea, las posibilidades de conseguir un trabajo aunque sea precario y flexible disminuyen. Sin duda esto ha generado el caldo de cultivo de una competencia salvaje que implica una caída del salario, sobre todo cuando fluye a este mercado una mano de obra proveniente de países vecinos que está dispuesta a trabajar por debajo del salario vigente en los espacios productivos más dinámicos (áreas florícolas, bananeras, etc.).

Otra característica de esta mano de obra asalariada es que un gran porcentaje de ella vive en las ciudades cercanas a los lugares de producción. Estas ciudades dormitorio, que han crecido últimamente con el auge de la producción para la exportación, concentran a una población pobre que está vinculada en

Gráfico No. 4
Asalariados rurales por sexo



Fuente: INEC, III Censo agropecuario, 2001

forma precaria con el trabajo en unidades capitalistas del medio rural. La pobreza, si bien en este caso no es estrictamente rural, se genera en el espacio rural y se manifiesta en el urbano, lo que demuestra lo artificial de los análisis realizados sobre procesos más complejos que se incuban en las dinámicas relaciones entre el campo y la ciudad.

La pobreza y la inocuidad de las recetas

Los grupos sociales más vulnerables de la sociedad rural: campesinos pobres y asalariados rurales, no han sido objeto de ninguna política social ni productiva en el medio rural. Algunas recetas implementadas con poco éxito en el medio rural como los proyectos de Desarrollo Rural Integral (DRI) no han beneficiado para nada a estos grupos en la medida en que no constituían el grupo social objetivo de esta política desarrollista. Así por ejemplo, en las 12 áreas del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER) hacia 1993, un 23 % de campesinos con menos de 1 hectárea y trabajadores sin tierra, al igual que un 20.4 % de asalariados rurales quedaban fuera de los impactos de la política DRI, los primeros porque tenían muy poca tierra y los segundo porque no existía ningún componente que incluyera a los asalariados rurales (Martínez y Barril 1995). En otras pa-

labras, la pobreza rural no era objeto de interés de los DRI a no ser que se haya pensado que iba a disminuir como resultado del supuesto éxito de estos proyectos. Los datos sobre el incremento de la pobreza en el área rural niegan enfáticamente esta posibilidad.

Al estar concentrados los proyectos DRI sobre todo en las actividades agropecuarias, de hecho favorecían las estrategias de los campesinos con recursos, seguramente un estrato de campesinos medios, pero en cambio quedaban marginados los campesinos con menos de 1 has. Todavía se pensaba que en el campo todo el mundo se dedicaba a la agricultura y no había alternativas de empleo fuera de esta actividad. Igualmente, las tendencias presentes en los proyectos DRI demostraban, al contrario, que en la medida en que el campesino era más pobre, su actividad se diversificaba al igual que los ingresos y que se trataba no sólo de una estrategia temporal sino estructural de la sociedad rural.

En la mitad de los años 90 realizamos un intento de tipología de los proyectos DRI y justamente las áreas más pobres eran al mismo tiempo mayoritariamente pobladas de indígenas minifundistas (Sierra Norte, TTP y Guano) a las cuales se podría sumar la de Jipijapa en la Costa. Estas áreas no tenían ninguna posibilidad de desarrollo agropecuario y se habían convertido en bolsones de mano de obra “bon marché” para el capital sea urbano o rural (Martínez y Barril 1995). En el 2000 encontramos el mismo problema, pues justamente estas mismas áreas mostraban que el ingreso per capita había disminuido y que mayoritariamente se dedicaban a actividades extra-agrarias como fuente principal de sus ingresos. A pesar de que en algunas áreas como la Sierra Norte la presencia de las empresas florícolas habían generado empleo para las comunidades vecinas, de todas formas la migración campo-ciudad continuaba: “el volumen total de los migrantes ha aumentado. Así, para 1993, la proporción de la po-

blación migrante sobre la población en edad de trabajo llegaba al 10.7%, mientras que en 2000 llegó al 16.4%, igualmente la población migrante representaba el 12.3% de la PEA, mientras que para el 2000 llega al 21.4%. Este incremento de 9 puntos porcentuales de la migración indica la poca capacidad de retención de la economía campesina sobre la población más joven que busca insertarse económicamente fuera del espacio rural” (Martínez 2000:5). Y no nos estamos refiriendo al problema de la migración internacional que cogió vuelo a partir del año 2000, afectando también a importantes sectores de la sociedad rural.

El caso de los asalariados rurales merece una discusión especial. Lo más probable es que su número se haya incrementado considerablemente, tanto por efecto de la desestructuración de la economía campesina en donde las jóvenes generaciones buscan trabajo fuera de la unidad familiar y por lo mismo estaríamos en presencia de un nuevo proletariado, así como por el crecimiento de las familias sin tierra (dato no captado por el último censo agropecuario). Un ejemplo del primer caso es la formación de un proletariado étnico (indígena) en las plantaciones de flores de la Sierra ecuatoriana (Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Azuay, principalmente), fenómeno que muestra la creación de islotes de modernidad capitalista que tienen la ventaja de disponer de una oferta de mano de obra de las comunidades indígenas cercanas. Las transformaciones sociales, culturales que afectan a las familias de estos nuevos proletarios han sido recientemente estudiadas (Korovkin 2005), aunque no se ha investigado en profundidad los cambios demográficos y familiares⁶. Sobre el caso de las familias sin tierra, es decir, que ya hace dos o tres generaciones que no disponen de recursos, lo que se

6 Ver el artículo de Tanya Korovkin y Olga Sanmiguel en este mismo número de *Iconos*.

observa es un progresivo desplazamiento hacia las ciudades o pueblos cercanos a las plantaciones. Este es el caso de los asalariados rurales de la Costa vinculados a las plantaciones de banano, palma africana, palmito y otros productos de exportación. Nuestra investigación focalizada en la zona de La Maná (Martínez 2004), muestra la formación de un proletariado joven en una situación de precarismo estructural y sin mayores posibilidades de organizarse para poder paliar los sistemas de explotación e inseguridad en el trabajo predominantes en la zona.

Lo más inaudito de todo esto es que en el país no existen políticas específicas para los asalariados rurales, quienes para sobrevivir han desarrollado estrategias adaptativas a las formas de explotación que predominan en cada región. Así por ejemplo, una de las estrategias es implementar relaciones clientelares con pequeños o medianos productores para de este modo obtener mejoras coyunturales o favores personales. En el caso de grandes plantaciones, donde la relación capital-trabajo se ha vuelto difusa, lo importante es establecer buenas relaciones con el intermediario, lo que significa también someterse a patrones clientelares que muchas veces oscurecen los sistemas reales de explotación de la mano de obra. La ausencia del Estado en la regulación del mercado de trabajo genera estas formas flexibles de relación entre el trabajo y el capital, lo que permite la explotación incluso de la mano de obra infantil. En nuestro país, sólo la intervención de una ONG norteamericana pudo frenar y regular en parte el trabajo de los niños en las plantaciones bananeras, demostrando con ello el poco interés del gobierno, pero también de los sindicatos y de los empresarios en regular este tipo de trabajo⁷. La desregulación casi total

del mercado de trabajo rural es un factor estructural que incide en la pobreza rural de los asalariados.

El mercado de trabajo en el medio rural podría analizarse también como un campo social (Bourdieu 1997), en el que los empresarios agrícolas ocupan las posiciones más ventajosas, debido a su capital económico, los intermediarios o contratistas de mano de obra ocuparían una situación intermedia debido a su capital social (vínculos con los empresarios y trabajadores) y en la base estarían los asalariados rurales y campesinos pobres (sin capital económico, con muy bajo capital social y cultural). Un asalariado rural tiene pocas opciones para moverse en esta espesa estructura social, está condenado a sobrevivir ocupando las posiciones más inferiores dentro de este campo, donde las relaciones sociales están marcadas por el precarismo, la flexibilidad y la exclusión social. Únicamente se experimentarían cambios de posición como resultado de mayores procesos de concentración económica (tierra, capital y tecnología), la influencia y el peso de las decisiones empresariales por imponer sus estrategias sobre todo a través del capital tecnológico (Bourdieu 1995:58) y la degradación social de pequeños y medianos empresarios. Si dispusiéramos de información para el caso del mercado del banano, esta sería más o menos la situación.

Reflexiones sobre la pobreza rural a partir de lo local

Partimos del supuesto de que es más fácil atacar la pobreza rural a partir del nivel local o regional que desde las políticas públicas. Los pobres conforman un importante capital humano que no está aprovechado sino muy marginalmente a nivel local y regional. Si bien se puede manejar una idea errónea de que los pobres son una masa de mano de obra

⁷ Solo la intervención de Human Rights Watch llevó a la discusión el tema del trabajo infantil en las plantaciones de banano (Martínez 2004).

descalificada y sin opciones en el mercado de trabajo, esto no es tan ajustado a la realidad. Para empezar, los pobres provenientes de la desarticulación de la economía campesina (productores menores de 1 hectárea) son en realidad trabajadores pluriactivos y por lo tanto hace tiempo que han desarrollado destrezas en otras actividades (construcción, comercio, servicios, etc.) además del trabajo agropecuario. Esta es una ventaja que podría ser aprovechada a nivel local y extralocal. De hecho, la estrategia predominante ha sido deslocalizarse para poder subsistir, pero una relocalización significaría disponer de un valioso capital humano *in situ*. La condición es que existan fuentes de trabajo locales. El ejemplo de las plantaciones de flores muestra que allí donde se generan fuentes de trabajo, aunque en este caso la iniciativa provenga de un capital extra local, estos campesinos pobres eligen esta inserción aunque ello signifique un proceso de proletarización. En este caso, el trabajo asalariado es valorizado y visto como una fuente principal de los ingresos locales. La economía local evidentemente se reactiva aunque a costa del consumo de estos proletarios y se concentra perversamente en la ciudad más cercana y no en las comunidades que normalmente se transforman en dormitorios de estos trabajadores. No es que toda la riqueza generada por las plantaciones de flores se reinvierta a nivel local y regional, pero al menos el consumo de los trabajadores se queda en el espacio más avanzado de lo local. En este caso, al menos la pobreza de las comunidades colindantes de las plantaciones ha sido solucionada en parte, a pesar de que surgen nuevos problemas, como por ejemplo, la competencia con la mano de obra aún más barata, proveniente de la Costa o de Colombia y la desestructuración de las familias tradicionales campesinas (Korovkin 2004).

Para la masa de asalariados rurales, la situación es más crítica, porque deben movili-

zarse geográficamente hacia los lugares de oferta de trabajo. Normalmente estos trabajadores se asientan en ciudades dormitorio ubicadas estratégicamente en el *hinterland* de las plantaciones. Pero en tanto no se trata completamente de una mano de obra local, la masa salarial no se gasta completamente en los lugares de residencia que pueden ser transitorios y móviles. Esto solamente se cumplirá cuando una gran proporción de asalariados ha echado raíces con sus familias en esas ciudades. La transitoriedad es un elemento completamente negativo para la conformación de un mínimo de capital social que permita disminuir los duros sistemas de explotación de la mano de obra. La permanencia, en cambio, permitirá adquirir compromisos con el entorno local. Y dada la debilidad del estado en los sistemas de protección social y regulación del mercado de trabajo, el compromiso y solidaridad local es hoy por hoy el único camino para salir de la pobreza.

Finalmente, la pregunta central es si este problema de pobreza en estas dos dimensiones estudiadas tiene posibilidad de ser -en primer lugar- abordado y -luego- asumido por los gobiernos locales. Sería importante conocer si los nuevos proyectos PROLOCAL (Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local) al menos se han preguntado por estas opciones o si los gobiernos indígenas en donde se concentra la mayor parte de la población pobre consideran esta problemática en su agenda.

La carencia de activos productivos conduce normalmente a la pobreza, pero se ha especulado bastante sobre la potencialidad de otros activos, como los denominados por Boisier como “activos intangibles” (2002), entre los que se encontraría el capital social y las posibilidades de organizarse colectivamente para defenderse de las amenazas locales y extralocales. Para los pobres rurales analizados en este trabajo, sólo una estrategia territorial que posibilite pensar en un desarrollo endó-

geno sería un escudo eficiente, dada la carencia de activos productivos e incluso de los intangibles como el capital social. Reardon (2002), por ejemplo, señala el efecto desestabilizador de la globalización sobre empresas asociativas de pequeños productores de calzado en el Brasil. Igualmente en el país, esto ha sucedido con los productores de jeans de Pelileo, enfrentados a la producción china como efecto de la globalización. Pero los pobres ecuatorianos ni siquiera entran en este juego. Están fuera de él. Y seguramente se verán tarde que temprano envueltos en los flujos mundiales de mano de obra que dependen de las nuevas decisiones tecnológicas de las empresas transnacionales. La migración internacional en los espacios rurales de la Sierra sur del Ecuador debería ser analizada en la perspectiva de la inviabilidad de realizar inversiones productivas por parte de familias pobres que utilizan los pocos activos para salir fuera del país, descapitalizando coyunturalmente la parcela y la misma localidad.

Una estrecha colaboración entre estado, gobiernos locales y sociedad civil organizada se impone para que la pobreza rural no se limite a la pobretología y pueda ser asumida creadora y audazmente en los espacios en donde se encuentran los productores menores de 1 hectárea y los asalariados rurales. Pero, si no hay una decisión política de construcción de una sociedad menos desigual que implique una transformación rápida y profunda de las estructuras agrarias, la pobreza rural seguirá creciendo a pesar del esfuerzo del proyecto institucional y privado, de la ayuda al “codesarrollo”, de las propuestas centradas en el mercado y de los apoyos focalizados (tipo bonos de pobreza).

Bibliografía

- Bernard, Alain, 1982, “Diagnóstico socioeconómico del sector rural ecuatoriano”, MAG-IRD, documento, Quito.
- Boisier, Sergio, 2004, “Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente”, en *Eure*, Vol. 30, No. 90, Santiago.
- Bourdieu, Pierre, 2002, *Le bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn*, Editions de Seuil, Paris.
- Bourdieu, Pierre, 1997, “Le champ économique”, en *Actes de Recherche en Sciences Sociales*, N° 119, SEUIL, Paris, pp. 48-66.
- CEPAL- RIMISP- FAO, 2003, “La pobreza rural en América Latina: lecciones para una reorientación de las políticas”, Seminarios y conferencias No. 27, Santiago.
- CEPAL, 2005, Resultado del estudio “Los impactos diferenciados del tratado de libre comercio Ecuador-Estados Unidos de Norte América sobre agricultura del Ecuador”, unidad de desarrollo rural de la CEPAL- INEC, con el auspicio de FAO, UNDP y UNICEF.
- Jokisch, Brad y David Kyle, 2005, “Las transformaciones de la migración transnacional del Ecuador, 1993-2003”, en Gioconda Herrera, María Cristina Carrillo y Alicia Torres, editoras, *La migración ecuatoriana. Transnacionalismo, redes e identidades*, FLACSO-Plan Migración Comunicación y Desarrollo, Quito.
- Korovkin, Tanya, 2004, “Globalización y pobreza: los efectos sociales del desarrollo de la floricultura de exportación”, en Tanya Korovkin, compiladora, *Efectos sociales de la globalización. Petróleo, banano y flores en Ecuador*, CEDIME, Abya Yala, Quito.
- Martínez, Luciano, 2004, “Trabajo flexible en nuevas zonas bananeras de Ecuador”, en Tanya Korovkin, compiladora, *Efectos sociales de la globalización. Petróleo, banano y flores en Ecuador*, CEDIME, Abya Yala, Quito.
- Martínez, Luciano, 2000, “El programa nacional de desarrollo rural (PRONADER): las lecciones aprendidas”, Flacso, mimeo.
- Martínez, Luciano y Alex Barril, 1995, *Desafíos del desarrollo rural frente a la modernización económica, s.e.*, Quito.
- Striffler, Steve, 2002, *In the shadows of the State and Capital. The United Fruit Company. Popular Struggle and Agrarian Restructuring in Ecuador, 1900-1995*, Duke University Press, Duke.
- Oyen, Else, 2002, “Social capital formation: A poverty reducing strategy?” en *Social Capital and Poverty Reduction*, UNESCO, Francia.
- Pages, Alexandre, 2005, *La pauvreté en milieu rural*, Press Universitaires de Mirail, Toulouse.
- Reardon, Thomas, 2003, “Desafío de la lucha contra la pobreza rural en la economía globalizada de América Latina: instituciones, mercados y proyectos”, en CEPAL- RIMISP- FAO, *La pobreza rural en América Latina: lecciones para una reorientación de las políticas*, Serie 27, Seminarios y conferencias, Santiago.

La diversificación de los ingresos rurales en Bolivia

Diversification of income in rural Bolivia

Elizabeth Jimenez Zamora
Doctora Desarrollo Económico y Economía Laboral
University of Notre Dame, EEUU

Email: ejimeneza@entelnet.bo

Fecha de recepción: febrero 2007
Fecha de aceptación y versión final: julio 2007

Resumen

Contra a lo que generalmente se asume, este artículo demuestra que los ingresos de las unidades productivas familiares en el área rural de Bolivia se encuentran altamente diversificados. Las estimaciones para el año 2002 (los últimos datos disponibles) revelan que el ingreso familiar proveniente de la producción agropecuaria y por subproductos representa solamente un 52% de los ingresos totales.

Este estudio demuestra que resolver la “cuestión agraria” en Bolivia ha dejado de ser un problema exclusivamente agropecuario. El desarrollo de actividades independientes y la participación en mercados de trabajo asalariado son sin duda actividades que deberán ser consideradas en la identificación de políticas orientadas a la reactivación económica de este sector.

Palabras clave: Ingreso, diversificación del ingreso, empleo, migración, ruralidad, Bolivia.

Abstract

Contrary to what it is generally assumed, this essay finds that rural household income in Bolivia is highly diversified. Estimations for 2002 reveal that only 52% of a rural household income comes from agricultural activities inside the farm. The study shows that the “agrarian question” in Bolivia is no longer exclusively and agricultural issue. The development of independent activities and the apparently institutionalized participation in periodic wage markets reflect the need to go beyond strictly agricultural policies.

Keywords: Income, Income Diversification, Employment, Temporary Migration, Rural, Bolivia.

Antecedentes, justificación y planteamiento del problema

El rol económico del sector agropecuario de pequeña y mediana escala en Bolivia ha sido generalmente subestimado. Este es el caso de las unidades familiares productivas rurales del occidente boliviano, que generalmente son caracterizadas como de “subsistencia” y cuya participación en mercados internos y externos ha sido subestimada. Este ensayo tiene como objetivo principal contribuir a comprender mejor el actual rol del sector rural de pequeña escala, a través del análisis de la composición y los determinantes de los ingresos familiares rurales.

El grado y características de la diversificación de los ingresos familiares rurales refleja el grado de dependencia de las familias con respecto a las actividades agropecuarias generadas versus aquellas otras actividades generadas en otros sectores secundarios. El empleo asalariado en el sector de la construcción o en el sector de servicios (empleadas domésticas, por ejemplo) o el desarrollo de actividades de comercialización y venta de productos, reflejan formas de diversificación de los ingresos familiares rurales que van más allá de la participación en actividades estrictamente agropecuarias y desarrolladas dentro de la unidad productiva familiar. Si, como generalmente se asume, la producción de una gran mayoría de unidades productivas en el altiplano boliviano es de “subsistencia”, se esperaría encontrar que una significativa proporción de sus ingresos familiares provenga de actividades estrictamente de producción y comercialización agrícola, pecuaria y de subproductos. Si, por el contrario, los ingresos familiares por la percepción de salarios, por ejemplo, o por el desarrollo de actividades independientes (tiendas, rescate y comercialización de productos, etc.) son significativamente altos, se podría cuestionar el grado de subsistencia y desarti-

culación como principales razones del estancamiento económico de estas economías.

¿Hasta qué punto los hogares rurales dependen de la producción agropecuaria desarrollada dentro de sus unidades productivas familiares? ¿Cuáles son las fuentes alternativas de ingresos rurales? ¿Qué factores determinan el acceso a otras fuentes de ingresos? ¿Qué rol tiene la creciente participación de la mano de obra rural en mercados de trabajo asalariado? Responder a estas preguntas ayuda a comprender mejor el desenvolvimiento de las economías rurales de pequeña escala y las restricciones a su crecimiento.

Marco teórico

Tradicionalmente, el término “agricultura de subsistencia” ha sido usado para describir la producción orientada únicamente a llenar los requerimientos de consumo familiar, en lugar de responder a un comportamiento guiado por los incentivos de mercado. Estudios en economías en desarrollo confirman que aún las más aisladas y aparentemente desarticuladas comunidades campesinas participan activamente en procesos de comercialización (González de Olarte 1999). Por otro lado, la migración temporal y la participación en mercados de trabajo remunerado parecen también ser una característica muy importante -y poco estudiada- de las estrategias de diversificación de los ingresos adoptadas por estas economías (Jiménez 1999).

La diversificación de los ingresos rurales familiares abarca varias actividades, incluyendo el acceso a ingresos por salarios provenientes de la frecuente participación de la mano de obra en mercados de trabajo asalariado, el desarrollo de actividades independientes (negocios o tiendas familiares, por ejemplo) y el acceso a remesas, rentas y otros ingresos de fuera de las actividades agropecuarias. La estrategia de complementación de diversas

fuentes de ingresos adoptada por la mayoría de las unidades familiares agropecuarias parece ser la forma más eficiente de diversificar los riesgos e incertidumbre asociados con un sector agrícola de bajos rendimientos y escala de producción reducida, y un conjunto de oportunidades limitadas y empleos inestables en el mercado de trabajo¹.

Investigaciones en este tema han examinado la importancia de lo que se llama ingreso rural no agrícola (IRNA) definido como “aquel generado por los habitantes rurales a través del autoempleo o el trabajo asalariado en los sectores secundario y terciario de la economía” (Berdegú *et.al.* 2000:2). Otra forma de examinar el grado y características de diversificación de los ingresos rurales familiares es diferenciando los ingresos provenientes de actividades agropecuarias dentro de la unidad productiva de aquellos provenientes fuera de ésta.

Desde esta perspectiva, el objetivo de este artículo es examinar hasta qué punto las unidades productivas rurales han dejado de ser “autosuficientes” y mostrar el grado de articulación de éstas con otros sectores productivos. Este enfoque es particularmente útil en economías caracterizadas por unidades familiares productivas que usan mano de obra familiar y cuando se quiere cuestionar el grado de “desarticulación” económica de este sector con el resto de la economía.

Estudios sobre el empleo y los ingresos rurales no-agrícolas enfatizan la importancia de éstos al caracterizarlos como la solución de al menos tres grandes problemas del mundo rural latinoamericano: la pobreza, la transformación del sector agropecuario y la modernización del mundo rural (Berdegú *et.al.*

2001). Desde esta perspectiva, cuanto más moderno y competitivo es el sector agro-rural, más importantes son las actividades secundarias y terciarias en la composición del PIB rural (Berdegú *et.al.* 2001). Sin embargo, este no es necesariamente el caso en economías donde una gran parte de los empleos no rurales disponibles para la mano de obra rural son precarios e inestables y no están asociados al desarrollo de un sector de servicios agrícola estable y competitivo. En efecto, estudios en Bolivia confirman la importancia de la integración laboral de la mano de obra rural a mercados de trabajo asalariado, pero también muestran el alto grado de inestabilidad e inseguridad económica asociados al tipo de empleos a los que la mano de obra rural puede acceder debido a su limitada capacitación (Jiménez 1999). Desafortunadamente, no existen estudios empíricos sobre el grado de estabilidad económica asociado con otras actividades independientes desarrolladas en el área rural, como actividades de “rescate”, transformación y comercialización de productos agropecuarios. Lo que es importante notar es que, en el caso boliviano, el incremento del empleo e ingresos rurales no agrícolas no está necesariamente asociado con una transformación productiva estable de este sector y, por lo tanto, una mayor diversificación de los ingresos rurales no necesariamente refleja mejoras en el nivel de bienestar económico de las familias.

Metodología

El desempeño económico de una unidad familiar productiva puede ser aproximadamente medido a través de su ingreso neto, definido como el ingreso bruto de todas las actividades en las que participa la unidad familiar, menos los costos incurridos en las mismas. A su vez, el ingreso neto total de la unidad familiar tiene cuatro componentes fundamentales:

1 Debe notarse, sin embargo, que una eficiente estrategia de diversificación y “sobrevivencia” no es necesariamente sostenible en el tiempo y que tampoco es una buena medida del grado de bienestar económico de los actores. Para un análisis detallado sobre estas estrategias ver Jiménez (1999).

$$Y_{TOTAL} = Y_{\text{Agropecuaria}} + Y_{\text{salarios}} + Y_{\text{actividades independientes}} + Y_{\text{Otros}}$$

Aquí, el ingreso familiar neto (YNETO) es igual a la suma de 1) el ingreso neto agropecuario, 2) el ingreso por salarios proveniente de la participación de algunos miembros familiares en actividades asalariadas, 3) el ingreso proveniente de actividades independientes no-agropecuarias, tales como una tienda o negocio, y 4) otros ingresos, que incluye rentas, remesas e ingresos por utilidades, entre otros.

La metodología estándar para estimar los determinantes de los ingresos salariales fue inicialmente propuesta por Mincer (1963) a través de lo que se conoce como funciones mincerianas de los ingresos. En este enfoque, la variable dependiente está representada por el logaritmo del ingreso, y las variables independientes constituyen el grupo de factores asociados a la productividad individual de la mano de obra y que influyen en la determinación del crecimiento de los ingresos. El análisis de interrelación de los ingresos rurales se desarrollará identificando la relación entre las cuatro fuentes de ingreso: es a través de la estimación de probabilidades condicionales P_{ij} que reflejan la probabilidad de que la unidad familiar tenga un ingreso "j" dado que su más importante fuente de ingresos es el ingreso "i". En este ejercicio se clasifican a los hogares de acuerdo a su primera y segunda fuentes más importante de ingresos².

Este estudio utilizará la base de datos de la encuesta MECOVI³ correspondientes al 2002 y comparará algunos de los resultados con los obtenidos utilizando la encuesta Línea de Base MAPA 2002 desarrollada en el área rural de Bolivia⁴.

Composición de los ingresos familiares rurales

El promedio de ingresos anuales de una unidad familiar en el área rural para el año 2002 es de US \$ 1.206 (Tabla No. 1) que se traduce en un ingreso per cápita anual de US \$ 278 y un ingreso per cápita mensual de US \$ 23,16.⁵ Los substancialmente bajos niveles de

2 Mayores detalles sobre la metodología empleada en los cálculos se encuentra en Jimenez (2003).

3 La encuesta MECOVI 2000 (Medición de las Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe) en Bolivia fue ejecutada a nivel nacional por el INE (Instituto Nacional de Estadística) y es la última encuesta en la que se incluyó un módulo rural dirigido a la identificación de los ingresos familiares en poblaciones rurales de Bolivia.

4 La Encuesta de Línea Base MAPA fue auspiciada por el proyecto MAPA en Bolivia (Market Access and Poverty Alleviation). La encuesta abarcó a 121 municipios y 6 departamentos y fue desarrollada entre junio y julio del 2002. Mayor información en: "Encuesta Línea de Base: Características de los Hogares Rurales en Bolivia: Valles, Altiplano y Yungas", 2002.

5 Se considera un tipo de cambio de 6.83 y un tamaño de hogar promedio de 4.34, que es el obtenido de la base de datos MECOVI 2002.

Tabla No. 1
Nivel y composición de los ingresos familiares rurales

	Ingreso total	Ingreso por actividades	Ingreso por salarios	Ingreso por actividades independientes	Otros ingresos
Ingreso del Hogar Anual (En Bs)	8237.574	4238.338	2000.67	1163.683	834.8837
Ingreso del Hogar Anual (En U\$)	1206.09	620.55	292.92	170.38	122.24
Ingreso per-cápita (En U\$)	277.90	142.98	67.49	39.26	28.17

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MECOVI 2002

Tabla No. 2
Nivel y composición de los ingresos familiares rurales

	Total hogares	Región		
		Valles	Altiplano	Yungas
Ingreso del Hogar (En Dólares)	1,258	1,444	858	1,526
Ingreso del Hogar (En Bolivianos)	8,590	9,864	5,861	10,420
Estructura Porcentual (%)				
Ingresos agropecuarios y por subproductos	37.2	36.44	35.75	43.21
Ingresos por salarios	36.25	37.22	39.90	22.68
Ingresos por actividades independientes	17.81	17.68	13.41	27.74
Otros Ingresos	8.92	8.65	10.94	6.37

Fuente: Elaboración propia en base a datos Encuesta Línea de Base MAPA 2002

ingresos encontrados por la encuesta MECOVI 2002 son consistentes con los niveles calculados a partir de la Encuesta Línea de Base MAPA 2002, donde el ingreso promedio per cápita anual llegaba a US \$ 258. Esto se refleja en un ingreso per cápita mensual de US \$ 21.5 (Tabla No. 2).

Los bajos niveles de ingresos reflejados en estas cifras ratifican la presencia de bajos niveles de vida y pobreza en la población rural boliviana. Sin embargo, y contrariamente a lo que generalmente se asume, el ingreso familiar se origina en varias fuentes reflejando así estrategias efectivas de diversificación de los ingresos familiares rurales. Así, en promedio, el ingreso familiar proveniente de la producción agrícola, pecuaria y por elaboración de subproductos dentro de la unidad productiva representa solamente un 52% del ingreso total (Tabla No.1). Es decir, sólo un 50% de los ingresos familiares provienen de actividades agropecuarias estrictamente desarrolladas dentro de las unidades productivas familiares. El restante 50% proviene de tres fuentes im-

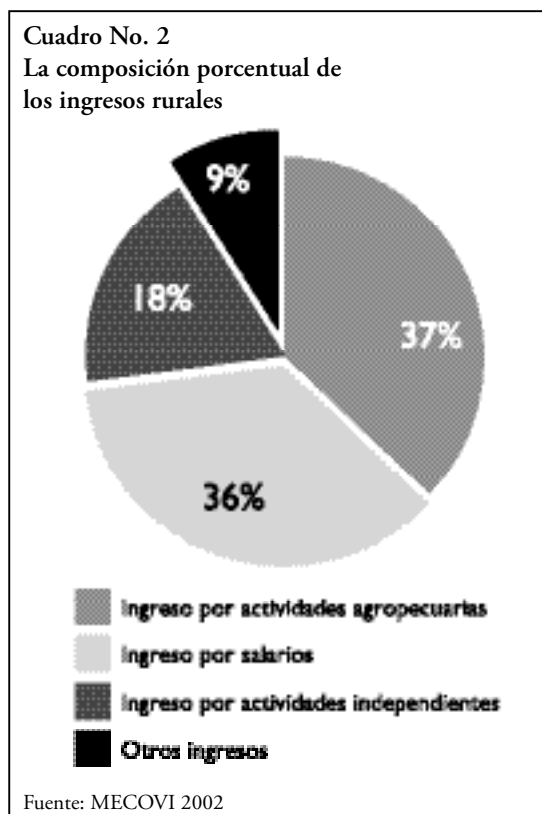
Cuadro No. 1
La composición de ingresos rurales



Fuente: MECOVI 2002

portantes: 1) ingresos percibidos por la venta de la mano de obra y la percepción de salarios⁶, 2) ingresos derivados de actividades independientes no agropecuarias, que incluyen negocios, tiendas, etc. y 3) otros ingresos, tales como remesas, utilidades y rentas, entre

⁶ No incluyen transacciones de mano de obra no-monetarias, tales como minkas, aynis y yanapakunas, muy frecuentes en poblaciones rurales bolivianas.



otros. Es importante destacar que la más importante fuente de ingresos alternativos son los ingresos provenientes de la percepción de salarios que alcanzan el 24% de los ingresos totales (Gráfico No. 1).

Las diferencias en la composición de los ingresos rurales familiares en el altiplano, valles y llanos no parecen ser tan marcadas. En efecto, el ingreso dentro de la UPA constituye el 52% del ingreso total en el altiplano, el 55% en los valles y el 46% en los llanos. Sin embargo, en el caso de la contribución de los ingresos por salarios, las diferencias son mayores. Así, mientras en el altiplano los ingresos provenientes por salarios constituyen 18% del total del ingreso familiar, en los valles la contribución de los salarios llega al 21% y en los llanos al 35%. ¿Cómo se explican estas diferencias?

Como se analizará más adelante, en el caso de los ingresos por salarios, es importante notar que estos parecen reflejar diferentes actividades

y formas de participación laboral en cada una de las tres regiones ecológicas de Bolivia. Así, se podría especular que en los valles y llanos, los ingresos por salarios podrían reflejar la integración "a tiempo completo" de algunos miembros de familia en actividades asalariadas, en empleos tales como maestros de escuelas locales, funcionarios de la prefectura o trabajadores de algún proyecto de desarrollo local. En el altiplano, en cambio, estos ingresos parecen provenir principalmente de migraciones temporales y empleos tales como peones, trabajadores de la zafra y cargadores, entre otros.

La incidencia de los ingresos por salarios en la composición de los ingresos familiares totales es aún mayor, cuando se utiliza la base de datos recolectada por el Encuesta MAPA 2002, donde el ingreso por salarios llega a alcanzar 36% de los ingresos familiares totales. Esta misma base de datos revela que el ingreso proveniente de la producción agrícola, pecuaria y por elaboración de subproductos dentro de la UPA representa solamente un 37% del ingreso total, es decir, sólo un punto más que los ingresos por salarios⁷ (Gráfico No. 2). En otras palabras, los ingresos agropecuarios y los ingresos por la percepción de salarios tienen la misma importancia dentro de la composición de los ingresos familiares⁸.

7 La incidencia de los ingresos por salarios es aún mayor en el altiplano donde los ingresos por salarios representan 38% de los ingresos totales, mientras que los ingresos agropecuarios sólo llegan 37%. En los valles, los ingresos por actividades agropecuarias son mayores que los ingresos por salarios, mientras que en los yungas los ingresos por salarios apenas llegan al 10% del total del ingreso del hogar.

8 Como se verá más adelante, una primera explicación de las diferencias encontradas en el uso de estas dos bases de datos es que las encuestas MECOVI no captan apropiadamente el flujo de ingresos por conceptos de salarios que pueda percibir una unidad familiar rural a lo largo del año y, por tanto, pueden subestimar parcialmente la contribución de estos. La mayor incidencia de los ingresos por salarios de la encuesta MAPA seguramente refleja el hecho de que esta encuesta ha podido captar de mejor manera el flujo de ingresos asalariados durante todo el año de referencia.

Diferencias en los niveles y en la composición de los ingresos

Como ya se había anotado, parecen existir fuertes diferencias en el comportamiento de los ingresos agropecuarios en las tres zonas ecológicas. En particular, las diferencias encontradas entre las unidades productoras del altiplano y el resto del país parecen ser substanciales y altamente significativas. La Tabla No. 3 resume algunas de las más importantes características de la producción de las unidades familiares del altiplano y las compara con las unidades familiares del resto del país. Las sustanciales diferencias y el alto grado de significancia estadística de estas comprueban la necesidad de analizar los determinantes de los ingresos para cada región.

En efecto, en el altiplano las familias tienen un ingreso total que sólo llega a dos tercios del ingreso total familiar en los valles y llanos. Con excepción de los ingresos provenientes de actividades independientes, la desventaja de las familias del altiplano es consistente en todos y cada uno de los componentes de los ingresos familiares. Es decir, en promedio, las familias del altiplano tienen menores ingresos agropecuarios, perciben menores ingresos por salarios y acceden a menores ingresos de otras fuentes⁹. Es importante también notar que, de acuerdo a estos resultados, hay más unidades familiares productoras indígenas en el altiplano, que en el resto del país

⁹ "Otros ingresos" incluyen rentas, alquileres y remesas, entre otros.

Tabla No. 3					
Diferencias entre unidades familiares rurales del Altiplano y del resto del país					
	Altiplano	Resto	Diferencia	t	
Ingresos familiares (anuales y en Bs.)					
Ingreso total	7090.48	10921.67	- 3831.19	6.24	*
Ingreso agropecuario	3039.70	4776.18	- 1736.48	3.95	*
Ingresos por salarios	1713.76	3311.69	- 1597.93	5.97	*
Ingresos por actividades independientes	1623.55	1634.31	- 10.76	0.04	
Otros Ingresos	713.46	1199.49	- 486.03	2.09	*
Características del hogar					
Tamaño del hogar	3.96	4.61	- 0.65	6.66	*
Varones > 7 años	1.76	1.99	- 0.23	4.64	*
Mujeres > 7 años	1.83	1.92	- 0.10	2.13	*
Madre indígena	0.78	0.43	+ 0.35	18.59	*
Escolaridad del Jefe de Familia	5.07	4.51	+ 0.56	3.35	*
Escolaridad de los 3 mayores miembros de familia	11.31	11.27	+ 0.04	0.91	
Características de la producción					
Número de subproductos	1.48	1.40	+ 0.08	1.17	
Costo total	182.15	986.85	- 804.70	5.86	*
Porcentaje de producción destinado a la venta	0.19	0.29	- 0.09	7.49	*
Pérdidas de la cosecha y desastres	0.15	0.28	- 0.14	8.04	*
Acceso a crédito	0.04	0.08	- 0.04	3.59	*
Número de cultivos	2.33	2.54	- 0.21	2.45	*
Fuente: Elaboración propia en base a datos de MECOVI 2002					

Las diferencias en las características de la producción son también profundas y significativas. Así, es en el altiplano donde se destina una menor parte de la producción a la venta, se sufren las mayores pérdidas de la cosecha y se tiene un menor acceso a crédito. Estos resultados ratifican la presencia de un alto grado de vulnerabilidad económica y la falta de mecanismos formales para reducir los impactos negativos de los riesgos climatológicos que caracterizan a las economías agrarias del altiplano boliviano.

Otra forma de diferenciar las características y composición de los ingresos familiares rurales, es a través de la identificación de la primera o más importante fuente de ingresos familiares. En general se tiende a asumir que la más importante fuente de ingresos familiares de las unidades productivas rurales constituyen las actividades agropecuarias desarrolladas dentro de la unidad familiar de producción. Sin embargo, sólo 53% de la población de este estudio se encuentra en esta categoría. Para un 21.2% de los hogares, los ingresos por salarios son la más importante fuente de ingresos, mientras que, cerca del 13% tiene como fuente principal a actividades independientes no asociadas con la producción agropecuaria de su unidad familiar. Es decir, no solamente que el ingreso agropecuario ha dejado de ser la única fuente de ingresos familiares, sino que también para casi el 50% ha dejado de ser la fuente más importante.

Un análisis comparativo de las unidades familiares agrupadas por fuente principal de ingresos revela importantes características. Para comenzar, las familias cuya primera fuente de ingresos son las denominadas “actividades independientes” son las que, en promedio, tienen los mayores ingresos familiares. Les siguen aquellas familias cuya fuente principal es el ingreso por salarios, compartiendo un promedio de ingresos familiares muy cercano a las primeras. Las familias para quienes la fuente principal de sus ingresos son las ac-

tividades agropecuarias tienen, en promedio, un ingreso familiar que es cerca de la mitad del que perciben los dos anteriores grupos.

Es muy importante también notar que pese al alto grado de diversificación de los ingresos familiares rurales, cerca del 50% de esas familias, que además tienen los más bajos niveles de ingresos del área rural, siguen teniendo como fuente principal los ingresos agropecuarios. Los resultados observados para el año 2002 demuestran que, en promedio, el 80% de los ingresos familiares de estas familias provienen de sus actividades agropecuarias familiares (Gráfico No. 3). Es decir, tienen una fuerte dependencia sobre la producción agropecuaria familiar. En general, estas cifras revelan que en Bolivia la “especialización agropecuaria” es todavía predominante, pero aparentemente no es la más rentable alternativa.

Cuadro No. 3
Composición de los ingresos familiares para familias cuya primera fuente de ingresos son los ingresos agropecuarios



Fuente: MECOVI 2002

Análisis de los determinantes de los ingresos rurales familiares

Una forma de poder identificar los factores que determinan la diversificación de los ingresos es a través de la estimación de los determinantes de las funciones de ingresos familiares. Los datos recolectados en la encuesta MECOVI proveen suficiente información para la estimación de las funciones de ingresos agropecuarios y de ingresos por salarios. En ambos casos, la variable dependiente es el logaritmo natural de los ingresos, por lo que la función identifica los determinantes de la tasa de crecimiento de los ingresos agropecuarios y por salarios, en lugar de medir el valor absoluto de los mismos. Considerando todas las restricciones que caracterizan la interpretación de estas funciones, los resultados arrojados revelan importantes características en la determinación de los ingresos familiares rurales.

Los determinantes de los ingresos agropecuarios

Los resultados de la estimación de la función de ingresos agropecuarios familiares (Tabla No. 4) son hasta cierto punto esperados. El porcentaje de la producción vendida y el número de cultivos reportados se han considerado para reflejar las características de la producción y destino de la producción agrícola que pueden ser utilizadas como parámetros del grado de "subsistencia" de las unidades de producción familiar. Por otro lado, se asume que el acceso a otras fuentes de ingresos son variables susceptibles de ser modificadas a través de políticas que incentiven fuentes de ingresos adicionales. La variable etnicidad de la madre o jefa de familia trata de captar las características étnicas de la unidad familiar.¹⁰

Las estimaciones reflejan que los dos factores de producción, tierra y mano de obra familiar¹¹ son variables estadísticamente significativas y están positivamente relacionadas con un crecimiento en los ingresos agropecuarios. Por lo tanto, a mayor tierra cultivada y a mayor acceso a mano de obra familiar, mayor incremento en los ingresos agropecuarios. Como era de esperarse, los costos incurridos en la producción también se encuentran positivamente relacionados con un incremento en los ingresos, por lo que un crecimiento en los ingresos implicaría un incremento en los costos de producción.

¿Qué otros factores determinan un crecimiento positivo en los ingresos agropecuarios? O en otras palabras, ¿cómo se pueden incrementar los ingresos agropecuarios familiares? La respuesta a esta pregunta es clara: la diversificación y la mayor comercialización de la producción son las dos formas más directas de incrementar estos ingresos. La función de ingresos estimada identifica claramente dos variables que reflejan esta tendencia: 1) la producción de subproductos agropecuarios y 2) el porcentaje de la producción destinado a la venta. Las dos variables son estadísticamente significativas y se encuentran positivamente relacionadas con un incremento en los ingresos. Los resultados, por tanto, reflejan que a mayor comercialización mayores ingresos, y que la diversificación de la producción más significativa es la orientada a la producción y comercialización de subproductos que son, entre otros, leche, quesos, mermeladas, chicha y cueros.

10 El supuesto implícito es que la etnicidad de la madre o jefa del hogar es una variable que puede reflejar el grado de etnicidad de una familia.

11 Definida como varones y mujeres mayores a 7 años.

Tabla No. 4				
Determinantes de los ingresos familiares agropecuarios				
Factores de Producción	Coeficiente	t		Relación Esperada
Superficie de tierra cultivada	0.07	2.26	*	Positiva
Número de varones (>7años)	0.07	2.98	*	Positiva
Número de mujeres (>7años)	0.08	3.04	*	Positiva
Padre Indígena (dummy)	-0.14	-1.44		Indeterminada
Madre Indígena (dummy)	-0.10	-0.99		Indeterminada
Variables de Política				
Acceso a ingresos por salarios	-0.36	-4.48	*	Indeterminada
Subproductos agropecuarios	0.22	7.63	*	Positiva
Costos de la producción	0.00	2.37	*	Positiva
Porcentaje de la producción destinada a la venta	1.05	7.03	*	Positiva
Pérdidas de la cosecha y desastres naturales (dummy)	-0.04	-0.67		Negativa
Acceso a crédito (dummy)	0.06	0.51		Positiva
Número de cultivos	0.05	1.96	*	Positiva
Variables Condicionantes				
Altiplano (dummy)	0.03	0.18		Indeterminada
Valles (dummy)	-0.09	-0.67		Indeterminada
Constante	6.79	34.08		
Observaciones		1627.00		
R2		0.36		
Fuente: Elaboración propia en base a datos MECOVI 2002.				

De acuerdo a los resultados obtenidos, la diversificación de los cultivos no está relacionada con un incremento de los ingresos. En realidad, éste es el comportamiento esperado en economías donde las decisiones de producción priorizan las necesidades de autoconsumo y donde producir mayor variedad de cultivos resulta de prácticas orientadas a reducir riesgos y asegurar el consumo familiar, en lugar de reflejar cambios en las oportunidades de mercado.¹²

Lo que es muy importante notar es la relación negativa que se presenta entre un crecimiento en los ingresos agropecuarios y el acceso a ingresos por salarios. Dicho de otra

forma, la participación en mercados de trabajo asalariado disminuye el crecimiento en los ingresos agropecuarios. Este efecto puede responder a varias causas y la interpretación final depende de un cuidadoso análisis del tipo de empleos a los que accede la mano de obra rural y, por tanto, de las características de la integración laboral de la mano de obra rural.

12 Varios estudios andinistas han demostrado las eficientes estrategias de mitigación y reducción de riesgos a través de la diversificación de los cultivos y de los tipos de cultivos. Así, por ejemplo, las prácticas de plantar varios tipos de semillas de papas en una misma parcela responden a la lógica de asegurar por lo menos un mínimo de producción frente a los riesgos de helada, granizada o sequía.

Así, los ingresos por salarios pueden derivar de la migración temporal de algunos miembros de la familia que desarrollan viajes cortos a lo largo del año y se emplean en trabajos temporales tales como cargadores, albañiles, peones agrícolas o trabajadores en la zafra, entre algunas de las ocupaciones encontradas. En este caso, la relación negativa entre ingresos por salarios e ingresos agropecuarios podría reflejar el costo de oportunidad de la mano de obra rural y, por lo tanto, los efectos negativos de la ausencia de mano de obra familiar sobre la producción agropecuaria como resultado de la creciente integración laboral de la mano de obra rural.

Sin embargo, no todos los ingresos por salarios provienen de este tipo de integración,

es decir, no toda la mano de obra rural accede a ingresos salariales a través de migraciones temporales. Particularmente, en poblaciones más grandes, municipios y capitales de provincias, los ingresos por salarios provienen de empleos estables en el sector público, municipios o proyectos de desarrollo, entre otras fuentes de empleo local. En este caso, se podría deducir que los efectos negativos de la mayor integración asalariada sobre los ingresos agropecuarios reflejan de cierta forma una “elección” entre estas dos formas de ingresos. Es decir, existen familias para quienes la actividad agropecuaria es secundaria mientras que, para otras, las actividades asalariadas son las secundarias por lo que priorizan sus actividades agropecuarias.

Tabla No. 5				
Determinantes de los ingresos por salarios en hogares rurales				
Factores de Producción	Coefficiente	t		Relación Esperada
Superficie de tierra cultivada	0.01	1.24		
Número de varones (>7años)	0.18	3.04	*	Positiva
Número de mujeres (>7años)	-0.13	-1.74		Positiva
Escolaridad del jefe de familia	0.03	1.10		Indeterminada
Escolaridad de los 3 mayores miembros de la familia	0.04	2.57	*	Indeterminada
Padre Indígena (dummy)	-0.02	-0.12	*	Positiva
Madre Indígena (dummy)	-0.31	-1.86	*	Positiva
Variables de Política				
Actividades independiente/negocio	-0.32	-1.93	*	Indeterminada
Acceso a otros ingresos	-0.14	-0.93	*	Indeterminada
Pérdidas de la cosecha y desastres naturales	-0.49	-2.87	*	Indeterminada
Variables Condicionantes				
Altiplano	-0.03	-0.14		Indeterminada
Valles	0.01	0.06		Indeterminada
Constante	7.72	34.36		
Observaciones		666.00		
R2		0.30		
Fuente: Elaboración propia en base a datos MECOVI 2002				

Los determinantes de los ingresos por salarios

Tal como se ha visto, la fuente más importante de los ingresos alternativos es el ingreso por salarios, que en el 2002 llega a constituir 24% del ingreso total familiar. En otras palabras, cerca de un tercio del ingreso total familiar proviene de la participación asalariada de algunos de sus miembros. La importancia de este ingreso es indudable. En esta parte del estudio se identificarán las características de la oferta, es decir, los factores de la unidad familiar que están asociados con mayores ingresos salariales y que determinan el acceso familiar a esta fuente de ingresos.

En el caso de las variables determinantes de los ingresos por salarios, la suma de los años de escolaridad de los tres mayores miembros de familia ha sido tomada como parámetro que mide el grado de inversión en capital humano familiar. La función de ingresos por salarios estimada (Tabla No. 5) demuestra que hay dos variables fundamentales que están positivamente asociadas con un crecimiento en los ingresos por salarios: 1) el acceso a mano de obra familiar, fundamentalmente, masculina y 2) el grado de capital humano familiar, medido por el nivel de escolaridad alcanzado por los tres mayores miembros de la familia. Las estimaciones confirman que en Bolivia las oportunidades de trabajo asalariado están sesgadas hacia los hombres, por lo que una mayor fuerza laboral femenina dentro del hogar contribuye negativamente a un crecimiento de los ingresos por salarios. Dicho de otra forma, los hombres salen en busca de empleo y las mujeres se van responsabilizando cada vez más de las actividades agropecuarias dentro de la unidad familiar productiva.

La interdependencia de los componentes del ingreso rural familiar

Una de las primeras conclusiones del anterior análisis es que, en Bolivia, la predominancia de los ingresos agropecuarios familiares es característica de las familias rurales más vulnerables. Para identificar los factores que determinan la predominancia de una fuente de ingresos sobre otra, se han agrupado a las familias por primera y segunda fuente de ingresos. Los datos reflejan que más de la mitad de las familias de este estudio (57%) tienen acceso, por lo menos, a una segunda fuente de ingresos. Para aquellas familias cuya primera fuente de ingresos proviene de las actividades agropecuarias, la mayor probabilidad es que los ingresos caracterizados como “otros ingresos” constituyan su segunda fuente de ingresos. En cambio, para aquellas familias cuya primera fuente de ingresos son los salarios, hay una alta probabilidad de que las actividades agropecuarias, constituyan su segunda fuente de ingresos.

La pregunta relevante es: ¿qué factores determinan la primera y segunda fuente de ingresos? Para poder contestar a esta pregunta se ha estimado un modelo multilogit en el que se identifica los determinantes de las probabilidades. Los resultados reflejan que el más significativo factor que determina la “especialización agropecuaria” de las unidades familiares, es decir, que incrementa la probabilidad de que la primera fuente de ingresos sean las actividades agropecuarias, es el porcentaje de la producción destinado a la venta¹³.

En el caso de los ingresos por salarios, a mayor superficie de tierra cultivada, menor probabilidad de que la primera fuente de ingresos sean los salarios, lo que confirma anteriores observaciones de este estudio. El factor más determinante en la probabilidad de que

13 Una presentación detallada de estos resultados puede encontrarse en Jimenez (2003).

la primera fuente de ingresos familiares sean los salarios, es el capital humano familiar, definido como los años de escolaridad de los tres mayores miembros de la familia. La misma relación se observa en el caso de la probabilidad de que la primera fuente de ingresos sean las actividades independientes, es decir, a mayor capital humano familiar, mayor probabilidad de que la primera fuente de ingresos sean los obtenidos a través de actividades independientes. El capital humano es entonces una de las más importantes variables explicativas de la priorización de los ingresos por salarios e ingresos por actividades independientes.

Es importante notar el rol de la variable "tierra cultivada" en la determinación de los ingresos rurales familiares. La extensión de tierra cultivada no tiene ninguna influencia significativa en la priorización de los ingresos agropecuarios sobre otras fuentes. Sin embargo, existe una relación inversa entre la extensión de tierras cultivadas y la priorización de los ingresos por salarios e ingresos por actividades independientes. Así, a mayor extensión de tierra cultivada, menor probabilidad de que la primera fuente de ingresos sean los ingresos por salarios o los ingresos derivados de actividades independientes.

Conclusiones

Sin duda, uno de los más sorprendes resultados de esta investigación es el alto grado de diversificación de los ingresos familiares rurales. En efecto, y de acuerdo a los datos de la MECOVI 2002, en promedio, el ingreso familiar proveniente de la producción agrícola, pecuaria y por subproductos representa solamente 52% de los ingresos totales. El restante 48% está constituido por ingresos provenientes por la percepción de salarios, actividades independientes y otros ingresos. La importancia de los ingresos por salarios es sin

duda crucial: 25% de los ingresos rurales provienen de esta fuente.

Sin embargo, la diversificación de los ingresos es bien heterogénea y no todas las familias han podido alcanzar o superar los promedios nacionales. Este ensayo demuestra que aquellas familias que tienen como fuente principal los ingresos agropecuarios representan el 50% de la población rural y son las unidades productivas menos diversificadas¹⁴ y con los menores niveles de ingresos dentro de la población rural. Estas mismas familias tienen una menor probabilidad de acceder a ingresos por salarios o por actividades independientes como segunda fuente de ingresos familiares y, en general, dependen substancialmente de sus actividades agropecuarias familiares.¹⁵

Por el contrario las familias donde los ingresos por salarios o por actividades independientes son los más representativos y donde la producción agropecuaria no es la fuente más importante de ingresos familiares, son las que cuentan con mayores niveles de ingresos y las económicamente menos vulnerables. El acceso a diferentes fuentes de ingresos es sin duda una efectiva forma de reducir la vulnerabilidad económica en este sector.

Este ensayo también identifica dos formas bien claras de incrementar los ingresos agropecuarios: 1) incrementando el porcentaje de la producción destinado a la venta e 2) incrementando la producción y comercialización de subproductos (derivados de la producción agropecuaria). Por otro lado, el análisis desarrollado en este ensayo demuestra que un incremento en el capital humano familiar incrementa también las posibilidades de acceder a ingresos por salarios y al desarrollo de actividades independientes.

14 En promedio, 87% de sus ingresos provienen de actividades agropecuarias dentro de la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA), 4% de salarios, 3% de actividades independientes y 6% de otros ingresos (alquileres, remesas, bonosol, etc.).

15 Ver resultados del multilogit.

El alto grado de diversificación de los ingresos familiares y la substancial importancia de lo que se conoce como ingreso rural no agropecuario (IRNA) es sin duda uno de los más importantes resultados de este estudio. Sin embargo, es importante notar que las fuentes alternativas de ingresos no parecen proveer estabilidad y seguridad económica a todas las unidades familiares productivas. El ejemplo más claro es el relacionado a los ingresos por salarios. Una gran mayoría de estos ingresos, especialmente en el altiplano, provienen de migraciones temporales en busca de oportunidades de empleo que en su generalidad tienden a ser inestables y altamente vulnerables. Empleos como albañiles, peones zafros y cargadores, entre otros, son altamente vulnerables a los cambios de la economía y por lo tanto los ingresos derivados de estas actividades también son susceptibles a estos cambios. Un estudio cuidadoso de las características de la integración de la mano de obra rural a mercados asalariados es sin duda necesario para poder llegar a conclusiones más definitivas.

En resumen, este estudio demuestra que el resolver la “cuestión agraria” en Bolivia ha dejado de ser un problema exclusivamente agropecuario. El desarrollo de actividades independientes y la participación en mercados de trabajo asalariado son sin duda actividades que deberán ser consideradas en la identificación de políticas orientadas a la reactivación económica de este sector.

Bibliografía

- Berdegú A. Julio, Thomas Reardon y German Escobar, 2001, “Empleo e ingreso rural no agrícola en América Latina y el Caribe”, Mimeo presentado en la Conferencia sobre desarrollo de la economía rural y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, New Orleans.
- CIES (Centro de Investigaciones Económicas y Sociales) Internacional, 2003, Encuesta línea de base: características de los hogares rurales en Bolivia: Valles, Altiplano y Yungas 2003, Informe CIES internacional, 2003. Estudio patrocinado por MAPA-USAID (Market Access and Poverty Alleviation).
- Deere, Carmen Diana and Alain de Janvry, 1979, “A conceptual framework for the empirical analysis of peasants” en *American Journal of Agricultural Economics* N°LXI, Blackwell Publishing, Malden, MA, EE.UU, pp. 140-168.
- Ellis, Frank, 1988, *Peasant Economics: farm households and agrarian development*, Cambridge University Press, Cambridge.
- González de Olarte, Efraín, 1999, *En las fronteras el mercado. Economía política del campesinado en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- Jimenez Elizabeth, 1999, “Labor market segmentation and migrant labor: a case study of indigenous and mestizo migrant workers in Bolivia”, Tesis de Ph.D, University of Notre Dame, EEUU.
- Jimenez Elizabeth, 2003, “Reconsiderando la cuestión agraria en Bolivia: un análisis de la composición y los determinantes de los ingresos rurales”, Fondo de estudios INE (Instituto Nacional de Estadísticas), Estadísticas y Análisis, Bolivia.
- Reardon T., 1997, “Using evidence of household income diversification to inform the study of rural nonfarm labor market in Africa”, en *World Development* Vol. 25, No. 5, pp. 735-747. Elsevier: Montreal Quebec, Canada.
- UDAPE, 2003, *Pobreza en Bolivia: 1999 y 2000*, Informe Preliminar de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales. Ministerio de Planificación. La Paz, Bolivia.

¿Un nuevo modelo rural en Ecuador? Cambios y permanencias en los espacios rurales en la era de la globalización

A new rurality in Ecuador?

*Change and permanence in rural spaces
in the era of globalization*

Francisco García Pascual
Departamento de Geografía y Sociología de la Universidad de Lleida

Email: dega@ugerh-ll.udl.cat

Fecha de recepción: marzo de 2007

Fecha aceptación y versión final: julio 2007

Resumen

El artículo problematiza el alcance del término “nueva ruralidad” a partir de un análisis demográfico de la población rural, y en base a los datos de los censos nacionales. Se pregunta si este concepto, tal como se viene utilizando en el contexto europeo, es pertinente para el análisis de una sociedad rural altamente heterogénea como la ecuatoriana.

Palabras clave: Nueva ruralidad, población, Ecuador.

Abstract

The article discuss about the notion of “new rurality” (nueva ruralidad) from a demographic analysis of the Ecuadorian rural population. It asks if this concept, as it is used in the European context, is relevant for the analysis of a highly heterogeneous rural society, like the Ecuadorian one.

Keywords: New rurality, Population, Ecuador.

El surgimiento de la visión institucional de la “nueva ruralidad”

En este trabajo vamos a ofrecer una visión global del mundo rural ecuatoriano a la luz del análisis de las principales variables sociodemográficas que, en buena medida, nos permiten comenzar a construir un primer bosquejo de lo que un tanto contradictoriamente se ha venido en denominar como la “nueva ruralidad” en este país andino.

En este sentido, cabe preguntarse sobre qué se está entendiendo por “nueva ruralidad” y, más concretamente, de si estamos asistiendo a una transformación de las estructuras socioeconómicas del espacio rural, de si lo que está en juego es un cambio de paradigma interpretativo del desarrollo rural¹ o, finalmente, si de lo que se trata es de un proyecto político para las áreas rurales.

Han transcurrido ya dos largas e intensas décadas desde que aparecieron las primeras investigaciones que ponían de manifiesto que se estaba produciendo una “revitalización” del mundo rural. De una u otra forma, emergió una pléyade de estudios que, principalmente en los Estados Unidos y en Europa Occidental, destacaban los cambios de orden demográfico, económico, sociológico, cultural y/o político-institucional que se gestaban en numerosos espacios rurales². En esencia, estos trabajos revelaban, en primer lugar, que el decrecimiento secular de los habitantes rurales se habría detenido, y en no pocos casos se habría transformado en un auge demográfico de esos territorios. En segundo lugar, se detectaba la existencia de transformaciones

en las estructuras productivas determinadas por un proceso -más o menos acelerado según los casos y las coyunturas- de desagrarización y, paralelamente, por el impulso de otras actividades relacionadas con la industria, la construcción, los servicios y el fenómeno residencial. En tercer lugar, se desarrollaban flujos de interrelaciones (de mercancías, capital, fuerza de trabajo e información) mucho más intensos entre los territorios rurales y el mundo urbano -sea éste local, regional o internacional-. Y, en cuarto lugar, se observaba una mejora sensible de la dotación de infraestructuras y de servicios sociales básicos, conjuntamente con un avance nítido en los niveles de bienestar de la población. Todo eso, hasta el punto que Kayser (1990), en una obra ya clásica, habló abiertamente de un resurgimiento de las zonas rurales. Y ello derivó en asumir que habían de hecho *nuevos espacios rurales* en Europa.

Estos planteamientos -con muy similares bagajes teóricos, metodologías, categorías analíticas y propuestas alternativas- han “saltado” a la región latinoamericana en los últimos años, aunque ya de forma parcial habían impregnado numerosos estudios de todo orden sobre la agricultura y los espacios rurales durante la última década. De un lado, se postulará abiertamente la existencia de una “nueva ruralidad” en el continente y, por otro, los principales organismos internacionales que operan en el sector e/o influyen en la formulación de políticas agrarias y rurales en América Latina, defenderán la necesidad de un “nuevo modelo de desarrollo” que tenga por objetivo el arbitrar todos los mecanismos y adoptar todas las medidas que conduzcan la realidad rural actual hacia esa “nueva ruralidad” (que así es aprehendida como un estadio de desarrollo superior al presente). Esta apuesta comportará, de una parte, sobrepasar el clásico debate en torno a la política agraria construida alrededor de la reforma agraria redistributiva de los medios

1 Rodríguez (2004) habla explícitamente de desarrollo rural como “paradigma teórico”.

2 Véanse en este sentido, y entre otras obras, las aportaciones de Berry (1978), Champion (1989), Berrere (1988), Masden, Lowe y Whatmore (1990), Camarero (1993), Cloke *et.al.* (1994), Fugitt y Beale (1996), García Sanz (1996, 2003), Entrena (1998), Walford (1999) y Hoggart y Paniagua (2001).

de producción (ya que la agricultura será entendida como una actividad más del sistema productivo local y, según arguyen los problemas de ésta, se concentrarán en los numerosos agricultores familiares que tienen dificultades para competir y para insertarse en los mercados nacionales e internacionales) y, de otra, desligar este debate, al colocar el epicentro del mismo en el propio mundo rural, de las discusiones sobre los modelos generales de desarrollo económico desenvueltos históricamente en América Latina³.

La “nueva ruralidad” en la región latinoamericana viene definida por ciertos cambios demográficos, económicos e institucionales que acontecen en algunas zonas rurales⁴ (Pérez Correa 2001, 2002, Graziano da Silva 2002), así como por las novedosas funciones que el medio rural desempeña en la sociedad, por la revalorización de lo rural por parte de la sociedad urbana (Echeverri y Ribero 2002), y por la expansión e intensificación de las interrelaciones entre lo rural y lo urbano (Sepúlveda, Rodríguez y Echeverri 2003, Perry y Lederman 2005). Esas funciones, además de la agricultura, implican constatar la creciente importancia -y la urgencia de su promoción y estímulo- del empleo y de los ingresos no agrarios, concretado en los puestos de trabajo que se están creando en activi-

dades industriales, en la artesanía, en el pequeño comercio de proximidad, en el turismo y en servicios públicos o privados, etc. (Ramis y Stewart 1993, Reardon, Berdegúe y Escóbar 2001, Dirven 2004). Estos novedosos desempeños se enmarcaran en el reconocimiento de la creciente *difuminación de las fronteras* entre lo urbano y lo rural, y en los efectos que sobre estos territorios impelen los emergentes vínculos entre lo local y lo global (Llambí 2000).

Empero, el gran cambio a nuestro modo de ver va a estribar en que, por primera vez, los distintos organismos y organizaciones internacionales con capacidad de incidencia en el planteamiento de políticas agrarias y/o rurales de los distintos gobiernos nacionales, van a coordinarse para intentar establecer una estrategia y una agenda común de desarrollo rural, cuyo objetivo final es la consecución de esa “pretendida nueva ruralidad”.

Dinámica poblacional de las áreas rurales ecuatorianas

Ecuador, como la mayoría de naciones latinoamericanas, ha contado con un crecimiento demográfico muy vigoroso, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y que, en buena medida, se ha prolongado hasta la actualidad. Empero, esta dinámica partía de una realidad diferente a otras sociedades del continente: éste era -y es- un país poco y muy irregularmente poblado. En este sentido, cabe tener muy presente que, por ejemplo, en el año 1950 los habitantes censados en esta nación andina eran unos 3.211.000, mientras que la última cifra censal conocida, la referida al 2001, hablaba de 12.156.000 residentes, en tanto las estimaciones señalaban un contingente de 13.484.000 habitantes para enero de 2007.

Ahora bien, uno de los rasgos que definen en última instancia la realidad demográfica

3 Puede verse la evolución de los paradigmas de desarrollo rural en América Latina en las obras de Sarraceno (1994), Ellis y Biggs (2001) y en Kay (2001). Sobre el devenir de estas teorías de desarrollo pero sin concreción espacial puede consultarse la obra de Delgado Serrano (2004: especialmente 75-188).

4 Pérez Correa (2001: 23-24) reconoce que “la nueva visión de lo rural no va de lo atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. Hay más bien un buen número de características que muestran la multi-direccionalidad del proceso, sobre los cuales hay múltiples evidencias, en diferentes países, con distintos grados de desarrollo. Vale la pena destacar la pérdida relativa de la significación económica y social de los sectores primario y secundario, y la evidente terciarización de lo rural (...). En América Latina esa tendencia va en aumento y, sobre todo, es una meta puesta por el nuevo modelo de desarrollo”.

del Ecuador es la desigual distribución territorial de la población, y que responde a la interacción de los condicionantes medioambientales, de las sucesivas y disímiles coyunturas socioeconómicas y políticas y de las pautas, formas y capacidad de organización, de estructuración y de uso espacial que ha manifestado históricamente la actividad económica y que, a su vez, se explican por las lógicas territoriales derivadas del modo de producción predominante en cada momento histórico.

Como decimos, la distribución de la población ecuatoriana ha mostrado -y muestra en estos inicios de la nueva centuria- un claro signo de desequilibrio tanto a escala regional como en términos urbano-rurales. En estas dos vertientes, estrechamente relacionadas, estas tendencias se han exacerbado en las últimas décadas. Dinámicas que unidas a la desigual distribución de la producción, de la dotación de recursos e infraestructuras, de la especialización sectorial según ramas de actividad económica y de la inserción en el mercado internacional, más las discrepancias socioculturales y étnicas, permiten entender la debilidad de la estructuración territorial del estado-nación ecuatoriano, coadyuvado, sin duda, por la propia fragilidad histórica del Estado.

Para evaluar la trayectoria seguida por el espacio rural ecuatoriano hemos establecido dos grandes etapas: de 1950 a 1990 y de 1990 hasta nuestros días.

1950 a 1990

Hacia 1950 la población rural -siguiendo la definición oficial establecida por el INEC- era de 2.297.000 personas, lo que significaba el 72% de los habitantes del país. Este predominio de la localización rural de la población se extendía a casi todos los rincones del país. Tres décadas después, el censo de 1982 trasluce ya ciertos cambios, sobre todo identifica-

dos con un aumento muy destacado de la población urbana. Con todo, el devenir demográfico del mundo rural exhibirá un relativo vigor. Si la población rural oficial era de 2.297.000 habitantes en el año 1950, el censo de 1982 mostrará que ésta se había incrementado hasta los 4.153.500. Esto suponía un crecimiento del 81%. Pese a ello, estas ratios quedan lejos de las contabilizadas en el mundo urbano. En efecto, si en 1950 en las ciudades ecuatorianas habitaban unas 914.000 personas, en 1982 eran ya 3.924.000; es decir, se habría producido un aumento total del 329%. El resultado de estas dispares dinámicas es que la población rural verá reducido su peso proporcional en el país, pasando al 51% en el año 1982, veinte puntos menos que en 1950; en cambio, la población urbana pasaba a ser el 49% de los moradores del Ecuador.

Lamentablemente no existen estadísticas oficiales o estudios que clarifiquen y delimiten los distintos componentes del crecimiento demográfico ecuatoriano, y que discernan entre lo rural y lo urbano. Ante ello, y siendo conscientes de que hablamos de una aproximación, hemos utilizado los valores globales de natalidad y mortalidad que diferencian urbano y rural y que están disponibles para el año 1974 y 1982, y los hemos relacionado con la evolución general de dichos índices que sí registran las fuentes estadísticas oficiales. Una vez calculado *grosso modo* el crecimiento natural, podemos averiguar el saldo migratorio al restar aquel al crecimiento total de la población que revelan los censos. Pues bien, los resultados de esta operación, que insistimos son meramente aproximativos, son en todo caso clarificadores de lo sucedido. Así, entre 1950 y 1982 el mundo rural ecuatoriano contabilizó un saldo migratorio estimado en un valor negativo de -1.290.000 personas, mientras que las áreas urbanas consiguieron un valor positivo de 1.204.000 personas (la diferencia entre ambas cifras inclui-

ría el saldo migratorio externo del país). Dicha dispar trayectoria pone de manifiesto que, primero, la emigración rural aportó directamente el 43% del incremento total de la población de las ciudades del Ecuador y, segundo, este volumen tan elevado de emigración (un verdadero éxodo rural) equivalió al 40% de la población media de las áreas rurales del país.

Entre 1982 y 1990 podemos establecer una etapa definida por sensibles cambios en el mundo rural ecuatoriano, unidos indefectiblemente a la situación económica e institucional que vivirá el país en este período. La crisis que recorrerá todo el territorio latinoamericano en el transcurso de este decenio se abatirá igualmente sobre el Ecuador, agravada por las propias derivaciones del modelo desarrollo asumido por el país y por los efectos de todo orden que devendrán merced a la adopción como respuesta a la grave situación de todo el acerbo de políticas económicas neoliberales. A todo ello cabe añadir la caída de los precios del petróleo, los problemas para exportar algunos ítems agropesqueros, las dificultades para captar financiación externa, el estallido del problema de la deuda externa, el crecimiento de los precios internos y las sucesivas crisis político-institucionales. La consecuencia más innegable de la convergencia de todos estos hechos y procesos será una depauperización de amplias capas sociales, que afectará muy especialmente a las áreas rurales.

La población rural según el censo de 1990 se estimó en 4.346.000 personas, lo que significó un crecimiento absoluto de 193.000 desde 1982. Positivo, sí, pero queda muy lejos del incremento de la población urbana que fue de 1.387.000 nuevos vecinos, elevándose ésta hasta los 5.311.000. Estas disímiles tendencias expresaran que los efectivos rurales representen ahora “sólo” el 45% de los ecuatorianos, siendo por primera vez superados por los habitantes de las ciudades, que ya supondrán el 55%. Esta trayectoria conduci-

rá a un alza de la proporción de residentes urbanos en todo el país, en detrimento de los que habitan en el ámbito rural. En la región de la Costa el porcentaje de moradores rurales se situará en 1990 en el 38%, mientras en la Sierra se producirá un cierto equilibrio, con un peso rural cifrado en el 50%, siendo éste aún nítidamente mayoritario en la Amazonía con un 75%.

En esta década de los años ochenta podemos constatar que en el mundo rural ecuatoriano se registró un balance migratorio negativo de -769.000 personas (que equivalía al 18% de la población rural media de este período), mientras que las ciudades lograron un saldo de signo positivo estimado en 502.000 personas. La diferencia entre ambas cifras gravita en el saldo migratorio con el extranjero, que a partir de estos años comenzará a ser importante. Por cierto, una parte substantiva de estos emigrantes hacia el exterior provenían de zonas rurales y se dirigieron fundamentalmente a los Estados Unidos y, en mucha menor medida, hacia otros países andinos limítrofes.

1990 a 2007

Entre 1990 y nuestros días, algunas de las líneas evolutivas esbozadas en la postrera década van a reafirmarse desde el punto de vista de la demografía de las áreas rurales. Los años noventa y lo que llevamos del decenio siguiente van a suponer un agravamiento de la crisis en el Ecuador, probablemente con un grado de intensidad y extensión entre sectores, territorios y clases sociales sin precedentes en el país. Junto a los factores que ya en los años ochenta habían incidido en el agravamiento de la crisis económica, confluirán en estos años otros de diversa índole. En t re estos cabe destacar la eclosión de una virulenta crisis financiera -cuya resolución aparente drenará cuantiosos recursos del estado-, la corru-

ción que afectará a una parte de las altas jerarquías del país, la continua implementación de paquetes de ajustes estructural neoliberal -cuyas medidas oscilan numerosas veces entre lo errático y lo contradictorio, y que tendrán su momento culminante con la dolarización oficial y la desaparición de la moneda nacional-, el enfrentamiento bélico con el Perú, las consecuencias de la extensión del conflicto colombiano a la zona norte del país, y la sucesión de crisis políticas e institucionales. En buena medida, yuxtapuesto a este frontal cuestionamiento del andamiaje político tradicional, emergerán “nuevos actores sociales” que reivindicarán su papel en la escena política del país, como el movimiento indígena u otras organizaciones o colectivos sociales.

Como es lógico pensar, los efectos de toda índole sobre unas áreas rurales cuyos dos principales rasgos definidores estribaban en un papel muy considerable del sector agrario y en una proporción de pobreza elevadísima, han sido notables y, en muchos casos, dramáticos. No obstante, la magnitud de la crisis alcanzará de lleno igualmente al mundo urbano ecuatoriano, lo que incidirá en dificultar (limitar) el “uso” por parte de los moradores rurales de la emigración a las ciudades como estrategia de supervivencia (entiéndase social) y/o de mejora sociolaboral. Contrariamente, las tensiones sociales y la pobreza crecerán denodadamente en las mayores urbes del país. Todo lo cual conducirá a establecer las condiciones necesarias para forjar una intensa y voluminosa corriente migratoria hacia el extranjero, de la que serán protagonistas tanto los habitantes rurales como los residentes en las ciudades.

Asimismo, y de forma paralela al desarrollo de estos acontecimientos, se configurarán progresivamente unas nuevas formas de ocupación y organización (de reproducción social podríamos decir) del espacio urbano y del espacio rural próximo al mismo. Los territorios rurales ubicados en los alrededores de las

grandes ciudades ecuatorianas comenzarán a desempeñar otras funciones más allá de la obtención de materias primas agroforestales, de alimentos o de suministro de mano de obra, en concordancia con los cambios que se están produciendo en la lógica de organización espacial del capitalismo. Entre aquéllas cabe destacar fundamentalmente la función residencial y, en menor medida, la función turística y recreativa y la función de ser espacios de localización industrial y de otras actividades “expulsadas” de los centros urbanos. En todo caso, este proceso, que ya hace bastante tiempo que viene vislumbrándose en los países europeos o en los EEUU, no ha adquirido una capacidad de cambio tal que *modifique sustancialmente las estructuras sociales y económicas del conjunto del territorio rural*, ya que ni el estadio de desarrollo del capitalismo es igual en el Ecuador que en los países denominados del “primer mundo” ni el escenario de crisis económica y social permanente que vive el país en las últimas dos décadas lo facilitan.

Según el censo de finales del año 2001, la población de las áreas que oficialmente el INEC considera como rurales era de 4.725.000 personas, lo que supondría un aumento desde 1990 de 379.200 personas. Ahora bien, el dinamismo demográfico urbano en el Ecuador ha seguido siendo nítidamente superior. En efecto, los habitantes de las ciudades han alcanzado los 7.431.000, implicando un alza absoluta de 2.122.400 personas. El resultado es que la proporción de población que reside en áreas rurales ha vuelto a descender en este período de tiempo, hasta situarse en el 39% del total (índice que, por cierto, en la totalidad de América Latina era del 24%)⁵.

5 El INEC (Encuesta nacional de empleo y subempleo, 2007) estimaba que en diciembre de 2006 la población del Ecuador era de 13.488.000 personas, de las que 8.940.000 residían en ciudades y 4.544.000 en áreas rurales. Estas cifras supondrían que los espacios rurales concentrasen “solamente” el 34% de los ecua-

Sin embargo, este análisis queda mediado por el hecho de tomar como referente las diferentes unidades político-administrativas que el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC) y el propio gobierno consideran como *oficialmente rurales*. Como ha señalado el SIISE (2003), el INEC contempla como “áreas urbanas” a los asentamientos o núcleos que son capitales provinciales y cabeceras cantonales o municipios según la división político administrativa (DPA) vigente en el país, sin tomar en cuenta su tamaño demográfico, y como “áreas rurales” las cabeceras parroquiales, otros centros poblados, las periferias de los núcleos urbanos y la población dispersa. Por todo ello, hemos creído oportuno completar el análisis de este último período de la vida ecuatoriana, atendiendo al tamaño demográfico de las parroquias -que son las unidades político-administrativas más pequeñas del país-, y ello nos permitirá una aproximación con una mayor riqueza de matices a la realidad rural.

Ecuador está dividido en unas mil parroquias. Según el censo de población del año 2001, un total de 414 tenían menos de 2.500 habitantes y otras 211 contaban con entre 2.500 y 5.000. En otras palabras, un total de 626 parroquias podrían ser consideradas como *fundamentalmente rurales* si establecemos en esta última cifra el umbral y asumimos -lo cual es sin duda discutible- un criterio exclusivamente de dimensión demográfica; en todo caso, éstas representan el 63% del total. De todos modos, estas parroquias sumaban una proporción de población rural “oficial” según la metodología del INEC del 94,4%. En estas parroquias residían

1.312.000 habitantes y, por tanto, el equivalente al 10,8% de la población del Ecuador. Si a este estrato le añadimos aquellas que tenían entre 5.000 y 10.000 habitantes, un total de 183 más, que podemos considerar en líneas generales como espacios semirurales, obtendremos como resultado un total de 809 parroquias, el 81% de las existentes, pero que solamente sumaban 2.619.000 habitantes, el 21,5% de los ecuatorianos (pese a concentrar aproximadamente el 85% de la superficie del país). Estas parroquias rurales y semirurales alcanzaron una densidad media de población de a penas 12 habitantes por km². El resto de parroquias, que a grandes trazos podríamos englobar bajo los epígrafes de semiurbanas y nítidamente urbanas tenían una densidad de 212 hab./km² -recordemos que la media del país era de 47-. En el otro fiel de la balanza, nada más que 25 parroquias superaban los 50.000 habitantes, un 2,5%, que sin embargo contaban con 6.275.000 habitantes, el 51,6% del total -sobre estas localidades en realidad se asienta la vertebración y la jerarquización espacial de la sociedad y la economía del Ecuador-.

El análisis del reciente comportamiento demográfico de estas parroquias que a *grosso modo* hemos definido como rurales, pone de manifiesto un leve crecimiento, a pesar de que la natalidad sigue consiguiendo valores elevados y la mortalidad se mantiene en valores reducidos, y que se explica por la merma que comporta la emigración. Para poder comprobar esta tesis, también en este caso hemos procedido a estimar el saldo migratorio⁶ de cada parroquia.

torianos, y que el ritmo de crecimiento logrado entre el año 2001 y diciembre de 2006 sería de un -0,8% de media anual, sin duda, lejos del 4,1% obtenido en los espacios urbanos del país. No obstante, estas cifras nos parecen excesivamente elevadas y parecen no tener en cuenta los saldos migratorios externos tan negativos que ha padecido el Ecuador en este período.

6 Para efectuar dicha operación, hemos tenido en cuenta que el saldo migratorio es la diferencia del crecimiento total de la población (habitantes de 2001 menos habitantes de 1990) y el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones). Para estimar el volumen total de nacimientos y defunciones hemos tenido en cuenta el número de los mismos producido en los años censales de 1990 y del 2001 en cada parroquia y que ha recopilado el INEC y el SIISE, y

Estas parroquias rurales (un total de 626) tenían 1.225.200 habitantes según el censo de 1990 y 1.312.400 residentes en el 2001, lo que comporta un aumento absoluto de 87.200 personas y una tasa anual media de crecimiento del 0,7%. Este valor es producto de un balance natural positivo cifrado en 359.400 personas y un saldo migratorio negativo de -272.300 personas⁷. Este contingente migratorio, que suma los saldos internos y externos, fue de tal magnitud que equivalió al 22% de la población media de estas entidades rurales (y eso que sólo estamos hablando de una década). Tal vez, puede resultar interesante, sobre todo con el ánimo de desmitificar *una pretendida generalización de la existencia de una nueva ruralidad* en este país andino, indicar que las parroquias que poseían más de 100.000 moradores (un total de 14), las principales ciudades del Ecuador, registraron un alza absoluta de 1.342.000 personas y, por consiguiente, lograron una tasa anual del 2,5%. Éstas, además, consiguieron un saldo migratorio positivo estimado en 110.000 personas.

A partir de estas informaciones es difícil no señalar que el binomio éxodo rural/expansión urbana, con todo lo que conlleva y con todas las matizaciones regionales necesarias, sigue vigente en una parte significativa del Ecuador. ¿Cómo ha influido la emigración internacional intensísima del postrer lustro en estas dispares tendencias? Sin duda, la respuesta está en analizar los flujos migratorios, tanto desde el punto de vista de los orígenes y destinos implicados, de las propias motivaciones que los impelen, de las clases y grupos

para los años intermedios del período analizado hemos relacionado dichas tasas de natalidad y mortalidad parroquiales iniciales y finales con la evolución de esos mismos índices a escala nacional –lo que supone asumir que los resultados y las disparidades que reflejan de los años 1990 y 2001 son representativos del conjunto del período–.

7 En estos procesos migratorios las mujeres han sido las grandes, y numerosas veces olvidadas, protagonistas.

sociales afectados, y por supuesto en desestructurar y recomponer las estructuras y hegemonías sociales locales.

El censo de población del año 2001 establece una cifra de emigrados al extranjero de 378.000 personas entre 1996 y el 2001. Esta cifra es, a todas luces, inferior a la producida realmente, basta con analizar los datos de inmigrantes ecuatorianos disponibles en España⁸, EEUU o Italia. Teniendo éstos en cuenta, podemos hablar de un saldo exterior del Ecuador de unas 616.000⁹ personas entre 1990 y el 2001, de las que unas 65.600 habrían salido de parroquias de menos de cinco mil habitantes y, por el contrario, unas 348.500 lo hicieron desde las parroquias con más de cien mil habitantes (hemos mantenido las proporciones por parroquias que recoge el censo del 2001 sobre el total de emigrantes al exterior)¹⁰.

Si relacionamos nuestra estimación de saldo migratorio total y el saldo migratorio exterior, podemos deducir el balance migratorio interno. A pesar de ser muy consientes que estamos hablando en términos aproximativos, creemos interesante efectuar esta operación, de la que constatamos que las parroquias fundamentalmente rurales habrían obtenido un saldo migratorio interno negativo de -206.600 personas. En otras palabras, dos

8 Según el INE español entre 1998 y 2001 España recibió 136.000 ecuatorianos, mientras que entre 2001 y 2005 llegaron otros 358.000. Aunque durante los años 2005 y 2006 se ha reducido la cifra de ecuatorianos en unos 40.000. Entre 2001 y 2006 han emigrado como mínimo otros 100.000 ecuatorianos a los EEUU y otros 100.000 a Italia y a otros países europeos y, en menor medida, latinoamericanos.

9 Larrea (2004: 32) establece en 685.000 los emigrantes ecuatorianos que han salido del país entre 1990 y el 2001, después de reconocer la subestimación que suponen los datos censales del 2001.

10 El SIISE (2003), recopilando los datos de la EME-DINHO que elabora el INEC entre 1990 y el año 2000, deduce que el 66% de los emigrantes al extranjero procedieron del mundo urbano y un 34% del rural, el 59,8% fueron mujeres y significativamente el 65% personas calificadas como no pobres.

de cada tres personas que emigraron de estas pequeñas localidades lo hicieron a otras localidades de igual o mayor tamaño o, sobre todo, hacia las grandes ciudades del mismo Ecuador. Esta situación se invierte totalmente si focalizamos nuestra atención en el mundo de las mayores poblaciones, que habrían conseguido un saldo interno positivo de 458.500 personas. A tenor de ello, podemos afirmar que, primero, la capacidad de atracción de población rural desde las grandes urbes sigue siendo más que notable en este país. Segundo, es posible que lo que esté aconteciendo en estas urbes es una sustitución laboral y social de los emigrados al extranjero por estos nuevos moradores procedentes de las zonas rurales (sobre todo de las aldeñas). Y tercero, cabe cuestionarse sobre cuántos de los que han salido del país desde estas grandes ciudades no eran, a su vez, antiguos inmigrantes procedentes del campo. De igual forma, aunque no haya información estadística disponible, sería muy sugerente cuantificar y caracterizar los procesos migratorios intraparroquiales.

Desde la óptica regional y provincial, el comportamiento de este tipo de parroquias ha sido muy disparate. Así, mientras que estas pequeñas localidades registraron crecimientos importantes en la región amazónica, con una tasa media anual entre 1990 y el 2001 del 3%, en la Costa se lograba un índice muy moderado de 0,6% anual y en la Sierra se contabilizaba un valor negativo del -0,02%. A nivel provincial, en Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Loja y Manabí se obtuvo un crecimiento demográfico negativo en estas parroquias rurales en el transcurso de estos años. No obstante, debemos poner de manifiesto que en prácticamente todas las regiones y provincias ecuatorianas, este tipo de parroquias habrían tenido un saldo migratorio negativo. Las únicas excepciones serían las Islas Galápagos y las entidades amazónicas de Orellana, Pastaza y Sucumbíos. Las provincias donde esta tenden-

cia migratoria rural fue proporcionalmente más negativa fueron Loja y Manabí.

Dinámica laboral y social de las áreas rurales ecuatorianas

Para evaluar las posibles transformaciones en las estructuras productivas espaciales del Ecuador, nos centraremos en el análisis del mercado laboral, debido a que no se dispone de información rigurosa sobre la composición sectorial del valor añadido bruto o del producto interior bruto a escala parroquial.

Según el censo de población del año 2001, el número de trabajadores en las áreas consideradas oficialmente como rurales era de 1.904.400¹¹, es decir, el 39% de las personas que trabajaban en el Ecuador en esa fecha, que eran 4.948.000. Dicha cifra supone un crecimiento positivo desde el año 1990, puesto que, en ese momento, y teniendo en cuenta los datos censales, el número de trabajadores era de 1.578.800, de lo que deducimos un aumento absoluto de 325.600 personas, y un incremento medio anual del 1,9%. Esta tasa de creación de puestos de trabajo está muy

11 Las diferencias rural-urbanas según la categoría socio-laboral de la población ocupada también son muy importantes. Según el censo del 2001, en las áreas rurales oficiales los empresarios con asalariados eran el 7% de los ocupados, los asalariados públicos y privados un 30,9%, los trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares eran un 54,4%, mientras los no bien identificados eran el 7,7%; en cambio, en el mundo urbano los empresarios eran el 9,7%, los asalariados el 45,4%, los empleados por cuenta propia y trabajadores familiares un 34,4% y los no identificados un 10,5%. La comparación de las cifras del 2001 con la referentes a los censos de 1990 y de 1982 permite constatar que en las áreas rurales se ha registrado una disminución significativa del empleo asalariado —especialmente en aquellos sectores no agrarios— y de forma paralela ha aumentado el peso de los trabajadores por cuenta propia no sólo en la agricultura, donde tradicionalmente operaban, sino en actividades ligadas al pequeño comercio y algunas tipologías de servicios (sería, tal vez, una forma de emersión del empleo informal en el mundo rural ecuatoriano).

lejos de los niveles alcanzados en el mundo urbano¹². Así, las ciudades ecuatorianas registraron un alza del volumen de empleo de 1.043.000 personas, lo que revela una tasa anual del 4,7%. Dado los datos de crecimiento natural de la población y dada la estructura por edades y sexos de la misma que manifiestan unas áreas u otras, esta diferencia sólo se explica porque una parte importante de estos nuevos empleos urbanos está compuesta por inmigrantes procedentes de las áreas rurales.

En el año 2001, el principal sector de ocupación de la población rural ecuatoriana era el primario. En efecto, 1.127.000 personas trabajaban en la agricultura, ganadería y producciones forestales, es decir, en estas actividades operaban el 59% de los empleados que residían en el mundo rural¹³. A continuación encontramos la industria manufacturera con un 7,5%, el comercio y las reparaciones con un 6,9%, la construcción con un 4,9%, el servicio doméstico con un 3,3% y la enseñanza, educación y servicios sociales que sumaban otro 2,8%. Agrupando estos valores por grandes sectores, obtendríamos que el primario concentraba el 60,5%¹⁴, el secundario el 9%, la construcción un 4,9% y el conjunto del sector terciario a penas aportaba el 25,6% del total. Esta estructura laboral es totalmente opuesta a la que esbozan los datos

referidos al mundo urbano: aquí el empleo agrario y pesquero equivalía al 7,9% del total, la minería, industria y energía un 12,5%, la construcción un 6,5% y el comercio y los servicios el 72,9%.

El análisis de la evolución del empleo rural según las distintas ramas de actividad económica¹⁵, revela que los sectores que han mostrado un mayor dinamismo en términos relativos han sido las actividades culturales y recreativas (con una subida del 208% entre 1990 y el 2001), la hostelería y la restauración (con un 104% más), el comercio (con un 65% más) y el transporte y las comunicaciones (con un 59% más). Ahora bien, si hablamos en términos absolutos, el 53% de los nuevos puestos de trabajo creados en la última década en las áreas rurales del Ecuador provinieron del sector agrario. Y ello pese a llevar ya cuatro décadas de reformas agrarias, de capitalización, de inserción en el mercado nacional e internacional en condiciones no muy ventajosas (por utilizar un eufemismo), o ser los años del famoso éxodo rural. Sin embargo, defendiendo esta tesis no pretendemos en ningún caso aseverar que el mundo rural es una sociedad inmóvil, ajena a las profundas y contradictorias mutaciones sociales que vive la sociedad contemporánea. Lo que queremos poner de manifiesto es que los cambios de todo orden que se producen en su seno y que afectan especialmente a las estructuras económicas o laborales, de momento y, en buena

12. Según la *Encuesta Nacional sobre empleo, subempleo, desempleo urbano* (INEC, 2007) de diciembre de 2006, la tasa de paro estimada era del 3,7% para las áreas rurales del país. Además, el 17% eran trabajadores del sector informal y un impresionante 82% eran subempleados.

13 En un trabajo reciente (García Pascual, 2003), estimamos que el volumen de empleo en las áreas rurales de América Latina era de 50,7 millones de trabajadores para 1999/2000, de los que el 62% operaba en el sector agrario y en la pesca, un 13,6% en la industria y la construcción y un 24,4% en el comercio y los servicios.

14 El INEC (2007) estimaba que en diciembre de 2006 el volumen de empleo en las áreas rurales del Ecuador era de 2.311.000, de los que 1.650.000 se dedicaban al sector agropesquero (el 71,3%).

15 Martínez Valle (1994: 137) explicita dichos cambios y aporta una hipótesis explicativa, cuando señala que "en el país a partir de la década de los años ochenta se asiste a un proceso de profundización de las relaciones capitalistas de producción en el sector agrario, resultado por una lado, de la implementación de política agrarias orientadas a favorecer a la gran propiedad capitalista y, por otro, de las transformaciones internas que se venían dando lentamente en el sector desde la década anterior. Las transformaciones ocurridas en las dos últimas décadas se pueden sintetizar como dos grandes procesos: a) el desplazamiento del eje productivo hacia la agroindustria y la exportación; b) la heterogeneidad social y diversificación ocupacional".

medida como consecuencia del propio modelo de desarrollo predominante en el país, no han alcanzado una capacidad de transformación estructural significativa y mayoritaria. Antes al contrario, cambio y permanencia de estructuras son dos caras de la misma moneda, generándose nuevas dinámicas de polarización territorial y social.

Este predominio de lo agrario en el escenario rural ecuatoriano podemos ratificarlo, si descendemos en nuestro estudio a nivel parroquial. Como ya señalamos en el apartado precedente, consideramos como fundamentalmente rurales aquellas entidades parroquiales que no superasen en el año 2001 los cinco mil residentes. Éstas, que son seis de cada diez existentes en el país, contaban con unos 531.000 empleos, de los que la agricultura y la pesca aportaban el 66,8%, el comercio y los servicios el 21,2%, la industria, la minería y la producción de energía un 7,5% y la construcción un 4,2%. Asimismo, debemos fijarnos que en aquellas parroquias de entre cinco y diez mil habitantes –que podríamos catalogar en líneas generales como semiurbanas-, el empleo agropesquero suponía el 58,9% del total; pero, es que en aquellas otras que contaban con entre diez y los cincuenta mil residentes, las actividades primarias concentraban el 42,7% el empleo. En cambio, en las parroquias de más de cincuenta mil habitantes, dicho sector solamente aportaba el 6,8% del volumen de puestos de trabajo, siendo el terciario el sector mayoritario con un 72,7%.

Más allá de cierta retórica institucional sobre la multifuncionalidad y sobre la nueva ruralidad, no debemos soslayar que de las mil parroquias que configuran la base de la división político-administrativa del país, en 593 la agricultura generaba más del 60% de los puestos de trabajo contabilizados por el censo del año 2001 (en 221 de ellas esa proporción superaba el 80%); mientras que en otras 205 contaba el sector agrario con un peso de entre

el 40% y el 60%. Por el contrario, únicamente en 35 localidades del Ecuador, la agricultura disfrutaba de menos del 10% del empleo. Si sólo nos detenemos en las parroquias de menos de cinco mil habitantes, un total de 626, podemos observar que en 447 de ellas, las tres cuartas partes, las actividades agrarias concentraban más del 60% de los puestos de trabajo, y en otras 119 ese índice fluctuaba entre el 40% y el 60%.

Desde el punto de vista espacial, este desempeño del sector agrario como eje vertebrador de las economías de las parroquias rurales es un hecho generalizado en el conjunto de regiones y provincias ecuatorianas. En estas pequeñas localidades de la región de la Costa, el empleo agrario y pesquero conseguía en el año 2001 el 68,4% del total de puestos de trabajo, proporción que se elevaba al 67,6% en la Sierra y a un 64,9% en la Amazonía¹⁶. A escala provincial, destacaban Loja donde las actividades primarias concentraban el 77,5% del empleo, conjuntamente con Los Ríos con un 77,3%, Bolívar con un 76,9%, Chimborazo con un 75,5%, Manabí con un 75,4%, Carchi con un 74% y el Cañar con un 71,8%. De igual forma, aquellas superaban el 60% en las parroquias rurales de Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Imbabura, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. En Azuay lograba el 59,9%, en Tungurahua el 55,5% y en Pichincha el 50,4%. Solamente en la provincia de Guayas la agricultura cedía su protagonismo general a favor del sector comercio y servicios.

Este rasgo de la estructura laboral rural se acompaña de una más que notable debilidad de las actividades industriales y en un infra-desarrollo de las actividades terciarias si se

16 El INEC (2007) estimaba que el empleo agrario representaba al 67% en la Sierra, al 78% en la Costa y al 73% en la Amazonía –estos datos hacen referencia al mes de diciembre de 2006-.

tiene en cuenta la población que reside en dichas localidades. Este último hecho adquiere una mayor trascendencia cuando de lo que estamos hablando es de una exigua presencia de empleo dedicado a educación, sanidad, saneamiento y servicios sociales -sean públicos o privados-. Sin duda, dejando de lado el posible debate en torno a la calidad de dichos servicios y al acceso a los mismos, es evidente que su presencia o no tiene una incidencia directa sobre los niveles de vida de la población (y más en un país donde el estado del bienestar es básicamente un entequeia). Pues bien, según los datos del censo de población del 2001, en las parroquias rurales hay 80 habitantes por cada trabajador social, mientras que en las parroquias de más de cincuenta mil residentes ese índice era de 27. Asimismo, y visto desde otro ángulo, de los más de doscientos mil trabajadores de estos sectores sociales, el 80% se localizaban solamente en siete parroquias: Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo de los Colorados, Machala, Manta y Portoviejo.

Pese a la contundencia de estas cifras, debemos introducir diversas matizaciones. En primer lugar, los datos censales no recogen certeramente una parte sustantiva del empleo no agrícola orientado tanto a labores de artesanía como hacia actividades terciarias de baja productividad -pequeño comercio formal e informal, por ejemplo-. En segundo lugar, es necesario reseñar que es cierto que si dispusiéramos de datos sobre la composición sectorial del PIB a pequeñas escalas territoriales, podríamos comprobar como este rol decisivo del sector agrario disminuía en beneficio de otros sectores con niveles de productividad mayores (fueran actividades industriales, de la construcción o terciarias). Y, en tercer lugar, igualmente sería cierto que desde el punto de vista de los ingresos familiares¹⁷ de las áreas

y/o parroquias rurales, existen múltiples estrategias que permiten o facilitan diversificar las fuentes de recursos¹⁸ (lo que comporta mediatizar parcialmente el impacto que sobre las economías familiares ejerce la evolución coyuntural del sector agrario): desde la agricultura a tiempo parcial o el trabajo a domicilio, pasando por la especialización en sectores dispares de los diferentes miembros de la unidad familiar, llegando a la “externalización de la fuerza de trabajo familiar” (si se me permite la expresión) que es la emigración y la creciente importancia de las remesas de los emigrantes.

Empero, por un lado, el peso del sector agrario en la abrumadora mayoría de las parroquias rurales es demasiado grande como para perder su preeminencia en la economía y el mercado laboral local, por lo menos de momento. Por otro, en muchas de esas pequeñas poblaciones los otros sectores económicos no tienen la escala necesaria (ni se dan las condiciones para ello, desde la óptica de la dotación de infraestructuras, del destino de los beneficios del proceso de acumulación de capital, de la actuación pública ni de los niveles de renta generalizados y de la capacidad de consumo que presuponen), como para ampliar y/o consolidar un entramado potente y dinámico de actividades socioeconómicas diferen-

demos deducir que el ingreso per cápita en el año 2000 de las áreas rurales equivalía al 65,5% del ingreso medio nacional, aunque solamente era el 56% del urbano (e incluso apenas representaba el 47% del que se conseguía en Quito y un 45% del obtenido en Guayaquil).

- 18 Elbers y Lanjow (2001: 485) a partir de los datos elaborados por la *Encuesta de condiciones de vida de 1995* del INEC, establecen que la proporción de ingresos no agrarios de la población rural ecuatoriana sería del 41% (proporción que para el quintil de población más pobre solo sería del 22%, mientras que para el quintil más rico alcanzaría el 64%). Por su parte, Reardon, Berdegúe y Escobar (2001) hablan de que para el conjunto de América Latina los ingresos no agrarios suponían el 46% del ingreso total de las familias que residían en áreas rurales a fines de los años noventa.

17 A partir de los datos que utiliza el PNUD (2001: 225), en su intento de establecer unos índices de ingresos por géneros, y que recoge en el cuadro I.7, po-

tes a la agricultura. Y, por último, buena parte de las remesas remitidas por la emigración que llegan a muchas de estas parroquias van a parar a familias que ya disponían de un cierto nivel de renta y no a los más pobres -dado que estos no podían costear la migración de sus familiares- y, además, a buen seguro una cuantía sustantiva de las mismas vía entidades financieras acaba dirigiéndose hacia la inversión productiva o hacia el posicionamiento puramente especulativo en el mundo urbano del país.

La combinación de este papel central del sector agrario, cuyos trazos definitorios básicos se concretan en unas estructuras y formas de organización de la producción muy desequilibradas territorialmente e injustas socialmente, unido a la debilidad de la presencia de otras actividades económicas, a la precariedad de las infraestructuras y comunicaciones existentes, a lo que se añade la raquítica actuación pública en términos de provisión de servicios sociales esenciales, todo ello explica la trascendencia que la pobreza alcanza en las áreas rurales del Ecuador¹⁹.

El censo de población de finales del año 2001 analiza la pobreza a partir del concepto de “necesidades básicas insatisfechas”. Además, facilita esta información para todas las escalas territoriales. De ella podemos deducir que de los más de doce millones de ecuatorianos censados el 61% se encontraban en una situación de pobreza²⁰. A pesar que tal magnitud induce a pensar en una generaliza-

ción espacial de este fenómeno socioeconómico, hemos de constatar que las discrepancias territoriales son muy significativas. Así, de las 1.312.200 personas que residían en aquellas parroquias que tenían menos de cinco mil habitantes, un total de 1.137.100, es decir, el 87%²¹ vivían en el momento censal en condiciones de pobreza²². De entre estas pequeñas poblaciones, un total de 626, había 325 en las que la pobreza afectaba a más del 90% de la población, otras 272 que se movían en un intervalo entre el 60 y el 90%, otras 17 con valores entre el 50 y el 60%, y *solamente 12 en las que se bajaba del 50%*. En las parroquias semiurbanas de entre cinco y diez mil habitantes esa proporción se situaba en el 83%. Por el contrario, en aquellas que ciudades de entre cien mil habitantes y un millón, este índice se reducía hasta el 46%, mientras que, finalmente, en Quito y Guayaquil quedaba fijado en un 42%. Las distancias, pues, entre el mundo urbano y el mundo rural son muy considerables.

A modo de conclusión

Los espacios rurales en el Ecuador, al igual que acontece en otros países latinoamericanos, están viviendo un proceso innegable, pero también contradictorio de transformaciones, de alcances muy dispares. Probablemente, la “espoleta” que inició el cambio fueron las sucesivas reformas agrarias de 1964 y de 1973, que dieron el impulso definitivo al afianzamiento del capitalismo en el agro ecuatoriano y finiquitaron el régimen de hacienda que pervivía desde los comienzos de la

19 Larrea (2004: 50) recoge una estimación de la pobreza en el Ecuador para el año 2001 a partir de los ingresos familiares por habitante. Según este autor, en condiciones de pobreza viven el 60,8% de los ecuatorianos, proporción que en las ciudades es del 51,6%, mientras que en las áreas rurales se situaría en el 77,5%.

20 La *Encuesta de Condiciones de Vida de 2005-6* del INEC (2007) señala que la proporción de personas pobres en las áreas rurales era del 63,6% (un 23,9% indigentes), mientras que en las áreas urbanas “solamente” era del 23,7% (un 3,8% indigentes). La distancia es, pues, espectacular.

21 Según la CEPAL (2004) la proporción de población en condiciones de pobreza para el conjunto de áreas rurales de América Latina y el Caribe era del 61,8% en el año 2002, con un peso de la indigencia –o pobreza extrema- del 37,9%.

22 Al respecto, son ilustrativas las obras de Vos (2000), el informe del PNUD (1999), y los trabajos del SIISE (2003) y Larrea y Sánchez (2003).

colonización española. Aunque, ciertamente, a partir de los años ochenta y en los años posteriores hasta la actualidad, dichas mutaciones se han acelerado y extendido su radio territorial de actuación. En buena medida, ello sucede al albor de los efectos que sobre esos espacios está comportando la globalización en todas sus facetas, como consecuencia de la implementación sucesiva de paquetes y/o medidas de ajuste estructural neoliberal -que han acabado convirtiéndose en la causa y la respuesta al mismo tiempo de/a la crisis económica del país-, y debido a la conflictiva situación por la cual ha transitado el sector agropecuario en el transcurso de estos años. Un sector agrario cuya trayectoria ha venido determinada por el reforzamiento de una estructura profundamente desequilibrada en cuanto a la dotación de las diversas explotaciones agrarias de medios de producción, de recursos financieros y tecnológicos, y en cuanto al grado de acceso a los mercados regionales, nacionales o internacionales y a las condiciones en las que éste se efectúa. A ese desequilibrio estructural debemos añadir hondas disparidades territoriales en cuanto a los niveles de productividad y de rentabilidad de las unidades de producción agropecuarias.

Dos factores más incidirán en propiciar cambios en el mundo rural. En primer lugar, el campo está comenzando a desempeñar otras funciones para la formación social ecuatoriana más allá de la tradicional como productor de materias primas agropecuarias o minero-energéticas o como suministrador de fuerza de trabajo: ahora, será igualmente concebido como potencial espacio de ubicación de industrias y de ciertos servicios, de actividades ligadas al turismo y el ocio y, sobre todo, como espacio residencial en áreas próximas e influenciadas por los grandes centros urbanos del país. En segundo lugar, podemos constatar que en estas dos últimas décadas se ha desenvuelto un proceso complejo, policausal y multidimensional de reorganización de

las estructuras y de las relaciones sociales en el seno del mundo rural del Ecuador -tanto desde el punto de vista interno de esa/s sociedad/des como desde la óptica de sus interrelaciones con el resto de territorios y ciudades del país-. Esa reorganización viene determinada ciertamente por los efectos de la globalización, pero también por las propias y plurales estrategias adaptativas que implementan los moradores rurales, y por los efectos sobre las estructuras sociodemográficas, el mercado laboral y las formas de acumulación que se derivan de la emigración internacional masiva y de la llegada de las remesas.

Sin duda, el correlato de estos procesos y de los principales factores que los explican puede brindar una impresión de que efectivamente se han producido unas transformaciones de tal magnitud en el mundo rural ecuatoriano, que se pueda hablar sin paliativos de la existencia de una “nueva ruralidad” en este país. Ahora bien, si tenemos presente lo que engloba esta noción en Europa Occidental y en Estados Unidos, comienzan a emerger serias dudas sobre su posible empleo en el caso ecuatoriano. Y, no olvidemos, que aquellos que promueven el uso de este concepto en América Latina, expresamente parten de dicha concepción aplicada en esas naciones del núcleo central del capitalismo mundial.

En esos contextos nacionales, el espacio rural en la actualidad, esa “nueva ruralidad” vendría definida por a) un cambio de signo de la tendencia demográfica: finaliza el éxodo rural y se convierten en zonas receptoras de inmigrantes, b) son áreas donde la agricultura ha perdido manifiestamente el protagonismo económico y laboral en beneficio de la industria, la construcción, el turismo y otras actividades comerciales y de servicios, c) son territorios que se definen por una evidente complejidad social, cultural y político-institucional y que, al mismo tiempo, denotan unas pautas de comportamiento sociocultural cada vez más parecidas a las que caracterizan

al mundo urbano, d) son espacios con niveles de renta y de desigualdad social, de dotación de infraestructuras de transportes y comunicaciones, y de provisión de servicios públicos esenciales relativamente bajos y no alejados de los urbanos. Si asumimos este contenido del concepto “nueva ruralidad” (que es el que adjudican los organismos internacionales y muchos de los investigadores que lo defienden, es la visión institucional de la que hablamos) y a partir de ahí observamos atentamente las cifras sobre la evolución demográfica, el mercado laboral y las condiciones de vida de las áreas rurales ecuatorianas no parece que podamos afirmar, sin más, que exista una nueva ruralidad (esa “nueva ruralidad”, la que proponen los organismos internacionales a partir de la experiencia y la realidad del campo europeo) en el Ecuador de inicios del siglo XXI.

En definitiva, el mundo rural ecuatoriano vive desde hace ya algunos decenios procesos de cambio que afectan a su estructura económica y laboral, como igualmente a la organización social, las relaciones sociales, la regulación institucional y las formas de acumulación que lo vertebran y definen en última instancia. Ello es indudable (hemos de rechazar aquí cualquier visión inmovilista al respecto), y es en buena medida producto del modelo de desarrollo capitalista seguido por el Ecuador, y de los efectos que sobre éste está comportando la inserción dependiente y subordinada de este país en el proceso de globalización que bajo la égida de las políticas neoliberales actualmente se desarrolla en el mundo. Empero, estas mutaciones no han tenido la capacidad de modificar sensiblemente dichas estructuras productivas o sociales, hasta el punto de mudar una situación que viene marcada por un papel preeminente de una agricultura dual, por una carencia evidente de una dotación adecuada de infraestructuras y de servicios públicos esenciales, y por un grado de depauperización abrumado-

ramente mayoritario. La consecuencia (la salida) más palpable de esa contradictoria y difícil situación es, sin duda, el camino de la emigración. Por todo ello, creemos que no se puede hablar sin más de la existencia de una “nueva ruralidad” en el Ecuador, si se parte del concepto postulado recientemente en la región por organismos como el IICA, el Banco Mundial, la FAO o de los que defienden las estrategias del denominado *desarrollo territorial rural*. En cambio, sí que se está configurando una nueva ruralidad derivada de la confluencia conflictiva de las lógicas espaciales del capitalismo (ecuatoriano y mundial), de las funciones -múltiples y contradictorias- que los espacios rurales están asumiendo en estos últimos años en el seno de la formación social ecuatoriana, y de las respuestas adaptativas que los distintos grupos y colectivos sociales rurales implementan para adaptarse a esas lógicas y a esas funciones. Una nueva ruralidad, real y no discursiva, que consolida la posición marginada y dependiente de los espacios rurales respecto de los intereses y estrategias de los grupos de poder económico y político urbanos.

Bibliografía

- Banco Mundial, 2002, *Llegando a los pobres de las zonas rurales. Estrategia de desarrollo rural para América Latina y el Caribe*, Banco Mundial, Washington DC.
- Banco Mundial/FAO, 2002, *La nueva ruralidad en Europa y su interés para América Latina*, Banco Mundial, Washington DC.
- Berry, B.J.L., 1978, “The counterurbanisation process: how general?”, en N.M., Hansen, editor, *Human settlement system*, Ballinger Publishing Co., Cambridge.
- BID/FAO/CEPAL/RIMISP, 2004, *Empleo e ingresos rurales no agrícolas en América Latina*, Serie Seminarios y Conferencias No. 35, CEPAL, Santiago de Chile.
- Bretón, Víctor, Francisco García Pascual, coordinadores, 2003, *Estado, etnicidad y movimientos*

- sociales en América Latina. Ecuador en crisis*, Icaria, Barcelona.
- Bryceson, D., C. Kay, J. Mooj, editores, 2000, *Disappearing peasantries? Rural labour in Africa, Asia and Latin America*, Intermediate Technology Publications, Londres.
- Camarero, L.A., 1993, *Del éxodo rural al éxodo urbano (ocaso y renacimiento de los asentamientos rurales en España)*, MAPA, Madrid.
- Champion, A.G., 1989, *Counterurbanisation. The changing pace and nature of population deconcentration*, E. Arnold, Londres.
- Cloke, P.J., 1990, *The rural state? Limits to planning in rural society*, Clarendon Press, Oxford.
- Cordero, P., 2003, *Territorios rurales, competitividad y desarrollo*, Cuaderno Técnico No. 23, IICA, San José de Costa Rica.
- Cruz Doren, M.E., 2002, "Políticas agrarias y rurales en América Latina. Etapas, enfoques, restricciones e interrogantes", en E. Pérez Correa, J.M. Sumpsi, coordinadores, *Políticas, instrumentos y experiencias de desarrollo rural en América Latina y Europa*, FODEPAL, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, AEI, Madrid, pp. 97-122.
- De Janvry, A., E. Sadoulet, 2002, "El desarrollo rural con una visión territorial", ponencia presentada en el Seminario Internacional, *Enfoque Territorial del Desarrollo Rural*, SAGARPA-IICA, Boca del Río, Veracruz.
- Delgado Serrano, M.M., 2004, *La política rural europea en la encrucijada*, MAPA, Madrid.
- Dirven, M., 2004, *Alcanzando las metas del milenio: una mirada hacia la pobreza rural y agrícola*, CEPAL, Santiago de Chile.
- BID, "Divisiones de recursos naturales y medio ambiente", 2003, en *Informe 2003*, BID, Washington DC.
- Echeverri, R., 2004, *Desarrollo territorial rural en América Latina: manejo sostenible de recursos naturales, acceso a tierras y financiación rurales*, BID, Washington DC.
- Echeverri, R., M.p. Ribero, 2002, *Nueva ruralidad, visión del territorio en América Latina y el Caribe*, IICA, San José de Costa Rica.
- Echeverri, R., A. Rodríguez, S. Sepúlveda, 2003, *Competitividad territorial, elementos para una discusión*, Sinopsis No. 7, IICA, San José de Costa Rica.
- Elbers, C., P. Lanjouw, 2001, "Intersectoral transfer, growth and inequality in rural Ecuador", en *World Development*, No.29, No.3, pp. 481-496.
- Ellis, F., S. Biggs, 2001, «Evolving themes in rural development, 1950-2000», en *Development Policy Review*, No.19, Cap.4, pp. 418-437.
- García Pascual, Francisco, 2003, "El ajuste estructural neoliberal en el sector agrario latinoamericano en la era de la globalización", en *European Review of Latinamerican Studies*, No.75, pp. 3-30.
- García Pascual, Francisco, coordinador, 2003, *La lucha contra la despoblación todavía necesaria. Políticas y estrategias sobre la despoblación de las áreas rurales en el siglo XXI*, CEDDAR, Zaragoza, pp. 127-194.
- García Sanz, B., 2003, "¿Se acabó el éxodo rural? Nuevas dinámicas demográficas en el mundo rural español", en Francisco García Pascual, coordinador, *La lucha contra la despoblación todavía necesaria. Políticas y estrategias sobre la despoblación de las áreas rurales en el siglo XXI*, CEDDAR, Zaragoza, pp. 13-42.
- Giarraca, N., editor, 2001, *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, CLACSO, Santiago de Chile.
- IICA, "Grupo interagencial de desarrollo rural", 2001, en *Objetivos*, IICA, San José de Costa Rica.
- IICA, 2000, *El desarrollo rural sostenible en el marco de una nueva lectura de la ruralidad: nueva ruralidad*, IICA, Panamá.
- Kay, Cristóbal, 2004, "Rural livelihoods and peasant futures", en R., Gwynne, R. Cristóbal Kay, editores, *Latin America transformed. Globalisation and modernity*, Arnold, Londres, pp. 232-250.
- Kayser, B., 1990, *La renaissance rurale. Sociologie des campagnes du monde occidental*, Armand Colin, París.
- Kjöllérström, M., 2004, *Competitividad del sector agrícola y pobreza rural: el papel del gasto público en América Latina*, CEPAL, Santiago de Chile.
- Lanjouw, P., (1998), "Ecuador's rural non farm sector as a route out of poverty", en *Policy Research Working Paper No. 1904*, Banco Mundial, Washington DC.

- Larrea, C., 2004, *Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador*, Abya-yala, Quito.
- Llambí, L., 2001, "Global-local links in Latin America's new ruralities", en D. Bryceson, C. Kay, J. Mooj, editores, *Disappearing peasants? Rural labour in Africa, Asia and Latin America*, Intermediate Technology Publications, Londres, pp. 176-191.
- Marsden, T.K., P.D. Lowe, S.J. Whatmore, editores, 1990, *Rural restructuring: global process and their responses*, David Fulton, Londres.
- Martínez Valle, Luciano, 1994, *Los campesinos-artesanos en la sierra central: el caso de Tungurahua*, CAAP, Quito.
- , 2000, *Economías rurales: actividades no agrícolas*, CAAP, Quito.
- , 2004, "Migración internacional y mercado de trabajo rural en el Ecuador", en Gioconda Herrera, editora, *La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades*, FLACSO, Quito.
- Miranda, B., 2003, *Capital social, institucionalidad y territorios*, Sinopsis, No.5, IICA, San José de Costa Rica.
- OCDE, 2003, *The future of rural policy: from sectoral to place-based policies in rural areas*, OCDE, París.
- Pacione, M., 1984, *Rural geography*, Harper y Row, Londres.
- Pérez Correa, E., 2001, "Hacia una nueva visión de lo rural", en N. Giarraca, editor, *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, CLACSO, Santiago de Chile.
- Pérez Correa, E., 2002, "Lo rural y la nueva ruralidad", en E. Pérez Correa, J.M. Sumpsi, coordinadores, *Políticas, instrumentos y experiencias de desarrollo rural en América Latina y Europa*, FODEPAL, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, AECE, Madrid, pp. 15-32.
- Pérez Correa, E., 2004, "Lo rural y el desarrollo en América Latina", en F. Rodríguez, E. Pérez Correa, coordinadores, *Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple desde Europa y Latinoamérica*, TREA, Gijón, pp. 49-66.
- Perry, G., D. Ledesman, 2005, *Beyond the city. The rural contribution to development*, BM, Washington DF.
- Ramis, G., F. Stewart, 1993, "Rural non agricultural activities in development: theory and applications", en *Journal of Development Economics*, No.40, pp. 75-191.
- Ray, C., 2002, "A mode of production for fragile rural economies: the territorial accumulation of forms of capital", en *Journal of Rural Studies*, No.18.
- Reardon, T., J. Berdegúe, 1999, "Empleo e ingreso rural no agrícola en América Latina", documento presentado al Seminario *Desarrollo del empleo rural no agrícola*, BID, CEPAL, FAO, RIMISP, Santiago de Chile.
- Rodríguez, A., R. Echeverri, S. Sepúlveda, M. Portillo, 2003, *El enfoque territorial del desarrollo rural*, IICA, San José de Costa Rica.
- Rodríguez, F., 2004, "El desarrollo rural como paradigma teórico", en R. Rodríguez, E. Pérez Correa, coordinadores, *Espacios y desarrollos rurales. Una visión múltiple desde Europa y Latinoamérica*, TREA, Gijón, pp. 9-21.
- Sarraceno, E., 2002, "La política europea de desarrollo rural y su utilidad en el contexto latinoamericano", en E. Pérez Correa, J.M. Sumpsi, coordinadores, *Políticas, instrumentos y experiencias de desarrollo rural en América Latina y Europa*, FODEPAL, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, AECE, Madrid, pp. 169-183.
- Schejtman, A., J.A. Berdegúe, J.A., 2003, *Desarrollo territorial rural*, Borrador de trabajo, RIMISP, Santiago de Chile.
- Sepúlveda, S., 2003, "Territorios rurales, estrategias y políticas en América Latina", en Seminario internacional *Territorio, desenvolvimiento rural en democracia*, IICA, Fortaleza.
- Silva da, G., 2002, "Velhos e novos mitos do rural brasileiro: implicações para as política pública", presentado al panel 9, *Desenvolvimento rural sustentável*, Banco do Desenvolvimento do Brasil, Brasília.
- Sumpsi, J.M., 2002, "La política agraria y rural de la Unión Europea", en E. Pérez Correa, J.M. Sumpsi, coordinadores, *Políticas, instrumentos y experiencias de desarrollo rural en América Latina y Europa*, FODEPAL, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, AECE, Madrid, pp. 123-146.
- Vos, R., 2000, *Ecuador 1999. Crisis económica y protección social*, SIISE, Abya-yala, Quito.

A vueltas con el neo-indigenismo etnófago: la experiencia Prodepine o los límites del multiculturalismo neoliberal

On ethnofagic neo-indigenism: The Prodepine experience or the limits of Neoliberal multiculturalism

Víctor Bretón

Universidad de Lleida (España), Investigador Asociado a FLACSO-Ecuador

Email: breton@hahs.udl.es

Fecha de recepción: enero 2007

Fecha de aceptación y versión final: julio 2007

Resumen

Este artículo explora algunos de los nuevos modelos de intervención sobre la sociedad rural ensayados a partir de la consolidación del Post-Consenso de Washington. Particularmente, se interroga sobre la viabilidad y la aplicación que se ha hecho por parte del aparato del desarrollo de la noción de capital social. Como estudio de caso, presenta el análisis del *Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador* (PRODEPINE), iniciativa pionera a escala continental que apuesta por el fortalecimiento organizativo como estrategia con que enfrentar los retos de la nueva ruralidad. La intención es tantear no tanto las virtudes y los límites analíticos del concepto de capital social como la forma en que organismos como el Banco Mundial lo han interpretado y proyectado en forma de modelo de actuación. Los resultados de esta experiencia en los Andes del Ecuador permitirán volver, ya en el segmento final del ensayo, sobre el proyecto cultural del neoliberalismo y sus implicaciones para el movimiento indígena ecuatoriano.

Palabras clave: Capital social, desarrollo rural, pueblos indígenas, organismos internacionales, neoliberalismo, Ecuador.

Abstract

This text explores some of the new methods of intervention that have been tested in rural areas since the consolidation of the Post-Washington Consensus. Particularly, it seeks to evaluate the definition of the concept, social capital, by its application in different developmental agencies. The specific case of analysis in this article is of the *Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador* (PRODEPINE, Ecuador's Indigenous and Afro-Ecuadorian Peoples Development Project). This has been a pioneering initiative in the American continent, and draws on the importance of strong organisation as the main strategy to attack the challenges faced by the new rural class. The idea is not so much to assess the analytical virtues and limits of the social capital concept, but to question the ways in which it has been understood and materialised by institutions, especially international ones, like the World Bank. At the end of the article, the results of the analysis studied in the Andes of Ecuador will show the effects of neoliberalism on the indigenous movement in Ecuador.

Keywords: Social Capital, Rural Development, Indigenous Peoples, International Organizations, Neoliberalism, Ecuador.

En este artículo quiero explorar algunos de los nuevos modelos de intervención sobre la sociedad rural ensayados por parte del Banco Mundial tras la conformación del Post-Consenso de Washington. Propongo, a partir de una serie de consideraciones extraídas del análisis de una experiencia emblemática en materia de desarrollo comunitario en los Andes ecuatorianos, algunas reflexiones en torno a lo que ha significado la deriva neoliberal en lo que a los paradigmas de intervención sobre el medio rural se refiere durante los años del último cambio de siglo. Dado que en los noventa se consolidó la tendencia, al interior del aparato del desarrollo, de priorizar el eje identitario y, con ella, quedó en un segundo plano el abordaje de la problemática de las áreas rurales en términos de estructuras agrarias y de clase, la intención es deconstruir la que durante casi seis años (1998-2004) se presentó públicamente como la iniciativa más innovadora, audaz, participativa y exitosa de todas cuantas se habían ensayado en Ecuador con población indígena, el *Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador* (PRODEPINE). Esta es una iniciativa tanto más importante en la medida en que constituyó una experiencia piloto a nivel continental. Sus resultados permitirán reflexionar sobre el proyecto cultural del neoliberalismo y sus implicaciones para el movimiento indígena ecuatoriano¹.

1 Mi investigación sobre PRODEPINE ha visto la luz en varias publicaciones, unas más sintéticas (Bretón 2005 y 2006) y otra más extensa (2005b). En ellas se encontrará todo el material empírico convenientemente expuesto y tabulado (con más generosidad en la última). Dado que lo que pretendo en este texto es incidir sobre las líneas argumentales sugeridas por el análisis cuantitativo, he prescindido del aparato estadístico para centrarme en los aspectos más discursivos de la primera fase de PRODEPINE. Debo aclarar, con todo, que circunscribí el estudio al área andina, a modo de muestra, y que por lo tanto las reflexiones propuestas son únicamente indicativas del sentido de PRODEPINE para las comunidades indígena-campesinas y las organizaciones de segundo grado de la sierra.

El Banco Mundial y los pueblos indígenas

Desde la primera mitad de los años 90, el Banco Mundial ha mostrado una atención renovada por los pueblos indígenas, en consonancia con eventos como la declaración en Naciones Unidas de la Década dedicada a esos colectivos o la concesión del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú en 1992. Han proliferado así declaraciones de principios sobre el interés por el potencial que, desde la óptica del desarrollo, encierran las culturas indígenas, justamente aquellas que eran consideradas, en el tiempo dorado del indigenismo clásico, como cuellos de botella de la *modernización* de amplios sectores de la población rural latinoamericana². Es en ese marco relacional de (aparente) respeto por los pueblos y nacionalidades indígenas donde surgió PRODEPINE. Antes de entrar en los claroscuros que presenta su trayectoria, sin embargo, considero pertinente intentar responder a dos interrogantes fundamentales: ¿por qué el Banco Mundial, los gobiernos nacionales de la región y las demás instancias conformadoras del aparato del desarrollo se fueron mostrando receptivos ante una parte - y subrayo lo de *una parte* - de las demandas indias? ¿Y por qué el Banco Mundial eligió al Ecuador como el país más indicado para experimentar, ya al final de la década, el más in-

2 Para una visión de conjunto del indigenismo como política de Estado, véase el texto divulgativo de Favre (1996). Es difícil de todos modos generalizar sobre el significado profundo que tuvieron esas políticas indigenistas. Si bien es cierto que modelos de actuación como el del "desarrollo comunitario" fueron pensados para incentivar procesos de desarrollo endógenos que ubicaran a las comunidades en la senda modernizadora entonces al uso -diluyendo así presumiblemente las barreras entre los indígenas y los no indígenas-, también es verdad que los resultados fueron muy polivalentes, reforzando a menudo, por el contrario, las identidades étnicas. En esta línea argumental resulta interesante la comparación que realiza Martínez Novo (2007) entre los casos de México y Ecuador.

novador de los proyectos destilados en el magma de la alteridad cultural?

Creo que hay una serie de circunstancias y procesos convergentes que ayudan a arrojar una luz sobre estas cuestiones. La apertura y sensibilidad hacia las demandas étnicas constituye, en primer lugar, una respuesta al vigor y a la capacidad de movilización demostrada por las organizaciones indígenas ya plenamente establecidas al inicio de la década de 1990. La aparición en escena de esos nuevos movimientos indianistas como actores políticos recurrentes, en segundo lugar, se dio paralelamente al colapso del desarrollismo estatista de viejo cuño, bajo la égida de los preceptos del Consenso de Washington y en un marco en el que la izquierda estaba atravesando acaso la crisis más profunda de su historia. Es importante además no olvidar la experiencia reciente de países de profunda raigambre indigenista, como México, que al palio de los modelos neoliberales experimentaron un reacomodo de sus políticas oficiales hacia los pueblos indígenas. Carmen Martínez (2006) muestra, por ejemplo, de qué manera se gestó en ese país el tránsito -ya con la presidencia de Salinas de Gortari- de unos planteamientos indigenistas enraizados en los viejos parámetros integracionistas hacia una suerte de neo-indigenismo neoliberal interesado en el fortalecimiento identitario en un escenario -y eso es lo interesante y perverso del caso- en el que la diferencia étnica conlleva exclusión y discriminación.

Hay, con todo, dos grandes hitos a escala continental que ilustran, desde mi punto de vista, la fuerza adquirida en ese tiempo por las organizaciones indígenas. Uno es el segundo gran levantamiento auspiciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el de 1994, que fue fruto de una cadena de movilizaciones iniciadas en 1990 y se constituyó en un hito fundamental al obligar al mismo Presidente de la República a negociar con los dirigentes indí-

genas el contenido ni más ni menos que de la nueva Ley Agraria, una pieza clave en el engranaje jurídico neoliberal. El otro es la insurrección neo-zapatista en Chiapas, que mostró al mundo los límites y las contradicciones de la ortodoxia fondomonetarista.

En uno y otro caso se evidenciaba de qué manera variables consideradas desde el dogma neoliberal como meras “externalidades” al modelo -los costos sociales- podían llegar a convertirse en verdaderas “internalidades” capaces de dificultar la consolidación y desarrollo libre y sin trabas de los diseños del mercado. Se imponía pues una reconsideración -un cierto replanteamiento de algunos “flecós” del modelo- que permitiera neutralizar o reconducir a dichas plataformas organizativas hacia derroteros no incompatibles con las metas, siempre en nombre del desarrollo, a que los responsables políticos decían querer orientar a las economías latinoamericanas.

Hay que tener presente además que la insistencia del Banco Mundial por priorizar líneas de intervención sobre los pueblos indígenas coincide y encaja con el espíritu del llamado Post-Consenso de Washington³. Es precisamente de la mano del Post-Consenso que se publicitaron desde el Banco *nuevos* paradigmas (nuevas modas) de intervención, de entre los cuales son remarcables para el tema que nos ocupa el del capital social y, derivado y relacionado con él, el del etnodesarrollo o *desarrollo con identidad*. En el caso de los pa-

3 Entre 1995 y 2005, durante el mandato de James Wolfensohn al frente de la institución, parece que se “tomó conciencia” al interior de la misma de que la rigidez emanada del Consenso -y plasmada en los planes de ajuste estructural- no estaba dando todos los frutos esperados (en términos de reducción de la exclusión y la pobreza) y se introdujeron algunos reajustes en la dinámica, el funcionamiento y las directrices en materia de desarrollo. Se trató, en última instancia, de buscar vías de consecución de una suerte de *desarrollo con rostro humano*; vías *alternativas*, eso sí, fuera de cualquier tipo de cuestionamiento del núcleo duro del modelo hegemónico. Ver Fine (2001) y Fine, Lapavistas y Pincus (2001).

íses andinos, eso se tradujo en un énfasis por el fortalecimiento de las organizaciones de segundo grado indígena-campesinas (OSG), pues se consideró que estas federaciones *condensaban* de algún modo el capital social existente en las organizaciones de base que las conforman (comunidades campesinas, cooperativas o asociaciones de productores)⁴.

PRODEPINE se constituyó, en ese sentido, como un experimento piloto de hasta dónde se podía llegar por esta vía. Un tema crucial para calibrar su sesgo político es el de la cronología de su creación, pues aunque estuvo operativo entre 1998 y 2004, no parece gratuito que fuese en 1995 cuando empezó a madurar la idea de articular una propuesta como ésta. En un primer momento, su diseño no estuvo vinculado a las inquietudes mostradas desde el Banco Mundial por el capital social, aún orientándose hacia el apoyo de las organizaciones étnicas en Ecuador. A pesar de contar con raíces diferentes, terminó ensamblándose plenamente con esa nueva línea de desarrollo, pudiéndose afirmar que el

perfil final del Proyecto es un buen ejemplo de cómo la dimensión política que el Banco ha acabado otorgando al capital social se ha apropiado de este tipo de iniciativas, en principio surgidas fuera de la controversia. En esta línea, la idea era que fueran las OSG capaces, en un ejercicio genuino de *empoderamiento* (*empowerment*), de priorizar sus necesidades y ejecutar los proyectos preceptivos emanados de un autodiagnóstico previo.

PRODEPINE encarnó así la respuesta que, desde el *establishment* financiero neoliberal, se fue articulando para enfrentar la *amenaza* planteada por los pueblos y nacionalidades indígenas. Una respuesta que, calificada por algunos autores como multiculturalismo neoliberal (Díaz-Polanco 2006)⁵, está corriendo en una triple dirección:

Asumir y apoyar -incluso a través de modificaciones constitucionales- determinadas demandas de carácter cultural (derechos de los pueblos y nacionalidades al reconocimiento y visualización de su diferencia).

Dejar en un segundo plano (o simplemente invisibilizar) todos aquellos planteamientos alternativos que pusieran en entredicho la lógica del modelo de acumulación del capitalismo neoliberal del cambio de siglo.

En paralelo, profundizar la vía asistencialista (proyectista) de intervención sobre las comunidades. Esa vía proyectista, dominante durante las últimas décadas, presenta la virtud aparente (más cosmética que real) de amortiguar el costo social del modelo neoliberal (una "lucha contra la pobreza" inacabable y reiterada sin descanso por todos los organismos de desarrollo); al tiempo que, convenientemente manejada, puede permitir encauzar (¿domesticar?) las expectativas de las dirigencias indias (y de sus bases) hacia el

4 Bebbington y Carroll (2000), Carroll (2002 y 2003). Conviene señalar que las agencias de desarrollo han focalizado su atención en una determinada acepción de la noción de capital social: aquella que vincula su presencia (y calidad) con la existencia de organizaciones populares de diversa índole, capaces de facilitar a los sectores subalternos la acción colectiva en pos de intereses comunes. El apoyo e inducción de esas formas organizativas -*capital social estructural*, en la literatura especializada- se considera como una estrategia plausible para incrementar el protagonismo de los individuos y las colectividades en sus propios procesos de cambio. En consonancia con la filosofía del Post-Consenso de Washington, el Banco Mundial optó por esa conceptualización, catapultándola como paradigma innovador en materia de desarrollo (Grootaert y Van Bastelaer 2001). Es importante subrayar la trascendencia del rumbo elegido, puesto que ha marcado estilo y está en la base del éxito que el capital social adquirió a finales de los noventa, por ejemplo, en el mundo de los proyectos desempeñados por todas las agencias importantes -públicas y privadas- en el medio rural. Para una lectura en positivo de estos procesos, resulta interesante la compilación de Bebbington, Woolcock, Guggenheim y Olson (2006).

5 Sobre el proyecto cultural del neoliberalismo y el uso que desde el mismo se hace de las cuestiones identitarias en América Latina, ver además Assies (2000), Díaz-Polanco (2005), Hale (2003) y Martínez Novo (2006), entre otros muchos.

único espacio *posible* de negociación: el número y el monto de los proyectos concretos a implementar.

La experiencia PRODEPINE en los Andes del Ecuador

La gran novedad de PRODEPINE estriba en su orientación autogestionaria, limitándose a financiar y asesorar a las OSG para que controlasen y supervisasen las actuaciones sobre el territorio (PRODEPINE 2002). Se perseguía que esas plataformas fueran capaces de priorizar las necesidades de sus comunidades filiales, de establecer perfiles de acción e incluso de contratar al personal técnico conveniente, siempre con el asesoramiento y acompañamiento de la infraestructura burocrático-administrativa del Proyecto; infraestructura constituida con la finalidad de poner al alcance de esas OSG -y de sus direcciones locales- los recursos necesarios para asumir las acciones requeridas por unos planes de desarrollo local (210 en total, habitualmente de ámbito parroquial) emanados a su vez de los diagnósticos participativos preliminares (Larreamendy y Uquillas 2001).

PRODEPINE significó en los Andes la realización de 379 subproyectos específicos ejecutados a través de 121 organizaciones indígenas⁶. Más allá de las grandes cifras, sin embargo, el análisis pormenorizado de la forma en que se canalizaron las inversiones permite delinear cuatro líneas de interpretación del significado real de PRODEPINE; líneas que sintetizo someramente a continuación y que bien podrían enunciarse así: 1) que PRODE-

PINE tiene en realidad, visto desde la praxis del día a día, mucho más de continuista que de innovador; 2) que sus gestores y evaluadores nunca se interpelaron sobre la calidad del capital social inducido; 3) que la implementación del Proyecto ha contribuido a profundizar la división y la fragmentación del campesinado andino en base a criterios identitarios; y 4) que PRODEPINE ha demostrado ser una eficaz correa de transmisión del proyectismo, con las limitaciones y las sombras que ello comporta en términos sociales y políticos.

PRODEPINE tiene más de continuista que de innovador

PRODEPINE se nutre del *humus* de décadas de presencia masiva de instituciones de desarrollo en el ámbito indígena-campesino, se ha alimentado de la experiencia acumulada y se propone perpetuar el modelo dominante de relación donante-beneficiario, aunque minimizando el peso de antiguos intermediarios (caso de las ONG) y centralizando la toma de decisiones en manos de un núcleo reducido de líderes indígenas de alto nivel (quienes manejan la gestión nacional del Proyecto).

PRODEPINE ha tendido a concentrarse en los espacios más visitados previamente por las agencias de desarrollo, públicas y sobre todo privadas. Ello es así, en buena medida, porque muchas de esas instituciones habían focalizado sus prioridades en la consolidación del andamiaje organizativo. En este punto destaca la labor desplegada por no pocas ONG pasado el tiempo de la lucha por la tierra y la reforma agraria. Si bien los resultados obtenidos por esos agentes en lo que respecta a la mejora de las condiciones de vida de la población rural o a la eficiencia y eficacia de los proyectos impulsados arroja más sombras que claros -ahí está la tenaz persistencia de la pobreza y la indigencia en el medio indígena-

6 En 1999 sus fondos incluían 25 millones de dólares aportados por el Banco Mundial y 15 por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, ambas partidas a cuenta de la deuda externa ecuatoriana, más una cuota de 10 millones desembolsada por el Estado y, en mucha menor cuantía, por las organizaciones indígenas beneficiarias, con frecuencia en forma de trabajo comunitario para ejecutar obras (Uquillas 2002).

campesino (Larrea 2006)-, lo cierto es que en muchos casos, y a menudo desde posiciones ideol3gicas progresistas, se invirtieron cuantiosos esfuerzos por levantar un andamiaje organizativo como motor hipot3tico del cambio social y como interlocutor en las acciones de desarrollo. Durante m1s de 25 a1os, las OSG fueron las instancias privilegiadas de esa interlocuci3n desde la l3gica de las ONG y, por ello, no debe sorprender la constataci3n de una elevada correlaci3n entre la mayor condensaci3n de 3stas y la mayor densidad organizativa cristalizada a nivel de segundo grado. En consecuencia, PRODEPINE encontr3 m1s y mejores contrapartes en las 1reas ya de antiguo "beneficiadas" por esas instituciones (Bret3n 2001 y 2005b).

Si el modelo relacional OSG / ONG puede ser calificado como de neo-indigenista, al responder -a pesar del c3digo 3tico de muchas agencias- a una relaci3n de poder y de inducci3n de determinados esquemas organizativos, la aportaci3n de PRODEPINE profundiza en esa misma l3nea, al tiempo que inserta en la gesti3n de las intervenciones a las dirigencias locales y en la gesti3n nacional a representantes de la intelectualidad ind3gena. Lo m1s sorprendente es, sin embargo, que PRODEPINE sirve de efecto demostraci3n de c3mo se puede seguir trabajando en ese rumbo prescindiendo de la intermediaci3n de las ONG, estableciendo relaciones directas desde la infraestructura ejecutiva creada por el Banco Mundial en el pa3s hacia los pisos intermedios del entramado organizativo ind3gena (las OSG), esta vez no tanto en calidad de receptores pasivos de los insumos como de ejecutores y part3cipes.

*PRODEPINE no se interpela
sobre la calidad del capital social inducido*

Es verdad que PRODEPINE fomenta el fortalecimiento organizativo a nivel de OSG,

pero no es menos cierto que muchas de esas organizaciones est1n con frecuencia controladas por una elite ind3gena local con capacidad de redistribuir, muy discrecionalmente, recursos entre sus comunidades filiales. En cualquier caso, lo que parece claro es que PRODEPINE no entra a valorar las caracter3sticas reales y substantivas de las federaciones de segundo grado y s3 m1s bien a robustecerlas, sean como sean, en nombre de una hipot3tica concentraci3n de capital social. Los datos indican que PRODEPINE ha significado un est3mulo para la creaci3n de OSG -de 141 en las provincias de la sierra en 1998 se pas3 a 164 en 2002 (Coronel 1998, Larrea *et al.* 2002)- y para apuntalar esa modalidad organizativa como eficiente desde el punto de vista de la mediaci3n con el aparato del desarrollo. Desde esa 3ptica, la proliferaci3n de OSG debe ser entendida tambi3n como una estrategia local ante las reglas de un juego que la poblaci3n local no controla y que opera en un contexto macro lesivo para los intereses de las econom3as campesinas: la 3nica posibilidad brindada de acceder a recursos externos ha estribado en la constituci3n de organizaciones de segundo grado y, muchas veces, en la fragmentaci3n de las ya existentes.

La naturaleza de esas OSG, pues, es heter3gena y controvertida, alejada de la imagen idealizada de "caja de resonancia" del capital social comunitario que algunos autores cercanos al Proyecto pretenden ver. En ellas es habitual por el contrario el manejo clientelar y verticalista de las relaciones con las bases por parte de las dirigencias. Un elemento importante a tener en cuenta es que, con frecuencia, esas dirigencias provienen de los estratos m1s privilegiados del campesinado (son las elites socioecon3micas locales); aqu3llos que m1s provecho pudieron sacar en su d3a de los procesos de reforma agraria, de los proyectos DRI (Desarrollo Rural Integral) de los ochenta, y que m1s insumos obtuvieron de la intervenci3n de ONG y fi-

nancieras multilaterales en las últimas décadas. Esos son los sectores capaces de interlocutar exitosamente con los agentes de desarrollo, los que suelen controlar los hilos del poder y la toma de decisiones al interior de las OSG y, por consiguiente, los previsiblemente más beneficiados con una intervención -la de PRODEPINE- que pone en sus manos la gestión de parte de los recursos.

PRODEPINE profundiza la fragmentación del campesinado andino

PRODEPINE coadyuva la división entre beneficiarios y no beneficiarios, indígenas frente a mestizos, dificultando por omisión cualquier intento de tender puentes. Todo ello acontece en un contexto de persistente crisis en el medio rural y de una carencia notoria de recursos públicos y privados, lo que alienta la competencia y la desunión. Pensemos si no por un momento en lo que ha significado desde el año 2000 la dolarización de la economía nacional para las, ya de por sí, depauperadas economías campesinas de la Sierra. No es difícil especular sobre los efectos que esta situación acarrea para las explotaciones campesinas, presionadas a vender cada vez más barato, a comprar cada vez más caro y con serias dificultades incluso para poder emplear temporalmente parte de su mano de obra en unos mercados laborales presionados a la baja en sus salarios.

La estrategia del Banco Mundial ha pasado, así, por fragmentar a los actores sociales. Fragmentarlos en base a su adscripción étnica: unos (los indígenas) pudiéndose acoger a los beneficios de PRODEPINE y otros (el resto) amparados por el paraguas de PROLOCAL (Proyecto de Desarrollo Local Sostenido), una iniciativa operativa desde 2001 y orientada a la población rural *no-indígena* al margen de PRODEPINE⁷. Es decir, que a lo largo y ancho de las parroquias andi-

nas vamos a ver proliferar una multiplicidad de iniciativas en desarrollo rural, aisladas las unas de las otras, como si no fuera posible articular una agenda común del campesinado serrano -más allá de sus identidades colectivas- de cara a enfrentar la compleja coyuntura actual.

La situación es tanto más contradictoria en cuanto, además, habitualmente los actores fragmentados desarrollan sus actividades compartiendo un mismo territorio: unos arriba, en las tierras más altas, y otros abajo, alrededor de las cabeceras parroquiales y cantonales. De esta manera, puede muy bien darse la situación de la existencia de unos planes de manejo de un sector de un valle o de una microcuenca, traducido en cualquier cantidad de pequeños proyectitos concretos, pero desligados de las intervenciones focalizadas en otros sectores de ese mismo agroecosistema por la apuesta de sancionar la segregación de hipotéticos aliados con intereses comunes en base a parámetros culturalistas esencializados (y que benefician además a las correspondientes dirigencias medradas a la sombra protectora del etnodesarrollo)⁸.

PRODEPINE es una eficaz correa de transmisión del projectismo

En última instancia, PRODEPINE marca los límites de las demandas de las organizaciones indígenas al monto y la cuantía de los subproyectos y se constituye en una herramienta

7 PROLOCAL y PRODEPINE fueron publicitados explícitamente como las dos patas de un mismo modelo de intervención sobre la sociedad rural desde el mismo entorno del Banco Mundial. Véase, a título de ejemplo, Donoso-Clark (2003).

8 Soy consciente de que esta es una descripción esquemática, aunque responde bastante bien a lo que acostumbra a ser habitual. Tómese sólo como ilustrativa de una realidad mucho más compleja que cuestiona plenamente la estrategia de fragmentar a los productores en función de su ubicación identitaria.

clave de una estrategia neo-indigenista y etnófila de carácter neo-colonial⁹.

Desde un punto de vista económico, habría que cuestionar la viabilidad del proyectismo. Eso sin contar con que, como tantas otras iniciativas en desarrollo rural, la mayoría de los subproyectos PRODEPINE adolece de una visión irreal de las condiciones de producción y reproducción de las pequeñas unidades. Se continúa privilegiando una imagen *agrarista* del mundo rural que tiene poco que ver con la *nueva ruralidad* que se ha ido conformando en estos últimos decenios (Martínez Valle 2003:143-148). Frecuentemente, además, iniciativas comunitarias (al menos co-financiadas en forma de trabajo por las comunidades), terminan siendo usufructuadas por las elites campesinas (bien dirigentes o muy vinculadas con las dirigencias) con capacidad de gestión y de endeudamiento.

Pero lo que me parece más remarcable es el efecto político del proyectismo, que no es otro que el sopor analgésico que ejerce sobre los diferentes niveles del andamiaje organizativo indígena: PRODEPINE sitúa el campo de batalla del movimiento indígena en el número, la cuantía y la naturaleza de los subproyectos, diluyendo la política de alcance. En ese contexto, el situar en el centro de la discusión la magnitud (¿cuánto dinero, cuántos proyectos y cuántos beneficiarios?) de PRODEPINE vacía el posible contenido político *anti* del movimiento indígena, lo desi-

deologiza, lo institucionaliza y lo encauza en una vía asumible por el modelo. El proyectismo se constituye así en la única baza posible de negociación de cara a unas bases sociales empobrecidas, en franca descomunalización y con pocas expectativas¹⁰. Ese es el triunfo de PRODEPINE, proyectándose amenazadoramente sobre el conjunto del entramado organizativo indígena.

Reflexiones finales

En realidad, PRODEPINE era la culminación de un camino hacia la *etnitización* impulsado por los modelos imperantes en la cooperación al desarrollo desde el final de la era de las reformas agrarias; un fenómeno evidenciado en la tendencia recurrente a concentrar las intervenciones sobre áreas predominantemente indígenas y, en parte por ello, pues la *indianidad* se convirtió en un reclamo *real* de cara a obtener recursos y proyectos (Bretón 2001), en una deriva fundamentalista de determinados planteamientos identitarios.

Las secuelas que experimentos como PRODEPINE han dejado sobre el andamiaje organizativo (mayor fragmentación, menor capacidad de movilización, vaciamiento ideológico de buena parte de las dirigencias, convertidas en meras gestoras de los proyectos a implementar) dan la razón a quienes insistían en los peligros que encerraba la separación y priorización de las cuestiones identitarias del resto de reivindicaciones que históricamente habían estado presentes en la agenda indígena (Rodríguez 1999, Saint-Upéry 2001). Obsérvese si no de qué manera un Proyecto como éste, que fue diseñado en sus líneas di-

9 Díaz-Polanco (1997) usa para el caso mexicano la expresión "indigenismo etnófago". En la medida en que el término "indigenismo" está demasiado relacionado en América Latina con su utilización para calificar el paquete de políticas dirigidas a las poblaciones indígenas durante la etapa desarrollista, prefiero hablar de "neo-indigenismo etnófago" para aludir a la situación creada en el contexto neoliberal: la articulación de un dispositivo de intervención sobre los pueblos indígenas en el que, a diferencia de los patrones de antaño, son con frecuencia las propias dirigencias étnicas las que se enquistan en el aparato del desarrollo y gestionan una parte importante de los fondos destinados hacia esos colectivos.

10 Sobre la crisis de las formas de gestión comunitarias en los Andes ecuatorianos, resulta referencia obligada el estudio de Martínez Valle (2002). Ver también, para una perspectiva más amplia de la situación de la pequeña agricultura familiar, Martínez Valle (2004).

rectrices desde el entorno del Banco Mundial, que se financió a cuenta de la deuda externa del Estado, y que fue materializado sobre el terreno bajo la supervisión de intelectuales y técnicos indígenas -los responsables de su aparato burocrático-administrativo- y con la colaboración de numerosos dirigentes locales, se ha hecho pasar por un triunfo de la nueva filosofía del desarrollo con identidad.

Visto desde otro ángulo, sin embargo, la perspectiva cambia: el hecho de que una parte substancial de las políticas de desarrollo que afectan a un colectivo tan importante como el indígena, en un país como Ecuador, se planifique en sus líneas maestras desde el Banco Mundial, recurra al endeudamiento nacional para viabilizarse, se ejecute con el beneplácito de los representantes de los beneficiarios, se evalúe desde la misma instancia foránea que lo ideó, prescinda del Estado en su fiscalización y finalmente se presente como exitoso, constituye en realidad -aplicando el lenguaje de la vieja economía política- un ejercicio postmoderno de neocolonialismo sin paliativos. Un neocolonialismo que va más allá de lo estrictamente económico y que, de manera lenta pero persistente, ha terminado colonizando los imaginarios colectivos de todos, de quienes ejecutan y de quienes se benefician con las mieles del proyectismo.

De cara al futuro la situación es compleja, y no sólo por el vaciamiento ideológico que padece hoy el movimiento indígena, sino también por las directrices que, en materia de pueblos indígenas, parece que va a impulsar el Banco Mundial en los próximos años: unas directrices que, sintéticamente explicitadas en la *Política Operacional OP 4.10* y las *Normas de Procedimiento BP 4.10* de esa institución, sancionan la línea directa de intervención Banco Mundial-Estado-organizaciones indígenas, contribuyendo a la consolidación de un nuevo aparato indigenista adaptado -eso sí- al contexto de la nueva Economía Institucional; enfatizan la necesidad de compatibili-

zar los aspectos “culturales” -en un sentido *folk* del término- con los requerimientos del mercado global; y apuestan con más fuerza por el proyectismo como única fórmula posible de actuación, como si la situación de los pueblos indígenas fuera “cosa de indios” sin ningún vínculo ni nexo causal con una(s) determinada(s) estructura(s) social(es) y con una posición subordinada de sus respectivos espacios políticos de referencia en la jerarquía global. De ahí el recurso -viejo recurso- de recetar medidas parciales (proyectos), en muchos casos asistenciales y fragmentarios para resolver una situación irresoluble sin atacar a los problemas de raíz.

Bibliografía

- Assies, W., 2001, “indigenous peoples and reform of the State in Latin America”, en W Assies, H Van Der Haar, A Hoekema editores, *The challenge of diversity. Indigenous peoples and reform of the state in Latin America*, Thela Thesis, Amsterdam, pp. 3-21.
- Bebbington, A. y T. Carroll, 2000, *Induced social capital and federations of the rural poor*, Social Capital Initiative, Working Paper No. 19, Banco Mundial, Washington D.C.
- Bebbington, A., M. Woolcock, S. Guggenheim, E. Olson, 2006, *The search for empowerment: social capital as idea and practice at the world bank*, Kumarian Press, Bloomfield.
- Bretón, Víctor, 2001, *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos. Ensayos sobre indigenismo, desarrollo rural y neoindigenismo*, Flacso-sede Ecuador y Universitat de Lleida, Quito.
- , 2005, “Los paradigmas de la ‘nueva’ ruralidad a debate: El proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador”, en *European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, No. 78, pp. 7-30.
- , 2005b, *Capital social y etnodesarrollo en los Andes: la experiencia PRODEPINE*, Centro Andino de Acción Popular, Quito.
- , 2006, “El proyecto del Banco Mundial para los pueblos indígenas: experiencias recientes en los Andes ecuatorianos”, *ALASRU*.

- Análisis latinoamericano del medio social*, No. 4, pp. 157-183.
- Carroll, Thomas, editor, 2002, *Construyendo capacidades colectivas. Fortalecimiento organizativo de las federaciones indígenas en la Sierra ecuatoriana*, Quito.
- , 2003, “Tales of collective empowerment in the Andes”, Ponencia presentada en *The 2003 meeting of Latin American Studies Association (LASA)*, Dallas.
- Coronel, R., coordinador, 1998, *Censo nacional de organizaciones indígenas y negras e índice de fortalecimiento institucional*, PRODEPINE, Quito, mimeo.
- Díaz-Polanco, H., 1997, *La rebelión zapatista y la autonomía*, Siglo XXI, México.
- , 2005, “Los dilemas del pluralismo”, en P. Dávalos, editor, *Pueblos indígenas, Estado y democracia*, CLACSO, Buenos Aires, pp. 43-66.
- , 2006, *Elogio de la diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia*, Siglo xxi, México.
- Donoso-Clark, M., 2003, “Rural development”, en V. Fretes-cibilibis, M. Giugale, J.R. Lopez-calix, Editores, *Ecuador: An economic and social agenda in the new millennium*, World Bank, Washington D.C., pp. 369-387.
- Favre, H., 1996, *L'Indigénisme*, Presses Universitaires de France, París.
- Fine, B., 2001, *Social capital versus social theory: political economy and social Science at the turn of the millennium*, Routledge, Londres.
- Fine, B. C., Lapavitsas, J. Pincus, editores, 2001, *Development policy in the twenty-first century*, Routledge, Londres.
- Grootaert, Ch., T. Van Bastelaer, 2001, *Understanding and measuring social capital: a synthesis of findings and recommendations from the social capital initiative*. Social capital initiative working Paper No 24, Banco Mundial, Washington D.C.
- Hale, C.R., 2003, “Does multiculturalism menace? Governance, cultural rights and the politics of identity in Guatemala”, en *Journal of Latin American Studies*, Vol. 34, pp. 485-524.
- Larrea, C., F. Montenegro, editores, 2006, “Ecuador”, en *Indigenous peoples, poverty and human development in Latin America*, Palgrave Macmillan, Basingtoke, pp. 67-105.
- Larrea, F., A. Cobo, M. García, K. Hernández, 2002, *Las capacidades de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas de segundo y tercer grado: resultados del censo de entidades ejecutoras de PRODEPINE e índice de fortalecimiento institucional*. Informe de consultoría para PRODEPINE, Fundación Heifer Ecuador, Quito, mimeo.
- Larreameindy, P., J. Uquillas, 2001, “Desarrollo con identidad: proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y afro-ecuatorianos”, *La ventana boletín*, informe de la Unidad de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, Banco Mundial, Vol. 1, Washington D.C., pp. 3-4.
- Martínez Novo, C., 2006, *Who defines indigenous? identities, development, intellectuals and the state in northern Mexico*, Rutgers University Press, New Brunswick.
- , 2007, “¿Es el multiculturalismo estatal un factor de profundización de la democracia en América Latina?: una reflexión desde la etnografía sobre los casos de México y Ecuador”, en Víctor Bretón, F. García, A. Jove, M.J. Vilalta, editores, *Ciudadanía y exclusión: Ecuador y España frente al espejo*, La catarata, Madrid (en prensa).
- Martínez Valle, Luciano, 2002, *Economía política de las comunidades indígenas*. ILDIS / Abya-Yala / OXFAM / FLACSO, Quito.
- , 2003, “Los nuevos modelos de intervención sobre la sociedad rural: de la sostenibilidad al capital social”, en *Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina*, Icaria, Barcelona, pp. 129-157.
- , 2004, “Los límites de la agricultura campesina en la nueva ruralidad”, Ponencia presentada al *XXV International Congress of the Latin American Studies Association*, celebrado en Las Vegas entre el 7 y el 9 de octubre 2004.
- Prodepine, 2002, *Informe de cierre del proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador*, PRODEPINE, Quito.
- Rodríguez, A., 1999, “Un proyecto amenazado por dentro”, en *Boletín del Instituto Científico de Culturas Indígenas Rimai*, No 2, Quito, pp. 2-5.
- Saint-Upéry, M., 2001, “El movimiento indígena ecuatoriano y la política del reconocimiento”, en *Iconos, Revista de Ciencias Sociales*, No. 10, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 57-67.
- Uquillas, J., 2002, “Fortalecimiento de la capacidad de autogestión de los pueblos indígenas y afro-ecuatorianos: el caso de PRODEPINE”, Ponencia presentada en el *Primer encuentro de LASA sobre estudios ecuatorianos*, celebrado en Quito del 18 al 20 de julio 2002.

Las ferias campesinas¹

Ensayo gráfico de Alonso Azocar (Fotos)
y Luciano Martínez (Investigación)

Las fotos que se presentan a continuación fueron captadas en 1988 por Alonso Azocar² con quién realizamos una pequeña investigación en tres ferias campesinas de la sierra ecuatoriana de desigual grado de penetración mercantil.

El primer caso es la feria de Cusubamba en la provincia de Cotopaxi, una feria diversificada, con presencia marcada de comerciantes de fuera y una variedad amplia de productos. Aquí, el producto básico de trueque era la cebada y se realizaba a través del interambio practicado por las mujeres. Normalmente, las campesinas se acercaban a las vendedoras de productos de fuera de la zona con porciones de cebada que eran entregadas a cambio de aquellos productos que eran de su preferencia. La “moneda” campesina era la cebada, acumulada poco a poco por las comerciantes foráneas de esta zona.

El segundo caso es la feria de Salaron ubicada en la provincia de Chimborazo: un mercado casi exclusivamente indígena en donde todavía se podía encontrar el trueque como uno de los ejes del mismo. Las mujeres campesinas utilizaban el capulí para efectuar trueque con otros productos alimenticios o no alimenticios. En este caso, quien quería capulí, debía acercarse a estas mujeres e intercambiar con otros productos de acuerdo a las necesidades de estas “vendedoras”. El poder del intercambio estaba en la disponibilidad de capulí.

El tercer grupo de fotos pertenecen a la feria de Saquisilí en la Provincia de Cotopaxi; una feria tradicional ya mercantilizada en donde el trueque estaba presente en forma marginal. Lo notable en este caso es mirar la diversificación del consumo campesino, que va desde lo alimenticio hasta el consumo de herramientas, ropa y también algunos lujos campesinos (sombrosos, aretes) realizados por las mujeres.

Podemos recoger tres aspectos interesantes de esta sobrevivencia del trueque en la sierra ecuatoriana. Primero, la vigencia de un equivalente campesino de intercambio (capulí, cebada). Segundo, que este equivalente seguramente era más generalizado en el caso de la cebada que en el del capulí (un producto más perecible). Y tercero, que esta actividad era controlada por mujeres, tanto las que ofrecían cebada como las que acudían a cambiar productos por capulí.

Estábamos privilegiadamente asistiendo a una de las modalidades invisibles del proceso de construcción social del mercado, en donde el intercambio de mercancías eludía el dinero o, si se quiere, éste se metamorfoseaba temporalmente en las pequeñas transacciones que realizaban las mujeres campesinas de estas ferias.

Estas fotos estaban enmarcadas en un proyecto de fotografía social sobre las ferias campesinas que no logró cristalizarse en su fase final de publicación sino hasta ahora, en una pequeña parte. Aquí hemos querido recuperar una muestra fotográfica que evidencia, más allá de la dimensión estética, profundos procesos sociales en lo que se encontraban inmersos los campesinos andinos.

Luciano Martínez Valle

1 Agradezco a Alonso Azocar que permitió la publicación de esta muestra fotográfica, sobre todo por la labor de búsqueda en su archivo personal.

2 Fotógrafo chileno, actualmente profesor de la Universidad de la Frontera, Temuco.



Cusubamba



Salarón



Saquisilí



Salarón



Salarón



Saquisilí



Saquisilí



Salarón



Saquisilí



Cusubamba



Salarón



Salarón



Cusubamba



Cusubamba

Museos, memoria e identidad afroecuatoriana

Museums, Memory and Afroecuatorian Identity

Jhon Antón Sánchez

Antropólogo, estudiante del doctorado de FLACSO-Ecuador

Email: afroecuatorianos@yahoo.com

Fecha de recepción: febrero 2007

Fecha de aceptación y versión final: mayo 2007

“Recuperar nuestra memoria colectiva e histórica afroecuatoriana, es construir nuestros discursos desde nuestras realidades y pensamientos”¹

Resumen

Este ensayo analiza las representaciones de los museos del Ecuador sobre los afroecuatorianos. Estudiando el caso de los museos del Banco Central del Ecuador, se demuestra cómo la identidad afroecuatoriana es deliberadamente excluida de los espacios museográficos que expresan la memoria oficial de la nación. Este tema cobra vigencia en momentos en que la sociedad afroecuatoriana, por medio de sus movilizaciones y acciones colectivas, emprende una fuerte batalla contra el racismo y la exclusión. Se trata de reclamos por un lugar adecuado en la cultura y en la historia del Ecuador. ¿Cuál es la propuesta de inclusión de la cultura afroecuatoriana en las políticas de museos del Banco Central? ¿Cómo podría implementarse una narrativa museográfica adecuada relacionada con los aportes de los afroecuatorianos a la construcción de la nación?

Palabras clave: Museo, afroecuatorianos, identidad, memoria, cultura afrodescendiente, Ecuador.

Abstract

This paper analyzes the way in which museums in Ecuador represent Afro Ecuadorian culture. In studying the museums of the Banco Central del Ecuador, it is shown how the Afro Ecuadorian identity is deliberately excluded from museum spaces that represent the official memory of the Nation. This topic becomes even more important at times when the Afro Ecuadorian society, by means of collective mobilization and action, battles racism and exclusion. In that battle the Afro Ecuadorians try and reclaim a space where their culture and history can be adopted into the Ecuadorian culture as a whole. This article answers two questions: The first being, what proposals and policies do the museums of the Banco Central del Ecuador have in regards to the inclusion of the culture and history of the Afro Ecuadorian's? Secondly, how can a suitable museum narrative be implemented in relation to the contributions of the Afro Ecuadorian's in the construction of the Ecuadorian nation?

Keywords: Museums, Afroecuatorians, Identity, Memory, Afrodescendant Culture, Ecuador.

1 José Chalá, líder afroecuatoriano del Valle del Chota, en el Taller de etnoeducación, Ambuquí, abril de 2004.

En este ensayo discuto las representaciones que los museos del Ecuador hacen sobre los afroecuatorianos. Mediante un examen particular a la manera en que el Museo del Banco Central minimiza a la identidad afro en sus exposiciones museográficas, demuestro cómo la identidad afro es deliberadamente excluida de aquellos escenarios sagrados de la memoria oficial. Este tema cobra vigencia en momentos en que la sociedad afroecuatoriana, por medio de sus movilizaciones y acciones colectivas, emprende una fuerte batalla contra el racismo y la invisibilidad, demandando un lugar en el espacio público, en tanto ellos reclaman ser sujetos que han aportado a la construcción de la nación desde distintos espacios de la cultura y la historia del Ecuador.

En el ensayo, entonces, se contestarán los siguientes interrogantes: ¿Cómo los museos del Banco Central del Ecuador representan el proyecto de nación muticultural y pluriétnica dentro de una propuesta de inclusión? ¿Podría implementarse una narrativa relacionada con los afroecuatorianos? ¿Cuál sería, de ser el caso, la aproximación a esa propuesta?

Buscando una huella afroecuatoriana en los museos

Los museos son definidos como instituciones guardianes de la memoria. Constituyen el escenario privilegiado de la historia e identidad de los pueblos. Los museos, además, tienen una importancia política pues guardan una estrecha relación con el proyecto nacional del Estado. Son una especie de recinto sagrado de la nación. Desde la interpretación de Pierre Nora (1986), los archivos históricos serían *lugares de la memoria* del presente.

Con estos argumentos, y como cualquier turista, visité algunos museos de Ecuador, al menos los del Banco Central en Quito. Durante mis visitas me interesaba saber cómo

se representan allí a los afroecuatorianos. Quería entender si los museos reflejan aquello que la Constitución Política expresa: “el Ecuador es un Estado multiétnico y pluricultural”. Mis inquietudes se sustentan por cuanto en el artículo 83 de la Constitución se lee que los pueblos indígenas y los pueblos negros o afroecuatorianos forman parte del Estado; además, en el artículo 62 se precisa que “el Estado fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de igualdad de las culturas”.

El Ecuador tiene 102 museos. Muchos de ellos tienen un carácter nacional y otros más local. Algunos son auspiciados por el Banco Central del Ecuador. Y los hay de toda clase: artesanales, religiosos, arqueológicos, folclóricos, arte moderno, etnográficos, de la Ciudad de Quito, indígenas, aeronáuticos, musicales, geológicos, zoológicos, paleontológicos e incluso virtuales. Sin embargo, sobre el tema de mi interés sólo pude encontrar que El Museo Etnográfico de la Mitad del Mundo en Quito, el Museo de la Ciudad de Quito y los Museos del Banco Central en Cuenca y Esmeraldas poseen una reducida representación sobre los afroecuatorianos.

El Museo del Banco Central del Ecuador en Esmeraldas cuenta con un Archivo Histórico conformado con documentos relativos a la venta de esclavos que constan en 117 carpetas y que abarcan los registros desde 1742 hasta 1913 y corresponden a Imbabura, Quito, el Valle del Chota y Esmeraldas. Esta documentación proviene del Archivo Nacional de Historia con la respectiva transcripción paleográfica. Igualmente se destaca la colección fotográfica “Esmeraldas del pasado”, compuesta de diapositivas, videos, películas y casetes sobre testimonios orales de la tradición afroesmeraldeña.

El Museo de Cuenca posee una sala de la música afroesmeraldeña, donde incluso se destacan representaciones en cera del conjun-

to folclórico de la marimba. En el Museo de la Ciudad de Quito se encuentra una copia del célebre óleo “Caciques Negros de Esmeraldas” pintado en 1599 por Andrés Sánchez Galque, donde aparecen los emisarios que Alonso de Illescas enviara a Quito en el siglo XVI con trajes de realeza y adornos de los indígenas hechos en oro. La pintura original está en el Museo de América Madrid.

En la ciudad Mitad del Mundo, ubicada a 7 km al occidente de Quito, se encuentra el Museo Etnográfico del Banco Central donde se muestra una breve representación folclórica de los diferentes grupos étnicos que conforman la nación ecuatoriana, 21 en total, de los cuales se destacan los afroecuatorianos de Esmeraldas y del Valle del Chota.

Pero mi más interesante hallazgo fue en el Museo del Banco Central de Quito, ubicado en el edificio de la Casa de la Cultura de la capital. Allí, pese a que hay seis salas museográficas, ninguna hace referencia al tema afro. Más bien en la urna virtual que se exhibe en las entradas pude constatar la siguiente lectura:

Link: Etnografía.

Vínculo: Afroecuatorianos de Esmeraldas y del Valle del Chota.

Afroecuatorianos de Esmeraldas:

“Este grupo étnico habita Esmeraldas. La población vive en gran mayoría en zonas rurales (...) La familia nuclear es el modelo más extendido de la organización social (...) En el área rural es común que las parejas no sean estables; la madre puede tener varias parejas a lo largo de su vida. El hombre colabora en la manutención del hogar, pero al disolverse el vínculo, su papel en la crianza y mantenimiento de los hijos queda en segundo plano. Al interior del núcleo familiar existe una cierta jerarquización de los roles masculinos y femeninos: mientras el hombre y los hijos varones comen sentados en la mesa, la esposa y las

hijas mujeres lo hacen en el suelo de la cocina...”

“Afroecuatorianos: La población afroecuatoriana puede ser entendida como un grupo sociocultural específico debido a que es una forma especial de mestizaje, en el cual los elementos simbólicos de origen africano son el eje sobre el que se integran a los demás elementos provenientes de la vertiente hispánica e indígena. (...) Por otra parte están los grupos que se supone escaparon de la esclavitud al ocurrir un naufragio frente a las costas de Esmeraldas en el siglo XVII. (Anotaciones de las visitas al Museo del Banco Central de Quito el 12 y 13 de mayo del 2005)

Museos: disputas entre memorias hegemónicas y memorias alternativas

Las anotaciones que sobre los afroecuatorianos posee el Museo Nacional son preocupantes, no sólo por su información inexacta, sino por el impacto político que dichas representaciones provocan sobre los imaginarios de la identidad. Eduardo Kingman y Mireya Salgado (2000:124) precisamente advierten que “los museos son una institución especializada en la producción y re-inversión de la memoria. Y la memoria juega un papel importante en la construcción de imaginarios, y la identidad se construye a partir de imaginarios”. ¿Cuál es entonces la representación que el Museo Nacional desea dar de los afroecuatorianos, a juzgar por los textos expuestos?

Contestar este interrogante implica comprender el papel de los museos como expresión de un discurso político de la representación y que en contextos específicos determinan una relación de poder. Según Elizabeth Jelin (2001:100), los museos pretenden fijar una marca memorística selectiva afirmando una ideología, una visión hegemónica de la historia y de la identidad nacional. Una marca que muchas veces corresponde al libre-

to único de la memoria de los vencedores, que termina excluyendo la memoria alternativa de los vencidos y de los oprimidos.

De este modo, es comprensible que los textos del Museo Nacional presenten una imagen subordinada y folclorizada de los afroecuatorianos, pero además inexacta. En primer lugar se afirma que “la población vive en gran mayoría en zonas rurales”, cuando el censo de 2001 afirma todo lo contrario: el 68.7% de los afros son urbanos frente al 31.3% rural (Secretaría Técnica del Frente Social 2005:28). En segundo lugar, se niega su especificidad étnica determinada por la herencia cultural afrodescendiente y se resalta que más bien “son una forma especial de mestizaje”. En tercer lugar, el Museo del Banco Central incurre en una imprecisión histórica al suscribir que el episodio del naufragio en las costas de Esmeraldas, que narró en su momento el presbítero Miguel Cabellos de Balboa, ocurrió en el siglo XVII, cuando en realidad fue un siglo atrás, en octubre de 1553 (Savoia 1992:30).

Asimismo, podíamos presentar serias críticas a los textos del Museo Nacional que colocan a la sociedad afroecuatoriana en una posición de primitivismo e incapacidad. Pues se afirma que “la pareja afro es inestable”, siendo que el hombre es irresponsable en el cuidado de sus hijos y la mujer incapaz de conformar la solidez de un hogar. Y por si fuera poco “el hombre y los hijos varones comen sentados a la mesa, la esposa y las hijas mujeres lo hacen en el suelo y en la cocina”.

De lo anterior expuesto se puede lograr una conclusión, la cual es muy ilustrada por Mary Roldan (2000:103): “los museos como receptáculo de la memoria nacional, cumplen un papel de la construcción y diseminación de un proyecto de nación y de una narrativa de identidad”. Y como tal concretan una visión particular de la historia, muchas veces desde las élites hegemónicas. En efecto, los museos a través de sus exhibiciones, colecciones, textos, guías, folletos y demás propagan-

da buscan representar u ordenar la realidad nacional partiendo de posiciones muchas veces políticas, definiendo lo que puede ser central o periférico, lo que posee valor o es inútil, lo que puede ser lo conocido o marginal. De modo que el museo termina siendo un lugar de confrontación, un espacio de disputa donde se redefinen distintas nociones de memorias, de interpretaciones del pasado, de valoración de la historia y de la construcción y fortalecimiento de la identidad cultural.

Inquieto, entonces, por el lugar de los afros en el Museo Nacional del Banco Central entrevisté a la Directora del Museo, la doctora María del Pilar Miño, sobre cómo el Museo Nacional incluye a los afroecuatorianos:

M.P.M.: “En este museo no vamos a encontrar nada de los negros. No existen, no están representados todos. Eso es una falencia. La falencia principal es que no tenemos bienes culturales [de los afroecuatorianos]”.

J.A.: ¿Y si esto es así, qué se tiene pensado para corregirla?”

M.P.M.: “Con la nueva construcción de otro edificio del Museo tendremos más espacio, y con el nuevo guión tendremos más apertura, donde estén representados todos, pues esa es nuestra identidad, y así lo vamos ha hacer”.

J.A.: “¿Y cómo será ese nuevo guión? ¿Cómo se representará a los afros? ¿Habrá una sala para ellos?”

M.P.M.: Recién estamos con un guión marco para referencia y contempla una visión por períodos históricos.

J.A.: ¿Y en esos períodos históricos qué se tiene pensado sobre la historia de los afros?”

M.P.M.: Será mejor que le pregunte eso al doctor Santiago Ontaneda, él es el coordinador del guión. ¿Quiere que se lo comunique?²

2 Entrevista con María del Pilar Miño, directora del Museo Nacional del Banco Central, en su despacho. Quito, 19 de mayo de 2005, 9h30.

Una vez con el Santiago Ontaneda, coordinador del nuevo guión del Museo del Banco Central, le pregunté sobre su interés para representar a los afros en el nuevo museo, el cual se dignó en responderme lo siguiente: “Bueno, no tenemos idea de cómo será eso, porque recién los grupos están trabajando. Y la idea que usted me plantea sería muy interesante, lo que pasa es que no se conoce mucho”³.

El tema de la representación adecuada de los afrodescendientes en el Museo Nacional se convierte en un asunto estratégico para los pueblos afro, ya que permite resolver cuestiones de inclusión y participación. Lo contrario puede ahondar problemas de exclusión y subordinación. Se trata de lograr que la identidad y la memoria afro se fortalezca y logre un espacio dentro de los espacios oficiales de representación nacional. Y en este contexto, José Chalá Cruz, un líder del movimiento social afroecuatoriano, afirma: “nuestras comunidades deben recuperar la memoria colectiva e histórica, esto es construir nuestros discursos desde nuestras realidades y pensamientos. La pérdida de la memoria implica la pérdida de la conciencia de ser”⁴. Este testimonio fija, entonces, un desafío al pueblo afroecuatoriano: movilizarse en torno a ser visibles en la historia, toda vez que la historia oficial, al parecer, los ha relegado a la periferia. Al respecto, Norman Whitten (1981:17) escribió que la identidad afroecuatoriana ha sido percibida por las élites nacionales como una marcada inferioridad, aun más que la indígena. Carlos de la Torre (2002:19) agrega que en las reflexiones de los intelectuales sobre la nación, los afros han sido vistos como un problema para

incorporarlos a la civilización. Y para demostrar su argumento revisa las posiciones de intelectuales como Alfredo Espinosa Tamayo (1916), Antonio Santiana (1955) y Humberto García Ortiz (1935), quienes representan al afroecuatoriano como “parte de un mundo de la naturaleza, carente de civilización y cultura y como la raza menos apta para incorporarse a la civilización”.

Recuperación de la memoria e historia

El llamado que hace José Chalá de recuperar la memoria histórica y colectiva afroecuatoriana se convierte en un recurso necesario para la movilización identitaria de estas comunidades. El ejemplo más claro ocurre en el Pacífico colombiano donde los afrodescendientes acuden a la reconstrucción de la memoria histórica sobre el territorio y la reflexión de la identidad como un ejercicio de beneficio de sus derechos colectivos que consagra la ley 70 de 1993.

Sobre este proceso de reconstrucción de la memoria, Manuel Zapata Olivella (1989) analiza el impacto que significó para los africanos la esclavitud, un fenómeno que encarnó rupturas violentas con las raíces identitarias y obligó una reconstrucción total de la memoria. En este proceso, los africanos no trajeron cultura material a América que determinara sus huellas de la memoria, sólo conservaron su cuerpo desnudo, el mismo que luego se convertiría en un espacio vivo de representación cultural, en lo que Jennifer Schimer (1994) denomina “depositario de la memoria”.

Pese a la tragedia de la esclavitud, los afrodescendientes lograron crear nuevas memorias utilizando métodos en que las narrativas contadas por los *griots* (narradores orales) jugaron un papel clave. Tal construcción de la memoria por medio de la dimensión narrativa oral es llamada por Jacques Le Goff

3 Entrevista telefónica con Santiago Ontaneda, coordinador general del nuevo guión del Banco Central. Quito, mayo 19 de 2005, 9h45.

4 José Chalá Cruz, Conferencia “Memoria colectiva y etnoeducación”. Taller de Etnoeducación, Ambuquí, Valle del Chota, abril 17 de 2004. Notas de mi diario de campo.

(1991:153) “reconstrucción generativa de la memoria”, donde el relato oral transmite un mensaje histórico de forma libre y flexible. Esta relación entre memoria e historia oral es estudiada por Alessandro Portelli (1991), quien comprende la historia oral como un arte de mantener la memoria de los pueblos⁵.

Pero la construcción de las memorias también tiene sus vacíos, huecos y olvidos. Louisa Passerini (1992) expresa que en muchos actos de recordar hay cosas que se dejan en el olvido, quizá porque fueron traumáticas o fueron hechos que causaron tanto dolor que es mejor no retrotraerlos al presente. Al respecto Odile Hoffman (200:99) afirma que en ciertas comunidades afroamericanas del Pacífico colombiano “la fase de la esclavitud desapareció de la memoria hablada. Hubo una especie de amnesia colectiva que pretende borrar humillaciones y sufrimientos”. Entonces, ¿la esclavitud en realidad ha quedado en el olvido de la memoria de los afros? Frente a este fenómeno, Elizabeth Jelin (2002) precisa que no hay memoria sin olvido; Paloma Aguilar (1996), por su parte, nos refiere que los silencios de la memoria son silencios traumáticos que no son totalmente reflejo de olvidos, sino formas distintas de usar la memoria de acuerdo a los tiempos y las circunstancias.

La memoria ha tenido distintos usos en distintos momentos de la historia (Le Goff 1991). Por ello hay que tener presente que las memorias son procesos dinámicos y flexibles en términos de situaciones políticas determinadas. Además, “la memoria no se opone a ningún modo de olvido. Ella siempre es una interacción de olvido y conservación” (Todorov 1997:15) De modo que la memoria debe ser entendida como una selección de ciertos rasgos del pasado o acontecimientos que son conservados y otros inmediatamente descartados. Y para los afros esos silencios traumáticos de la esclavitud no pudieran ser olvidos

profundos, más bien serían eventos refugiados en la memoria de la intimidad, en los sentidos y muchas veces en el cuerpo el cual con sus inscripciones y movimientos encierran el pasado (Stuar Hall 1997). De allí que para los afrodescendientes las canciones, mitos, ritmos y danzas, rituales de paso, rudimentos de términos lingüísticos africanos, relatos orales, concepciones de la muerte, se mantienen como *mementos*, como lugares de la memoria histórica y colectiva, que resurgen conciente e inconscientemente en función de relaciones sociales, en un contexto político con un peso en la construcción de la identidad.

La memoria colectiva como discurso político

Ahora bien, la recuperación de la memoria colectiva histórica para los afrodescendientes se ha convertido en una herramienta utilizada en el discurso político. En sus acciones colectivas ellos recurren al “uso de la memoria” como estrategia de fortalecimiento cultural. Esto en tanto cultura y memoria están ligadas estrechamente⁶ De modo que el tema de la memoria está siempre en la agenda política del proceso organizativo afroecuatoriano. Por ejemplo, para las organizaciones del norte de la provincia de Esmeraldas, la memoria es “ancestral”, y compromete la raíz de los ancestros (los “mayores” africanos) quienes transmitieron una herencia cultural que muchas veces se ha perdido. Por ello en algunos talleres que se hacen sobre etnoeducación o etnohistoria estas asociaciones proponen desafíos como recuperar lenguas africanas como el lingala, usar ciertas vestimentas y símbolos

5 Sobre relato oral ver Blanca Muratorio (1987).

6 Para T. Todorov (1997:17), la cultura debe entenderse como un asunto de memoria: “ella es el conocimiento de un cierto número de códigos de comportamiento y la capacidad de servirse de ellos Y un ser sin cultura es el que no ha adquirido jamás la cultura de los ancestros, o que la ha olvidado y perdido”.

africanos, practicar la religión yoruba, cambiarse el nombre propio por uno africano, entre otras cosas. Por cuanto estas concepciones esencialistas de recuperación de la memoria son convertidas en textos identitarios, se pierde de vista que lo “ancestral” más que una cuestión auténtica y originaria corresponde a una invención con propósito ideológico. Por ello Terences Ranger y Eric Hobsbawm (2002) nos hablan de tradiciones inventadas, donde lo “ancestral” es entendido como la construcción cultural que una sociedad hace en un determinado presente histórico. Desde esta visión, la memoria corresponde a un repertorio que hay que reinventar constantemente para responder a las cambiantes condiciones del mundo en que se vive.

Una propuesta de museo afroecuatoriano

Dentro de los procesos de revitalización de la memoria por parte de los afroecuatorianos, el tema de los museos cobra importancia en tanto que, al igual que las conmemoraciones, las fechas históricas y demás marcas de la memoria, son piezas claves en sus procesos identitarios y en sus discursos de inclusión social. Por lo anotado, los museos -o concretamente el Museo Nacional del Banco Central- deberían centrar su objetivo de fortalecer el patrimonio cultural multiétnico de la nación, dentro del contexto de lo que David Lowenthal (1994) califica como un “proceso de democratización de la cultura”. Es decir, los museos deben acomodarse a la realidad contemporánea del país. Los museos tienen entonces un reto: entender las múltiples ofertas simbólicas que interactúan en un mundo cada vez más intercultural, desterritorializado, globalizado y diverso. Donde las identidades no son valoraciones acabadas sino en permanente intercambio y alimentación.

Pero hay que advertir que una posible apertura a la diversidad cultural por parte del

Museo no puede convertirse en lo que Eduardo Kingman (2004:31) califica como “un discurso aparente de la democratización de la diversidad”. Es decir, se debe evitar que se asuman prácticas de promoción cultural y de marcas de la memoria de los excluidos que conlleven a la caricaturización. La propuesta de inclusión y de diálogo de la diversidad no puede pretender igualmente una domesticación de la identidad y del patrimonio para satisfacer el comercio y el turismo. Aunque tampoco se trata de radicalismos ni de purezas que no sean capaces de interpretar los entramados de la modernidad y de los escenarios que imponen los procesos de globalización. La invitación es a que la política cultural de apertura a la diversidad por parte de las autoridades culturales esté orientada hacia la participación, la concertación y a las posibilidades creativas de la misma gente que se va a representar.

Reflexión final: ¿qué poner en una sala afroecuatoriana?

Deseo terminar el ensayo proponiendo algunas líneas gruesas de lo que preliminarmente podría contener una sala de museo afroecuatoriano. Digo “preliminarmente” porque sería muy aventurado tratar de agotar en este espacio una propuesta que amerita mayor examen, análisis e investigación. Además, considero que pensar una propuesta de tal magnitud debe ser concertada, consensuada y discutida ampliamente, donde sea la misma sociedad civil la que proponga cómo quiere ser representada, qué cosas son las que habría que poner y cómo ponerlas. Es decir, la propuesta debe ser construida mediante un amplio sentido democrático y participativo. Además, pensar en una propuesta de museo o de sala de museo afroecuatoriana debe implicar una poderosa estrategia de investigación documental, etnográfica e incluso arqueoló-

gica. La cual debe complementarse con la generación de un amplio debate en torno a las representaciones sociales, la memoria y la identidad cultural.

La propuesta de Sala de Museo debería contextualizarse en medio de un marco epistemológico que de cuenta del aporte de los afrodescendientes a la construcción de la nación, no sólo desde la historia y el folclore, sino también desde otros ámbitos: economía, política, tecnología, literatura y otras esferas de la cultura. De modo que cualquier visitante a dicho museo sea capaz de leer la cultura afroecuatoriana, tal como lo define Clifford Geertz (1987:17): como un gran contexto de significados que se imbrican en la complejidad no sólo del mundo ecuatoriano, sino del contexto regional y global. Esto por cuanto la cultura afroecuatoriana no es un hecho aislado, ella es un componente consustancial de ese fenómeno global que se llama diáspora africana y que se conecta entre sí con otras manifestaciones de la América Negra y las culturas milenarias africanas. De modo que el museo o la sala museo debería dar cuenta del universo global de la ontología y el conocimiento de la diáspora africana en Ecuador.

Inicialmente se plantea que la sala de museo tendría como misión recuperar y revitalizar la memoria tangible y no tangible de la cultura afrodescendiente en el Ecuador, de modo que le permita la valoración de su historia, la comprensión de su presente y la proyección de un futuro promisorio. Al país, le generaría elementos para estructurar de manera inclusiva y sin discriminación y racismo su proyecto de identidad nacional, cuyos basamentos serían precisamente la diversidad de cosmovisiones e identidades de sus pueblos.

Consecuente con esto, la Sala de Museo deberá resaltar la memoria afro en tres escenarios: África, Afroamérica y Afroecuator, donde se parta de las civilizaciones africanas y su aporte a la humanidad; se ubique la ruta

de la esclavización, la trata trasatlántica, sus aportaciones a la economía colonial y capitalista, las huellas africanas en Ecuador, los hechos memorables de la historia de los palenques, de los héroes y cimarrones, las gestas y batallas por la libertad, incluyendo el aporte a la campaña libertadora bolivariana. Habría que destacar los personajes afrodescendientes que en Ecuador y el mundo se han destacado desde las esferas de la ciencia, las artes, la literatura, la economía, la academia y la política. Sería necesario ubicar espacios exclusivos para el deporte, la música, la artesanía, la danza, y muy especialmente el mundo espiritual y religioso, la muerte, la magia y las curaciones.

En general propongo una colección museográfica afroecuatoriana que permita conocer mejor la cultura ecuatoriana a partir del legado de los afrodescendientes. Una colección que más que respuesta debería suscitar preguntas, generar debates y controversias, acercar las distintas visiones de las aportaciones, y muy especialmente reflexionar de manera creativa sobre la memoria de estos pueblos invisibilizados.

Bibliografía

- Aguilar, Fernández, Paloma, 1996, *Memoria y olvido de la guerra civil española*, Alianza Editorial, Madrid.
- De la Torre, Carlos, 2002, *Afroquiteños, ciudadanías y racismo*, Centro Andino de Acción Popular, Quito.
- Geertz, Clifford, 1987, *La interpretación de las culturas*, Gedisa, Barcelona.
- Hoffamn, Odile, 2000, "La movilización identitaria y en recurso de la memoria. Nariño, Pacífico colombiano" en Gnecco y Zambrano, editores, *Memoria hegemónica y memorias disidentes*, INCANH, Bogotá.
- Jelin, Elizabeth, 2001, "Exclusión, memorias y luchas políticas", en Daniel Mato, compilador, *Estudios latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización*, CLACSO, Buenos Aires.

- Jelin, Elizabeth, 2002, *Los trabajos de la memoria*, Siglo XXI, Madrid.
- Muratorio, Blanca, 1987, *Rucuyaya Alonso y la historia social del Alto Napo*, Abya-Yala, Quito.
- Kingman, Eduardo y Mireya Salgado, 2000, "El Museo de la Ciudad. Reflexiones sobre la memoria y la vida cotidiana", en Fernando Carrión, compilador, *Desarrollo cultural y gestión en centros históricos*, Flacso-Ecuador, Quito.
- Kingman, Eduardo, 2004, "Patrimonios, políticas de la memoria e institucionalización de la cultura", en *Iconos, Revista de Ciencias Sociales*, No. 20, Flacso-Ecuador, Quito.
- Le Goff, Jacques, 1991, *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*, Paidós, Barcelona.
- Lowenthal, David, 1994, "Identity, Heritage and History", en *Commemorations: The Politics of Natural Identity*, Jhon Gillies, Estados Unidos.
- Passerini, Louisa, 1992, *Memory and totalitarianism. International yearbook of oral history and life histories*, Oxford University Press, Oxford.
- Perre, Nora, 1986, *Les lieux de mémoire*, Gallimard, Paris.
- Portelli, Alessandro, 1991, "The death of Luigi Trastulli: memory and the events", en *The Death of Luigi Trastulli and Others Stories. Form and Meaning in Oral History*, State University of New York Press, New York.
- Roldan, Mary, 2000, "Museo nacional, fronteras de la identidad y retos de la globalización", en G. Sánchez y M. Wills, compiladores, *Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro*, Ministerio de cultura, Bogotá.
- Sánchez, Gonzalo, 1999, "Memoria, museo y nación", Bogotá, mimeo.
- Savoia, Rafael, 1992, "El Negro Alonso de Illescas y sus descendientes (entre 1553 y 1867)", en Rafael Savoia, compilador, *El Negro en la historia del Ecuador y el sur de Colombia. Actas del primer congreso de historia del negro en el Ecuador y Sur de Colombia*, Centro Cultural Afroecuatoriano, Quito.
- Secretaría Técnica del Frente Social, 2005, *Los Afroecuatorianos en cifras. Desigualdad, discriminación y exclusión según las estadísticas sociales del Ecuador*, STFS, Quito.
- Terence, Ranger, 2002, "El invento de las tradiciones en el África colonial", en Eric Hobsbawm y Terence Ranger, editores, *La invención de la tradición*, Crítica, Barcelona.
- Todorov, Tzevan, 1997, "Los abusos de la memoria", en *Ciudad y memoria*, Corporación Región, Medellín.
- Zapata, Olivella Manuel, 1989, *Las claves mágicas de América*, Plaza y Janes, Bogotá.

Entrevistas

- María del Pilar Miño, Directora del Museo Nacional del Banco Central, mayo de 2005.
- Santiago Otaneda, Coordinador general del nuevo guión del Banco Central, mayo de 2005.

Sidney Mintz

Worker in the Cane

Editorial W.W. Norton, New York, 1974
[1960] 288 págs.

Versión en español: Taso. Trabajador de la caña, Río Piedras, Ediciones Huracán.

En el continente latinoamericano, la obra de Sidney Mintz, una de las más grandes figuras vivientes de la etnología caribeña y de la antropología americana en general, se conoce menos que la de su compañero de estudios en la Universidad de Columbia, colaborador y amigo de toda la vida, Eric Wolf. La obra de Wolf se concentra en las comunidades indígenas y campesinas del altiplano continental, como sitios de resistencia a y negociación con un sistema capitalista global exterior a ellas, estableciendo un paradigma hasta hoy hegemónico en la etnología latinoamericana. Mintz, en cambio, se especializó en las Antillas, con sus culturas e historias formadas en el crisol del comercio triangular, la esclavitud y la producción de azúcar. Debería estar claro que estas dos realidades regionales no son más que diferentes manifestaciones íntimamente relacionadas de la quincentenaria historia latinoamericana, pero no siempre lo es. De hecho, una de las muchas razones por las que vale la pena reconocer los aportes de Mintz a los estudios rurales latinoamericanos es que el ejercicio nos puede ampliar la visión estrecha de lo que es Latinoamérica -que nos impone la marginalización del Caribe-. Pero ampliarla también implica desarrollar nuevas perspectivas teóricas y metodológicas que nos acerquen a la complejidad del continente y, para ello, la obra de Mintz es fundamental.

Worker in the Cane (1974 [1960], publicado en español con el título *Taso. Trabajador de la caña* en 1988) fue la primera monografía de Mintz, pero no su primera contribución a la etnografía del Caribe. Bajo la supervisión de su asesor, Julian Steward (teórico de la evolución y de ecología culturales), trabajó en un

proyecto cuyos resultados aparecerían en un tomo de autoría colectiva, *The People of Puerto Rico* (1956)¹. Organizado por la Universidad de Puerto Rico, el proyecto pretendía describir los cambios históricos y ecológicos que habían transcurrido en la isla desde el fin de la ocupación española, o sea, a una escala que para el enfoque en las relaciones cara a cara y sincrónicas de la antropología en esa época representaba un reto metodológico. Para enfrentarse a ello, Steward desplegó a sus estudiantes en toda la isla para que realizaran una serie de estudios comunitarios entre grupos escogidos por ser “representativos” de diferentes aspectos de la economía política de Puerto Rico: cultivadores de café, trabajadores en una plantación de azúcar, la élite, etc. El conjunto de estas piezas, se suponía, formaría un retrato de la nación entera. Para Mintz (y para el mismo Steward (1957:5), quien reconoce en la introducción al libro que “La cultura puertorriqueña... es más que un mosaico de sus subculturas”) este híbrido de métodos antropológicos con unidades de análisis sociológicas fue menos, no más, que la suma de sus partes. *Worker in the Cane* es la respuesta de Mintz a las inquietudes despertadas por este fracaso.

La propuesta del libro es en apariencia simple: es la historia de vida de Anastasio “Taso” Zayas, un hombre puertorriqueño de unos cincuenta años, que trabaja desde la niñez en el cultivo de la caña, siempre como empleado de alguna gran plantación, y que se convierte a la religión pentecostal en la madurez. La mayoría de la narrativa consiste en las palabras más o menos textuales de Taso, con sus idiosincrasias lingüísticas, su preocupación de hombre siempre al borde de la ruina con los montos exactos de ganancias y pérdidas de décadas atrás, y su orgullo de trabajador en precisar los detalles de las tareas

1 Julian Steward *et.al.*, 1956, *The People of Puerto Rico*, University of Illinois Press, Urbana, Illinois.

que realiza. La estructura de la narrativa, sin embargo, la pone Mintz, ordenando las diversas conversaciones que tuvo con Taso durante años en capítulos que siguen una cronología de vida lineal. Vemos a Taso aprendiendo diferentes trabajos con la caña, uniéndose a un partido político socialista como respuesta a un insulto del hacendado local y luego a otro y, al final, entrando a la iglesia evangélica que, según Taso, le quitó un dolor que tuvo desde niño y le cambió el sentido de la vida. Contrapuestos con el desarrollo de esta vida pública están las alegrías y los dolores de la vida en familia de Taso. Con su mujer, Elí, Taso tuvo a trece hijos, tres de los cuales se murieron en la infancia: el retrato de Taso como patriarca sufriente es el elemento que redondea su historia.

Menos sutilmente que en la estructura, se nota también la mano del etnógrafo en un capítulo que describe el barrio donde vive Taso, en la conclusión, y en cortas secciones al final de cada capítulo. Aquí Mintz sitúa las aseveraciones de Taso en su contexto histórico, material y cultural, a veces contradiciendo a su informante, como cuando balancea su insistencia en que el color de piel no importa en Puerto Rico (Taso es blanco) con observaciones que sugieren otra cosa (p. 95). Estas intervenciones dejan claro que para Mintz el tema central de la vida de Taso (aunque él mismo no lo diga) son los cambios radicales que se han dado en Puerto Rico bajo la ocupación y la colonización norteamericana.

En resumen, *Worker in the Cane* es una historia de vida modelo, entretenida y conmovedora, rica en detalles que nos hacen apreciar a Taso como hombre y sentir su entorno, y de mensaje intelectual y político bastante claro. Y de hecho, sirvió de modelo para muchas historias de vida más. Sin embargo, este perfeccionamiento de lo que podemos posteriormente reconocer como las convenciones de este género antropológico no debe cegarnos a lo innovador que fue. Como

Mintz señala en un prólogo a la segunda edición, ésta no fue la primera historia de vida escrita por un antropólogo, pero las anteriores “venían de sociedades del tipo llamado ‘primitivo’... los antropólogos no habían escrito casi ninguna biografía de una persona clase obrera occidentalizada”. Este rechazo a lo exótico y lo simbólico como materia propia de la “cultura” en su sentido antropológico a favor de algo que se podría llamar el materialismo histórico se deriva en parte del evolucionismo de Steward, pero transforma esta influencia en algo radicalmente distinto. Es tal vez difícil ahora apreciar el efecto silenciador que ejercía el mccarthyismo en la época en que Mintz escribió este libro, pero Mintz asegura que al hablar de “historia” o “clase obrera” y enfocarse en la economía política uno ya rozaba con sus límites. Aunque nunca menciona a Marx, *Worker in the Cane* abre la puerta a una antropología profundamente marxiana, que se contrasta fuertemente con la corriente “modernizadora” que imperaba entonces en la visión norteamericana del sector rural latinoamericano. Presentándonos a Taso como héroe proletario, Mintz urge a sus colegas norteamericanos a remplazar la prepotencia intelectual imperialista con la solidaridad política, ayudando a abrir una conversación entre norteamericanos y latinoamericanos sobre como se debe manifestar esa solidaridad que persiste hasta hoy.

Sin embargo, aquí me gustaría resaltar una herencia tal vez menos obvia que la política, es decir la metodológica. Después de tantas críticas a la antropología “tradicional” por su expropiación de las voces de sus informantes -y aún reconociendo la fuerte presencia de Mintz en el libro- es sorprendente darse cuenta de la multivocalidad *avant la lettre* que está en juego en este texto de hace casi medio siglo. En la introducción, Mintz incluye dos pequeños relatos que Taso mismo escribió sobre su vida que no coinciden mucho con la “historia de vida” que va a construir Mintz,

pero además de notar que los relatos “provocan muchas preguntas”, Mintz los deja hablar por sí mismos. Suele intercalar sus preguntas para Taso con las respuestas que da éste, y así podemos ver como a veces Taso se incomoda por ciertas insistencias de Mintz -sobre el sexo, por ejemplo (p. 163-165), o sobre su conversión a una religión con la que sabe que Mintz no simpatiza (capítulo 7). Con frecuencia le da la voz a Elí, la esposa de Taso, para presentar otra perspectiva sobre la vida familiar.

Esta franqueza sobre la producción del conocimiento es inusual, y lo fue aún más en 1960. Pero a Mintz le daría mucha rabia que alguien lo considerara como precursor de la corriente autorreflexiva y textual que se apoderó de la antropología norteamericana en los años noventa y que él despreciaba. Para él, exponer su relación con Taso como parte de su análisis sirve a otro propósito, que es insistir en la individualidad de Taso como persona, su no-representatividad de algo más allá de él mismo: “Taso... no es un ‘promedio’ -ni un hombre promedio, ni un puertorriqueño promedio, ni un trabajador de la caña de la clase baja puertorriqueña” (p. 11). Mintz está dispuesto a contextualizar la situación de Taso, pero no a convertir esta situación en un metónimo de algo más (una cultura, una comunidad o una nación). Las contingencias de

la historia de vida de Taso aparecen en esa historia porque son, irreduciblemente, parte de ella.

Esta insistencia es más que un rechazo a las comunidades “representativas” de Steward: es un principio metodológico positivo. Mintz quiere romper la cadena de tipificaciones, en la que una persona habla por una cultura, y una cultura por una nación, de la que muchas veces depende la argumentación científica social, sin remplazarla con un simple individualismo metodológico. Nos reta a investigar la realidad en toda su particularidad concreta: es decir, personas, cosas o eventos, sean cuales sean, figuran como ellos mismos en las relaciones sociales a través de diferentes escalas, incluyendo la del sistema capitalista global. Taso no es un trabajador de la caña promedio, sino un trabajador de la caña cuya vida ha sido forjada por las grandes corrientes de la historia norteamericana de manera visible, entendible, demostrable, hasta cuantificable. El gran logro de Mintz es comprobarnos esta verdad en un texto tan sencillo y lúcido que la tarea de trazar estas conexiones a través de tiempos y espacios vastos no nos parece difícil. Lo es -no nos engañemos- pero Mintz nos puede servir de guía en nuestras labores.

Carlota McAllister

Florencia Mallon

**Campesinado y nación.
La construcción de México
y Perú postcoloniales**

CIESAS, Colegio de Michoacán y Colegio de San Luis de Potosí, México, 2003 [1995].

Florencia Mallon realiza un análisis comparativo de la cultura y la participación política de los campesinos en las regiones de Mantaro y Cajamarca (Perú) y Puebla y Morelos (México) en la segunda mitad del siglo XIX, en el marco de la Guerra del Pacífico en los Andes y en el establecimiento del Imperio en México. Su objetivo es cuestionar la idea de que el nacionalismo fue impuesto a los campesinos por las elites, revelando la existencia de vertientes campesinas nacionalistas con nuevas prácticas discursivas que surgen en medio de la conmoción que producen las guerras por las invasiones.

La autora busca “descentralizar” la historia focalizada en el Estado hacia los escenarios locales donde se dan complejas relaciones de poder y en las que se insertan los sectores subalternos. Mallon compara el comportamiento de los campesinos de Mantaro que se oponen a los chilenos plegando al líder nacionalista Cáceres, con el papel pasivo de los campesinos de Cajamarca, que se subordinan a la élite regional. En Puebla, la cultura campesina integra un liberalismo de corte comunitario, en medio de una fuerte conflictividad regional, mientras que en Morelos las comunidades juegan con las elites, plegando a los liberales para luego negociar con el imperio y los conservadores a fin de defender sus derechos.

Frente a autores que desconocen la participación de los campesinos, ya sea porque enfatizan los cambios económicos o el protagonismo estatal, Mallon señala que la intervención campesina en el siglo XIX influyó en las agendas políticas. Ella considera que la cultura es una dimensión autónoma clave para entender esa participación, revelando que los procesos

políticos se sustentan en una serie de disputas y negociaciones sobre el sentido de los cambios, y en donde se pone en juego los mundos culturales de los campesinos y de las elites.

La autora chileno-norteamericana utiliza el concepto de hegemonía, tanto para captar los procesos al interior de las propias comunidades, como las relaciones de negociación y conflicto con las elites. Las diferencias entre los actores son negociadas en los espacios públicos, en los gobiernos municipales y las asambleas comunales, en las escuelas y las guerrillas contra los invasores. Así, utiliza el concepto de “hegemonía comunal” para estudiar los cambios internos en la autoridad indígena. Para ella, las diferencias sociales internas -jerarquías sociales, de género, de linaje- están en negociación mediados por intelectuales -curanderos, ancianos, políticos y maestros- (p. 96). Con la guerra, los campesinos se integran a la guardia nacional, comandados por jóvenes de nuevas generaciones que terminarán transformando el liderazgo tradicional de sus comunidades. Estos cambios conforman espacios más democráticos, modificando la jerarquía tradicional, en lo que llama Mallon “patriarcado democrático” (p. 202-210).

Pero las relaciones hegemónicas se dan también entre las elites regionales y nacionales y los campesinos, y tienen que ver con la configuración de un discurso nacionalista y liberal en los dos países. Para la autora no hay un sólo nacionalismo sino múltiples vertientes nacionalistas populares y democráticas, de curso regional, que no requieren “una” clase articuladora que sustente ese proyecto.

Para Mallon, el nacionalismo no es una ideología impuesta sino puntos de polémica en torno al cual debaten los diversos actores. Esta disputa debe diferenciarse del resultado, es decir, del momento en el que el discurso subalterno tiende a ser reabsorbido por el nacionalismo dominante y se afirma como discurso oficial, congelado en las instituciones, lo que sucede especialmente en México (p. 86).

La autora realiza un estudio comparativo que no sólo mira lo que pasa en el Estado, sino lo que sucede en la periferia, en donde las relaciones de poder asumen mayor complejidad. De esta manera el estudio cuestiona una visión focalizada en las elites, una ideología nacionalista y un poder central sin fisuras, en lo que la autora llama “descentrar la visión de la historia” (p. 5).

Campesinado y nación ubica una diversidad de actores, con diverso peso en las negociaciones llevadas adelante en los escenarios locales y nacionales. En la primera escala examina los tratos de los campesinos, los hacendados y los municipios en torno a la tierra, los ejidos o las competencias municipales. En la escala regional examina las transacciones entre los actores locales, los cabecillas regionales y las elites nacionales, donde se negocia la autonomía local frente a la centralización del Estado.

Debates

El texto de Mallon, publicado en 1995 y traducido en 2003, se inscribe en una década de debates sobre el papel de los campesinos en América Latina. En primer lugar, el texto de Mallon confronta la visión estructuralista del trabajo de Heraclio Bonilla¹, para quien la quiebra del guano y la guerra con Chile impidió la configuración de una clase dominante con un discurso nacionalista. Para Mallon hay varios nacionalismos, cuyo sentido es negociado en medio de relaciones de conflicto entre los campesinos y las elites. Para captar ese fenómeno retoma el concepto de hegemonía de Gramsci y se acerca a la versión de William Roseberry, en donde la hegemonía no es pleno acuerdo o aceptación ideológica sino el marco discursivo común².

En segundo lugar, la autora se mueve en

una vertiente crítica de los estudios populistas y revisionistas mexicanos que tienen enfoques centrados en los episodios épicos nacionales o en el carácter omnipresente del Estado, en donde desaparecen las fisuras, conflictos y negociaciones que se dieron entre las elites nacionales, regionales y locales³. Mallon opta, como se ha señalado anteriormente, por un enfoque comparativo “descentralizado”, focalizado en los escenarios regionales y en la historia “de los de abajo”.

En tercer lugar, la autora debate con autores como John Beverly en torno a la pluralidad de los estudios subalternos. Este autor señala que Mallon cae en una contradicción pues busca rescatar el papel de los campesinos en la formación del Estado nación moderno, pero en vez de demostrar las disonancias con el nacionalismo dominante termina por demostrar que la relación entre ambos nacionalismos se sutura. “Así el texto esconde parcialmente lo que quiere hacer visible: la dinámica de negación que contiene la gestión subalterna”⁴. En esta apreciación coincide el historiador ecuatoriano Guillermo Bustos, quien advierte que Mallon se acerca peligrosamente a una lectura positivista de las evidencias, desde una perspectiva teleológica de la historia latinoamericana⁵.

Hay que señalar, en defensa de Florencia Mallon, que ella examina las vertientes campesinas en el marco de contextos históricos di-

1 Heraclio Bonilla, 1994, *Guano y burguesía en el Perú*, Flacso-Ecuador, Quito.

2 Ver Mallon Florencia, 2002, “Reflexiones sobre las ruinas: formas cotidianas de formación del Estado en México Decimonónico”, y Wiliam Rosberry, 2002, “Hegemonía y lenguaje contencioso”, ambos en Joseph Gilbert y Nugent Daniel, editores, *Aspectos cotidianos de la formación del Estado*, Era, México.

3 Ver Joseph Gilbert y Nugent Daniel, *op. cit.* p. 36 37.

4 John Beverly, 1999, *Subalternity and representation. Arguments in Cultural Theory*, Duke University Press, Duke, citado en Mallon (2003:63).

5 Guillermo Bustos 2002, “Enfoque subalterno e historia latinoamericana: nación, subalternidad y escritura de la historia en el debate Mallon-Beverly”, en Alberto Florez y Carmen Millán, editores, *Desafíos de la transdisciplinaridad*, Pensar, PUJ, Colombia, pp. 58-80.

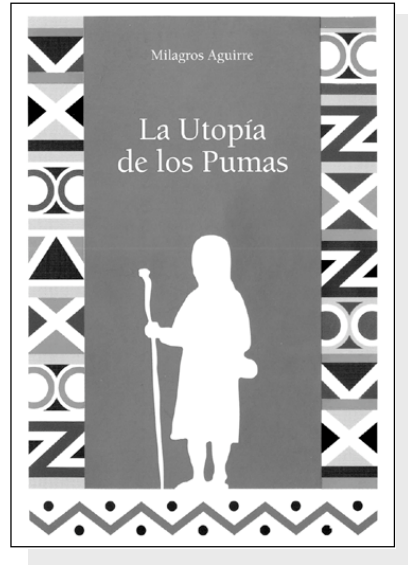
versos, distinguiendo la suerte de los grupos nacionalistas subalternos del Perú, que son disueltos por las elites oligárquicas, mientras en México, las vertientes nacionalistas del campesinado son reabsorbidas parcialmente por la retórica nacionalista que legitimó al Estado.

Por otra parte, el debate se da también a nivel metodológico entre los diversos autores de los estudios subalternos. Este debate gira en torno a la relación entre evidencia empírica e historia y, por tanto, al valor que dan a la lectura de los archivos o al trabajo de campo. En este sentido, el aporte de Mallon es significativo al inscribir los discursos en el mundo de la vida de los actores, las relaciones de hegemonía y los contextos sociales y económicos con un abundante sustento empírico.

A esto hay que agregar un cuarto debate que tiene relación con el carácter étnico de los campesinos: Romina Falcon, quien prologa el trabajo de Mallon, interroga sobre si el nacionalismo que defiende la autora chileno-norteamericana se trata de algo que está más allá de la comunidad, la hacienda o se trata de “la nación como comunidad imaginada moderna”. En este mismo terreno parece apuntar Mark Thurner cuando recuerda que los indígenas representaban a la república desde su vieja acepción colonial, como “república de indios”⁶. Al menos en el caso del Perú, estos señalamientos plantean un interrogante sobre la viabilidad de una alianza con actores blanco-mestizos y una propuesta indígena nacionalista, en condiciones de un rígido sistema gamonal y opresión étnica; hay que recordar que el propio cabecilla antichileno Cáceres fue el responsable de reprimir a los campesinos de Mantaro inmediatamente que salieron los chilenos.

Santiago Ortiz

6 Mark Thurner, 1996, “Republicanismo y la comunidad de los peruanos. Comunidades políticas imaginadas en el Perú andino postcolonial”, en *Histórica*, Vol. XX, No. 1, Lima.



Milagros Aguirre

La Utopía de los Pumas

CICAME, Quito, 2006

El relato en la *Utopía de los Pumas* es sencillamente cautivador. Este libro de autoría de Milagros Aguirre, periodista y editora ecuatoriana, transmite la vida de dos misioneros y su labor en beneficio de los pueblos indígenas afincados en las riberas del gran río Napo. Con lenguaje fresco, cercano, seductor, describe algunos episodios protagonizados por estos dos seres, de cuya existencia, hasta se podría dudar, por la magia que envuelve sus vidas.

La pobreza su doctrina, la humildad su convicción, la justicia y la equidad su lucha, el respeto su esencia, la naturaleza su más intensa expresión de amor, la dación su vida. Así, “el Amor no es amado”, “el mayor privilegio no gozar de privilegio alguno” son algunos de los sistemas de representación a partir de los cuales organizan su vida en la selva. José Miguel Goldáraz y Juan Marcos Mercier abrazaron el pensamiento de Francisco de Asís y dentro de él concibieron sus mundos, surcaron ríos, abrieron caminos, y en las riberas del río Napo, en un efecto de simbiosis se

convirtieron en uno solo con los indios y la selva de la Amazonía; hicieron suyas, historia, cultura, mitos y espíritus.

Juan Marcos Mercier, canadiense, franciscano llega al alto Napo peruano en 1962 y José Miguel Goldáraz, español, capuchino al bajo Napo ecuatoriano en 1971. Era época de cambios profundos, que influyeron sensiblemente en la dimensión ideológica, en las actitudes y comportamientos políticos y en los conceptos y valores de la sociedad en el mundo. La preocupación por los otros como el nuevo nombre de la “paz”, las revoluciones trascendentes, la diversidad e intensidad de las manifestaciones culturales, la innovación del pensamiento católico desde su propia iglesia, incidieron en la configuración de una nueva filosofía de vida en estos dos sacerdotes.

Su nuevo escenario, la región amazónica, deslumbrante por su ensueño natural, indiscifrable biodiversidad, infinita variedad de hábitat, paisajes, ríos, aves y animales e insondable riqueza cultural. Hogar de una multiplicidad de naciones indígenas, con características, lenguaje y costumbres propias y una cosmovisión particular. Tesoro natural, absurdamente depredado por el hombre, violado por el poder, abandonado por el Estado, explotado indiscriminadamente por el interés privado, es la región del olvido, el espacio propicio para las reivindicaciones cristinas hacia la equidad y la justicia. Y es allí, precisamente, donde estos frailes se identificaron con la lucha de los indígenas por recuperar su dignidad, el derecho a su tierra, el reconocimiento de su identidad, de sus costumbres, tradiciones y valores, en suma, por lograr un sistema de vida autóctono y autónomo.

Perseverancia y constancia, cercana a la terquedad, astucia y habilidad, históricamente han caracterizado al euskaldún, entonces José Miguel Goldáraz es el arquetipo del vasco; en estos atributos, sumada la paciencia, radica su fuerza para su inagotable lucha. El

sueño empezó en Puerto Quinche. Aprendió rápidamente el kichwa, a la par que se internaliza con las costumbres indígenas. De esta manera, se facilitó su primera lucha, la primordial, redimir el derecho de los indígenas a su territorio, para cuyo efecto José Miguel empezó a reclutar líderes, de casa en casa, para estimular su formación y despertar la conciencia acerca de la redención y defensa de su heredad.

La segunda morada Pompeya, enclavada en la hondura de una selva que empezaba a “mudar su piel”, a vestirse de occidente, a descontrolarse. La intrusión de transnacionales petroleras y la incursión de “turistas”, generan rupturas a la postre irreparables. Este nuevo espacio constituye el punto de partida para nuevos emprendimientos.

Conjuntamente con los misioneros Camilo Mujica, Ángel González y Juan Santos Ortiz de Villalba, logra concretar la aspiración, jamás perdida, de monseñor Alejandro Labaka, crear el Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana, CICAME, importante núcleo de investigación y formación para el desarrollo de la región; además, fomenta la exhibición de las primeras piezas arqueológicas y sienta los cimientos del actual Museo de Pompeya.

Su labor en el ámbito de la organización indígena fue fructífera, colaboró en la organización de la Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (UNAE), de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), y de la Unión de Campesinos de Orellana (UCAO). “Hay que reconocerlo, sin él, no existiría el movimiento indígena ni campesino en el Oriente”, de acuerdo a un testimonio recogido por Milagros Aguirre.

El mundo de las visiones, el que despierta los espíritus, el que embriaga, el que alucina, el que apodera, el que vislumbra, el de la búsqueda, en intenso ritual, aprehendió a Juan

Marcos Mercier y le bautizó *Coquinche*. El ayawaska le reafirma indígena porque según él no nació para tal, pero sí fue hecho, fue el bautismo que “ratificó su existencia”.

De la misma filosofía de Goldáraz, e imbuido por el espíritu originario franciscano Mercier abandona el dogma pastoral ortodoxo orientado que creía que el indígena debía aprender el español, para luego ser evangelizado, cuando descubre que ellos disfrutaban de su propia civilización y religión, que inmersos en entornos más cualitativos que los de occidente cada día se sumergen más en sus costumbres y mitos, en sus tradiciones y verdades para mirar a la vida con una mejor cosmovisión que la “nuestra”. Él también aprende kichwa pero con los napo-runas en la Amazonía peruana.

La profundización y trascendencia de la cultura de este nuevo mundo por él descubierto, paulatinamente se va convirtiendo en la razón de ser de su existencia. Le angustia el sometimiento de los indígenas.

En el impulso hacia una nueva realidad centró todo su esfuerzo. Fue tenaz en su optimismo, creyó en un amanecer distinto y con estas convicciones participó en proyectos trascendentes como el de la legalización de las tierras, la organización de los indígenas, la educación bilingüe, y la revalorización de los métodos, formas y usos de la medicina tradicional. Fue una ingente tarea, primero de inmersión para el aprendizaje, hasta que logró absorber de la sabiduría de los shamanes que el espíritu se encuentra en todo, que existe “una red de poder que constituye la base de toda vida”, que todo lo visible tiene espíritu y que éste es fuente vital por medio del cual se comunica con aquellos mundos invisibles, para luego, transmitir, accionar y lograr por ejemplo, que los kichwas soliciten al gobierno que extienda los documentos personales con nacionalidad peruana y los títulos de propiedad de sus territorios y además, reconozca a las autoridades kichwas.

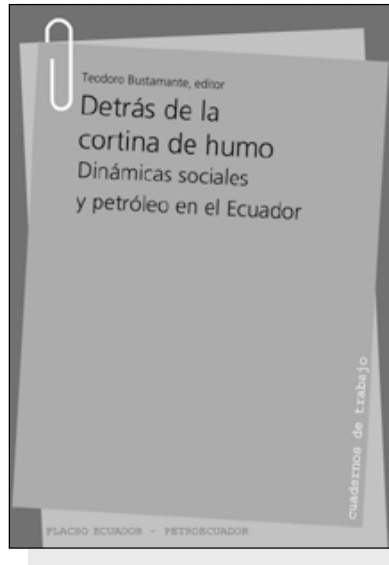
Su influencia y trabajo fueron determinantes, el recuerdo de su obra y de su credo trascendentes “antes de que venga el padre solo había patronos, con él todo empezó y tenemos miedo de que sin él, todo termine”.

El testimonio de vida de estos dos hombres deja profunda huella, su mensaje trasciende e incita, impulsa a la lucha por la igualdad y el respeto, por la reivindicación de todos los pueblos olvidados o deliberadamente abandonados.

El libro es producto de una investigación de varios años, de una serie de conversaciones, entrevistas y de las propias vivencias de Milagros Aguirre con estos dos personajes y los habitantes de las riberas del río Napo en Ecuador y Perú.

En *La Utopía de los Pumas*, a partir del relato de la vida de estos dos misioneros, testigos de la historia de la región, al igual que de otras investigaciones realizadas por estudiosos de los pueblos de la Amazonía como Blanca Muratorio, Miguel Ángel Cabodevilla, Laura Rival, Philippe Descola, Anne-Christine Taylor, Jorge Trujillo, se ofrece una mirada de la forma de vida de los napo-runas, de la riqueza de sus mitos, tradiciones y costumbres, y se evidencia el abandono del que han sido objeto estos pueblos a lo largo de varias generaciones, el abuso, explotación e intolerancia de “patrones”, gobernantes, compañías petroleras, madereras, y aún de la propia iglesia católica, que han agredido y atropellado permanentemente a los indígenas; sin dejar no obstante, de plantear la utopía de que estos pueblos no están destinados a desaparecer.

María Eugenia Rodríguez



Teodoro Bustamante, Cristina Jarrín
y Oscar Zapata

**Detrás de la cortina de humo,
dinámicas sociales y petróleo
en el Ecuador,**

FLACSO-Ecuador, 2007.

Otra mirada sobre el petróleo

Tal como se sostiene en el prólogo del libro, el tema de los efectos sociales, económicos y ambientales de la explotación petrolera tiene apologistas de un lado, y críticos apocalípticos de otro. Falta en el país un análisis mesurado que en función de información fiable pueda mostrar las diversas y complejas aristas que esta actividad ha dejado como huella en el Ecuador.

Y es que casi 4 décadas de exportación de hidrocarburos deben o deberían dejar algunas importantes lecciones sobre algunas preguntas latentes: ¿cómo se han distribuido los beneficios de la riqueza petrolera entre los ecuatorianos y entre los territorios?, ¿cuál es la magnitud del impacto socio ambiental del petróleo versus los beneficios logrados en el período y en relación a otras actividades productivas?, ¿qué ha significado la explotación

petrolera en términos de reducción de la pobreza, de ampliación de los servicios públicos o de crecimiento del PIB?, ¿qué nivel de participación ha tenido el Estado en la renta petrolera cuya producción ha sido contratada a empresas privadas?

Salir de los estereotipos o de los lugares comunes y de los prejuicios ideológicos sostenidos por intereses corporativos de distinta índole, constituye un aporte fundamental del libro a la hora de intentar una respuesta a estas preguntas. Y, como es lógico, detrás de la cortina de humo hay más bien un rico entramado de procesos ambientales, económicos y sociales, unos positivos, otros negativos y, quizás la mayoría, de aquellos que no resisten una valoración maniquea sino que deben ser interpretados a la luz de otros factores.

Detrás de la cortina de humo, dinámicas sociales y petróleo en el Ecuador publicado en la serie Cuadernos de trabajo de FLACSO Ecuador, con el aporte de PETROECUADOR, contiene tres capítulos, cada uno de ellos correspondientes a diferentes tramos de un estudio previo: a) el inicio de la explotación petrolera y tres variables estadísticas, b) indicadores sociales y petróleo en la Amazonía, y c) características de los contratos petroleros.

En el campo de las observaciones críticas cabe anotar que el subtítulo del libro “Dinámicas sociales y petróleo en el Ecuador”, así como algunas afirmaciones del prólogo brindan al lector una promesa un tanto ambiciosa que el texto no cumple del todo. Esto porque el estudio prioriza, en su segundo capítulo, una comparación de las dinámicas sociales y económicas de las provincias petroleras, Sucumbíos y Orellana, respecto de los indicadores de los otros territorios del país. Y en este campo el libro hace un análisis pormenorizado con múltiples aportes especialmente a la hora de analizar las fuentes empíricas. En cambio, en relación al potencial de cambio que los ingresos petroleros ge-

neraron en el país se encuentran más bien escasos elementos interpretativos, si bien resulta sugestiva la interpretación sobre las tendencias de crecimiento del PIB de la época petrolera, interpretación que consta en el primer capítulo.

Tampoco hay pistas sobre una valoración de los impactos ambientales, tema clave en el debate entre detractores y defensores de esta actividad productiva. Y el libro no analiza el flujo de recursos financieros de las petroleras transnacionales hacia las comunidades indígenas y de colonos, aunque sí realiza algunos acercamientos respecto al incremento de los ingresos en los gobiernos locales.

Por otra parte, la entrada metodológica que privilegia la comparación territorial desde los indicadores de pobreza, mortalidad infantil, analfabetismo, salud e infraestructura, podría dejar de lado una interpretación sostenida desde indicadores de riqueza. En otras palabras, el libro no analiza el proceso de acumulación de capital en los territorios petroleros, por ejemplo, en relación al número y tipo de vehículos por habitante, la actividad comercial, hoteles y restaurantes, centros de diversión, sucursales bancarias, crédito, etc. Esto resulta relevante, pues si restringimos el análisis a los indicadores de pobreza, no se entendería por qué las provincias de Sucumbíos y Orellana se mantienen como polos de inmigración y colonización y de mayor crecimiento demográfico en relación a las otras provincias de la amazonía, a pesar de que sus indicadores de pobreza son más altos. Esto último quizás explica las bajas tasas de dotación de servicios de infraestructura en las mencionadas provincias.

El capítulo tercero, referido a la contratación petrolera, profundiza en una compleja temática, más bien contrastante con los otros dos capítulos. Incluso podría afirmarse que esta parte del texto requiere de otro libro, tanto por la abundancia de información relevante, como por la diferencia en el tópic

tado. Se analizan los diversos tipos de contratos, el porcentaje de participación del Estado y de las empresas en las rentas petroleras, la composición de los costos, la diversidad de los riesgos asumidos según cada tipo de contrato, la relación entre producción e impuestos, los beneficios de cierto tipo de contratos respecto a los precios internacionales del crudo y las tendencias de crecimiento en la explotación de hidrocarburos por parte de las compañías privadas.

Salta a la vista la complejidad del tema. Con esta información el lector puede interpretar algunos factores críticos para un análisis de los pros y contras de las contrataciones. También el estudio muestra lo que podrían denominarse “agujeros negros”, esto es, zonas acerca de las contrataciones y de las rentas sobre las que se carece de información transparente y que no permiten establecer con claridad cuestiones como márgenes de utilidad, relación entre impuestos pagados y producción, entre otras.

Un tema crucial es el tránsito entre los contratos de prestación de servicios implementados en los años ochenta, a los contratos de participación que actualmente son los dominantes. Los primeros, ideales con precios altos, mientras que los segundos, más convenientes con precios bajos. Y, entonces, resulta que la tendencia en el tipo de contratación no fue la conveniente para los intereses del país.

En definitiva, el texto en sus tres capítulos nos lleva de la mano hacia una reflexión equilibrada y sensata, que no parte de culpabilizar a determinado sector, sino que establece ámbitos de análisis, iluminados por información precisa. Lamentablemente, en este tema, algunos estudios académicos no han escapado de los prejuicios y de una fuerte sobre ideologización, abundando en un terreno fértil para el conflicto. Pues bien, este libro es una excepción.

Patricio Crespo Coello

Alicia Lindón, Miguel Ángel Aguilar, Daniel Hiernaux, coordinadores,

Lugares e imaginarios en la metrópolis

Editorial Anthropos, España.

Desde los años 60 y 70, el llamado “vuelco cultural” (S. Hall) ha intentado situar al centro de los estudios sobre la ciudad los modos complejos y, por lo tanto, interdisciplinarios, en los que los espacios urbanos adquieren significados y los deseos, sueños, paradigmas y estructuras de poder que sus habitantes proyectan sobre ellos. El espacio deja de ser un mero receptáculo de las actividades humanas, sino que se re-define como lugar, como “acumulación de sentidos” (p. 13), como materialidad dotada de contenido simbólico y, por lo tanto, como interpretable. En ese contexto, los habitantes simultáneamente crean a la ciudad como lugar y orientan sus acciones en ella a partir de sus imaginarios, las formas, imágenes, percepciones, textos y discursos con los que la hablan y la fantasean.

Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen estudios de este tipo en América Latina -sería imposible soslayar los aportes de García Canclini, Rama, Romero, Sarlo, Martín Barbero, Giannini y tantos otros-, el vínculo entre los estudios sobre los imaginarios y representaciones sociales sobre la ciudad y los estudios cuantitativos desde el urbanismo, la geografía humana y la planificación urbana todavía son débiles, o así parecen pensarlos los autores de los ensayos incluidos en el libro *Lugares e imaginarios en la metrópolis*.

En cuanto propuesta, estos ensayos se definen explícitamente, si no al margen de estos estudios, sí, al menos, como una referencia a lo que el discurso académico, percibido como tradicional, ha dejado fuera. Ahí está la micro-historia, la subjetividad de lo cotidiano, de lo pequeño, puesta en relación, a veces excluyente, pero generalmente complementaria, con la macro-historia que cuentan las encuestas, los

informes periodísticos o las políticas oficiales. Así, la mayoría de estos textos incluyen afirmaciones y aclaraciones como “históricamente la arquitectura y la planificación urbana (...) han sido áreas ampliamente dominadas por los hombres. Como resultado de ello ha surgido una visión del espacio urbano homogéneo y ‘desgenerizada’” (p. 68), o “aun cuando la trama urbana de Santiago en el último decenio se ha tejido en torno a la inseguridad y el fenómeno se ha cuantificado, medido y difundido extensivamente, poco se ha indagado por los significados y creencias que han construido esta creciente inseguridad” (p. 109), que ponen en evidencia esta distancia, definida también como una carencia.

Se reflexiona sobre la fractura pero, sobre todo, se hace el ejercicio empírico de cruzarla, de aplicar las categorías de los estudios culturales urbanos a casos reales ya visitados por otros acercamientos metodológicos. Así los ensayos proponen una “reflexión con un fuerte espíritu interdisciplinario” (p. 9) en tres niveles: el marco teórico particular, las estrategias metodológicas adecuadas para cada análisis empírico y, por último, la “mirada holística” (p. 9) hacia la ciudad como lugar y los imaginarios urbanos.

La introducción propone tres recorridos temáticos -la construcción social de los espacios centrales, los espacios del miedo y la apropiación/pertenencia e identificación de y con los espacios públicos- que esta reseña conservará en favor de la coherencia en su análisis de algunos de los ensayos. Sin embargo, la ausencia de una división en capítulos y la repetición de ciertos conceptos, no necesariamente secundarios -como por ejemplo, la visualización de los medios como propagadores de imaginarios de ciudad, la relación y separación imaginaria entre el centro y la periferia, el vínculo entre espacios públicos y democracia en Iberoamérica o la experiencia estética como parte del proceso de identificación- sugieren la posibilidad de una lectura

más compleja en la que los ensayos pueden interactuar de maneras múltiples. De ahí una alerta al futuro lector: busque esas posibilidades de relación y no se limite a las definiciones que los títulos proponen.

El centro: mapas y territorios

Que el mapa no es el territorio, como repetía Bateson citando al lingüista polaco Alfred Korzybski, que las representaciones que hacemos de la realidad no se ajustan a ella o, dicho de otra manera, que la realidad se nos escapa siempre por los bordes del lenguaje con la que intentamos pensarla y decirla, es la premisa central detrás de los artículos de este libro que tratan sobre el centro de la ciudad. En resumen, cada vez se hace más evidente que los modos en que pensamos el centro histórico de la ciudad tienen poco que ver con los usos que le damos.

Así, por lo menos, lo hace patente Armando Silva en “Centros imaginados de América latina”, que tiene como base los estudios sobre los imaginarios de trece ciudades iberoamericanas emprendidos por el Convenio Andrés Bello y que el propio Silva coordina. El ensayo propone una distinción inicial entre la ciudad material -la de los edificios y las calles y, en América Latina, cada vez más extensa y difusa- y el ser urbano, la urbanización, constituida por la imaginación del habitante que se sueña a sí mismo como ciudadano, como miembro de una comunidad con la que sólo puede aspirar a tener contactos efímeros, virtuales.

Uno de los modos más comunes en que los latinoamericanos imaginan sus centros es, precisamente, a través del choque entre ciudad y urbanización, entre territorio y mapa. Los espacios centrales y patrimoniales son percibidos como el fundamento de la identidad de la ciudad, son sus íconos, pero paralelamente estos son desocupados por desplazamientos

hacia los suburbios y tienen crecimientos poblacionales negativos. “Tal pareciera ser, entonces, que el proceso de urbanización en Latinoamérica aleja cada vez más a la ciudad de su centro mientras éste adquiere mayor relevancia a nivel simbólico y político” (pp. 55).

Esta contradicción da cuenta también de espacios con identidades duales: son los primeros lugares a los que los ciudadanos piensan en llevar a sus amigos o parientes extranjeros, pero en la cotidianeidad son los lugares que sólo visitan por obligación; son sectores llenos de gente durante el día, pero prácticamente vacíos en las noches; son el centro del poder político y económico, pero se los suele percibir desde los discursos del miedo y la inseguridad con la instalación de la policía como nuevos protagonistas urbanos. El centro se percibe, imaginariamente, como el “lugar del pasado” (p. 64) del que se siente nostalgia.

En ese contexto se sitúan los esfuerzos por reactivar los centros, recuperarlos como espacios de interacción ciudadana, que Silva menciona tangencialmente, pero que están en el foco del ensayo de Daniel Hiernaux: “Los centros históricos: ¿espacios posmodernos? (De choques imaginarios y otros conflictos)”.

En estos intentos se cristalizan y chocan dos modos de concebir los centros históricos desde fuera de ellos, sin consideración al punto de vista de sus habitantes: uno patrimonialista y otro moderno. La mirada patrimonialista propone la conservación de “las marcas físicas y de las manifestaciones culturales que estuvieron en boga en épocas anteriores” (p. 33), bajo el supuesto de que ese pasado común es parte fundamental del presente. En el acercamiento posmoderno, en cambio, el espacio pierde su sentido de lugar, se lo entiende como carente de historia, por lo que las marcas físicas de la ciudad se perciben como los retazos de otro presente, que puede ser sustituido, refuncionalizado y privatizado por uno nuevo en una yuxtaposición de estilos. Mientras el primer punto de vista, con su

foco en el sentido de lo urbano como público y compartido, permite acoger a los residentes y usos tradicionales de la ciudad, el segundo implica la eliminación de ellos, la marginación de lo que dio sentido simbólico a ese centro. Por lo mismo, el autor juzga de modo lapidario el modelo posmoderno, ya que considera que segrega, espectaculariza y desvincula el centro de sí mismo y su pasado. Como alternativa postula un modelo del que no da detalles concretos, basado en un imaginario patrimonial menos restrictivo en el que se ofrezcan “propuestas con sentido para transformar a los centros históricos en espacios que posibiliten un modelo distinto de ciudad y de sociedad” (p. 39).

La (in)seguridad: imaginarios topofílicos y topofóbicos de la periferia

Si bien se definió como asunto los imaginarios de la inseguridad, la aproximación concreta llevó a los ensayos, más bien, hacia un dibujo de los modos conflictivos en los que se aprehenden estos miedos en los bordes de la ciudad, tanto en los suburbios de clase media y alta como en las poblaciones de escasos recursos.

Precisamente, la distinción entre las connotaciones respecto de la segregación de los conceptos de periferia y suburbio sugieren la distancia entre los imaginarios del miedo entre los barrios acomodados y aquellos marginales en el artículo “Nosotros y los otros: segregación urbana y significados de la inseguridad en Santiago de Chile” de Rosa María Guerreiro.

Los significados y la vivencia de la inseguridad son disímiles entre ambos grupos: para los entrevistados de las comunas más pobres la ésta es resultado de la pérdida de referentes sociales y personales de seguridad como el Estado o el trabajo fijo, del estrés de una vida urbana rápida y ruidosa, del deterioro de las relaciones familiares, mientras para los de los

sectores más acomodados ésta es un resultado de la segregación urbana, en la que lo desconocido se percibe como causante de miedo, del individualismo y de la pérdida de los valores compartidos por ellos.

En ambos espacios, estas carencias se encarnan en un miedo a lo externo, a sus redes básicas. Para los sujetos de clase alta ése “afuera” es un espacio claro y definido: los barrios periféricos -un contrasentido si se considera que los suburbios acomodados se ubican en Santiago también en la periferia- donde residen un montón de estereotipos de los que sólo se conoce -y se necesita conocer- a través de lo que dicen los medios. Para los de clase baja “afuera” es un territorio indefinido y disperso -la calle, otros barrios, el transporte público- desde el que acechan tanto ciertos estereotipos como sujetos que pertenecen a la comunidad, pero que la ponen en conflicto -los jóvenes.

Este miedo al otro que se percibe como amenazante desde los intersticios de la ciudad es lo que, según Alicia Lindón en “Del suburbio como paraíso a la especialidad periférica del miedo”, lleva a una subversión del imaginario topofílico estadounidense del suburbio como un paraíso en el que, quien puede pagarlo, puede ser libre de fundar su propio espacio, su propia historia cerca de la naturaleza, lo suficientemente lejos de la ciudad como para no sufrir sus externalidades -ruido, tensión, velocidad- y lo suficientemente cerca como para disfrutar de sus beneficios -servicios públicos y comercio-. En los márgenes de la Ciudad de México, incluso entre los más pobres, se mantiene este imaginario como deseo, pero es resemantizado: el espacio y la libertad se convierten en desprotección y oscuridad desde la que el otro acecha; la naturaleza se traduce en precariedad. De ahí, recuperan López, Méndez y Rodríguez en “Fraccionamientos cerrados, mundos imaginarios”, que se configuren como respuestas defensivas como los fraccionamientos cerrados, las comunidades rodeadas de rejas.

Todas estas similitudes y tensiones en los modos de acercarse a la ciudad desde la inseguridad dan cuenta finalmente de un modelo “que incentiva la interacción entre grupos homogéneos social e identitariamente y el debilitamiento de un modelo fincado en la diversidad” (p. 114).

Apropiación del espacio público: estética y poder

La última entrada al texto es más amplia y diversa, tiene menos coherencia interna: trata sobre las apropiaciones diversas a través de las que los ciudadanos viven los espacios públicos de sus ciudades.

Miguel Ángel Aguilar escoge la dimensión estética, entendida como “las formas significativas que emergen en la vida de la ciudad, formas que para acceder a ellas requieren, y son producto, de una sensibilidad generada en el contacto y tránsito en los espacios urbanos” (p. 137). Analiza, entre otras manifestaciones concretas de este acercamiento a la sensibilidad de la urbe, las representaciones de la fotografía periodística. En ella conviven los espacios de la noticia, lo excepcional, la ruptura, el choque, la invasión de los espacios por las multitudes y la exclusión del sujeto al más puro estilo benjaminiano, con los de lo cotidiano, con la recuperación de lugares en los que se sitúa al lector como transeúnte cómplice que descubre los reductos de una ciudad con aura desde la crítica, el juego o la denuncia.

El paisaje como manifestación de las disputas entre poder y esfuerzos ciudadanos contrahegemónicos es la preocupación de Camilo Contreras en “Paisaje y poder político: la formación de representaciones sociales y la construcción de un puente en la ciudad de Monterrey”. El autor analiza la construcción de un puente, por un lado, como una manifestación de la ideología dominante en la ciudad: Monterrey como representación de

la grandeza del capitalismo y el empresariado. Sin embargo, en contraste con esta imposición sobre el paisaje se instituyen otros discursos como la asignación de nombres paródicos a la estructura junto con otras manifestaciones alternativas, liminares sobre la escasa funcionalidad del puente, su carácter innecesario respecto de otras prioridades, de la percepción de que fue impuesto a los ciudadanos, de que fue una expresión de la distancia de las clases políticas con la contingencia y de su afán de dejar memoria de sí mismas y de que, a pesar de todo eso y como en otros casos similares, terminaría siendo un icono de la ciudad. Finalmente, un mismo objeto, que para unos es un sello de lucimiento es reinterpretado como “estrategia de los adversarios políticos para desacreditar a su creador” (p. 185).

Queda fuera, por falta de espacio, el análisis de otros de los ensayos del libro, pero valga recordar que comparten con estos su carácter de paseo por los recovecos de la ciudad junto y desde la subjetividad de sus habitantes. *Lugares e imaginarios de la metrópolis* abre la mirada hacia la complejidad de estas manifestaciones, de las posibilidades de recorrido que ofrecen las redes humanas que las componen y pone en evidencia las fracturas que se esconden en los estudios urbanos que no recuperan esta dimensión cultural. El lector encontrará esa disputa académica, jugada a través de los conceptos que quien haya incurrido mínimamente en el mundo de los estudios culturales encontrará a veces repetidos, junto con referencias a imágenes y vivencias de la ciudad latinoamericana en las que podrá reconocerse. La coexistencia de esos puntos de vista y la constante aparición de esas instantáneas de la ciudad hacen del libro una lectura sugerente.

María Constanza Mujica Holley

Profesora de la Facultad de Comunicaciones
Pontificia Universidad Católica de Chile

Flavia Freidenberg

La tentación populista: una vía de acceso al poder en América Latina

Editorial Síntesis, Madrid, 2007, 287 págs.

El fenómeno del populismo en América Latina ha sido estudiado a partir de diversos enfoques, buscando responder dos tipos de preguntas: cuáles son las razones que dan origen al mismo y cuál es la naturaleza que define al populismo frente a otros fenómenos políticos. La *Tentación Populista* se inserta en la discusión sobre la definición del populismo y busca responder a estos interrogantes. En relación al primero, se sostiene que el populismo surge como resultado de la modernización de las sociedades -efecto de la transición entre lo tradicional y lo moderno- destacando su carácter momentáneo. Germani (1962) considera que el populismo sucede de forma casi automática en ese tipo de sociedades, presentándose como un fenómeno transitorio e imperfecto que, con el tiempo, produce necesariamente una forma de gobierno diferente y acorde con una sociedad moderna.

Como respuesta al intento de explicar el surgimiento del populismo desde el enfoque de la modernización, rechazando su sesgo teleológico y su conservadurismo, la perspectiva de la dependencia plantea, desde un análisis estructural, que el origen de éste descansa en la conformación de una alianza interclasista de sectores populares, clases medias y burguesía en confrontación con la oligarquía (O'Donnell 1972). Este enfoque entiende al populismo como resultado de la relación que se establece entre centro y periferia. Aquí también está presente la idea de que el populismo es una fase por la que atraviesa América Latina. La visión de la dependencia estudia la naturaleza de las políticas, tanto sociales como económicas, que los gobiernos implementan.

Una tercera aproximación a esta cuestión plantea que el populismo surge como resulta-

do de la crisis de instituciones de la democracia representativa, en especial de los partidos políticos. Siguiendo a Connif (2003), el neopopulismo, que el autor ubica en la década de 1990, cuenta con líderes más decididos a denunciar a los partidos políticos tradicionales, que sus antecesores populistas. Asimismo, plantea la falta de eficacia política, que inspira a los votantes a buscar líderes que se opongan al *status quo*, como una causa del surgimiento de los neopopulismos.

En relación a la segunda pregunta sobre qué es el populismo, se han elaborado diversas respuestas. Por un lado, se lo ha tratado como a un discurso ideológico. Laclau (2005) sostiene que se utiliza el discurso populista para constituir a los individuos en sujetos, a través de su interpelación en oposición al otro, que representa el orden social establecido. La principal crítica a este enfoque es que el populismo no se puede reducir sólo a una ideología política sino que es una práctica política, de ahí que las manifestaciones populistas pueden oscilar entre la izquierda o la derecha. Por otro lado, se ha visto al populismo como una forma social de intervención del Estado a través de la construcción de un proyecto basado en el discurso de lo nacional-popular, en donde se incluye a las masas como legitimadoras del proceso, relacionado éste con la transformación de las sociedades tradicionales en sociedades modernas (Vilas 2003). En este orden de ideas, la intervención del Estado se constituye en un conjunto de políticas públicas, en su mayoría de tipo social, que persigue el objetivo de integrar a grupos excluidos. Asimismo, se ha identificado al populismo como un tipo específico de políticas monetarias y de gasto público. Desde esta perspectiva, se lo considera como un modelo de intervención estatal basado en la estabilidad macroeconómica.

El populismo se ha estudiado como un tipo de estrategia política (Weyland 1999). A los efectos del análisis, explica al populismo

como una forma de ejercer el poder mediante el apoyo directo del pueblo sin mediación institucional. Por último, se ha asociado al populismo con la manifestación de una cultura política determinada que supone una forma de representación política. Este enfoque destaca el carácter relacional del populismo y supone definirlo en términos de relación social, donde se analizan elementos culturales como el vínculo entre el líder y los seguidores, la forma de actuar del líder, las percepciones de los seguidores respecto del líder, el modo en que el clientelismo contribuye al desarrollo del liderazgo, la cultura de los seguidores, entre otros. Es importante tener en cuenta que este enfoque incorpora las percepciones y acciones de los seguidores, quienes tienen un carácter activo, a diferencia de otras perspectivas que los interpretan como masas manipuladas y pasivas.

Lo reseñado permite observar cómo *La tentación populista* se ubica en el marco de la discusión más contemporánea sobre el populismo en América Latina, pasando revista al debate sobre este tema a la vez que analiza diferentes casos de la realidad regional a la luz de la teoría y en perspectiva comparada. La autora toma posición y define al populismo, desde una visión neoinstitucionalista, como un estilo de liderazgo, que se caracteriza por la relación directa, personalista y paternalista entre líder y seguidor, en la que el primero no reconoce mediaciones organizativas o institucionales, habla en nombre del pueblo y potencia discursivamente la oposición de éste con “los otros”; donde los seguidores están convencidos de las cualidades extraordinarias del líder y creen que gracias a ellas y/o al intercambio clientelar que establecen con él (tanto material como simbólico) conseguirán mejorar su situación personal o la de su entorno.

El vínculo entre líder y seguidor puede basarse tanto en una fuerte identificación emotiva como en el resultado de las evaluaciones

que el seguidor realiza y que lo llevan a elegir a ese líder como la mejor opción de representación. Los valores, expectativas y discursos son tan relevantes como la creencia en la superioridad de ese líder. Esta idea también convierte al análisis en deudor de la perspectiva de la elección racional en la medida en que la forma como los seguidores perciben al líder y la relación que mantienen con él, suponen la maximización de sus beneficios individuales y/o colectivos; lo cual resulta clave para comprender las razones que motivan su apoyo.

El libro se estructura en veintiún capítulos distribuidos en cinco partes, seguidas de una reflexión final. En la primera, la autora realiza un esfuerzo teórico con el objetivo de conceptualizar el fenómeno del populismo a la vez que destaca los obstáculos que dificultan dicha tarea y establece los “requisitos mínimos” para ser considerado como tal. En las siguientes partes se propone una clasificación temporal según la cual se estructurará el resto de la obra y clasifica a diversos liderazgos latinoamericanos en tres grupos: los *viejos populistas* (México, Brasil, Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, Perú, Colombia y Uruguay), los *nuevos neoliberales* (Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Collor de Mello en Brasil y Bucaram en Ecuador así como las experiencias contemporáneas a ellas que no eran de carácter neoliberal como la de Palenque y Fernández en Bolivia) y los *contemporáneos*, que son los que obligan a un análisis actual del fenómeno con el que se vuelve patente de la vigencia del populismo en América Latina y demuestra la pertinencia de su estudio.

Los casos analizados evidencian que la manera de hacer política en la región se sigue dando a través de un vínculo estrecho entre líderes y pueblo, con un discurso personalista que busca incorporar a sectores excluidos, generando una nueva forma de representación populista. En ese sentido se estudian las experiencias de Chávez en Venezuela, Morales en

Bolivia y, finalmente, los casos de Noboa y Correa en Ecuador. El interés de la autora es mostrar cómo algunos liderazgos que suelen ser presentados como idénticos se comportan de manera diferenciada con respecto, por ejemplo, a la relación líder-seguidor, en el tipo de movilización empleado o al contenido de las políticas implementadas. Liderazgos como el de Morales y el de Chávez presentan más diferencias que semejanzas y la autora puntualiza en las mismas y sus consecuencias para la democracia.

No existe consenso en la disciplina a la hora de determinar qué tipo es la relación que se establece entre populismo y democracia. Por un lado, se encuentran quienes lo entienden como “una aberración de lo que deberían ser las prácticas democráticas”. Desde este enfoque, el populismo es visto como un obstáculo para la democracia, toda vez que afecta a la idea de representación al establecerse una relación estrecha entre líder y masas irracionales y anómicas que se dejan conducir por éste. Por otro, están quienes consideran que el populismo forma parte de la democracia y que ha aportado beneficios sobre todo en términos de incorporación de sectores excluidos y en el universo simbólico que ellos tienen. Al respecto, Freidenberg destaca aportes positivos y negativos del populismo para la democracia y sostiene que éste ha sido una fuerza fundamental en la democratización de América Latina y en la incorporación simbólica y efectiva de sectores que se encontraban excluidos tanto política como económicamente.

Al arribar al tema de la consolidación de la democracia en la región, la autora hace hincapié en el elemento decisionista de los populismos, que lleva a la configuración de democracias delegativas (O'Donnell 1992) en detrimento de las representativas. De todas maneras, se puntualiza la necesidad de considerar otras variables que pueden afectar la consolidación de las democracias latinoamericana-

nas y destaca la necesidad de tener en cuenta aquello que la gente piensa y que la lleva a tomar la determinación de delegar. La obra concluye con una discusión sobre lo que puede suceder una vez que el líder populista deja el poder. Así, entra en juego la variable de la consolidación democrática como determinante de los resultados que los gobiernos populistas produzcan sobre el sistema político. En democracias institucionalizadas se logrará procesar el populismo y absorber las demandas de los sectores representados por el mismo. En cambio, en las democracias débilmente institucionalizadas el sistema no logrará sobrevivir al populismo, teniendo en cuenta la incapacidad de satisfacer demandas sociales que pueden llegar a sobrepasar las instituciones y hacerlas entrar en crisis.

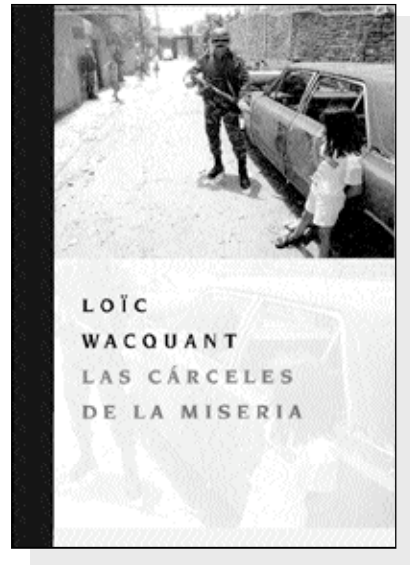
El libro da cuenta de que el debate sobre el populismo continúa vigente y cumple en establecer un diálogo entre teoría y realidad presentándole al lector una visión completa y multidimensional sobre la evolución y la vigencia del populismo en América Latina. En este sentido, *La tentación populista* constituye un valioso aporte al estudio de los sistemas políticos de la región así como una importante herramienta de aproximación a los acontecimientos más recientes de la política latinoamericana, y cuya lectura permite reflexionar, de manera comparada y a través de casos concretos, sobre la relación conflictiva y pendular entre populismo y democracia.

Margarita C. Batlle

Bibliografía

- De la Torre, Carlos, 2001, “Redentores populistas en el Neoliberalismo: nuevos y viejos populismos latinoamericanos”, en *Revista Española de Ciencia Política*, No. 4 (abril), AECPA, Madrid, pp. 171-196.
- Germani, Gino, 1962, “Clases populares y demo-

- cracia representativa en América Latina”, en *Desarrollo Económico*, Vol. II, No. 2.
- Conniff, Michel, 2003, “Neopopulismo en América Latina. La década de los ‘90 y después”, en *Revista de Ciencia Política*, Vol. XXIII, No. 1, pp. 31-38.
- Laclau, Ernesto, 2005, *La razón populista*, Fondo de Cultura Económica. México.
- O’Donnell, Guillermo, 1992, “¿Democracia Delegativa?”, en *Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*, Paidós, Buenos Aires.
- , Guillermo, 1972, *Modernización y Autoritarismo*, Paidós, Buenos Aires.
- Vilas, Carlos, 2003, “¿Populismo reciclado o neoliberalismo a secas? El mito del neopopulismo latinoamericano”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, N° 3, Vol. 9, Caracas, pp. 13-36.
- Weyland, Kurt, 1999, “Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe”, e *Comparative Politics*, Vol. 4, No. 31, pp. 379-401.



Loïc Wacquant

Las cárceles de la miseria

Manantial, Buenos Aires, 2000, 186 págs.

El temor invade a nuestra sociedad. Se teme a la agresión personal o al robo, a los accidentes o a las catástrofes (naturales o no). La soledad, el anonimato, generan frustraciones y miedos, pero también la pérdida de la intimidad, la multiplicación de los controles sociales. Las grandes concentraciones humanas pueden llegar a dar miedo, pero también lo dan las ciudades vacías en los fines de semana o durante las vacaciones. Los centros comerciales substituyen a las calles y a las plazas. Las áreas residenciales socialmente homogéneas se convierten en fortificaciones cerradas. Los sectores medios y altos se protegen con policías privados. Los servicios privados predominan sobre los públicos.

Los temores del ciudadano, algunos con existencia objetiva, como aumento de la delincuencia, las expresiones diversas de la violencia urbana, el deterioro ambiental, la falta de empleos, etc., y otros producto de ideologías de clase o de grupo, el temor a los homosexuales, a los pobres como direc-

tamente responsables de los males que aquejan a las sociedades, son apoyados y sustentados la mayoría de las veces por los medios de comunicación que operan como intermediarios para realizar una lectura de la realidad (Reguillo 1998:26)¹.

Existe un conjunto de situaciones concretas que se viven en las ciudades actualmente y que provocan ese sentimiento de inseguridad por parte de los ciudadanos, pero que además (de manera peligrosa) están siendo utilizados como justificación para las medidas de control y vigilancia que se están implementando en los países.

Una de estas medidas aparece en los años ochenta en Washington y Nueva York, donde se busca instalar una nueva razón penal. Los organismos de Estado implementan políticas penales ultra represivas, con alta participación del sector privado, construyendo una nueva *doxa* punitiva. El libro *Losing Ground*, de Charles Murray², se convierte en un verdadero catecismo de los luchadores contra la violencia social. El texto abre el camino para la popularización de discursos y dispositivos represivos contra los “desórdenes” protagonizados por pobres. Desde ese entonces se dan una serie de producciones que sustentan y enfatizan este tipo de discursos, y que ubican el origen de la miseria norteamericana en la anarquía familiar de los pobres, quienes acceden a un asistencialismo social que pervierte el deseo de trabajar, daña la familia patriarcal y deteriora el fervor religioso. Estas políticas son

un instrumento de legitimación de la gestión policial y judicial contra la pobreza. Ante las medidas propuestas, la sociedad norteamericana reacciona favorablemente, sobre todo si se trata de mantener el equilibrio económico y preservar la seguridad que se ve amenazada por estos nuevos pánicos morales, provocados por las violencias urbanas cuya emergencia se adjudica a los denominados “barrios sensibles”.

A partir de estas exposiciones se arman las principales líneas de trabajo que harán de Nueva York el centro mundial de la difundida práctica de la “tolerancia cero”, que perseguirá a la delincuencia juvenil, los mendigos, los vagabundos, los niños de la calle, los vendedores ambulantes, los invasores extranjeros, con el fin de alejarlos de los centros urbanos. William Bratton, responsable de la seguridad del Metro de Nueva York y jefe de la Policía Municipal ejecutará su trabajo orientándose por este camino, advirtiendo claramente: “yo sé dónde está el enemigo”. Los enemigos de este experto son aquellos a los que considera parásitos que generan la decadencia social y moral de la ciudad, estos son los *squeegee men* (gente que acosa a los automovilistas), los pequeños vendedores de droga, las prostitutas, los vagabundos, los mendigos y los jóvenes graffiteros. Y se dedica a luchar contra sus nocivas prácticas: tráfico, ruidos molestos, amenazas, suciedad, ebriedad. Bratton considera que los pequeños crímenes pueden desembocar en crímenes mayores que se escapan al control de las instituciones. Desde 1994, la “tolerancia cero” conocerá un inmenso éxito que se propagará rápidamente hacia Europa.

Con estas condiciones de fondo, Loïc Wacquant busca un acercamiento a lo que esta política ha significado tanto en EEUU como en Europa y su actual expansión hacia América Latina. Su interés está en en-

1 Rossana Reguillo, 1998, *Mapas nocturnos*, Ediciones Siglo del hombre, Santa Fé, Bogotá.

2 A quien Loïc Wacquant define como politólogo de reputación mediocre, ex gurú de Reagan. Murray recibió 30 mil dólares para escribir durante dos años *Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980*. Luego de su publicación, se hizo una inmensa publicidad del libro con la participación de periodistas, burocratas, y especialistas. El *Manhattan Institute* realizó un simposio lanzándolo a la fama.

tender los procesos de marginalización urbana en las grandes ciudades y las respuestas institucionales ante estos. El autor analiza la miseria, el delito y la marginalización como una producción social inevitable de una sociedad que progresa, donde esta idea de producción implica que todos los actores intervienen en tanto agentes, y la respuesta que genera por parte de las instituciones es la constitución de un “Estado penal” con un discurso que criminaliza la miseria y la marginación, y cuya expresión más clara es el aumento de las poblaciones carcelarias y el creciente reclamo de la “tolerancia cero”.

La edición del libro que aquí se reseña fue realizada para América Latina, y surge a partir de dos visitas de William Bratton a Buenos Aires, la última en enero de 2000. En estas visitas, a más de publicitar la “tolerancia cero” como política efectiva para la reducción de la criminalidad basada en una “limpieza de clase” (class-cleansing), Bratton difundió los servicios de su empresa privada de asesoramiento, First Security, y realizó visitas a dos barrios bonaerenses de mala fama, promulgando su patentada idea de que “la desocupación no está relacionada con el delito” (Wacquant 2000: 11).

Las cárceles de la miseria está dividido en dos partes. En la primera, Wacquant descubre los orígenes de una nueva “sensatez penal”, que propone un proyecto de ordenación social de carácter neoconservador, impulsado por los *think tanks* norteamericanos. En la segunda parte, el autor sitúa este discurso en el contexto de una transformación mayor, que trasciende a los Estados Unidos, dirigido al nuevo papel del Estado en el manejo de los problemas asociados a la marginalidad y la pobreza: la criminalización de la miseria y su consecuente penalización. Se responsabiliza al excesivo asistencialismo estatal de fomentar la pobreza y la descomposición social, donde se ubica al

germen de las violencias que aquejan a las ciudades. Hay que dar la espalda a las “políticas comunitarias”, es lo que se resume en la “tolerancia cero” de Bratton. Es por tanto necesaria la transformación -en términos de Wacquant- del Estado providencia al Estado penitencia. Este Estado funcionará como un dispositivo que, al igual que las instituciones disciplinarias de Foucault (1998)³, se ejerce sobre el cuerpo de los ciudadanos a fin de hacerlos dóciles, útiles y neutralizar (o excluir) a sus elementos nocivos y potencialmente peligrosos. El Estado le declara la “guerra al crimen” en busca de la “reconquista” del espacio público.

Sin embargo, como analiza Wacquant, esta política social carcelaria en EE.UU. ha traído una serie de consecuencias: el aumento exorbitante del número de encarcelados en un período en que la criminalidad se estancaba y luego retrocedía (hiperinflación carcelaria), un incremento sostenido en la cantidad de personas en manos de la justicia, en las antesalas de la prisión, el crecimiento desmesurado del sector penitenciario dentro de la administración pública (que implica el incremento del gasto en el sector penal, cubierto gracias a la disminución del presupuesto invertido en el sector social), la privatización del encierro, que genera una prosperidad de la industria privada de la prisión, y finalmente lo que el autor denomina una “política de *affirmative action* carcelaria”, que se traduce en el ejercicio preferente de la política punitiva sobre las familias y barrios excluidos, particularmente los enclaves negros de las grandes ciudades. Situación que “delata, ante todo, el carácter fundamentalmente discriminatorio de las prácticas policiales y judiciales llevadas adelante en el marco de la

3 Michel Foucault, 1998, *Vigilar y castigar*, Siglo XXI, Madrid

política de ‘ley y orden’ de las dos últimas décadas” (p. 101).

Wacquant cierra su libro con un Posfacio que lleva por título “El advenimiento del Estado penal no es una fatalidad”, dando una posibilidad para revertir esta corriente: ya que la utilización de los dispositivos penitenciarios con fines de control social es producto de ciertas decisiones políticas a las cuales es posible oponerse, existe por tanto, la opción de proponer y construir una política social alternativa, que reivindique los derechos sociales y económicos de las personas y promueva el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades.

Dentro de los aportes del trabajo de Wacquant están las sucesivas advertencias que nos hace ante las nuevas prácticas de “social-panoptismo” extendidas desde Estados Unidos hacia Europa, pero que también están encontrando eco en Latinoamérica, asociado a una administración penal de la pobreza urbana. La lectura que se da a las condiciones actuales de inseguridad, así como el sentimiento que la acompaña, está desprovista de una mirada que abarque la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno social que se vive actualmente y esto propicia las respuestas institucionales de “sentido común” penal que apuntan a la criminalización de la miseria y, a partir de esto, la conformación de un Estado policial y la privatización de las cuestiones de seguridad, que van configurando un marco paulatinamente más represivo en el que se desarrolla una sociedad que tiene cada vez más miedo.

María Augusta Espín

Estudiante del Programa de Antropología,
Flacso-Ecuador